



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA

La Junta Militar y sus conceptos para un nuevo Chile: los discursos conmemorativos en la década de los ochenta.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA:

ROBERTO URRA SANDOVAL

ASESOR:

DR. IGNACIO SOSA ÁLVAREZ

MÉXICO, D. F.

JUNIO 2013



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*A la UNAM y a mis padres.
A los estudiantes secundarios.*

Índice

Introducción	01
1. Tesis, objetivo y esquema	01
2. Estado de la cuestión	12
1. La Unidad Popular 1970-1973	20
1.1 El gobierno de la Unidad Popular 1970-1973	20
1.2 Algunos elementos estructurales del Chile desarrollista	41
2. La Dictadura Militar 1973-1990	46
2.1 Significación y caracterización del golpe de estado 1973	49
2.2 Documento de 1974: la declaración de principios del régimen	54
2.3 Personalización del poder 1974	56
2.4 Medidas de <i>shock</i> y neoliberalismo	60
2.5 La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA (1974-1977)	65
2.6 El discurso de la institucionalización. Chacarillas, 1977	66
2.7 La constitución de la dictadura	68
2.8 Crisis bancaria (1981-1982)	73
2.9 La CNI y el estado militar (1980-1990)	76
2.10 Lógicas transitivas (1983-1986)	79
2.11 La salida pactada: leyes políticas de la dictadura, proyección y plebiscito.	95
2.12 Reformas constitucionales y elecciones libres	97
3. Las conmemoraciones oficiales reporteadas por el diario <i>La Nación</i> , 1980-1990	101
3.1 La prensa y la dictadura	109
3.2 La prensa en dictadura	117
3.3 El diario <i>La Nación</i>	123
3.4 El año conmemorativo militar	127
3.4.1 Enero	130
3.4.2 Febrero	134
3.4.3 Marzo	137
3.4.4 Mayo	140
3.4.5 Junio	148
3.4.6 Julio	151
3.4.7 Septiembre	158
Conclusiones	170

Tabla de abreviaturas

Dado que la política nacional está llena de abreviaturas, se presenta un listado de las más significativas para ayuda del lector:

AD: Alianza Democrática

CNI: Central Nacional de Informaciones

CONFECH: Confederación de Estudiantes de Chile

CUT: Central Única de Trabajadores

DC: Democracia Cristiana

DICOMCAR: Dirección de Comunicaciones de Carabineros

DINA: Dirección de Inteligencia Nacional

DINACOS: Dirección Nacional de Comunicación Social

FACH: Fuerza Aérea de Chile

FPMR: Frente Patriótico Manuel Rodríguez

MAPU: Movimiento de Acción Popular Unitaria

MDP: Movimiento Democrático Popular

MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria

PC: Partido Comunista

PS: Partido Socialista

UFA: Unidad Fundamental Antisubversiva

UP: Unidad Popular

Introducción

1. Tesis, objetivo y esquema.

El objetivo de esta tesis es sistematizar críticamente los conceptos y momentos que componen las conmemoraciones de la dictadura militar chilena, a través del análisis de las editoriales, entrevistas, artículos y notas periodísticas publicadas por el diario *La Nación* entre 1980 y 1990.¹ El periódico en cuestión fue el portavoz oficial de la dictadura, de cuya autoridad dependía directamente el director y, por tanto, la línea editorial definida por el diario. Tras cerrarse el periódico en 1973, éste circuló algunos años bajo el nombre de *El Cronista* y en junio de 1980 se refundó como *La Nación*, mes en que comenzó a desempeñar su rol de periódico oficial hasta marzo de 1990. Finalmente, cuando el dictador entregó el poder a la clase política civil también tuvo que desalojar el periódico.

Este matutino formaba parte de todo un soporte comunicativo que la dictadura dispuso para cumplir sus fines políticos y económicos. El régimen militar consideraba necesario para su proyecto fundacional conformar la mentalidad de un nuevo tipo de ciudadano, identificado con los valores y la visión del régimen autoritario. Este discurso, de carácter histórico y nacionalista, se configuró de tal forma, que se reflejan en él lo que oficialmente el régimen pretendía de la sociedad chilena, de su pasado, de su futuro, de sus héroes, de sus legítimos hijos, de sus tradiciones, de su carácter y de su proyecto de patria. El análisis de estos elementos, aparte de contribuir a no desmarcarlos de sus creadores, pretende ayudar a entender la nueva identidad del chileno, cuya forja se dio en medio de una transición de un Estado desarrollista a un Estado neoliberal.

En este sentido, es fundamental partir de la base de que el antiguo modelo económico-político derrocado en 1973 poseía un sistema de valores sociales determinado que fue combatido y reemplazado por la dictadura militar, esto a la vez que los aparatos del Estado y su política de gobierno minaban en el terreno económico los fundamentos económicos y constitucionales del Estado desarrollista.

Evidentemente lo que llamamos “la nueva identidad del chileno” es algo que estamos lejos de pretender explicar, toda vez que significaría tomar en cuenta el total universo de

¹ Los ejemplares del periódico fueron consultados íntegramente en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Chile, ubicada en Santiago.

elementos que configuran la identidad de la ciudadanía y no solamente los que el régimen militar entregó. En este sentido, estudiamos especialmente aquellas operaciones discursivas que tienen en la intervención de la Historia su propósito fundamental. Entender los conceptos, juicios y prejuicios que la dictadura sembró o reforzó en el plano simbólico ayuda a liberar una zona de la identidad chilena; esto es, el área dictatorial, militar y autoritaria de la nacionalidad. En las conmemoraciones oficiales se pueden observar estos elementos, dado que en ellas se exponen las ideas que fundamentan la política oficial. Los momentos de la conmemoración, los conceptos vertidos y las implicaciones que revierten, nos servirán como prisma para definir cuáles son las principales operaciones sobre las celebraciones patrias, cuál es la definición del “pueblo chileno” y cuál se cree es el sentido de su historia como comunidad.

Las preguntas a responder, entre otras, se orientarán en el siguiente sentido: cómo los actores políticos, en este caso los militares, califican su experiencia histórica; qué lectura construyen y necesitan de la historia del país; cuáles son sus héroes; qué tradición pretenden seguir; y qué chileno proyectan como necesario. Como se indicó, estas preguntas se responderán a través de la reflexión sobre el año conmemorativo nacional, potenciado y definido por la dictadura militar.

Esta tarea, sin embargo, es insuficiente si no se confronta con las otras patrias pretendidas y defendidas por los chilenos. Queda para después enfrentar lo conseguido en este estudio con otras ideas de nación, de igual carga simbólica, conmemorativa e histórica. De momento, es fundamental relacionar la idea de nación con su interlocutor militar, puesto que el fenómeno discursivo del mundo castrense es el que más validez pretende en el espectro de los discursos nacionalistas del país. Hoy no estamos lejos de centros que emiten ideas en torno a la equivalencia entre patria y ejército, o a la identificación de los valores nacionales con las Fuerzas Armadas. La dictadura pretendió establecer esas verdades en su discurso a cada momento para así justificar su acción en el golpe de estado de 1973. Ante esto, consideramos que la patria es un proyecto fáctico y discursivo mucho más amplio que el pretendido por las Fuerzas Armadas de cualquier nación, pues éste nunca podrá abarcar la totalidad de las dinámicas nacionales, toda vez que la idea castrense de patria ha demostrado a lo largo de la historia desdeñar profundamente el elemento popular de la sociedad.

Pese a esto, en la mayoría de los países latinoamericanos y occidentales se ha conformado un discurso nacionalista oficial, con el cual Estado y Fuerzas Armadas están generalmente

comprometidos. En Chile, el discurso nacionalista oficial ha venido construyendo la idea de próceres, historia oficial, glorias militares y pueblo genuino desde la independencia de la nación. En el siglo XIX, la idea del héroe y la patria formaba una triada con la Iglesia. A principios del siglo XX, cuando se da la separación constitucional de la Iglesia con el Estado, el rol de la institución eclesiástica se ve mermado por los alcances del poder civil. A lo largo de este siglo, la Iglesia asumirá una postura más progresista, poniéndose a prueba sus convicciones durante la dictadura militar, donde se posicionó como una decidida opositora.

Los civiles, durante el siglo XX, y hasta 1973 habían logrado mantener cierto control sobre la interpretación de la Historia y la explicación de los roles desplegados en ella. Para un hombre como Salvador Allende los únicos presidentes que merecían respeto y devoción ciudadana era don José Manuel Balmaceda y el maestro Pedro Aguirre Cerda, ambos civiles. El nobel Pablo Neruda narró su llegada al edificio de la embajada chilena en Francia, cuando se aprestaba a asumir las funciones de embajador:

El anterior embajador tenía las paredes tapizadas con las fotografías de sus predecesores en el cargo, sin excepción, además de su propio retrato. Era una impresionante colección de personajes vacíos, salvo dos o tres, entre los cuales estaba el ilustre Blest Gana, nuestro pequeño Balzac chileno. Ordené el descendimiento de los espectrales retratos y los sustituí con figuras más sólidas: cinco efigies grabadas de los héroes que dieron bandera, nacionalidad e independencia a Chile; y tres contemporáneas: la de Aguirre Cerda, progresista presidente de la república; la de Luis Emilio Recabarren, fundador del partido comunista; y la de Salvador Allende. Las paredes quedaron infinitamente mejor.²

Desde la dictadura militar, en cambio, los militares experimentaron en ensalzamiento sin igual en todos los niveles de la administración del Estado, posicionándose como la esencia de la nación. También desarrollaron un discurso que los ubicaba en la cima de la patria, superando la triada decimonónica, responsabilizando únicamente al ejército de la unidad e incluso del sentido de la patria. Este discurso fue el que permeó la conmemoración anual de las efemérides nacionales, como se verá en el análisis presentado por esta investigación.

Por otra parte, el discurso nacionalista de los militares chilenos llama la atención por su relación paradójica con las acciones más terroristas de la dictadura militar; esto es, mientras se apeló a la unidad de la patria, se asesinó sin juicio a sus hijos en las calles; mientras se vociferó por la defensa de la nación, la patria más que nunca abrió sus puertas al dominio cultural y

² Pablo Neruda, *Confieso que he vivido*, México: Planeta, 1989, p. 463-464.

económico extranjero. Estas contradicciones evidentes son las que en última instancia buscaremos reconocer para comprobar así la clara contradicción entre el discurso público de los militares y sus acciones en el escenario de los hechos. Estos contra-hechos son los que definen al periodo y nos fijan los elementos subjetivos que sirvieron de marco para la construcción de la identidad autoritaria.

Muchos de los elementos conceptuales utilizados por el discurso político militar son fundamentales para comprender el periodo, sobre todo si se confrontan con la abundante información que las fuentes, testimonios y obras académicas refieren sobre la dictadura militar. Es de vital importancia no confundir y separar analíticamente lo pretendido en el discurso oficial con lo hecho, en la realidad, por la dictadura, para así comprender que uno y otro son partes constituyentes y necesarias de la imposición de un mismo proyecto de sociedad. El discurso teórico de la dictadura militar logrará mellar las capas de la sociedad durante la década de los ochenta y también durante el nuevo periodo democrático inaugurado en 1990, logrando que sus argumentos gocen de cierta continuidad hasta el presente gracias a su permanencia en muchos espacios comunicativos de la sociedad chilena.

Antes de presentar el análisis del discurso militar, se trazarán las líneas fundamentales del desarrollo histórico y político del país, desde la elección de Salvador Allende en 1970 hasta el fin de la dictadura militar el 11 de marzo de 1990. El interés de esto es reflexionar sobre el último periodo presidencial (1970-1973) bajo el Estado desarrollista, donde una coalición de izquierda con miras a hacer un gobierno fuerte y popular buscaba preparar las bases económicas y políticas para la instauración del socialismo por una vía pacífica y democrática. Salvador Allende ganó limpiamente la elección presidencial y en cada votación que su gobierno enfrentó jamás pudo ser derrotado completamente por la oposición. De manera que esta experiencia sufrió la reacción de un importante sector del país que, apoyado por la CIA y otras transnacionales estadounidenses, logró conseguir la venia de algunos altos mandos militares, para derrocar al gobierno por la fuerza. La reacción a corto plazo fue un total rechazo al proyecto popular, y a la larga generó la adecuación de Chile a nuevas relaciones de mercado globales y con esto la fundación de un nuevo Estado.

Al tenor de lo propuesto por la “Historia Contemporánea de Chile”, la ‘modernización’ neoliberal llevada a cabo por la dictadura militar, que se ha pretendido una ‘revolución’, es

también la respuesta de los sectores más conservadores de la derecha y de la oficialidad castrense, a un proceso que sí es preciso llamar ‘revolucionario’, que sería el experimentado por el país desde los gobiernos radicales de 1938 hasta el, ahora sí, radicalizado gobierno de Salvador Allende.³ Es preciso señalar que para tener un cuadro más comprensivo de los hechos es necesario relacionar ambos periodos de la nación; uno como fundamento y otro como contra-fundamento. Es lo que ha llamado Tomás Moulián el desplazamiento de un dispositivo-saber por otro dispositivo-saber con mayor capacidad de fuego.⁴ Sin tomar en cuenta estas líneas, es casi imposible intentar percibir los elementos que nos hablan del cambio en la identidad chilena, comprendido entre un ascendente proceso histórico-popular que culmina en el gobierno de Salvador Allende y una nueva república democrática inaugurada en 1990 pero construida y diseñada, en gran medida, por los militares bajo dictadura.

Sentados los elementos teóricos e históricos para comprender el periodo de la Unidad Popular, se procederá a hacer un análisis de los principales hechos políticos y económicos de la dictadura. Se pondrá especial énfasis en el carácter personalista del régimen (su carácter dictatorial y autoritario concentrado en una sola persona), en los efectos de la política económica neoliberal y en el uso del terrorismo de Estado como eje de la política dictatorial. Además, esto se confrontará con las “declaraciones” del régimen, que prácticamente representan la antítesis de la política efectiva dictatorial (personalización, neoliberalismo y terrorismo de Estado). El discurso dictatorial se develará entonces como el dispositivo necesario para esconder una política económica inédita en el país, y se configurará a partir de un soterrado nacionalismo que supone a los golpistas de la Junta de 1973 como los nuevos O’Higgins y Portales, al mando de una muchedumbre de rotos y de impecables héroes de batalla.

Finalmente, en el tercer capítulo, se presentará la visión nacionalista/commemorativa de la dictadura militar a través del análisis de las principales conmemoraciones nacionales celebradas en la década de los ochenta. Con este análisis se construirá la idea de identidad nacional del militar, la que se basa en la igualación de la historia de la nación con la historia del ejército, y en la creencia de que Chile –su particularidad y su gente– proviene de las glorias de las dos grandes

³ “No se puede negar que los proyectos modernizadores personificados en Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende tuvieron por referencia la situación anterior a 1930, un carácter histórico que unió la acción civil a la idea de reforma estructural. Si se respeta el afán ‘revolucionario’ del periodo 1938-1973, el Estado Neoliberal aparece, nítido, como contra-revolucionario.” Gabriel Salazar, *Historia Contemporánea de Chile*, vol. 1, Santiago de Chile: LOM, 1999, p. 100.

⁴ Tomás Moulián, *Chile Actual: Anatomía de un Mito*, Santiago de Chile: LOM, 1997, p. 197-201.

instituciones bélicas del país: la armada y el ejército. Como base de investigación, este discurso se relacionará con la necesidad del régimen de convencer a la sociedad nacional e internacional de que su labor es la defensa y potenciación de la chilenidad. Partiendo de esta base, el análisis dejaría en evidencia los mecanismos argumentativos utilizados por la dictadura para la creación de una nueva identidad nacional (la chilenidad), en la que el individualismo y la labor empresarial cumplirían el rol inspirador principal.

Como marco referencial para el análisis de las conmemoraciones históricas consideraremos algunos de los elementos presentes en la obra de Simon Schama titulada “Ciudadanos, crónica de la revolución francesa”.⁵ La comparación es pertinente pues el proceso republicano chileno navegó sobre las ideas políticas modernas emanadas de la Revolución Francesa, y tanto el gobierno popular como la dictadura militar vivieron su tiempo bajo los conceptos de “izquierda”, “derecha”, “revolucionario”, “reaccionario”, “partido”, “constitución política”, “república”, “terror”, etc. Además de esto, la dictadura militar chilena anunció conscientemente el rompimiento de una sociedad y además los fundamentos de un nuevo orden político, por supuesto que de una trascendencia y esfuerzo intelectual menor. Esta comparación, que quede claro, sólo tiene fines metodológicos.

Schama centra su estudio en un proceso que comprende en sí dos intereses irreconciliables, que a la larga se transformaron en la paradoja de la política moderna: la necesidad de un Estado poderoso y la perpetuación de una sociedad de ciudadanos libres. Esto a su vez generó escisiones políticas entre los ciudadanos que se abonaron en ese momento a las determinantes y evidentes divisiones estamentales y, posteriormente de clase, generadas por las relaciones de producción y el nivel alcanzado por la división del trabajo. La Francia revolucionaria, como nuevo orden, también generó sus propios mecanismos de segregación y genuinos argumentos para el necesario enfrentamiento. Acaso la razón fundamental de esta división originaria de la República fue el uso inicial y determinante de la violencia. Por cierto, muchos autores consideran, y la Historia lo sigue, que lo que permite la Revolución (o una revolución) es precisamente el uso de la violencia, lo que a su vez determina las diferencias, en este caso, de patriotas y enemigos, ciudadanos y aristócratas, etc.

⁵ Simon Schama, *Ciudadanos. Crónica de la Revolución Francesa*, trad. Aníbal Leal, Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 1990.

El acceso al poder político, como bien observaron Marx y Engels en la “Ideología alemana”, es el requisito necesario para imponer un nuevo orden. Y este poder político conseguido por los revolucionarios se desplegó totalmente durante la Revolución, imponiéndose un discurso de repudio a la historicidad y precisamente al precedente, posicionando sus principios como verdades universales, mecanismos levantados sobre la negación de la experiencia reciente. Esta pretensión sólo puede verse materializada a través de la escenografía del poder y de la historia. El orden, los gestos, la vestimenta, la distribución, la música y el escenario de las conmemoraciones serían fundamentales para transmitir estos conceptos.

La conmemoración nacional evidentemente necesitaba un público que la observara y vitoreara. Este público, señala Schama, se estaba gestando en los tiempos tardíos del antiguo régimen a partir de las impresionantes aglomeraciones de gente que se reunía a ver los globos aerostáticos.⁶ Particularmente en Francia estas exhibiciones reorganizaron la naturaleza del espectáculo público. La importancia de estas reuniones públicas al aire libre es que en ellas se generó el establecimiento de un puro espectador, la nación completa, que agrupó en sí a los hombres y mujeres comunes, curas de ambos órdenes, nobles, cortesanos y por supuesto al rey, a la reina y al delfín. Posteriormente, la nueva República también levantará sus espectáculos en función de la unidad de los miembros de la nación, sin distinciones. Como relata Simon Schama en los inicios de la Convención las ceremonias oficiales se hacían con el rey presente ubicado al mismo nivel horizontal del escenario con los miembros de la Asamblea Nacional, imponiéndose visualmente lo que en esos momentos se procuraba políticamente.

La Asamblea Nacional organizó múltiples conmemoraciones que a través de la crónica de Schama son muy ilustrativas del objeto que pretendemos analizar en esta tesis. Consciente de imprimir un nuevo signo en sus deliberaciones, la AN buscó dismantelar el protocolo de funcionamiento de la corte, la exclusividad de los Estados Generales y su tácita aceptación de una odiosa jerarquía que se pretendía disolver. Para eso, la Asamblea apeló a la actividad escénica de la política, a la oratoria pública de sus protagonistas, para movilizar y sensibilizar a la nación espectadora con los cambios revolucionarios irreductibles.

Por ejemplo, el 4 de Agosto de 1789, la Asamblea se pronunció a favor de la extinción de los derechos feudales y señoriales. Inmediatamente se pusieron en marcha los mecanismos para volver sacrílega esta fecha. El arzobispo ofreció un Te Deum en honor y se planteó también como

⁶ Ídem., p. 141-149.

fiesta nacional. En conmemoración a ese día se creó además un culto a la abnegación, en el que los ciudadanos-bien entregaban joyas y demás artilugios metálicos, demostrando su patriotismo a favor de la revolución nacional.

En varias de las conmemoraciones revolucionarias se dejaba un lugar especial para los patriotas más ancianos, quienes expresaban con su sobrevivencia la permanencia de cierta Francia gótica que se había superado. La evolución de los cambios revolucionarios se reflejaba en el espacio que merecían los niños patriotas. En una ocasión uno de estos retoños de ciudadano entregó su hebilla de plata y la copa de su bautismo como un regalo patriótico, y pidió que le dejaran escuchar los debates.

En otro caso, a lo largo de 1790, aparecieron en varios espacios los “árboles de la libertad”. Éstos, que eran trasplantados ya jóvenes (pues el simbolismo necesario era, precisamente, mostrar un tronco de mediana autonomía) generalmente se marchitaban, de modo que eran reemplazados por postes desnudos adornados con signos tricolores, convirtiéndose en centros focales de la fidelidad de la aldea o pueblo a la Revolución. Así se imponía simbólicamente que en ese lugar, donde estaba el “árbol de la libertad”, ya no estaba el Antiguo Régimen, y por tanto, ese pueblo, estaba automáticamente liberado de su pasado. Esta labor de “colonización” simbólica nacional, también la cumplieron las Guardias Nacionales, las cuales ataviadas de un nuevo uniforme y un infundido espíritu de cuerpo revolucionario, trasladaron las políticas con su marcha.

Schama concluye respecto a las ceremonias de la “revolución assembleísta” que las representaciones de la nueva religión revolucionaria, esto es, el culto a la Federación, fueron totalmente teatrales y efímeras. Sin embargo, el autor considera que pudieron influir en la mentalidad de las personas mucho más que una modificación institucional pues se acercó conscientemente al pueblo una escenografía que buscaba, sobre todo, reflejar un nuevo orden de cosas, con nuevos papeles y definiciones de ciudadano. El juramento revolucionario del brazo extendido, a la manera del *Juramento de los Horacios* de David, y el mil veces rescatado gorro frigio, son ejemplos del impacto de los elementos simbólicos y ceremoniosos en la sociedad moderna.

Tomando en cuenta las citadas reflexiones de Schama, trataremos de situar las conmemoraciones de la dictadura militar chilena en los esfuerzos de una política nacional destinada a generar una lealtad ciudadana hacia nuevos signos y simbologías, extraña al pasado,

el cual se pretende nefasto y por tanto se justifica su superación. Como si la dictadura interpretara el mismo papel en una escena tardía de la historia, presentó como su componente radical y, por ende, revolucionario, el uso irrestricto de la violencia utilizándola como partera de la historia. Y a partir de este requisito necesario, desplegó un inventario de ceremonias y conceptos históricos, políticos y económicos, que buscaban deslegitimar el orden anterior y generar una situación fundacional, que prescindiera del pasado y se elevara a la universalidad. Todos estos elementos tomarán forma a través de la revisión y sistematización de los contenidos del diario *La Nación*, nuestra fuente principal. Para los efectos de esta investigación se revisó toda la década de los ochenta, decenio en que el diario circuló ininterrumpidamente por las calles del país. Se puso especial atención sobre los textos editoriales, a cargo de la dirección; además de las noticias y notas sobre conmemoraciones y eventos, que ayudaron mayoritariamente a recrear las ceremonias; y los artículos de opinión de los colaboradores del diario, quienes desplegaron las ideas políticas e históricas que haremos referencia. Además, sirvieron de base los discursos y declaraciones de personeros de la dictadura y otros funcionarios, reproducidas por el periódico dado su carácter de órgano oficial.

Consideramos que nuestro objeto de estudio está enmarcado en un visible drama nacional. La historia reciente de Chile es un problema en el sentido de que la comunidad nacional, ya sea por interés o desinterés, aún no logra una versión consensuada de los acontecimientos. Esta diferencia persiste en la sociedad y está presente aún en las nuevas generaciones. El esfuerzo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, a principios de la década de los noventa, que investigó y consignó los principales casos de asesinatos y desapariciones durante la dictadura; y de la Comisión Valech, que investigó los casos relativos a tortura sin resultado de muerte, en la entrada del nuevo milenio, son fundamentales para esta tarea que el país arrastra. Ambas comisiones han hecho ingentes esfuerzos en presentar una visión consensuada de los acontecimientos que aún parece no ser asumida por la totalidad de la población y, peor aún, por gran parte de la clase política. Sin ir más lejos, los Informes de dichas Comisiones no se señalaban hasta muy recientemente ni siquiera en las salas de clase.

Más allá del debate de quién tuvo más culpa o quién fue más violento, se vuelve imperioso hoy volver a revisar qué fue lo que cambió en la mentalidad de nuestra sociedad y a qué costo. Recordemos que el interés explícito del dictador, anunciado al país en 1974, era

“cambiar la mentalidad de los chilenos”⁷. Por eso es preciso pensar cómo cambió el rumbo histórico de nuestra identidad, y responder después si es que ésta alguna vez estuvo cerca de ser una. Los protagonistas nos dejaron muchos documentos y declaraciones en torno a lo que ellos esperaban de la sociedad chilena. Delinearon un sujeto nacional necesario, que fuera acorde con el rumbo que ellos pretendían dar al país. Es preciso revisar qué se pensaba de nosotros y qué esperaban de nosotros, como colectividad.

Las sociedades cuando buscan respuestas para los problemas del presente –siempre hay problemas– necesariamente miran hacia su pasado. Y aunque esto ciertamente le ocurre a cualquier individuo en las cosas más cotidianas, pretendemos en este caso dar al pasado colectivo un rol de crisol de experiencias, de donde se puedan extraer conocimientos que permitan evaluar y dimensionar sin mitologías los discursos políticos de la actualidad que tienden a manipular y simplificar, precisamente, los problemas históricos. Los problemas actuales de nuestra sociedad muchas veces encuentran su explicación más completa a partir del análisis histórico de su desarrollo como procesos, por eso no es tan descabellado pretender que la Historia nos pueda indicar acaso un rumbo para los desafíos actuales.

En Chile hay al menos dos grandes interpretaciones de lo sucedido en torno al gobierno de Salvador Allende y a la Dictadura Militar. Sin ir más lejos, en el presente gobierno surgió una controvertida polémica célebre por su nimiedad. El Ministerio de Educación del primer gobierno de derecha desde la vuelta de la democracia, intentó especificar en las mallas curriculares de la enseñanza básica que en Chile, entre 1973 y 1990, ocurrió un “Régimen Militar” y no una “Dictadura Militar”.⁸ El historiador Gabriel Salazar declaró que era una forma de “echarle un poquito de azúcar a la palabra dictadura”, y agregó que era un intento insano de ocultar los crímenes de una reconocida dictadura sangrienta.⁹ La insólita polémica incluso llevó a que destacados académicos del medio nacional se ofrecieran como conferencistas para explicar a las autoridades el significado de la palabra “dictadura”.¹⁰ El Ministerio se defendió argumentando que ellos “querían invitar al debate”; misma intención que se ve reflejada en la modificación definitiva de los objetivos de la malla curricular de Historia de enseñanza básica que versa así:

⁷ Secretaría de Gobierno, *Declaración de Principios*, 1974.

⁸ Informado por el Diario de Cooperativa el día 04/01/2012.

⁹ Informado por el Diario de Cooperativa el 05/01/2012.

¹⁰ Sin embargo, en esta tesis, por motivos de redacción se usará inconscientemente “gobierno militar”; “régimen militar” y “dictadura militar”; recalándose siempre las características esenciales de ésta última forma.

[...] comparar diferentes versiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando a los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia.¹¹

Esta polémica, suscitada en los calurosos días de enero de 2012, reflejó por unos días ese desencuentro que hay con el pasado. Hay profundas divergencias semánticas y por tanto es natural que el gobierno reclame que se consideren todos los “puntos de vista”. Sin embargo, esta necesidad puede ser contraproducente para la clase política si es que verdaderamente tomáramos en cuenta todos los puntos de vista. O si es que develáramos qué hay detrás de ese “consenso actual con respecto al valor de la democracia”. Investigar cómo se construyó –a la fuerza– ese “consenso”. La divergencia ciudadana en torno al relato histórico, que es profundamente semántica, se expresa también en la diferencia que existe en torno a ciertos conceptos políticos que se ha intentado fetichizar, como la palabra “democracia”. Evidentemente, detrás de cada interpretación del pasado, y detrás de cada proyecto histórico, hay una concepción distinta de democracia, toda vez que esta forma de gobierno, en la actualidad, es la más popular y legítima, y su utilización es ya casi una moda de mercado.

La pretensión del actual gobierno, que hacíamos referencia, es ambigua en el sentido de que, desde el punto de vista “militar” (dictatorial y de Derecha), en Chile hay “verdadera democracia” desde la Constitución de 1980 y, es más, antes de ella nunca hubo “democracia auténtica”.¹² Esta pretensión ciertamente la comparte la derecha política pues fueron sus jóvenes cuadros ochenteros quienes consumieron y diversificaron la idea de la “nueva democracia”, lo cual es fácilmente observable a través del diario *La Nación*. Por otra parte, con estos esfuerzos se pretende desde la oficialidad desmarcarse de la idea generalizada que hay sobre la dictadura, esto es, la fuerte presencia de la represión y del gobierno autoritario, para hacer creer que durante la década de los ochenta se vivió un “gobierno” o “régimen político” más abierto, maduro y civilizado.

Ambos elementos, más allá de sus implicaciones políticas contingentes, nos deja en clara evidencia la profunda necesidad que hay de la Historia reciente. Aún cuando pretendamos relativizar su estudio por motivos de su cercanía, estamos frente a constantes operaciones sobre nuestra Historia reciente que muchas veces tienden a esfumar lo que el conocimiento social ha

¹¹ Resolución del Consejo Nacional de Educación, informado por el Diario de Cooperativa el 26/01/2012.

¹² “Nunca ha habido democracia”, *La Nación*, Santiago de Chile, 24/00/1988.

construido. Es un hecho, entonces, la necesidad de trabajar sobre este problema con una metodología que ayude a construir una visión crítica de los consensos que nos gobiernan día a día.

Detrás de estas visiones dispares, queremos observar si es que a través del estudio de los artículos, notas y editoriales de *La Nación* encontramos algún fundamento de la división del país en al menos dos irreconciliables posturas, en este caso, dos Chiles. Además de considerar que la historia reciente (los acontecimientos) genera un desencuentro entre los ciudadanos de un mismo país, también consideramos que la interpretación de la historia del país, en general, presenta corrientes irreconciliables. En una de estas tradiciones queremos centrarnos, para ver cómo uno de los motivos de la división actual entre connacionales se encuentra en el contenido discursivo de esta tradición, que inventa y reutiliza las mismas fórmulas discursivas para explicar el devenir del país.

2. Estado de la cuestión.

Si bien para la sociedad chilena el pasado reciente aún está en disputa, para gran parte de la comunidad académica no hay duda sobre el carácter dictatorial, autoritario y violento del régimen militar comprendido entre 1973 y 1990. Pocas voces de derecha han tenido el arrojo de presentar explicaciones serias en torno al carácter de la dictadura militar, sobre todo en el recién inaugurado periodo democrático; sin embargo antes de 1990 ninguna persona de derecha, civil o militar, dudaba un segundo en presentar los más descabellados argumentos para justificar al régimen y al dictador.

El serio trabajo académico que se ha realizado desde el momento mismo del Golpe de Estado resaltó en 1999 cuando once historiadores firmaron e hicieron público el célebre “Manifiesto de los Historiadores”.¹³ Éste se presentó como una respuesta clara y concisa a la versión histórica presentada por el dictador Pinochet en su “Carta a los chilenos” de 1998.¹⁴ En este manifiesto se pusieron a la luz importantes conclusiones que la comunidad académica había construido en un intenso diálogo en torno a los hechos recientes del país.

¹³ Sergio Grez; Gabriel Salazar, *et. al.*, *Manifiesto de los Historiadores*, Santiago de Chile: LOM, 1999. Entre los firmantes están los ya citados autores, además de Verónica Valdivia Ortiz, Julio Pinto Vallejos, María Angélica Illanes, María Eugenia Horvitz, Leonardo León Solís, Pedro Milos, Armando de Ramón Folch, Jorge Rojas F. y Mario Garcés Durán.

¹⁴ La carta del soldado desde su cautiverio en Londres en Augusto Pinochet, *Carta a los Chilenos*, rescatado de la red en 2012, http://es.wikisource.org/wiki/Carta_a_los_Chilenos_de_Augusto_Pinochet, 1998.

Los mismos autores firmantes han contribuido al estudio del periodo desde distintos enfoques y generalmente con base en sus posturas se ha construido una sólida visión crítica de la Dictadura Militar y de la Unidad Popular, tan necesaria como pertinente. Uno de las explicaciones desarrolladas por el “Manifiesto” resaltan el carácter “faccional” de la dictadura, desmintiendo que el Golpe de Estado haya tenido un carácter de “gesta nacional” como siempre pretendieron Pinochet y sus seguidores. Aparte, se pone énfasis en que la UP administró la crisis terminal de un sistema económico ya insuficiente, que su proyecto respondió a un problema estructural de la sociedad chilena y que la dictadura militar se encargó principalmente de destruir el poder político de la izquierda y sus sectores afines.

Estas conclusiones son de gran ayuda, y generalmente parten del conocimiento interiorizado de los Informes de Reconciliación¹⁵, lo que ha contribuido a consolidar una serie de elementos explicativos de gran consenso entre la comunidad. Precisamente, este énfasis en la política de derechos humanos del régimen permite construir su caracterización histórica más clara, y esto sólo puede hacerse a partir del estudio de los Informes de Reconciliación y la asimilación de sus importantes conclusiones. Esto se resalta porque muchas veces pareciera que los Informes no existieran lo cual termina perjudicando notablemente a la explicación histórica, al conocimiento ciudadano y a la sociedad.

Las obras que reseñaremos a continuación constituyen el contrapunto esencial para analizar el discurso construido por la dictadura militar en el diario *La Nación* y servirán de base para construir nuestra explicación en torno a la Unidad Popular y a la Dictadura Militar. El relato construido con las obras críticas de la comunidad académica, tanto nacional como internacional, nos ayuda enormemente a posicionar el discurso nacionalista de los militares en un definido contexto histórico, que es una de las pretensiones iniciales de esta tesis. Esto sirve para dimensionar sin mitologías la pretendida gesta de la dictadura militar.

En el artículo “Notas respecto a la investigación histórica reciente en América del Sur: el caso de Chile” se señala que la historiografía reciente del país ha seguido preocupada de los

¹⁵ De los dos informes el primero es el más importante y extenso, y el segundo corresponde a una ampliación de los alcances del primero. Por eso se usa el plural, aún cuando el segundo informe fuera entregado recientemente. Gobierno de Chile, *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig)*, Santiago de Chile, 1991. Ver completo en http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html. Y; Gobierno de Chile, *Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura*, Santiago de Chile, 2012. Ver completo en <http://www.indh.cl/informacion-comision-valech>.

denominados “temas principales” de la historia.¹⁶ Esto es, historia político-electoral, relaciones internacionales, instituciones políticas, historia militar y biografías. Sin embargo, se resalta que en las últimas décadas se ha desarrollado con fuerza una corriente de “nueva historia” más enfocada en temas económicos, sociales, de cotidianidad y en torno a sujetos populares.

Antes de 1973 ya habían corrientes definidas de tendencias historiográficas en el país, las cuales vivirán un abrupto periodo de cambios durante la dictadura por múltiples factores que condicionaron la actividad académica. La carrera y su pedagogía tuvieron bastante mala fama bajo el mandato militar, lo cual no es casualidad. Por ejemplo, en la Academia de Ciencias Pedagógicas¹⁷ recién en 1982 se reabrió la carrera de Historia y Geografía y la de Filosofía.¹⁸ Aparte, muchos historiadores, producto del exilio o alguna situación afín, realizaron el grueso de su formación en el extranjero, lo cual a la larga paradójicamente diversificó las metodologías y los parámetros de análisis utilizados por los investigadores nacionales.

Durante la dictadura muchos estudios de corte histórico fueron realizados bajo el amparo de centros de investigación independientes. Es el caso de, por ejemplo, la Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR)¹⁹, y su editorial, y de otros centros de estudio que existían en el país, como FLACSO, CERC, CESOC, etc. La tradición británica desplegada en algunos autores de la Nueva Historia Social durante la década de los setenta y ochenta, ayudó a superar algunas líneas generales de la historiografía nacional, generándose un “distanciamiento gradual de la historia política apegada [solamente] a los documentos oficiales, desde arriba y objetiva.”²⁰ Además, la influencia y asimilación de las enseñanzas de la historia económica (al estilo de Annales), la historia cuantitativa y las importantes consideraciones de Braudel sobre la perspectiva histórica y sobre el análisis interdisciplinario, significó cierta superación de temas permeados por la visión diacrónica-positivista, generando la pretensión de presentar visiones integrales de la historia que buscaran entender la realidad humana desde enfoques eclécticos, centrando la atención en sujetos y ciudadanos.

¹⁶ Mario Valdés; Laura Benedetti y Danny Monsálvez, “Notas respecto a la investigación histórica reciente en América del Sur: El caso de Chile” en *Revista Historia Actual On-Line*, Concepción: Universidad de Concepción, Chile, Núm. 8, Otoño 2005, p. 183-198.

¹⁷ Esta institución correspondía al notable Instituto Pedagógico que fue desintegrado en 1981 por la Dictadura Militar para desmovilizar la capacidad de la Universidad de Chile, de quien dependía el Instituto. Los militares finalmente lo renombraron en 1985 como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, recuperando su status de universidad.

¹⁸ “Reabren carreras de Historia y Filosofía”, *La Nación*, Santiago de Chile, 28/11/1981.

¹⁹ Ver detalle en <http://www.sitiosur.cl/historia.php>

²⁰ Mario Valdés, *et. al., op. cit.*, p. 187.

En este contexto, procederé a reseñar las obras fundamentales utilizadas en esta tesis, pretendiendo relacionarlas con las innovaciones que la disciplina histórica ha presentado en su conjunto en el país.

Primero cabe resaltar el trabajo de muchos investigadores y hombres de ciencia social que producto del exilio se entregaron a un profundo análisis de la sociedad chilena generalmente desde enfoques políticos tradicionales (acción de los partidos políticos, legalidad y constitución, lucha política). Una obra representativa de este caso sería “El gobierno de Allende y la lucha por el socialismo en Chile”, publicada años después del golpe y que reunió a académicos como Jaime Osorio, Eduardo Novoa, Álvaro Briones, entre otros.²¹ Ellos reflexionaron en torno a la experiencia de la Unidad Popular y entregaron importantes análisis en torno a la factibilidad y particularidad de la revolución chilena.

En México se publicaron muchas obras en torno al drama histórico de Chile, destacándose las publicaciones de la UNAM, de la UAM y de la Casa de Chile en México. Por ejemplo, la obra de José Rodríguez Elizondo que analiza a la dictadura como un fenómeno fascista y que representó uno de los estudios fundamentales de los militantes comunistas exiliados en 1973.²² Uno de los enfoques que se empezó a utilizar a fines de los setenta y principios de los ochenta fue el análisis de la prensa diaria. El investigador Diego Portales, que ya había publicado un artículo en torno a la prensa nacional en su país, publicó en 1981 un libro en el cual analizaba la monopolización de la prensa y el estado general de la industria de las comunicaciones en Chile.²³ Dos años después, Giselle Munizaga publicaría “El discurso público de Pinochet”, una investigación hecha en CLACSO en torno a los conceptos utilizados por el general en sus discursos públicos.²⁴ Ambos esfuerzos poseen importantes conclusiones de las que se vale enormemente esta tesis.

En los ochenta, muchos de los autores que entregaron obras más sólidas y maduras en la década de los noventa, presentarán sus primeras monografías y escritos en torno a sus estudios sobre la historia nacional. Luis Maira publicó en 1986 un buen ejemplo de los esfuerzos realizados por un sector académico para explicar en términos políticos las dictaduras a través de

²¹ Alonso Aguilar, et. al., *El gobierno de Allende y la lucha por el socialismo en Chile*, México: UNAM-IIE, 1976 (Cuadernos del Seminario de Teoría del Desarrollo).

²² José Rodríguez Elizondo, *Introducción al Fascismo Chileno*, México: Ayuso, 1976.

²³ Diego Portales C., *Poder Económico y Libertad de Expresión. La industria de la comunicación chilena en la democracia y el autoritarismo*, México: ILET-Nueva Imagen, 1981.

²⁴ Giselle Munizaga, *El Discurso Público de Pinochet, un análisis semiológico*, Buenos Aires: CLACSO, 1983.

una clara caracterización en su particularidad latinoamericana.²⁵ En *Las dictaduras en América Latina* reconoce también la importancia de la personalización del régimen pinochetista y el valor que el dictador le confirió a la institucionalización de los valores de la dictadura.

Tanto Tomás Moulián como Gabriel Salazar y otros presentaron sus primeros trabajos monográficos durante la década de los ochenta. Moulián se enfocará principalmente en los partidos políticos y el régimen de partidos anterior a 1973; lo cual le permitirá presentar en 1994 su “Chile actual: anatomía de un mito” una buena obra para adentrarse en las discusiones presentes en torno a la dictadura, la Unidad Popular, la experiencia identitaria del chileno y las características del nuevo sistema neoliberal.²⁶ Gabriel Salazar, uno de los más reconocidos historiadores chilenos del último tiempo, presentó en los ochenta su “Labradores, peones y proletarios” y trabajó el tema de violencia política. Este autor en 1999 presentará junto con Julio Pinto y otros investigadores la “Historia contemporánea de Chile”,²⁷ un muy buen esfuerzo por explicar la historia nacional desde una perspectiva ciudadana y a través de conceptos políticos más avanzados (comunidad, gobierno local, ciudadanía, juventud, proyectos de nación, etc.).

Verónica Valdivia Ortiz se considerará un caso particular de los nuevos esfuerzos por los académicos de discutir con mayor énfasis temas políticos y de subjetividades en un contexto más sólido y abonado por las discusiones ya generadas. En este enfoque entran sus estudios en torno a la derecha política del periodo, al gremialismo, al neoliberalismo y a los rasgos conceptuales del régimen. Resaltan sus artículos “Estatismo vs neoliberalismo: un contrapunto militar, Chile 1973-1979”²⁸ y “¡Estamos en guerra, señores! El régimen militar de Pinochet y el ‘pueblo’, 1973-1980”²⁹, claros ejemplos de un enfoque más crítico. En este último, el tema esencial es el “pueblo” de Pinochet, un tópico que quizá podría generar desconfianza o extrañeza de antemano.

En su afán por estudiar los partidos políticos, Valdivia confluirá con Rolando Álvarez y Julio Pinto para elaborar la imprescindible obra sobre los partidos políticos chilenos de las últimas décadas denominada “Su revolución contra nuestra revolución” publicada en dos

²⁵ Luis Maira, *Las dictaduras en América Latina*, Santiago de Chile: Ediciones CESOC, 1986.

²⁶ Tomás Moulián, *op. cit.*

²⁷ Gabriel Salazar; Julio Pinto, *et. al., op. cit.*

²⁸ Verónica Valdivia Ortiz de Zárata, “Estatismo y neoliberalismo en Chile: un contrapunto militar” en *Historia*, Santiago de Chile: USACH, 2001, n. 34.

²⁹ Verónica Valdivia Ortiz, “¡Estamos en Guerra Señores!” en *Historia*, Santiago de Chile: USACH, enero-junio 2010, n. 43.

volúmenes entre 2006 y 2008.³⁰ Esta obra presenta una explicación pormenorizada de los principales partidos y movimientos políticos de la década de los setenta y ochenta en Chile, centrándose esencialmente en la pugna gremialista-marxista.

Otra obra reciente es la del investigador y docente Luis Corvalán Marquéz, denominada “Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile”³¹, en ella se retoma nuevamente la discusión desde los “proyectos globales”, centrandó la explicación del periodo en los distintos partidos políticos, a través del cambio en sus doctrinas, en su historia de alianzas, etc. Por otra parte, este historiador pone énfasis en los elementos internacionales, resaltando tanto la influencia de la CIA en el periodo 1964-1973 y la influencia de las potencias occidentales en la configuración de la salida pactada a la dictadura durante los ochenta.

Un ejemplo de una obra realizada desde las ciencias políticas y desde una perspectiva moderada es la de Genaro Arriagada, quien aprovechando su estudio sobre las fuerzas armadas en el país, presenta una visión sistemática del régimen de Pinochet, identificando sus elementos políticos y la factibilidad de las salidas a la dictadura. Criticando hábilmente el manejo económico de Pinochet, mas no su modelo, la visión de Arriagada representa ese pretencioso enfoque “moderado, proporcional y justo” propio de mentes críticas de la Concertación.³²

El enfoque de derecha más serio y con el que generalmente hay ánimo de polemizar es el del historiador Gonzalo Vial Correa quien en su negro curriculum alberga el ser uno de los asesores principales, en temas históricos, de la dictadura militar³³, además de desempeñarse como Ministro de Educación (durante 1979) y miembro del Consejo de Estado. En 1984 presentó su visión sobre la decadencia de la democracia chilena y la pertinencia y naturaleza del gobierno militar en el artículo: “Decadencia, consensos y unidad nacional en 1973”³⁴. Precisamente con esta visión se enfrentó el “Manifiesto de los Historiadores” quedando en evidencia que, por lo menos, los otros historiadores se molestaron en discutir en términos serios con el difunto historiador del régimen.

³⁰ Verónica Valdivia; Rolando Álvarez; Julio Pinto, et. al., *Su revolución contra nuestra revolución*, Santiago de Chile: LOM, 2006-2008, 2 vols.

³¹ Luis Corvalán Marquéz, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago de Chile: Sudamericana, 2001.

³² Genaro Arriagada, *Por la Razón o la Fuerza. Chile bajo Pinochet*, Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 1998.

³³ Ha sido de los indicados como autor y responsable del “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”. También integró la Comisión Rettig representando la opinión de derecha en la mesa.

³⁴ De la revista *Dimensión Histórica de Chile*, Santiago de Chile: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1984, n. 1.

Por otro lado, como la historia reciente se nutre en muchos casos de la prensa diaria y de las revistas, el trabajo periodístico se vuelve fundamental en este periodo, y se escriben obras/investigaciones de muy alto nivel y bastante sugerentes. La crónica del periodo es “La Historia Oculta del Régimen Militar” a cargo de los periodistas Cavallo, Sepúlveda y Salazar que presenta el ambiente y los pasajes más cercanos a la dictadura y que narra con genial pluma los sucesos más emblemáticos del periodo.³⁵ Otras obras focalizadas y de gran importancia son las realizadas por las periodistas Patricia Verdugo, Mónica González, Alejandra Matus, Patricia Politzer, entre otros.³⁶ Se suma también al trabajo presentado en las revistas APSI, Hoy, Análisis y Cauce.

Cabe resaltar que uno de los enfoques históricos más novedosos se refiere al análisis de los elementos simbólicos de la dictadura, dentro de un esfuerzo por dimensionar este periodo histórico desde visiones distintas a las tradicionales (como el estudio de los partidos, los cambios en la política sistémica, etc.). En este enfoque entran los recientes trabajos de Isabel Jara (2011) que analiza desde la gráfica y la teoría de la imagen los símbolos desplegados por el régimen en la Editorial Gabriela Mistral, entregando importantes conclusiones en torno al discurso nacionalista de la dictadura.³⁷ También vale considerar el trabajo de Azun Candina referido a la conmemoración e instalación del 11 de septiembre de 1973 quien presenta un análisis simbólico de este suceso que ejemplifica en gran medida los rituales públicos de la dictadura, tomando en cuenta la disputa histórica de la ciudadanía por las fechas controvertidas.³⁸

Particularmente en esta tesis e investigación se recoge el espíritu de los trabajos de Verónica Valdivia y de los enfoques culturales aplicados al estudio de la dictadura (como el de Jara), recién reseñados. Considerando que el trabajo analítico basado en categorías económicas y políticas ha

³⁵ Ascanio Cavallo; Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, *La Historia Oculta del Régimen Militar*, Santiago de Chile: UQBAR editores, 2008. Aparecido en primera edición en 1990.

³⁶ De Patricia Verdugo cabe resaltar: *Una herida abierta*, 1979; *Los Zarpazos del Puma*, 1989; *Operación Siglo XX*, 1990; *Tiempos de días claros*, 1990. De Mónica González: *Bomba en una calle de Palermo*, 1986; *La Conjura: los mil y un días del golpe*, 2000. De Alejandra Matus su *Libro Negro de la Justicia Chilena*, 1999. De Politzer: *Miedo en Chile*, 1985; *Altamirano*, 1989.

³⁷ Isabel Jara, “Politizar el paisaje, ilustrar la patria: nacionalismo, dictadura chilena y proyecto editorial” en *Revista AISTHESIS*, Santiago de Chile: PUC, 2011, n. 50. Y; “Graficar una segunda independencia: el Régimen Militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)” en *Revista Historia*, Santiago de Chile, enero-junio 2011, p. 131-163, n. 44.

³⁸ Su trabajo se inserta dentro de la línea de pensamiento entregada por la obra coordinada por Elizabeth Jelin, *Las Conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”*, Madrid: Siglo XXI, 2002. El artículo de Candina se titula: “El día interminable. Memoria e instalación del 11 de septiembre de 1973 en Chile (1974-1999)”

ocupado el esfuerzo preferencial de los investigadores, volvemos patente con esta tesis la necesidad de analizar la dictadura militar chilena desde su labor de creación de una nueva identidad para el país. El aporte de la tesis estaría en el estudio de los elementos simbólicos y discursivos del régimen, ubicados en su rol de conceptos y verdades fundamentales necesarias para el desenvolvimiento parcialmente efectivo de su proyecto político-económico, el neoliberalismo.

Evidentemente muchos autores debieron aparecer en este escueto texto referencial, lo cual no ha sido posible por falta de conocimiento de la totalidad de las obras y por el afán de presentar al menos algunas líneas generales. Lo importante a resaltar es que la mayoría de las obras reseñadas dialogan entre sí, recuperándose discusiones y superándose otras, lo cual definitivamente ha permitido nuevos enfoques, como el de esta tesis, sobre la base de una sólida discusión que afortunadamente no muestra signos de agotarse.

Capítulo 1

La Unidad Popular 1970-1973

MI PUEBLO ha sido el más traicionado de este tiempo. De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos de manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables, para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras.

Pablo Neruda, "Allende", *Confieso que he vivido*, 1973.

1.1 El Gobierno de la Unidad Popular, 1970-1973

Para comenzar a explicar el periodo tomaremos de manera representativa dos textos que son emanaciones directas de los protagonistas de los hechos, los que a través de sus discursos intentaron justificar y explicar a la comunidad nacional el porqué de lo sucedido. El martes 11 de septiembre de 1973 terminó abruptamente el gobierno de la coalición progresista de izquierda, dándose fin así a una incertidumbre política que abordó a la sociedad chilena durante todo ese año. Antes de morir, el presidente democráticamente electo, se dirigió al país usando las frecuencias radiales de dos importantes radiodifusoras del país. Nunca se pensó que ese discurso final quedaría para la posteridad, pues se hizo en condiciones sumamente adversas. Sin embargo no sería extraño que alguien hubiese tomado nota de él, pues en esos momentos se tenía la sensación de estar profundamente en medio de la Historia. Un periodista mexicano, que hizo un relato de lo sucedido los días inmediatos al golpe de estado, citaba de memoria algunos pasajes que no eran exactamente los dichos por Salvador Allende, aunque, por supuesto, lograba conservar intacta la idea del discurso.³⁹ Recientemente el destacado escritor José Miguel Varas contó la historia de ese hombre que grabó en una cinta de casete el discurso del presidente y audazmente la hizo sacar del país para que éste se difundiera por el mundo.⁴⁰

³⁹ Manuel Mejido, *Esto pasó en Chile*, 3ª ed., México: EXTEMPORÁNEOS, 1986.

⁴⁰ Ver el reportaje de José Miguel Varas, "La verdadera historia del rescate del último discurso de Salvador Allende" en Actualidad y Entrevistas, www.ciperchile.cl, CIPER CHILE, 2008.

*El último discurso de Salvador Allende*⁴¹

En su último discurso, Salvador Allende, dijo muchas cosas. En primera instancia cabe observar que expresa en él una fuerte conciencia de la interrupción de un proceso social de cambios, cuyo fin es, sin más, la consecución de “una vida mejor”. Es decir, para el presidente no termina solamente su mandato, sino que termina una experiencia histórica de amplia factura que buscaba cambiar la realidad de Chile.

Su muerte, que desde ya es profundamente evocada por el presidente, era el costo de mantener incólumes los “principios que son caros a esta patria”. Estos principios se refieren al respeto que la comunidad nacional y la comunidad cívica debe a la Constitución, como el lineamiento máximo de la convivencia colectiva, además del respeto a sus instituciones, el respeto a la soberanía, verbalmente puesta en el pueblo, a la necesidad de la democracia y al mandato popular. Estos principios defendidos por el presidente Allende, herencia mental indudable de sus años de experiencia como político profesional, son los que lo definen como una personalidad singular, ya que en torno a ellos se define su experiencia y a través de ellos condena a los militares golpistas.

Allende no habla de amargura, sino de “decepción”, e insiste en posicionar su muerte como un “castigo moral” para aquellos que rompieron los principios que definían al régimen político nacional. Su decepción parece ser muy amplia. En primera instancia es una decepción por algunas personas, primero por los militares –a algunos los increpa–, y también por sus enemigos políticos. Decepción en la que no podríamos ahondar más, pero que se basa evidentemente en una condena de los métodos utilizados por la oposición y en el agotamiento de una vía –la del acuerdo– que el presidente consideraba válida y única.

Expresa también la conciencia de su rol como guía de un proceso que iba más allá de su mandato. Su obligación de presidente lo llevó a ir a su “puesto de trabajo” el martes por la mañana. Entendía su mandato como un compromiso político, no olvidar que era un destacado militante del Partido Socialista. Ve su muerte como una consecuencia. Esta actitud, como la define el poeta Pablo Neruda, de “antidictador” es evidente en su auto-definición discursiva: un “intérprete de grandes anhelos de justicia”. Ahonda Pablo Neruda:

⁴¹ El último discurso de Salvador Allende se encuentra en múltiples publicaciones. Ver Frida Modak (coord.), *Salvador Allende: pensamiento y acción*, Buenos Aires: Lumen, 2008.

Allende nunca fue un gran orador. Y como estadista era un gobernante que consultaba todas sus medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista hasta en los menores detalles. Le tocó un país que ya no era el pueblo bisoño de Balmaceda; encontró una clase obrera poderosa que sabía de qué se trataba. Allende era un dirigente colectivo; un hombre que, sin salir de las clases populares, era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores.⁴²

Estas definiciones son importantes porque los opositores del presidente Allende le achacarán, precisamente, sus presuntos afanes dictatoriales. Allende habla como un mandatario clásico, con un profundo sentido moral. Habla de “la lección”, le habla a las bases de su gobierno. Esa lección tiene que ver con el clima político amorfo que se creó artificialmente, generando las condiciones para que las Fuerzas Armadas del país “rompieran su tradición”. Esta tradición republicana (constitucional, soberana) de la que hemos hecho alguna mención, fue rota, a juicio del presidente. El clima adverso fue absoluta responsabilidad del “capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción...”, lo cual es una precisa clave para ver el conflicto desde su dimensión global.

Precisamente muchos análisis del periodo se han centrado en esta “lección” de la historia; es decir en dimensionar el efecto de los intereses foráneos en una táctica de liberación económica o nacional. Y vuelven cada vez más patentes la preocupación que debe existir en torno al problema de las Fuerzas Armadas (su doctrina, su fin) y a los lazos de la dependencia, que si bien no son explícitamente visibles funcionan de manera irregular y profunda, a través de todos los poros de la sociedad.

Otro punto importante es la acusación que hace a los colegios profesionales: “colegios clasistas que defendieron también las ventajas de una sociedad capitalista”. Es evidente que al final del mandato del presidente una fuerte conmoción social remecía el país, la oposición se había volcado a las calles y los colegios profesionales, y sectores de la clase media, demandaban la deposición del gobierno. Esto es fundamental porque al final del gobierno popular parece ser que los elementos más gravitantes y determinantes fueron las clases medias –representados política y parcialmente por la Democracia Cristiana–, ya que eran precisamente ellas quienes pertenecían y debían lealtad al Estado desarrollista que estaba llegando a sus límites. Para Allende, los gremios y los profesionales, “estaban comprometidos” y “la historia los juzgará”.

⁴² Neruda, Pablo, *op. cit.*, p. 475

Volviendo a la lección moral, se entiende que para Allende ésta era su propio sacrificio. Pretendió dejar al Palacio de La Moneda en llamas y a su imagen resistiendo como una huella histórica que pesara sobre los culpables. No se equivoca al identificarlos: el almirante Merino (“auto-designado comandante de la Armada”, futuro miembro de la junta militar) y el señor Mendoza (“general rastrero”, también autodenominado director general), y los soldados de Chile. Pinochet no aparece en el listado, aún no pensaba Allende en su “traición”. Allende identifica muy bien a sus opositores, a los que están esperando “con mano ajena” los frutos del golpe militar. El presidente vaticina también la represión que vendrá, “los que serán perseguidos” y la “superación del momento gris y amargo” por otros hombres. Expresa una indudable sensación de futuro.

En términos generales, lo que llama la atención del último discurso del presidente Allende es la enorme conciencia que tiene del lugar en el cual lo ha puesto el caprichoso desenvolvimiento de los hechos, no solamente nacionales sino de factura internacional. Es sumamente patente la creencia y la conciencia –presente no sólo en el presidente, sino en el grueso del movimiento social– de “estar haciendo historia”, sumándole a esto todo lo que conlleva: explicar convenientemente el propio actuar –no sólo con propósitos individuales, sino también colectivos–, hacer vaticinios, promesas de futuro y acusaciones que sirvan de huellas para las nuevas generaciones.

En resumen, el discurso del presidente, nos habla de un gobierno para los trabajadores inmerso en un proceso social amplio, que es traicionado por los militares que, faltando a su palabra de honor, bombardean el Palacio de Gobierno y la casa del presidente, instándolo a una incondicional rendición. El presidente acusa a los instigadores pero a la vez denuncia a quienes contribuyeron a crear un clima sedicioso, enarbolando su denuncia como una lección para el pueblo, necesaria para su postergada liberación. La enumeración de los sujetos a quienes apela (“trabajadores”, “la modesta mujer”, “la campesina”, “profesionales patriotas”) da cuenta del carácter popular del proceso y, por tanto, explica su denuncia de los métodos “fascistas” utilizados por la oposición para frustrar un legítimo gobierno ciudadano. Por último anuncia un cambio en los principios “tradicionales” de las Fuerzas Armadas –profundo vaticinio del carácter de la dictadura militar–, mismos que permitirán a los militares perseguir y reprimir a los adeptos de su gobierno; dicha mutación, traición de los principios políticos nacionales, se configuran como el inicio de la decepción del presidente antes de morir.

El Libro blanco del cambio de gobierno en Chile

Meses después del golpe de estado, el gobierno militar oficializó su versión de los hechos a través de una publicación, sin mayores datos, titulada “El Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile”.⁴³ En él se expresan y a la vez se sistematizan las principales razones que los militares tuvieron para derrocar al gobierno de Salvador Allende. También es la única prueba escrita del supuesto Plan Z, un plan de características macabras que sería llevado a cabo por el gobierno de Salvador Allende para terminar con la vida de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Orden.⁴⁴ Este libro, pese a sus mentiras evidentes y su inequívoco rol propagandista, posee intactos los argumentos que se han utilizado para deslegitimar al gobierno de la Unidad Popular para así poder justificar las graves violaciones a los derechos humanos que se sucedieron los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. La cita inicial del libro es reveladora:

Quienes, dentro del país, lo arrastraron a una ruina económica, social, institucional y moral sin precedentes en su Historia, y quienes, desde fuera de Chile, colaboraron activamente a la catástrofe se han confabulado para ocultar y falsificar esa verdad. Cómplices han sido quienes en cualquier parte del mundo, por pasiones doctrinarias, ligereza o afán sensacionalista prefieren no ver la realidad de los hechos chilenos.⁴⁵

Se hace evidente pues, la diferencia que anteriormente referíamos en torno a la “verdad de los hechos”. La descalificación a priori de la “otra verdad” hecha por “pasiones doctrinarias, ligereza o afán sensacionalista” es una constante del libro. Este problema, de deshumanización constante del otro de izquierda es un recurso fundamental para la validez del discurso militar, ya que justifica su acción contra personas que, a su modo de ver, no tienen escrúpulos, no son connacionales sino que son, a la larga, “terroristas”.

Los tres puntos principales del discurso militar se refieren a las “tres verdades” que sostienen los seguidores del presidente Allende, a saber, a) que “el gobierno del ex presidente Allende representaba a la mayoría de los chilenos y que sus intenciones y procedimientos eran genuinamente democráticos, en el fondo y en la forma”, b) que el “gobierno significaba un progreso económico y social por el camino del socialismo y sin el ‘costo’ que experiencias

⁴³ Secretaría General de Gobierno, *Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile*, 2ª ed., Santiago de Chile: Lord Cochrane, s/f. [1973]

⁴⁴ Ídem., p. 21-23, p. 55 y ss.

⁴⁵ Ídem., Cita Inicial, s/p

semejantes habían tenido en otros países”; y, c) que “la deposición del ex Presidente Allende fue un típico cuartelazo desatado por militares ambiciosos a instigación de círculos reaccionarios del país y del extranjero”⁴⁶.

Para los militares golpistas, el gobierno de la Unidad Popular era marxista-leninista. Y por tanto, tomando con cierta ligereza las máximas de tal doctrina –y por cierto, varios Congresos del PCCh–, consideraban que el gobierno era por definición anti-democrático y pro-dictatorial. A su vez se entendía que todo el gobierno era anti-democrático, incluyendo Salvador Allende, sin importar el ideario político de éste, basado en una profunda visión de la democracia. El gobierno, a juicio de los militares, buscó adelantar “el implantamiento del marxismo con un respeto falso, formal, por la letra de la Constitución de la ley, pero atropellando flagrantemente su espíritu”⁴⁷. En tal caso se descalificaba desde su raíz a la “vía chilena al socialismo”, célebre por su característica inédita de proponer una vía democrática –es decir, conforme a los mecanismos legales definidos por la Constitución– para alcanzar el socialismo.

Esta vía inédita, al decir de sus defensores, no tendría costo social, ya que estaría enmarcada en el estado de derecho y en el pleno respeto a las libertades y los derechos humanos. Sin embargo, según el entrante régimen militar, el costo social bordeó el centenar de personas muertas durante el periodo de 1970 y 1973.⁴⁸ Estas acusaciones tienden a establecer un parangón entre lo que se evitó (el implantamiento del marxismo) y lo que se estableció (la dictadura militar), como un ejercicio para equiparar violencias y así justificarlas.

A este costo social debía sumársele los efectos de la crisis económica que afectaba al país. Se hace referencia al desabastecimiento de los productos básicos y las interminables colas, además del mercado negro cuyo establecimiento se le atribuye directamente al gobierno. Estos problemas, presentes sobre todo durante 1973 a partir del paro patronal de octubre de 1972, eran evidentes y quedaron en la memoria de la mayoría de los chilenos. Sabido es que estos fenómenos concretos eran el reflejo de un hondo problema que atravesaba la economía chilena, producto de la estructura misma del aparato productivo nacional dependiente, de las medidas que

⁴⁶ Ídem, p. 5.

⁴⁷ Ídem., p. 9.

⁴⁸ Se incluye una lista de decesos en el capítulo cuarto del *Libro Blanco...*, p. 79-81.

intentaba llevar a cabo el gobierno y del desquiciamiento total de las estructuras de producción, comercialización y distribución producto de la acción de los opositores al gobierno.⁴⁹

Finalmente los militares buscan destronar la idea de que el gobierno militar era un simple cuartelazo desatado por “militares ambiciosos”. Con esto se respondía también a las acusaciones de Salvador Allende que se centraban principalmente en la idea del “rompimiento de la tradición” de las Fuerzas Armadas. Los militares responden:

A lo largo de casi tres años, los institutos castrenses se esforzaron por mantener estos principios y dejar a los civiles la gestión de los asuntos políticos. Al mismo tiempo, dieron al país y al mismo régimen del señor Allende numerosas pruebas de un espíritu de colaboración...⁵⁰

En este pasaje los militares se refieren a las labores de apoyo –no exentas de polémicas de todo tipo– que algunos militares cumplieron en el gobierno de la Unidad Popular.⁵¹ A la vez, evocan la sofocación de la intentona golpista del 29 de junio de 1973, como si la parte del Ejército que la detuvo fuera la misma que lideró el golpe de estado en septiembre. Olvidan deliberadamente la campaña que se hizo contra el entonces comandante en Jefe del Ejército, el que verdaderamente controló a los golpistas de junio, General Carlos Prats, quien fue alejado de su mando por sus principios constitucionalistas. Por supuesto que no es casualidad que años después, Carlos Prats haya sido asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, en una de las acciones internacionales más audaces y descaradas comandadas por la DINA, el puño represivo del general Pinochet.

De tal manera se aducía que si los militares no actuaron antes del 11 de septiembre fue, “efectivamente, porque no quisieron hacerlo”, ya que supuestamente esperaron “una salida pacífica, civil, apegada a la letra de la Constitución para la honda crisis” que afectaba el país. La historia contará que esto no es efectivo del todo: primero, porque facciones militares ya habían intentado quebrar el Estado de derecho con anterioridad⁵²; y segundo, porque lo que precipita la salida golpista es la coyuntura electoral de marzo de 1973 en la cual, contra los pronósticos

⁴⁹ En el notable documental triple de Patricio Guzmán, *La batalla de Chile*, se hace un seguimiento a los establecimientos que acaparaban los productos básicos para así venderlos en el mercado negro y ganar buenas sumas de dinero. Este acaparamiento producía también las largas colas que adornaron el último pasaje del gobierno popular.

⁵⁰ Secretaría de Gobierno, *Op. Cit.*, p. 17.

⁵¹ Ver Tomás Moulian, *Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende 1938-1973*, Santiago de Chile: LOM-ARCIS, 2006, p. 262-264.

⁵² El “tacnazo” de octubre de 1969 y el “tanquetazo” de julio de 1973. Cabe incluir, por el apoyo o simpatía de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, el asesinato del Comandante en Jefe René Schneider en Octubre de 1970 y el asesinato del edecán Arturo Araya en julio de 1973.

opositores, el gobierno se mostró fuerte –aunque no mayoritario– (44% de las preferencias) y la oposición no alcanzó el número de votos en el Congreso necesarios para deponer legalmente al presidente.

Ante estos dos hechos: a. la condición antidemocrática del gobierno depuesto, y b. el enorme costo social que el gobierno de la Unidad Popular habría representado para Chile; los militares se vieron obligados a actuar presuntamente en defensa de los principios caros a la patria, los mismos a los que se refirió Salvador Allende el 11 de septiembre en su discurso final.

Sin embargo, la explicación militar va más allá. El gobierno de Salvador Allende, no contento con violar constantemente la Constitución, en “una desesperada intentona por apoderarse del país por la fuerza” trazó los planes que incluían “un autogolpe para mediados de septiembre [de 1973], preferiblemente durante las festividades de conmemoración de la Independencia”. Y continúa la explicación del Libro Blanco:

El autogolpe comenzaría con la eliminación física, por comandos terroristas, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Tan sangriento operativo se conocía como el “plan Z”.⁵³

Es decir, la Unidad Popular, se “aprestaba a dar un autogolpe para conquistar un poder absoluto basado en la fuerza y en el crimen, implantando la ‘dictadura popular’”. También ante estas informaciones –paradójicamente descubiertas después del golpe militar– las Fuerzas Armadas decidieron actuar. Sumando todos los argumentos, el rol de los militares se amplía profundamente ya que ahora es el nuevo Gobierno quien se “ocupa de solucionar los terribles problemas de todo orden que son herencia de Allende y de la Unidad Popular”. Y se define así la carta de defunción del orden institucional inaugurado en 1925 declarando que es imperioso “buscar una nueva institucionalidad, que responda a la realidad actual del país y a sus tradiciones y que impida, definitivamente, se repitan en Chile los aciagos días vividos entre el 4 de septiembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973”. Es decir, que impida que vuelva a asumir un gobierno socialista, comunista o una coalición con alto contenido político de izquierda.

Finaliza la explicación militar haciendo hincapié en los dos elementos fundamentales que hacían indeseable para la clase militar el gobierno de Salvador Allende: primero la conformación del Área Social de la Industria (a través de “la vía del rescuicio”) y la aparición del “poder

⁵³ Secretaría de Gobierno, *op. cit.*, p. 23

popular”. Este último, orgullo del movimiento social chileno del siglo pasado, es definido por los militares como “organismos revolucionarios” que se les “presentaba como creados por el pueblo” pero en realidad “eran implantados desde arriba por el Gobierno” o bien eran “prolongaciones de los movimientos políticos de ultraizquierda”.⁵⁴ Ambos elementos dañaban el orden institucional y era preciso eliminarlos de la institucionalidad.

La gran condena militar se define entonces contra ese gobierno que no gobernó conforme a la Constitución y a las leyes y que pretendió “afortunadamente sin éxito, destrozar, subvertir, politizar y por último asesinar a mansalva a las Fuerzas Armadas”⁵⁵. Se pretende romper, entonces, el “mito” de que el gobierno allendista era democrático, respetuoso del estado de derecho y pacífico. De esta forma se demoniza al depuesto gobierno, mostrándolo como más nocivo que el de la reconstrucción. Se lega así esta explicación a la posteridad.

Elementos entregados por estas dos fuentes.

A simple vista ambas fuentes se muestran contradictorias, evidentemente porque son obra de los opuestos absolutos del drama histórico de 1973. Ambas nos refieren los mismos problemas históricos y políticos, cuya identificación y sistematización nos permitirán limpiar nuestra explicación futura. Por una parte, un elemento central es el que se refiere al proceso de cambios. En ambas fuentes está la referencia concreta a que se estaba viviendo una etapa compleja que podrían simplificarse como una “vía al socialismo” –aunque no haya sido, en la práctica, eso–. Así, no hay ninguna duda de que bajo el gobierno de Allende algunas cosas estaban cambiando, las cuales estaban reflejadas, en la práctica, en la conformación del área social de la industria y la preparación del poder popular, iniciativas célebres del movimiento social y fenómenos desdeñados –aunque reconocidos– por los militares.

Por otra parte, el carácter del gobierno se vuelve la principal causa de controversia –y no sólo entre estas dos fuentes–. Por una parte Allende defiende el mandato que legítimamente, a través del voto popular, le fuera legado por la ciudadanía, y también hace declaraciones concretas en torno a su adhesión a la vía constitucional, definiéndose como un hombre “que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo”. Por otra parte, los militares desdeñan esta opción política de Allende, declarando que, con posterioridad al golpe de estado, se

⁵⁴ Ídem., p. 89.

⁵⁵ Ídem., p. 97.

encontraron “entre los papeles del mandatario depuesto, anotaciones que comprueban su adhesión íntima al camino violento de las transformaciones negando toda democracia”.⁵⁶ Para ellos el gobierno era por definición antidemocrático; hay que ver qué tan útil era esa declaración para una dictadura que, en esos momentos, suspendía todo orden constitucional y perseguía violentamente a sus opositores. De todas formas, es interesante comprobar que desde el inicio de la dictadura los militares practican la manipulación de la palabra democracia, volviéndose un concepto de amplia utilización para los futuros discursos que, paradójicamente, legitimaron al régimen de facto.

El problema de la legitimidad será también ampliamente debatido por las posteriores explicaciones. El discurso allendista se basa principalmente en defender la legitimidad que otorga el régimen constitucional, ya que centra su acusación en la decepción que le causan los métodos utilizados por la oposición (subversivos, ante todo). Está también presente en su discurso el elemento popular de su gobierno, que hasta el último momento no dejó de imprimirle un sello genuino. Así, Allende habla desde el vulnerado, desde quién fue despojado de su legítimo mandato que, según el ordenamiento legal, se extendía hasta 1976. Para el gobierno militar, en cambio, el gobierno de Allende no “representaba a la mayoría de los chilenos” y sus “intenciones y procedimientos” no eran “genuinamente democráticos”; por tanto era precisa su deposición. Como datos concluyentes cabe indicar que el gobierno popular siempre mantuvo un considerable apoyo en las votaciones –tomando en cuenta la división en tercios de la política chilena de esa época– y las masivas expresiones de apoyo de mediados de 1973 no hablan precisamente de un gobierno aislado de los chilenos o, al menos, poco representativo de los altos intereses de este pueblo.

Por otra parte, la legalidad se vuelve el principal argumento de los militares golpistas, ya que acusan al gobierno de romper constantemente las leyes, de forma deliberada. Principalmente se enfocan en el problema de la conformación del área social de la economía, que se hizo a través de resquicios legales existentes en antiguas legislaciones heredadas de la efímera república socialista de 1932. También acusan al gobierno de permitir y fomentar la instauración del poder popular, que se encargaría de suplantar supuestos organismos ya existentes y avalados por la ley. El problema de la legalidad es acaso uno de los más importantes del periodo, ya que enfrentan a un gobierno progresista en cuyos planes necesariamente se perfilaría la creación de una nueva

⁵⁶ Ídem., p. 31.

legislación acorde a los nuevos tiempos –y por tanto, la modificación o eliminación de la preexistente–, y a un gobierno militar dictatorial que también se plantea, precisamente, la consecución de un nuevo orden institucional que impida nuevamente el ascenso de una coalición de izquierda al poder ejecutivo y permita imponer su proyecto de desarrollo.

Salvador Allende y la Unidad Popular

La Unidad Popular (UP) fue la coalición de izquierda que se presentó para disputar las elecciones de 1970 en Chile. Fue también parte de una serie de manifestaciones políticas y culturales que proponían un cambio radical del país; no por casualidad muchos artistas e intelectuales estaban comprometidos con el proyecto de la UP que se presentaba a largo plazo. Su retórica política poseía un fuerte contenido patriótico y nacional, reivindicando la tradición histórica chilena del movimiento de los trabajadores, pobladores y estudiantes. El abanderado de la coalición era Salvador Allende Gossens, político socialista nacido en Valparaíso en 1908.

Salvador Allende es quizás una de las figuras más destacadas del régimen político chileno que va de 1925 a 1973. Estuvo presente en la vida política nacional desde muy joven, desempeñándose como ministro de salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938). Además fue dirigente estudiantil, diputado y senador de la República, además de presidente del Colegio Médico. Incansable trabajador por la unidad de la izquierda, fue cuatro veces candidato a la presidencia del país, siendo la cuarta vez la vencida. Su línea política era mucho más afín al gradualismo del Partido Comunista, y distaba bastante, en realidad, de las orientaciones adoptadas por su Partido, el Socialista, en 1967 sobre todo en lo referente a la táctica y al carácter de la revolución chilena. Allende define en todo sentido la particularidad de la “vía chilena” (esta es, gradual, sin costo social, respetuosa del estado de derecho), siendo las distintas facetas de su pensamiento la mejor definición de esta propuesta.

Para precisar lo específico de la “vía chilena”, es preciso tomar un par de elementos del pensamiento de Salvador Allende. En primer lugar, cabe destacar que su concepto de democracia no se basa simplemente en la amplitud de los derechos cívicos sino en la consecución de una auténtica democracia económica y social. En su discurso de homenaje al triunfo del Frente Popular en 1938, Allende explica la centralización de la economía y el control de la producción estatal como una medida adoptada en el mundo para hacer la guerra. Y sigue con su reflexión juzgando que en Chile aún “se está en guerra”, pero no contra un enemigo externo, sino contra el

hambre, la miseria y la inseguridad social. Ante el Congreso Pleno en 1972 declaraba que un régimen social es democrático “en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación de una pequeña minoría de los recursos económicos esenciales del país.”⁵⁷ Por tanto, la verdadera democracia se alcanza cuando se superan los vicios propios del sistema capitalista, que para aquellos años, no sólo en Chile, no sólo en esa época, generaba gruesos anillos de marginalidad y exclusión.

Otro punto importante de su pensamiento es el referente al rol de la economía social. Como se concibe que la democracia auténtica es la superación del capitalismo, su conformación se lograría mediante el traspaso gradual al área social de los medios de producción privados, para que así los excedentes no queden en los bolsillos de una minoría sino que estén al servicio del pueblo. El área social no es un elemento puramente técnico, sino que encierra un enclave de nuevas relaciones necesarias para una sociedad igualitaria. Explica Salvador Allende en el Primer Informe de Gobierno en 1971:

La construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico. Al incorporar grandes sectores del aparato productor a un sistema de propiedad colectiva, se pone fin a la explotación del trabajo, se crea un hondo sentimiento de solidaridad, se permite que el trabajo y el esfuerzo de cada uno formen parte del trabajo y del esfuerzo comunes.⁵⁸

Se buscaba así, reemplazar conscientemente el modo de producción capitalista mediante importantes cambios en las relaciones de propiedad. En síntesis, la tarea del gobierno allendista era grande: el Estado –aún teniendo solamente el Poder Ejecutivo– debía controlar el proceso productivo, el financiamiento y parte de la comercialización.⁵⁹ A la larga, la supremacía del área social delinearía cambios subjetivos en los actores del proceso productivo, ya que se trataba también de una transformación radical de las relaciones de trabajo y del modelo organizativo de la producción. En mayo de 1973 el presidente anunciaba que los “mecanismos de participación [en la industria] son el símbolo del desaparecimiento del poder empresarial”. Es decir, se anunciaba una nueva ética que tendría como base el trabajo entre iguales, conformado en torno a valores solidarios, que desplazarían la ética empresarial.

⁵⁷ Modak, Frida, *op. cit.*, p. 94.

⁵⁸ Ídem., p. 188.

⁵⁹ Ídem., p. 190.

Esta necesidad de la supremacía del área social, que se suponía traía consigo la superación de las relaciones capitalistas de producción, se levantaba para Allende como una tarea trascendental ya que era la única garantía de independencia política y de plena soberanía nacional. El problema de fondo es, entonces, cómo se superaba la marginalidad⁶⁰ que es el resultado necesario de “una realidad que es común en la inmensa mayoría de todos nuestros pueblos: somos países ricos potencialmente y vivimos como países pobres”⁶¹. El planteamiento versa sobre la superación de la dependencia, bajo la doctrina de que “no podemos aceptar seguir siendo siempre los países de segunda categoría. Debemos levantarnos por nuestro propio esfuerzo”⁶².

Cabe destacar que la originalidad de esta propuesta gradual de superación del capitalismo la encontramos ya presente en Luis Emilio Recabarren (chileno, miembro fundador del Partido Comunista), quien en 1912 en su texto “El Socialismo, Qué es y Cómo se realizará”⁶³, plantea que los derechos sobre la propiedad privada son la fuente única “de todos los males existentes”, es decir, era causante del hondo problema social que también existía en aquellos años. Recabarren explica que los derechos privados sobre la industria son la mayor fuente de explotación y, por tanto, ésta debe ser modificada paso a paso por los trabajadores, consolidando de esta forma la participación efectiva del sujeto productor en el producto. Así, la propuesta fundamental de Recabarren se basa en “declarar todo de utilidad nacional y para la explotación colectiva”. Después de eso, los trabajadores colectivizarán los medios de producción y los harán producir con beneficios iguales para todos; estos métodos “irán convenciendo a los burguesas que se vivirá mucho mejor dentro del régimen socialista”.

Esta característica voluntarista y de “demostración” de la bondad del orden proletario está muy presente en la Unidad Popular, como señala Jaime Osorio las transformaciones económicas y sociales de la UP:

⁶⁰ “Podemos decir, basándonos en los hechos, que jamás en Chile, y tampoco en ningún país de América Latina – cualesquiera que hayan sido las fórmulas de gobierno–, se han podido solucionar los problemas urgentes de nuestras masas populares. Ni de la vivienda, ni del trabajo, de la salud, la educación, la recreación el descanso.”. Ídem., p. 268.

⁶¹ Ídem., p. 345.

⁶² Ídem., p. 273.

⁶³ La primera edición de este folleto apareció junto al diario “El Despertar de los Trabajadores”, de Iquique durante 1912. Texto rescatado en la red, <http://www.marxists.org/espanol/recabarren/xi-1912.htm>, Marxist Internet Archive, 2002.

Tienen además la intención de demostrar las bondades de la “conducción popular” de la economía. De allí la preocupación de constituir un Gobierno “organizador” de los procesos económicos y rectificador de los puntos más conflictivos en el desarrollo capitalista dependiente de la sociedad chilena. Se intenta demostrar, por lo tanto, que la “dirección popular” de la economía es superior que la dirección burguesa.⁶⁴

El pragmatismo de Salvador Allende es producto de una tradición del pensamiento progresista chileno de bastante influencia en el movimiento social. Aníbal Pinto plantea que los partidos de ideología revolucionaria en Chile “por una razón u otra, tienen que ajustar su acción al marco institucional existente. Enfrentan el desafío de promover reformas sin devenir reformistas.”⁶⁵ Para Salvador Allende, es la propia búsqueda del camino auténtico lo que lo lleva a confiar y usar para el movimiento social el Estado burgués, el cual “no se puede pretender destruir [porque] ahora es un instrumento para actuar, cambiar y crear en beneficio de Chile y sus masas laborales”.⁶⁶ El camino auténticamente “nuestro” sería el de la independencia económica; y este derrotero sólo puede ser superado a través de la revolución social que “no es arrasar y destruir” sino que “es construir y levantar con una nueva mentalidad una patria más amplia y generosa”. Allende explicaría en la Universidad de Guadalajara en un célebre discurso de 1972:

La realidad de Chile, su historia y su idiosincrasia, sus características, la fortaleza de su institucionalidad, nos llevaron a los dirigentes políticos a entender que en Chile no teníamos otro camino que el camino de la lucha electoral. Y ganamos por ese camino que muchos no compartían, fundamentalmente como consecuencia del pensamiento generado en este continente después de la Revolución cubana y con la asimilación, un poco equivocada, de la divulgación de tácticas.⁶⁷

Esto refleja en gran medida el grado de compromiso que grandes porciones del movimiento de izquierda tenía con el régimen institucional vigente desde 1925 –por cierto, de origen sumamente viciado– ya que, pese a criticarlo, aceptaban las reglas del juego bajo la idea de que tomando parte de su poder podrían revertir la dominación existente. De todas formas, este pensamiento y esta opción política gradual les valieron a sus defensores la férrea crítica de las organizaciones más revolucionarias, quienes los definían como reformistas por no plantear el paso de la

⁶⁴ Jaime Osorio, “Del problema del poder a la contrarrevolución en Aguilar”, Alonso, *et. al.*, *El gobierno de Allende y la lucha por el socialismo en Chile*, México: UNAM, 1976, p. 128.

⁶⁵ Ídem., p. 88-89.

⁶⁶ Frida Modak, *op. cit.*, p. 93.

⁶⁷ Ídem., p. 351.

superación concreta del Estado burgués. Esta diferencia estaría latente en la izquierda y sería el elemento que terminaría por distanciar rotundamente a los dos polos de la Unidad Popular.

*

Los dos principales conductores de la Unidad Popular fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile; los dos grandes partidos de ideología marxista y de fuerte presencia obrera. La propuesta de la UP se proyectó en todo el país y se nutrió fundamentalmente de lo propuesto y actualizado por el FRAP en 1964, sobre todo en sus contenidos programáticos y políticos.

La Unidad Popular fue concebida por las fuerzas de izquierda como un frente político cuyo fin era conseguir el poder ejecutivo y –en consecuencia– controlar los demás poderes, para llevar adelante cambios estructurales que minaran la fuente de poder de los grupos dominantes. Su programa de desarrollo se basaba en la industrialización y control por parte del Estado de las áreas estratégicas de la economía nacional para así mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los chilenos. El fin último era satisfacer las necesidades de los chilenos bajo el amplio concepto de una democracia económica, social y política. El proyecto incluía un vasto programa social con innovadoras medidas en las áreas de salud, producción, viviendas populares, sistemas de pensiones, entre otros rubros. Así, la necesidad de la Unidad Popular se basaba en la realidad concreta de un hondo problema social que se debía solucionar.

A fines del gobierno de Frei hubo cierto consenso de que se vivía una crisis profunda del sistema de dominación. La pugna entre los sectores dirigentes (PN-DC) los llevó a presentar proyectos independientes y a presentarse por separado en las elecciones de 1970. El proyecto de la UP, de por sí irreductible, se enfrentaba al de la Democracia Cristiana, cuyo abanderado Radomiro Tomic presentó un programa reformista parecido al de Salvador Allende; y al de Jorge Alessandri, apoyado por la derecha, quien se presentó con un discurso “independiente” y crítico de la política de partidos. Así, para las elecciones de 1970, estaban los tres tercios en escena. Este esquema, izquierda, centro y derecha, sería irreductible, y su propia dinámica alterará profundamente el escenario político cuando las oposiciones a la izquierda se unifiquen en un único frente pro-golpista (la CODE).

De tal manera que la elección de 1970 presentó un resultado con diferencias sumamente estrechas, sin ir más lejos, Salvador Allende obtuvo el 36% de las votaciones, seguido muy de cerca por el candidato “independiente” de derecha. El mecanismo legal de la Constitución chilena se activó ante tal coyuntura y el 24 de octubre de 1970 el Congreso Pleno eligió a Salvador

Allende Gossens como presidente de la República. Además está decir que el proceso fue absolutamente legal y democrático. Sin embargo, la DC condicionó sus votos en el Congreso Pleno a cambio del compromiso del gobierno de la Unidad Popular de firmar un Estatuto de Garantías que protegiera al Estado de Derecho y delimitara el rumbo del ejecutivo.

La noticia del primer presidente socialista-marxista elegido democráticamente provocó inmediatas reacciones en todo el mundo. En Estados Unidos, país sumamente preocupado del desenvolvimiento político latinoamericano, no se permitió que un gobierno de tales características se pusiera en funciones. Nos cuenta el historiador Luis Corvalán Márquez:

El 15 de septiembre, el Presidente Nixon informó al director de la CIA Richard Helms que un gobierno allendista no era aceptable para los Estados Unidos e instruyó a la CIA para que jugara un rol directo en organizar un golpe de estado para evitar que Allende accediera a la presidencia.⁶⁸

El drama había comenzado. La noche del triunfo popular Salvador Allende se dirigió a la gente que se volcaba a las calles a celebrar el triunfo. El presidente electo ubica en su medida histórica el triunfo popular: la victoria tiene una “honda significación nacional”. Esa misma noche anunció el respeto de los derechos de todos los chilenos pero además afirmó, para que lo sepan definitivamente, que cumplirá, junto con el gobierno del pueblo, el “compromiso histórico” que han asumido con Chile de “convertir en realidad el programa de la Unidad Popular”⁶⁹. Comenzaba así, el mandato del gobierno popular.

El programa de gobierno de la Unidad Popular

El texto del programa parte con un balance de la situación del país, coincide el análisis de la UP con la crisis a la que hemos hecho referencia:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.⁷⁰

⁶⁸ Luis Corvalán Márquez, *op. cit.*, p. 148-149.

⁶⁹ Discurso triunfal del 5 de septiembre de 1970.

⁷⁰ Unidad Popular, *Programa Básico de Gobierno*, Santiago de Chile, 1970.

El problema identificado tiene su origen en la profunda desigualdad: “un grupo de privilegiados que no pasa del 10% de la población acaparan la mitad de la renta nacional”. Existía una brecha gigantesca entre los connacionales quienes, entre los más pobres, sufrían la desnutrición y pauperización de sus vidas.

La Unidad Popular acusa al latifundio de ser el gran culpable de los problemas alimenticios de todos los chilenos y de la miseria y atraso que afecta al campo. Se define así el desafío de la lucha por la liquidación del latifundio, como una tarea fundamental del programa popular.

Para la UP el frente de cambios estará constituido por “todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos”. Se define así que las tareas tienen como fin lograr la independencia económica, sin especificar el contenido clasista del proyecto, aceptando en su seno a todos aquellos que se inscriban tras los cambios estructurales.

Uno de los elementos fundamentales del programa es la prefiguración que se hace del poder popular, ya que se anuncia que “las organizaciones sindicales y sociales” del amplio espectro ciudadano serán llamados a “intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder”. Con esta iniciativa se instalaría un embrión de poder que suplantaría a las instituciones burguesas por un nuevo Estado “donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder”.

Este fin esencial –y todos los de peso estructural– será consagrado en una nueva constitución política que “institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal”. A su vez “se creará una organización única del Estado estructurado a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder”. Este es quizás uno de los elementos más ambiguos pues no se especifica si será el mismo estado burgués el que se reformará o si éste –como demandaban sectores de la izquierda– sería destruido y reemplazado por un gobierno proletario.

Como ya hemos dicho, el programa plantea el proceso de transformación de la economía basado en una “política destinada a constituir un área estatal dominante”. Para tal fin se tomará como primera medida la nacionalización de las riquezas básicas del país, entre ellas el cobre, el hierro y el salitre. La política económica del gobierno se estructurará “a través del sistema

nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción (...), como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía”. Con la fortaleza del área social de la economía se garantizará un crecimiento económico rápido que tienda a llevar al máximo las fuerzas productivas:

Procurando el máximo aprovechamiento de los recursos (...) a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.

Las necesidades del pueblo definidas por el programa responden en cierta medida a esa tarea histórica que definiera el economista Aníbal Pinto.⁷¹ La UP propone:

[...] viviendas dignas, sin reajustes abusivos; escuelas y universidades; salarios suficientes; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares.

El concepto de socialismo, como se ve, no se nombre específicamente en el programa, toda vez que su presentación –el propio contexto del panfleto– buscaba presentar ante los ojos del electorado un texto claro, sin mayores adornos ideológicos, que en sí mismo englobara tareas inmediatas de corte reformista que sólo podrían ser solventadas con una nueva estructura económica. El cumplimiento de las tareas crearía las condiciones para la futura instauración de una sociedad socialista. Las necesidades sociales descritas hablan ampliamente del fuerte contenido popular del programa en esta primera etapa, lo cual explica el respaldo que una masa considerable de la población entregó al proyecto de la Unidad Popular. Este apoyo fue posible pese a que el gobierno allendista centraba la dinámica del proceso en la conformación del área social industrial y no necesariamente en la movilización y organización activa de otros sectores del pueblo.

Los partidarios de la Unidad Popular destapan sus intenciones con el programa. Declaran, “franca y honestamente, que no somos una garantía para la minoría privilegiada. No somos la

⁷¹ “A la postre, pues, la cuestión decisiva que se abre hacia el futuro reside en si será la izquierda –ya en situación de poder- u otro grupo el que cumplirá la nueva, indispensable y, en gran medida, inevitable tarea histórica que se perfila hacia el futuro, esto es, la incorporación real, y no solamente electoral, de esa masa [marginada] a la sociedad.”. Aníbal Pinto, *Tres ensayos sobre Chile y América Latina*, Buenos Aires: Solar, 1971, p. 119.

garantía para los intereses del capital imperialista que explota, intriga, corrompe y detiene el desarrollo”. La amenaza quedó en el aire; la única tarea entonces era, ante esta declaración de rebeldía, cumplir a cabalidad el programa y avanzar en el proyecto de construcción de una sociedad socialista.

Legalidad. Constitucionalidad. Democracia.

La legalidad fue uno de los elementos conceptuales que más se discutió durante el gobierno de la Unidad Popular, aunque no fuera, precisamente el que estaba en disputa. La oposición desarrolló en la práctica una estrategia que se proponía disputarle la “legalidad” al gobierno con el fin de mostrarlo como incapaz de respetar la institucionalidad.

El problema de la legalidad tuvo dos enfoques en la izquierda del periodo. Como veremos más adelante, el sector representado por el PC y el pragmatismo allendista planteaban a la institucionalidad –y por tanto, a sus leyes– como necesaria para el tránsito hacia el socialismo. Eduardo Novoa, estudioso del derecho, escribe que Allende era un hombre “que en un plano íntimo manifestaba que era la ley la que legitimaba su cargo y su función, y que por consiguiente, si la ley era el apoyo de su desempeño, él debía ser respetuoso de la ley”⁷². De aquí vendrían los constantes esfuerzos del gobierno por demostrar que, efectivamente, respetaba la ley. Sin embargo, dentro de la Unidad Popular había una ambigüedad respecto a este tema. Si bien el Partido Socialista –y con ello el ala radical de la UP– anunciaba que la institucionalidad era un “instrumento limitado de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”⁷³; durante el gobierno de la Unidad Popular, ni el PC ni Allende consideraron que la situación revolucionaria había llegado a un punto tal que se hacía necesario desechar la ley.

Si bien en el mismo programa de la Unidad Popular hay una advertencia explícita sobre que el fin último del gobierno es cambiar la Constitución y –por tanto la legislación– se advierte que en sus primeros años de gobierno, se muestra muy cauta y, por acción de la oposición, rápidamente se agota su vía de legal. Esta actitud de respeto y reincidencia en la ley transforma los últimos años de actividad parlamentaria (1972-1973) en una verdadera suma de rencillas entre los distintos poderes del Estado. Allende había señalado en alguna ocasión su actitud ante la ley:

⁷² Eduardo Novoa, “Las cuestiones jurídico-institucionales y la vía chilena”, en Alonso Aguilar, *op. cit.*, p. 187.

⁷³ Álvaro Briones, “Antecedentes de la línea política de la Unidad Popular”, en Alonso Aguilar, *op. cit.*, p. 43.

Los trabajadores que me eligieron están en el gobierno; nosotros controlamos una parte del Poder Ejecutivo, somos minoría en el Congreso. El Poder Judicial es autónomo y el Código Civil de mi patria tiene cien años. Y si yo no critico en mi patria al Poder Judicial, menos lo voy a hacer aquí. Pero, indiscutiblemente, hay que pensar que estas leyes representaban otra época y otra realidad, no fueron leyes hechas por los trabajadores que estamos en el gobierno, fueron hechas por los sectores de la burguesía que tenían el Ejecutivo, el poder económico y que eran mayoría en el Congreso Nacional.⁷⁴

Había pues, una disposición y una conciencia de que era necesario cambiar la legislación, para adecuarla a la nueva época. Sin embargo, como ya se dijo, el camino de la legalidad se agotó rápidamente y terminó por restarse de los elementos vitales del gobierno.

Como explica Eduardo Novoa, en los tres años del gobierno popular se presencié la siguiente dinámica: “un gobierno que trataba de demostrar su respeto por la ley y una oposición que procuraba descubrir o demostrar infracciones a la misma”. El mismo autor señala cuatro fases en las que la oposición llevó a cabo su política: a) una renuencia inicial que niega al gobierno los instrumentos legales para llevar adelante su programa. Esto genera una respuesta extraparlamentaria del gobierno basado en los resquicios legales; b) una ofensiva basada en la restricción de los poderes y atribuciones del gobierno, todo resumido en el proyecto Hamilton-Fuentealba; c) una búsqueda de que el gobierno salga de la legalidad; desquiciando los ministerios con constantes acusaciones, ahondando la disputa del Proyecto Hamilton-Fuentealba, negando el proyecto de delito económico, dictando la Ley de Control de Armas, llamando discretamente a la acción de las Fuerzas Armadas; y, d) un desenvolvimiento total de la insurrección con los paros de octubre de 1972 y la intensificación de la actividad subversiva luego de las elecciones de marzo de 1973 –cuando la oposición, agota su perspectiva legalista–; aquí comienzan los atentados terroristas, la insurrección militar de junio de 1973, el asesinato del edecán presidencial, huelgas, paros y acusaciones del parlamento.⁷⁵

Un elemento fundamental es que cuando el gobierno intenta utilizar sus atribuciones para intervenir en la realidad nacional –por ejemplo, en el plano de los medios de comunicación– la oposición apela al Estatuto de Garantías. Este documento sirvió como un controvertido compromiso que la DC instó a firmar al Gobierno de Allende para así ratificarlo, con garantías, como presidente. De antemano la necesidad de este Estatuto se genera por la creencia de que el gobierno de Allende estaría sumamente tentado de romper el marco jurídico que la DC pedía se

⁷⁴ Frida Modak, *op. cit.*, p. 351.

⁷⁵ Ver Eduardo Novoa, *op. cit.*, p. 189 y ss.

respetara. Este Estatuto, una especie de declaración de inmovilidad del sistema, atrapó a la Unidad Popular que se afanó en respetar íntegramente la legalidad allí delineada. En tales circunstancias los impulsos populares del ascendente movimiento social se vieron restringidos por la práctica del gobierno de respetar la ley, en circunstancias que, al término del primer año de funciones, “ostensiblemente sus posibilidades por la vía legal se había agotado”.

Otro punto de la polémica es el uso de los resquicios legales. Esta solución aplicada por el gobierno se debió, principalmente, a la fuerza adversa que tenía en el poder legislativo. Era de esperar que el gobierno no pudiera tenerlas tan fáciles a la hora de levantar los cambios estructurales, por tanto recurre el primer año de gobierno a ampliar su base de apoyo, para fortalecerse y revertir su situación en el parlamento. Como ya se indicó, el primer año es de mera renuencia opositora, lo que estanca el proyecto fundamental del gobierno: la conformación del área social. Para tal fin, el gobierno echa mano de una legislación antigua, “mal estructurada, fruto de urgencias y de apremios provenientes del plano político-económico”, que, sin embargo, no había sido derogada y tenía un fuerte contenido de izquierda (producto de efímera revolución socialista de 1932). Con el fin de llevar a las últimas consecuencias la conformación del área social, al decir de Tomás Moulián, se reveló “una curiosa concepción idealista respecto al predominio de la forma jurídica sobre la correlación de fuerzas”. Es decir, se prefirió el uso de la flexibilidad legal del sistema chileno, con todas sus contradicciones, antes que propiciar una nueva legislación e institucionalidad; o, más bien, solucionar el problema del poder.

Ante esta actitud del gobierno, la oposición articuló el Proyecto Hamilton-Fuentealba que imponía límites a la capacidad del gobierno de expropiar y requisar industrias para conformar el área social; la oposición buscaba así terminar con la táctica de los resquicios legales. En última instancia esta actitud del gobierno tenía algo de quisquillosa pues hacía uso de disposiciones olvidadas, pero de ninguna manera su accionar era ilegal o anticonstitucional, puesto que las medidas adoptadas fueron hechas bajo una legislación que las amparaba y las tenía por válidas.

Cabe destacar finalmente que la única salida legal que la oposición podía generar era a través de una acusación constitucional al Presidente de la República, prevista en los artículos 39 y 43 de la Constitución de 1925.⁷⁶ De ahí que, en Marzo de 1973, al no obtener la cantidad de votos parlamentarios necesaria para levantar una acusación constitucional, la oposición se abocara de lleno a la insurrección, la que estuvo acompañada de ilegítimas declaraciones de

⁷⁶ Ídem., p. 202.

inconstitucionalidad contra el gobierno que sólo hablaban de la impotencia legalista que abordó a la oposición política.

1.2 Algunos elementos estructurales del Chile desarrollista

Resulta desproporcionado plantear que el gobierno de Salvador Allende y sus medidas políticas generaron por sí solos la crisis que vivió el Estado desarrollista chileno en septiembre de 1973. Sin embargo, el papel político jugado por la colectividad de izquierda terminó por develar los límites objetivos del capitalismo dependiente chileno y la incapacidad del modelo de hacer factible el desarrollo económico y social del país.

Bajo tales principios, es fundamental comprender que los orígenes del trágico desenlace del gobierno popular se ubican en la lógica histórica del desenvolvimiento del Estado desarrollista en Chile, que se observa con cierta nitidez desde 1932. Este marco estructural, con su definida escena política, permitió en última instancia que un gobierno de alto contenido izquierdista alcanzara el poder según los ordenamientos legales. A su vez definió al proyecto de la UP –demandado por la ciudadanía en 1970– como la posición más extrema del desarrollismo local, pues basaba su política económica en una política de industrialización centrada principalmente en la actividad económica del Estado y sus industrias. Así, en 1973 no es solamente gobierno y sus creencias lo que colapsa sino que es la estructura económica, principalmente, la que entra en una fuerte crisis. La reanimación de la economía, en 1975, se hará bajo medidas radicales de liberalización económica que en sí definen al proyecto de modernización capitalista llevado adelante por los militares.

La estructura política delineada en la constitución alessandrista de 1925 definía el objetivo del Estado como la “representación política a través de partidos y no de gremios”.⁷⁷ Establecía una organización estatal centralizada y unitaria, donde todas las autoridades provinciales dependían directamente del Ejecutivo. El senado poseía características obstruccionistas y la cámara de diputados un rol fiscalizador. La ciudadanía se definía por simple participación electoral, lo que elevaba a la clase política al rol de conductor de cualquier movimiento social.

Según explica el historiador Gabriel Salazar, después del establecimiento de este lineamiento estructural del Estado, hubo cinco procesos disruptivos que “amenazaron y atacaron” la estructura institucional de 1925. El primero de ellos fue la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-

⁷⁷ Gabriel Salazar; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 46.

1931) que imprimió al ordenamiento social-corporativista del Estado de 1925 una dirección centralista, dándole al Estado importantes poderes de intervención en la economía, en la administración política y en la organización social. Después de la dictadura ibañista se había hecho evidente para la clase política que la salida a la crisis económica consistía en promover estatalmente el desarrollo de la industria nacional. En las nuevas circunstancias, sólo “el Estado podía manejar los capitales y obtener, en el exterior, el crédito y la tecnología necesaria para fomentar, nacionalmente, la industria y la producción en general”.⁷⁸

Así, desde 1930, los políticos se posicionaron como los cuadros encargados de dinamizar el Estado, a la vez que advertían a todos los movimientos sociales y otros grupos de presión que su posición ante el Estado “no era de soberanía, sino de ciudadanos a quienes sólo competía hacer uso del constitucional ‘derecho de petición’”.⁷⁹ Se delineó así una estructura de dominación cuyos principales beneficiarios y tributarios del orden eran las clases medias profesionales: los políticos.

El tercer elemento disruptivo tiene que ver con el liderazgo exclusivo que tuvieron las casas comerciales y bancos extranjeros entre 1830 y 1930. Este liderazgo –explica Salazar– “produjo una cierta ‘cultura estatal’ y una cierta ‘cultura de mercado’ que, juntas, compusieron una estrategia liberal de desarrollo y un modo mercantil de ser burguesía”.⁸⁰ Con la crisis que marcó a la década de los 30 se generó en Chile un vacío de conducción económica, que fue asumido en gran medida por la clase política civil; la cual mantuvo al empresariado en una postura meramente peticionista.

La nueva estrategia de desarrollo se definió a partir de la cultura recién reseñada: “El viejo libremercado de los extranjeros se convirtió, en manos de sus herederos [los políticos], en nacionalismo”.⁸¹ Así, el Estado Nacional asumió la misma estrategia de desarrollo de las compañías foráneas, y definió su plan económico como “desarrollismo”. Este fenómeno, iniciado por el Estado desde 1930, no fue la creación de la industria nacional sino que significó la adopción, por parte del Estado, de una estrategia de desarrollo industrial. Ahonda Salazar:

El desarrollo nacional exigía, por un lado, un Estado Científico, y por otro, una masa ciudadana dispuesta a aprender y a dejarse conducir durante su aprendizaje. El Estado

⁷⁸ Ídem., p. 50.

⁷⁹ Ídem., p. 51

⁸⁰ Ídem., p. 54

⁸¹ Ídem., p. 55

debía ser un educador de las masas, a las que debía, además organizar. El Estado debía ser el forjador del “nacionalismo”, no sólo por razones de “alta política”, sino por la feroz competencia internacional de la ‘época (...) Sin estatismo no podía, pues, haber nacionalismo. Y sin éste, desarrollo.⁸²

Este estado nacional desarrollista se posicionó como un árbitro que distribuía los recursos y prebendas según las peticiones levantadas. Los sectores sociales se organizaron para presionar y volver para sí el ordenamiento del Estado con el fin de imponer su influencia. Según el economista Aníbal Pinto, la sociedad chilena no se caracterizaba por su “respeto a la institucionalidad”, como muchas veces se repite, sino que lo que verdaderamente estaba bajo la “institucionalidad” que el chileno aceptaba y en cierto grado se preocupaba de amenazar, era el nivel de estructuración, complejo, que habían adoptado las fuerzas sociales, la “partidización de esas fuerzas según cánones clasistas e ideológicos”, además del carácter orgánico de las Fuerzas Armadas, las agrupaciones gremiales, los movimientos estudiantiles, la iglesia, los sindicatos, etcétera. De la presencia e interrelación de estos grupos de poder es que se derivan los altos grados de convivencia y de participación general en política; y por ende, se da forma a la institucionalidad vigente hasta 1973.⁸³

Para mediados de siglo, la planificación impuesta como tarea por el estado desarrollista trajo consigo el posicionamiento de la política social al mismo nivel de la política económica. Por tanto comenzó a darse preponderancia a las tareas populistas del gobierno, toda vez que la sociedad civil se organizaba en función de grupos de presión con un determinado pliego de peticiones. El problema político fue confundido con el problema económico lo que generó la creencia de que el punto de discordia social era el estilo (de gobierno del Estado) y no de Estado. La meta se transformó pues en vencer electoralmente a los contrincantes sociales para así imponer un giro propio.

El gobierno del Frente Popular (electo en 1938), tradicionalmente ligado al desarrollismo, con todas sus readecuaciones económicas permitió cambiar el balance de poder del país. Con la solidez que comenzaron a tomar las áreas económicas se empiezan a delinear los tres tercios políticos, determinando para este esquema que cualquier éxito futuro de una coalición gobiernista debía traer consigo la aceptación de por lo menos un tercio contrario. En el plano económico, con la instauración del modelo de sustitución de importaciones se produjo un aumento en la

⁸² Ídem., p. 57.

⁸³ Aníbal Pinto, *op. cit.*, p. 121-122.

concentración urbana y en el empleo industrial. Se amplió la política en torno a la minería que se nutrió fundamentalmente de inversión extranjera, lo que generó una mayor participación del país en el ingreso exterior gracias a las políticas tributarias. La ampliación de la base material, y el creciente endeudamiento, permitió solventar y ampliar el gasto público. Con esta nueva realidad, se consolidaron fuertemente los grupos medios (ligados al aparato estatal) y el proletariado moderno, rodeado del segmento informal de los trabajadores y cesantes; además surgía un discreto empresariado industrial, ligado profundamente a las nuevas instituciones de fomento productivo.

Dentro de esta lógica, la izquierda, apelando al mundo obrero y a un amplio sujeto popular, buscó imponer su modo de gobierno sobre la creencia de que la estructura estatal y social chilena tenía la solidez necesaria como para soportar un gobierno de tareas anti-imperialistas, anti-feudales y anti-capitalistas. Con esto la clase política de izquierda llevó al extremo al corporativismo de Estado, usando leyes que la misma institucionalidad –en el ejercicio de sus extremismos– había dejado olvidadas. Así, colapsaron todas las variables que hacían imposible el desarrollo, identificadas ya –según explica G. Salazar– por el economista Tom Davis en 1955: “escasez de divisas, bloqueo del crédito externo, caída de la importación de bienes de capital, expansión de la demanda, incremento de las emisiones inorgánicas, inflación descontrolada”.⁸⁴ Así, el Estado desarrollista entró en su crisis terminal.

El estado de tareas sociales en Chile trajo consigo una conciencia política que olvidó su desorden originario y lo superó todo, caracterizando el proceso como un “camino de progreso”. Para el orgullo nacional, Chile presentaba un régimen político estable, con tres tercios definidos, una sucesión ordenada y una forma de negociar de los grupos de presión. Era la Institucionalidad de la que todos se han jactado, antítesis de la violencia y del autoritarismo. Sin embargo, para Tomás Moulián, esa ejemplaridad (mito, dicen algunos) estaba construida sobre la mezcla del “olvido y la mistificación”. Una manipulación semántica en torno a la “profundidad de la democracia chilena”. Esta realidad define la contradicción, tanto de las estructuras económicas como de los patrones culturales que los chilenos levantaron para justificar sus proyectos. Así la define Moulián:

⁸⁴ Gabriel Salazar, *op. cit.*, p. 67.

Democracia de élites y de los partidos, que permeó menos a la sociedad de lo que se creyó, que permitía que algunos siguieran pensando a los asalariados como rotos, subhombres, mientras estos mismos estigmatizados por la soberbia pseudoaristocrática, eran incitados por otros a pensarse como clase-sujeto, encarnación de la emancipación. País de identidad contradictoria.⁸⁵

Para Aníbal Pinto la gran contradicción del sistema descansa en que los regímenes populistas o progresistas, que presentan –con absoluta pertinencia– holgura financiera para solucionar las necesidades de la población marginada, no logran alterar sensiblemente las estructuras económicas para mantener un ritmo productivo que avale el gasto social. Estos gobiernos progresistas no pueden cambiar las situaciones relativas al empleo regular, tampoco cambian los desniveles de productividad y no logran superar la brecha que impide el acceso igualitario a las oportunidades de movilidad y ascenso social. Por tanto, el asunto no era probar una u otra receta gubernamental, sino que se trataba de imponer un modelo de desarrollo que entregara la base económica real necesaria para hacer andar una maquinaria social que garantizara derechos y oportunidades iguales para todos.

Es la contradicción del Estado desarrollista chileno, democrático, que permitió que todos y cada uno impusieran su estilo, en la creencia de que el cuerpo social aguantaría cualquier experimento, por revolucionario que fuera; sin embargo, las condiciones que esperaban los improvisados libertadores no cuajaron y ante la inmovilidad y el fracaso del Estado desarrollista, la radical modernización capitalista entró de lleno para cambiar de raíz la estructura productiva, las relaciones de producción, la concepción de la política, la definición de los grupos de presión, el poder de los movimientos y el carácter del ciudadano.

Concluye su explicación Salazar afirmando el carácter multifuncional del Estado de bienestar que gracias a su “capacidad para servir simultáneamente a muchos fines y estrategias conflictivas” devino en una pesada carga fiscal y normativa sobre el capital, que desincentivó la inversión y estancó el desarrollo de las fuerzas productivas. Fue, en fin, un Estado útil para “estabilizar al capitalismo y no para transformarlo”; volviendo todas las experiencias de cambio en frustrados intentos de socialización que activaron el duro mecanismo represivo de los sectores dominantes.⁸⁶

⁸⁵ Tomás Moulián, *op. cit.*, p. 155-156.

⁸⁶ Gabriel Salazar, *op. cit.*, p. 68.

Capítulo 2

La dictadura militar 1973-1990

Aprende a portarte bien
en un país donde la delación será una virtud.
Aprende a viajar en globo
y lanza por la borda todo tu lastre:
Los discos de Joan Baez, Bob Dylan, los Quilapayún,
aprende de memoria los Quincheros y el 7° de Línea.
Olvida las enseñanzas del Niño de Chocolate, Garfield
o el Grupo Arica,
Quema la autobiografía de Trotsky o la de Freud
o los 20 Poemas de Amor en edición firmada y
numerada por el autor.

Jorge Teillier

“Sin señal de vida”, *Cartas para reinas de otras primaveras*, 1985.

Tomando en cuenta las líneas expuestas en el apartado sobre la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, entendemos a la dictadura militar como una reacción al proyecto político social levantado por la izquierda y al sistema que lo amparaba. La capacidad de fuego de la alianza opositora al proyecto allendista permitió el ascenso de los militares al poder, cuyo mando generó altas simpatías en los políticos de la derecha, jóvenes gremialistas y economistas neoliberales. El poder concentrado y absoluto dio paso a una total transformación del país, desplegándose el proyecto de la derecha por los poros de la sociedad, en el marco de lo que se pretendía discursivamente como una “respuesta nacional” a la “agresión” del marxismo internacional organizado en el gobierno de Allende.

La imposición del nuevo sistema por la dictadura, que también ha sido considerada revolucionaria por algunas voces, ha sido regularmente caracterizada como una compleja maquinación u operación política. Algo tiene de ello, aunque la lucha entre los distintos sectores de la nación, aún con sus proyectos políticos excluyentes, volvió convulsionada y agitada la maquinación que la dictadura pretendía para el país. Para los efectos de esta operación política de alta envergadura, el gobierno autoritario y dictatorial fue necesario para una parte minoritaria de la población; considerando cómo bullía en importantes sectores de la sociedad un proyecto de

nación ligado profundamente con los valores de la democracia plural y una economía de fuerte presencia estatal.

Por tanto, independientemente del “resultado” de las líneas históricas desarrolladas en el periodo dictatorial, que evidentemente privilegian la lógica transitiva de la clase militar y la derecha política, la transición al gobierno democrático civil no fue tan sólo una simple y llana operación pactada. Los disruptivos encuentros de las lógicas transitivas –de la oposición radical, de la clase militar, de la oposición moderada–, le imprimen un sello único a esta transición. Ésta fue, más bien, una complicada trama histórica, en la cual todas las opciones fueron factibles, antes que un ejercicio de alta operación política con posibilidad de resultado único. Está más bien ligada a la reconfiguración total del escenario político, en torno a la idea de moderación política y vías institucionales de hacer política, lo cual permite generar un nuevo consenso de gobierno entre las fuerzas políticas de formalidad democrática, que garantizaría por algún tiempo un orden estable y de mayoritaria aceptación ciudadana.

Tomando estas consideraciones iniciales, establecemos que el objetivo de este apartado es explicar históricamente el desmantelamiento del sistema político-social vigente hasta 1973, así como presentar la base histórica desde donde se esgrimieron los argumentos para fundamentar una política de Estado basada en un tajante desprecio a los valores de la democracia y de los derechos humanos universales. Toda vez que esto permita dilucidar la faceta intelectual de un sistema que comprende un orden político autoritario y protegido de la ciudadanía, acompañado de un liberalismo económico tan rampante como dogmático.

Junto con esta explicación es fundamental no perder de vista la armónica –orgánica– alianza entre intelectuales de derecha (economistas, empresarios, especuladores, abogados, políticos en receso y futuros políticos), los organismos represivos más acuciosos y especializados de la dictadura (la DINA, El Comando Conjunto, la DICOMCAR, la CNI, y las otras ramas de inteligencia) y los militares a cargo de la administración pública y política, con absoluto centro en el Primer soldado de la Patria y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el dictador Augusto Pinochet.⁸⁷

Esta alianza real de importantes sectores de la nación chilena que, a su vez, concentraban en una pura dirección el poder económico de los nuevos grupos de poder y la capacidad absoluta

⁸⁷ Esta armónica alianza, aunque sus partes alguna vez hayan manifestado repudio entre sí, no puede quitarse de vista pues sólo en función de intereses mancomunados el régimen militar pudo consolidar una unidad de acción visiblemente monolítica. Todas las partes son necesarias.

de fuego en manos de las FF.AA, tenía un peso político absolutamente superlativo. La fuerza concentrada garantizaba: a. el gobierno unilateral, absoluto y sin resistencia legal (lo que permitió gobernar con decretos y la imposición de una nueva carta magna); b. el dominio absoluto de la opinión pública (con el control de la prensa y el poder de censura) lo cual permitió la difusión ideológica de los fundamentos de lo que sería la “nueva mentalidad de los chilenos”; y, c. la procreación de un empresariado especulativo, de carácter orgánico y oficial, que amasó fortuna y se hizo con la propiedad de importantes empresas estatales, conformando así una orgánica empresarial de directo apoyo al proyecto dictatorial.

El cambio real propiciado por la dictadura presentó sus líneas maestras en la Constitución de 1980, proyecto exclusivo del general Pinochet y su círculo más cercano, que fue impuesto tras un plebiscito celebrado sin registros electorales y bajo el imperio del Estado de excepción. En 1980, tras definirse los rasgos generales del nuevo Chile, se ponía en papel republicano las nuevas líneas económicas a seguir por el Estado chileno basadas en el respeto a la propiedad privada, en el rol preponderante y “social” de la libertad económica, en la privatización de los servicios básicos y en la jibarización de la responsabilidad económica y social del Estado.

Con la nueva Carta Magna se impusieron también unas Disposiciones Transitorias que buscaban regular una efectiva transición a una democracia de partidos sin presencia de la ideología marxista. En esencia, el plan de transición prohibía y aplazaba la discusión política y garantizaba, a lo menos por ocho años, la preeminencia del Estado dictatorial –con su concentración del poder y sus Estados de excepción– en manos de Pinochet. Cumplido ese plazo se celebraría un plebiscito ratificadorio en 1988, cuya superación significaba para el régimen la proyección de la dictadura al menos hasta 1997. La importancia radical de la Constitución y sus Disposiciones Transitorias reside en que es el primer plan efectivo de transición impuesto fácticamente a la nación. En su forma de Constitución, la transición planeada por el régimen, adquirió una suerte de carácter supremo y permanente que, si bien fue rechazada al principio por el grueso de la oposición, progresivamente logró, por el peso indudable de las circunstancias, la aceptación de todos los grupos políticos.

Sin embargo, la necesidad de transición es también la primera coordinada política que definen las oposiciones a la dictadura, incluso antes de la Constitución presentada por ésta. Pese a este afán opositor, la dictadura gracias a su capacidad de fuego, al desprecio de raíz a la oposición y al ensimismamiento en y del dictador, logró mellar los resultados históricos posibles

pretendidos por el grueso de la población. Las tres lógicas transitivas, de originalidad propia, poseyeron también distintos grados de factibilidad durante la década de los ochenta.

La convergencia necesaria de ciertas lógicas transitivas y la oscilación de las condiciones de factibilidad histórica de las salidas propuestas es lo que debería explicar el carácter ambiguo, pactado y excluyente de la transición política, expresado en la aceptación generalizada del plebiscito de '88 y su mecanismo legal. Lo importante de esta discusión es que cada uno de los actores políticos ve en este plebiscito algo distinto: si bien éste significa continuación para el régimen y aceptación tácita de la Constitución, también significa la oportunidad histórica de la nación para expresar el repudio generalizado al gobierno dictatorial y alcanzar la democracia, aunque sea en sus propias reglas. Con todas las limitaciones posibles, la exitosa transición pactada a la democracia permitió el fin del control militar sobre los aparatos administrativos del Estado y a su vez inauguró un nuevo periodo de gobiernos civiles.

2.1 Significación y caracterización del golpe de estado (1973)

El gobierno de Salvador Allende terminó la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando una parcialidad de las Fuerzas Armadas y de Orden centralizó las tareas y recursos militares en la labor de tomar el gobierno de la nación y terminar con la organización mostrada en todas las áreas por los sujetos populares y mesocráticos que incluso llegaron a ser gobierno.

El general Augusto Pinochet, titular del Ejército; el Almirante Toribio Merino; el general del aire Gustavo Leigh; y el general de Carabineros César Mendoza, se irguieron como las autoridades absolutas de la nación, asumiendo el mando superior de sus instituciones. Los cuatro hombres de armas señalados conformarán la Junta de Gobierno del país, que a través del decreto de ley N° 1 y N° 128 de 1973 concentrará los poderes ejecutivo, constituyente y legislativo de la nación. El poder judicial mantuvo una apariencia legal en lo concerniente a sus atribuciones y autonomía; sin embargo su labor quedó absolutamente mermada por su coexistencia y condescendencia con un régimen que controlaba a su arbitrio la legalidad y la adecuaba a sus propias necesidades políticas.⁸⁸

La Junta de Gobierno asumió el absoluto control de la nación, tomando decisiones orientadas a la total destrucción del régimen político y social preexistente, declarando suspendida

⁸⁸ Respecto al poder judicial, la declaración más tajante son las conclusiones presentadas en el Informe de Reconciliación y Verdad de 1990, Secretaría de Gobierno, *op. cit.*

la Constitución y la gama de derechos y deberes que consagraba, y decretando el receso de todas las formas de organización política y social. Más de 15 mil personas fueron despedidas de la administración pública en 1973. Rápidamente se intervinieron las universidades, nombrándose rectores militares en todas ellas, siendo expulsados de estas instituciones unos mil académicos, cerca de 3 mil funcionarios y unos 20 mil estudiantes. Aún bajo el afán de lo que se pretendía “una restauración” la Junta clausuró el Congreso Nacional, se condenó a la izquierda nacional bajo la suposición de existencia del denominado Plan Z y aplicó una masiva política de exterminio sobre cierta categoría de chilenos. Los trabajadores organizados también fueron puestos en jaque a través de la suspensión de la ley laboral y de la disolución de la entonces poderosa Central Única de Trabajadores (CUT).

Con la proscripción de los partidos marxistas y de la izquierda, y el receso de otros, se procedió a incinerar los registros electorales, además cesaron sus funciones todas las autoridades políticas civiles del país. El país entró en estado de sitio, declarado así, según lo estipulado por la legislación militar, “en caso de conmoción interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad”.⁸⁹ El estado de sitio debía ser entendido por los chilenos como un “estado o tiempo” de guerra, implementándose así los códigos que establecía la Justicia Militar, otorgándole todas las atribuciones legales a los jueces castrenses.

Así, el gobierno de Salvador Allende y el sistema legal que lo protegía, fue arrasado a través del despojo total de los aparatos de poder. Si bien para fines de 1973 los cuadros de la dictadura presentaba líneas divergentes en el qué hacer, la política profunda del régimen se desplegaba a través de la obtención y formalización de un poder sin contrapesos, y con la primera y absolutamente característica oleada de detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de chilenos, contraparte esencial de la operación de toma del poder.

En el Acta de Constitución de la nueva Junta de Gobierno del país, fechada el 11 de septiembre de 1973, se establecen algunas líneas de lo que sería la perpetuación de la dictadura militar. El acto golpista se justifica, según la visión de los militares, con la convicción abstracta de que las Fuerzas Armadas “representan la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y

⁸⁹ Decreto de Ley núm. 640

defensa de su integridad física, moral e identidad histórico-cultural”⁹⁰. Es decir, la nación se ha dado sus organismos de Fuerza Pública para depositar en ellos lo que se consideran sus “valores esenciales”. Así, ante el riesgo de una “ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos” como el marxismo, las Fuerzas Armadas asumen el compromiso de resguardar estos elementos “constitutivos” del ser de Chile, a los cuales haremos mención a lo largo de esta tesis.

El bando número 5, emitido también el 11 de septiembre de 1973 es ilustrativo en este sentido. Se acusa al gobierno de Allende de violar los más fundamentales derechos de los chilenos y de quebrar la identidad nacional fomentando “una lucha de clases estéril”. En resumen, el régimen civil, democrático y de partidos, había encubado en su seno una serie de contradicciones que, a juicio de los militares, ponían en peligro la seguridad interna y externa del país. La mayor contradicción identificada era que la democracia pluralista, al admitir en su seno a los comunistas y marxistas, ponía en peligro la integridad institucional de la patria. Fue así como se definió el rol de las Fuerzas Armadas en función de restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas con el gobierno allendista; a su vez que los militares levantaban una fuerte crítica a la democracia liberal pluralista con sus respectivos partidos políticos.

La primera oleada represiva consistió en un masivo juicio sin garantías legales a todas las personas ligadas al gobierno de la Unidad Popular. La represión afectó tanto a altos dirigentes, como a cuadros medios de los partidos políticos de izquierda, simples simpatizantes e incluso personas sin militancia política.

En lo referido por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos entre los meses de septiembre y octubre de 1973, se pueden obtener importantes conclusiones. Primero que todo, las personas asesinadas sufren esta suerte ya sea por razón de su militancia política, por ser sospechosos, por transgredir el toque de queda, por estricta mala fortuna, por ser considerados delincuentes o simplemente por ser pobres.⁹¹

⁹⁰ “Acta de Constitución de la Junta de Gobierno”, 11 de Septiembre de 1973.

⁹¹ Estas conclusiones son a partir de la lectura de los casos consignados por las Comisiones.

Las patrullas de militares y de carabineros vigilaban al país, recorriendo las poblaciones y las calles, imponiendo una incómoda presencia. Cualquier persona podía ser detenida a la fuerza por los militares o policías, incluso podía ser ejecutada en el acto, sin que mediara ningún tipo de consideración ética ni mucho menos legal. Rondan en las manos de los encargados del orden listas negras elaboradas por vecinos que comienzan a practicar la delación y algunos no titubean al hacer uso del poder de los militares para terminar con viejas rencillas personales.

Una de las razones fundamentales de la gran cantidad de muertos y desaparecidos de los primeros meses de la dictadura militar fue el uso absolutamente irracional de las armas de la nación en una situación que podía ser considerada caótica pero jamás bélica. Los militares tenían que “poner orden” en un país enfrentando a personas que carecían de capacidad de fuego y que, en algunos casos, se presentaron voluntariamente a las autoridades. El poco tacto de los militares, desde sus altos mandos hasta la tropa, habla del escaso profesionalismo del cual incluso se han jactado los hombres de armas. Considerando en algún caso la imperiosa “necesidad de orden”, las patrullas militares y de Carabineros estuvieron lejos de conseguir tal fin, aún transgrediendo mínimas normas éticas y morales para tratar con “enemigos”. Es importante mencionar que en el momento en el que el profesionalismo de las Fuerzas Armadas debió haber jugado un rol fundamental, en cambio los miembros de las instituciones castrenses basaron su acción en la total impunidad y en el engaño a detenidos y a sus familiares, lo cual generaría una profunda desconfianza en la población civil sobre los dichos y hechos de la dictadura militar.

Esto evidencia que ante la pantalla de estar resguardando el orden, las patrullas de represión agotaban todos sus esfuerzos en conseguir un rompimiento efectivo de la cultura política que los chilenos habían construido hasta 1973. Efectivamente, muchos de los asesinados y desaparecidos eran empleados fiscales o de empresas privadas que fueron militantes de partidos como el Socialista, el Comunista, el Radical, el MAPU y la Izquierda Cristiana, muchos otros fueron dirigentes populares de barrio y estudiantiles, funcionarios importantes de instituciones estatales de “agitación social”, también muchas otras víctimas fueron campesinos ligados al proceso de reforma agraria, todos ellos jóvenes, y generalmente sin militancia política activa, también una amplia gama de comerciantes informales de extracción popular, y un importante número de delincuentes comunes. Los más importantes dignatarios políticos fueron generalmente apresados, y todos sometidos a brutales torturas.

La destrucción de los sujetos populares y de sus organismos de participación y unidad, era la condición necesaria para terminar con un gobierno de amplia extracción popular y absoluta vigencia política. Es por esto que no se castigan delitos comúnmente tipificados por cualquier legislación de la época; es más, no existen delitos como tales. El crimen de la época es simplemente ser sujeto popular, político o ambas. Los objetivos van desde jóvenes empleados comprometidos con labores partidarias o de masas, hasta los que estaban conversando en una esquina de una población a las diez de la mañana o los que se asomaron a la puerta a ver de dónde venían los disparos. Otros que por cinco o diez minutos transgredieron el toque de queda y no les quedó más que intentar huir de las balas. Lo más preocupante es que los cientos de muertos de los primeros meses eran simplemente chilenos normales, de ninguna manera las bestias políticas que se decía combatir.

La principal actitud observada en las instituciones castrenses es la constitución, bajo amparo legal, de consejos de guerra encargados de calificar los crímenes políticos. En torno a la pertinencia de llamar “guerra” a lo observado después del golpe de Estado, el Informe Rettig es tajante en el sentido de que en la mayoría de los casos examinados por la Comisión los hechos no ocurrieron “al calor de un enfrentamiento armado, ni inmediatamente después. Por el contrario, se trató de ataques en contra de personas inermes o detenidas.” Al no existir en el país fuerzas rebeldes organizadas, el estado de guerra definido por la dictadura prescindía de uno de sus requisitos fundamentales para existir. El clima bélico pretendido e impuesto era básicamente “preventivo” pues suponía un potencial desarrollo de fuerzas rebeldes, aun con eso, y en consonancia con lo señalado con el Informe Rettig, no se justificaba ni se admitía el funcionamiento de los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, sobre todo porque éstos se erigieron para sancionar delitos cometidos con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, o sea, cuando no había “guerra”. El punto alto del funcionamiento de los Tribunales de Guerra fue el establecimiento de algunas penas de muerte, en circunstancias de que la jurisdicción atribuida por las instituciones castrenses carecía de cualquier justificación legal. Hay constancia que más de 2000 personas fueron procesadas por Tribunales Militares, corriendo distinta suerte.

Las miles de detenciones que se practicaron aquellos meses estuvieron acompañadas de brutales torturas interferidas por interrogatorios sobre armas y militantes de izquierda. Muchas personas fueron requeridas por el régimen, en otros casos los militares se encargaron de buscar particularmente a ciertas personas, otros fueron capturados en redadas o en los masivos

allanamientos practicados en poblaciones, fábricas y centros mineros, en las ciudades pequeñas fueron detenidas todas las autoridades de la UP y los que eran considerados agitadores. Los detenidos corrían distinta suerte: algunos eran dejados en libertad, otros eran mantenidos en reclusión y a otros se les enviaba a las cárceles en espera de un Consejo de Guerra. Hubo muchos lugares de reclusión inicial, siendo los más representativos el Estadio Nacional y el Estadio Chile. Luego fueron habilitados recintos especiales de concentración como Pisagua⁹², Chacabuco, Tejas Verdes, la Isla Quiriquina y la Isla Dawson.

En Octubre de 1973, el mando central en Santiago decidió endurecer las medidas represivas que se tomaron en provincia, considerando que se había actuado con demasiada blandura en algunas ciudades. En este contexto se instruyó a un alto oficial del ejército, Sergio Arellano Stark, para que recorriera el país en un helicóptero, acelerando y finiquitando los procesos de ciertos detenidos políticos. La denominada Caravana de la Muerte que visitó las ciudades de Valdivia, Temuco, Cauquenes, Talca, Linares, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, dejó tras su paso a 72 chilenos ejecutados.⁹³ La visita de la comitiva, con órdenes directas del mando central en Santiago, dejaba en evidencia la necesidad de dar una señal clara de acción unitaria desde el alto mando para todo el país.

2.2 Documento de 1974: La “declaración de principios” del régimen.

Si bien en los inicios de la dictadura había cierta profusión libre de ideas entre los generales y altos oficiales golpista, rápidamente Pinochet logra afirmar la voluntad del mando superior en su persona.⁹⁴ Esto es de suma importancia, pues la figura del dictador, que por razones obvias siempre se ha intentado de desdibujar, comienza a hacer gala de su definición conceptual; esto es, comienza a concentrar en su persona todas las decisiones de importancia y simplemente dicta la última palabra. Ante cualquier duda de “algunos señores políticos”, Pinochet y su Declaración de Principios, fuertemente inspirada en el gremialista Jaime Guzmán, declaran que los “que vieron en la acción de la liberación de Chile por las Fuerzas Armadas y Carabineros la posibilidad de

⁹² Ya utilizado durante el gobierno de Gabriel González Videla.

⁹³ Ver Patricia Verdugo, *Los zarpazos del Puma*, 22ª Ed., Santiago de Chile: CESOC, 2001.

⁹⁴ Esto es ampliamente evidente en la crónica desplegada en la *Historia Oculta del Régimen Militar*; además, otros autores asumen esa conclusión, entre ellos Verónica Valdivia (*Estatismo vs Neoliberalismo, un contrapunto militar*) y Genaro Arriagada (*Por la Razón o la Fuerza. Chile bajo Pinochet*).

que se les devolviera la conducción del Estado en breve tiempo [se han dado cuenta] cuán equivocados estaban”⁹⁵.

Como muchos de los discursos emitidos por los ideólogos del régimen, dentro de los que cuenta indudablemente el mismo dictador, éstos funcionan a partir de una total disociación entre lo pretendido y lo factualmente hecho. Para la dictadura su proyecto se delinea así: Chile debe intentar alcanzar simultáneamente y armonizar en forma equilibrada la libertad como forma de vida, con el desarrollo acelerado de la economía y el progreso o justicia social. Esta pretensión sólo se logra con el respeto y asunción del “Principio de Subsidiaridad”, concepto clave para el mapa ideológico del régimen.

Dicho principio es una definición política que entiende a la sociedad según grupos organizados de menor a mayor complejidad. Estas sociedades dentro de la Sociedad tienen un límite en su campo de acción, que a su vez las “protege” de aquellos grupos que tienen pretensión de totalidad, como el Estado. Así: “la órbita de competencia de la sociedad mayor empieza donde termina la posibilidad de acción adecuada a la menor”. Esta idea empalmaría brillantemente con la idea del Estado mínimo ya que concluye que el aparato estatal le corresponde “asumir directamente aquellas funciones que las sociedades intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente (...)”. Es decir, el Estado puede actuar sólo donde se agota la iniciativa particular ya sea por la complejidad de la tarea a satisfacer o por la permanencia de su presencia en algunos sectores estratégicos.

Para el régimen y sus principios, es el Principio de Subsidiariedad el que define a una sociedad “auténticamente libertaria”. En ella el individuo asume el derecho de poseer un ámbito de vida y una actividad económica “independiente del Estado”, al cual sólo puede ser sometido en función de esta nueva versión soterrada del bien común. La subsidiaridad da por consagrado y primitivo el derecho a la libre iniciativa en el campo económico, resignándole al Estado la misión de velar por el ejercicio de la competencia y evitar el monopolio.

Sumado a esto se consagra también el derecho a la propiedad privada, tanto de bienes de consumo como sobre los medios de producción. Esto se hace ocultando que el interés esencial de esta protección al derecho privado versa principalmente sobre los medios de producción, ya que se encierra con este recurso retórico a todos los tipos de propiedad, decretando la necesidad de

⁹⁵ Secretaría de Gobierno, *Declaración de Principios*, Santiago de Chile, 1974.

convertir a Chile en “una nación de propietarios y no de proletarios”⁹⁶; incurriendo en la grave confusión de igualar el estatuto de propietario del dueño de una modesta casa con el dueño de una fábrica, una mina o un latifundio.

Con esta Declaración de Principios se da vida también a una de las hadas discursivas más caprichosas del régimen: los valores “fundamentales del alma nacional”. Estos son: a. la justicia e igualdad ante la ley; b. la restauración de la “dignidad” del trabajo; c. la creación de una moral de éxito y del esfuerzo personal; d. la sobriedad y austeridad de quienes mandan; y e. la restitución del carácter apolítico de la Administración Pública, víctima de los partidos políticos. Por otra parte, es indudable que estos principios escondían una crítica al sistema chileno observado y practicado entre 1938 y 1973; considerando que el régimen democrático en manos de la UP precisamente había transgredido estos valores fundamentales.

Esto es, una vez más, la reacción total al proceso que Chile venía experimentando desde sus gobiernos radicales de fines de la década de los treinta hasta el gobierno de la coalición allendista. El problema que se veía en el aparataje institucional de antaño no distaba de ser, para los militares, un conflicto mental de los chilenos. Es decir, los valores democráticos practicados por el país entre 1938-1973 tenían serios indicativos de estar profundamente arraigados en los chilenos y estarían carcomiendo al ser nacional.

En este documento las Fuerzas Armadas y de Orden no fijaron plazo a su gestión de Gobierno porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requeriría de una acción “profunda y prolongada”. En definitiva resultaba imperioso, al tenor de lo pretendido por el dictador Pinochet, “cambiar la mentalidad de los chilenos”⁹⁷.

2.3 Personalización del poder (1974)

Cuesta creer que alguna vez se pensó dentro de la Junta practicar la presidencia rotativa de la misma. Rápidamente después de su conformación, se impuso el orden de precedencia de los miembros de la junta, lo que significó que el Comandante en Jefe del Ejército asumiera su mandato. Con el decreto ley n° 527 se designó Jefe Supremo de la Nación al jefe de la junta,

⁹⁶ “Pero tanto los empresarios como los trabajadores en general saben bien que es este Gobierno el que ha difundido la propiedad, creando miles de nuevos propietarios mediante entrega de casas, de títulos de dominio y del ‘capitalismo popular’, protegiendo con mecanismos efectivos un derecho tan primario y haciendo, como ha señalado el Presidente de la República, ‘propietarios, no proletarios’.”, en “Propietarios, no proletarios”, *La Nación*, Santiago de Chile, 03/07/1988.

⁹⁷ Vital pretensión anunciada en la “declaración de principios”.

hombre que finalmente ostentara el título de Presidente de la República, sin que jamás se le haya elegido soberanamente. El hombre, para el primer año después del golpe, gobernaba desde la cima el país, presidía la Junta de Gobierno que conservó el poder legislativo y el poder constituyente; y, además, era el jefe máximo del ejército. El poder del presidente-dictador se potenciaba con su capacidad de decretar a su arbitrio los estados de emergencia, que se prolongaron prácticamente a lo largo de toda la dictadura militar.

Esta concentración del poder en la persona de Pinochet despertó rápidamente el recelo entre sus pares. Es bastante comentada la afronta que existió entre Pinochet y el general del aire Gustavo Leigh. Éste último sería quien con más empeño le enrostraría a Pinochet su pretensión de controlar todo. En una ceremonia en el Diego Portales, cuando el dictador fue embestido con una banda presidencial, Leigh, absolutamente sorprendido por los hechos, ensució la celebración enrostrándole a Pinochet el hecho de “creerse dios”.⁹⁸

La relación de Pinochet con la Junta se vería mermada principalmente por las sospechas que despertaba en Leigh el ascenso unilateral del dictador. Progresivamente Pinochet irá concentrando en él las decisiones más importantes, lo que a la larga le permitirá gobernar y generar las políticas sólo con la ayuda de sus asesores más cercanos. La primera señal de esto es la relación directa que el director de la Dirección de Inteligencia Nacional, coronel Manuel Contreras, tenía con el dictador; es más, si bien el decreto de creación de la DINA la definía como dependiente de la Junta, jamás en los hechos se dio esa dependencia, la cual se estableció directamente con el general Augusto Pinochet.⁹⁹

En 1978, cuando Pinochet llamó a una consulta en repudio a una nueva condena de la ONU a la dictadura militar, volvió a darse una situación de prescindencia de la autoridad de la Junta. Pinochet llamó al acto cívico sin preguntárselo a sus pares, dejando en evidencia cuál sería la tendencia de los próximos años. Incluso para esos momentos ya era patente para los civiles que apoyaban orgánicamente a la dictadura, que para imponer tal o cual tendencia en la política económica bastaba tan sólo con convencer directamente al Comandante en Jefe del Ejército. Sabían que dependería de su interés, de su ánimo o de su confianza personal, la ejecución de determinados planes de gobierno.

⁹⁸ Ver el episodio en Ascanio Cavallo; et. al., *op. cit.*, p. 47-48.

⁹⁹ Así lo consigna el Informe Rettig, Gobierno de Chile, *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig)*, Santiago de Chile, 1991, p. 41 (3. La verticalidad del mando político)

Tras la primera insinuación de institucionalización dictatorial, anunciada por el dictador en el cerro de Chacarillas en 1977, el conflicto con Leigh terminó por dirimirse. El general del aire hizo llegar al dictador su opinión de que se debía volver al espíritu de restauración enunciado en un principio y a cierta paridad en las atribuciones personales dentro de la Junta. El enojo de Pinochet fue casi paralelo a los primeros síntomas de lo que sería el “pinochetismo” en Chile, es decir, la adhesión de la población a la figura del dictador. En un discurso en homenaje a los Héroes de La Concepción celebrado en La Serena –cuarta región del país–, el joven Ignacio Astete anunció que la impersonalidad del sistema que se aspiraba sólo podría lograrse a través del “prestigio personal del actual Jefe de Estado”¹⁰⁰.

Después del alejamiento definitivo del general Leigh, la total reestructuración de la plana mayor de la Fuerza Aérea, y el ascenso del general Matthei; Pinochet no tuvo problemas con mantener las capacidades dictatoriales que se había atribuido. Así, para fines de la década de los ochenta, el dictador sin contrapesos, estaba pronto a inaugurar una nueva Carta Magna para el país, emanación exclusiva del Primer soldado de la Patria y sus asesores más cercanos.

Importancia de la personalización de la dictadura

En el caso de esta dictadura, el estudio y caracterización del “primer hombre” es uno de los elementos fundamentales para entender el periodo. Esto permitiría dar fuerza a la tesis sobre la íntima relación que existe entre las decisiones y visiones del dictador, y el desenvolvimiento histórico de la dictadura militar. Más allá de la discusión si es el hombre o la sociedad el elemento más gravitante de la Historia; en esta dictadura en particular, si bien los sectores intermedios y bajos del poder del régimen militar prestaron una ayuda inconmensurable, la figura y las ambiciones del “primer hombre” marcaron más de una pauta en las políticas oficiales.

En primera instancia porque logró despejar desde un principio las dudas que se generaron en torno a la labor emprendida por los militares y a su duración. Con la Declaración de Principios, emanación directa de Pinochet y sus asesores más cercanos, el dictador logró imponer la idea de un gobierno militar de largo plazo, necesario, y con muchas novedades. Paralelamente, el dictador comienza a diferenciarse de sus pares: se traslada a la cima del edificio del Diego Portales, volviéndose casi inaccesible a los mandos medios. Además, con el emprendimiento de las medidas represivas de mayor envergadura, el dictador dejó claro quién estaba a cargo de la

¹⁰⁰ Ascanio Cavallo; et. al., *op. cit.*, p. 262-263.

empresa y se permitió el lujo de dirigir directamente una policía secreta, a través de un coronel del Ejército, que llegó a aterrar a los mismos militares que estaban en el gobierno.

Posteriormente a esta consolidación inicial del poder en Pinochet, se vivió el despliegue de su capacidad cuando se impuso la Constitución de 1980. El texto, de emanación directa de la presidencia, poseía además unas disposiciones transitorias que anunciaban un nuevo periodo para el dictador hasta, por lo menos, 1988. El general al inaugurar la nueva década del país, pretendía dejar atrás toda la labor de reestructuración de la nación para comenzar a gobernar con nueva legalidad sobre Chile. Ya para esos años, era indudable la figura de un dictador fuerte, caprichoso, respetado por sus subordinados y ministros, y destinado a ser el líder del movimiento militar.

Otro momento de gran gravitación de la figura del dictador tiene que ver con el inicio de las negociaciones con la oposición moderada. Esta apertura liderada por el Ministro Jarpa, no pasaba de ser considerada por el dictador como un mero “juego de piernas”¹⁰¹. Mientras los políticos de la DC y del ex PS, renovaban sus esfuerzos para abrir una opción del diálogo con el dictador, éste se daba el lujo de desdeñar la labor de los políticos desechando cualquier acuerdo. En múltiples ocasiones el dictador rechazó con vehemencia cualquier asomo de acotamiento de sus planes políticos, y siempre mantuvo la vista firme hacia el plebiscito de 1988. Esto, aparte de evidenciar que para él el diálogo no era más que conversación infértil y coqueteos, dejó una profunda impresión que el problema era el dictador y no necesariamente quienes le rodeaban, con los que incluso se podía conversar.

No es menor, entonces, que cuando las oposiciones logran re-articularse y se ganan un espacio en la calle en la década de los ochenta, fijen su objetivo máximo como el derrocamiento de Pinochet, inmediato y sin excusas. Esto lo reconoce el sector “aperturista” de la dictadura, que impone como principios para cualquier negociación política, primero que todo, el acatamiento de la Constitución y el no desconocimiento de la figura “presidencial” de Pinochet. El grueso de la oposición, necesariamente, se oponía a ambas figuras; sobre todo a la imagen del dictador, cuya efigie era el blanco de todas las protestas y cánticos de derrocamiento. No es casualidad, tampoco, que en 1986 el brazo armado del PC, y la izquierda en general, se propusiera terminar con la vida del dictador, en una audaz maniobra de giro en la Historia. El resultado fallido de la

¹⁰¹ En palabras del dictador.

operación, terminará por entronizar la figura del dictador, quien lloroso condenó al terrorismo y rememoró la afronta esa misma noche.

El dictador fue la gran figura del régimen. Podía vestir un día de impecable tenida marcial, con una larga capa de emperador, que le daba un aire de superioridad extrema. Otros días, podía presentar una faceta de civil; alternando esa imagen de gobernante dual, el militar, el pensador, el hombre familiar y el tipo cotidiano. Con las periodistas bromeaba y se jactaba de sus actividades deportivas. La mejor fotografía es la del dictador militar, vestido de impecable civil, inscribiéndose como el ciudadano número uno en los nuevos registros electorales del país en 1987. Por esto, la fuerza de la figura del dictador será difícilmente de olvidar en el país, ya que éste, después de entregar el gobierno en una suerte de ceremonia de honores, mantuvo su presencia en la Comandancia del Ejército, desde donde protagonizó algunos de los más vergonzosos episodios de la nueva democracia.¹⁰²

2.4 Medidas de *shock* y neoliberalismo (1975)

Al principio de la dictadura, y con la repartición de los ministerios entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, se comenzó a hacer evidente la existencia de dos posturas distintas, sobre todo en temas sociales y económicos. Ante la crisis derivada del conflicto bajo el Gobierno de Allende, en el gobierno militar aún se enfrentaban dos visiones en torno a cómo solucionar el grave problema económico. Así fue como, a fines de 1974 los “Chicago boys”, partidarios de las soluciones de *shock*, terminaron imponiéndose en la escena, convenciendo al dictador de la efectividad de su propuesta. La polémica se zanjó cuando el ministro Cauas sostuvo que para revertir la situación económica habría que aplicar una drástica política de reducción interna que bajara el gasto fiscal (“saneamiento”) y acomodara al mercado la variable del empleo (es decir, la indiferencia administrativa ante el desempleo). En enero el grupo de Chicago dio el golpe y definió las políticas a establecer en 1975.

La política de *shock* se tradujo en drásticos números. La inflación se mantuvo sobre el 340%, el desempleo aumentó de un 9,1% en 1974 a un 17,6% en 1975. El crecimiento del PIB se expresó en números negativos: -12,9%. El gasto social se disminuyó de un 28% en 1974 a un 19,4% en 1975.¹⁰³

¹⁰² Ver los detalles de los primeros gobiernos civiles y su relación con Pinochet, en Ascanio Cavallo, *La Historia oculta de la Transición*, Santiago de Chile: Grijalbo, 1998.

¹⁰³ Cifras del INE y del Banco Central, en Genaro Arriagada, *op. cit.*, p. 61.

Los meses del *shock* económico fueron de la mano de una intensa actividad de los hombres de la Dirección de Inteligencia Nacional. Esto debido a que las medidas neoliberales buscaban crear una verdadera reestructuración de la economía nacional, creando nuevos procesos de acumulación de capital basados en la desregulación mercantil, la flexibilización laboral y la privatización de las empresas del estado. Por eso, la labor de la DINA era captar en el lugar de los hechos los efectos de las medidas, toda vez que les ayudaría para aplastar cualquier protesta política que surgiera en contra del paquete económico.

Junto al tratamiento de *shock* se comenzaron a definir las líneas fundamentales a seguir en economía: el primer paquete de privatizaciones; ampliación del mercado de capitales; restricción de la política de remuneraciones; y la apertura a la inversión extranjera. El pequeño proceso de reactivación económica fue coronado por Pinochet en el Cerro Santa Lucía donde inauguró la “Llama de la libertad”, una estela de fuego que consagraba el éxito que anunciaba, pese a sus aberrantes costos sociales, la estricta política del grupo de Chicago. En marzo de 1976 Pinochet, tras la renovación del gabinete, dio el espaldarazo a las medidas neoliberales anunciando la continuación de la política de *shock* dirigida por el ministro Cauas y por el ministro De Castro.

A fines de 1976 se configuró el dominio completo de los “Chicago boys” y de los gremialistas sobre los aparatos administrativos, situándose Sergio de Castro a la cabeza de Hacienda. Comenzaron a surgir críticas, aisladas entre los organismos castrenses, y generalizadas en la amplia oposición a la dictadura, en torno al modelo, dando señas de que los cambios eran demasiado bruscos y violentos. La Iglesia declaraba que no podían mantenerse las condiciones precarias y difíciles en que estaban miles de trabajadores.

Así fue como se generó la necesidad de afianzar la factibilidad del modelo sobre la base de conseguir el apoyo interesado de los organismos financieros internacionales. Esto sólo sería posible con cierta normalización de la situación dictatorial, lo que significaba mantener las atribuciones del dictador pero en un nuevo ambiente, supuestamente más apacible y de cierta apertura. Bajo este ánimo se disolvió la DINA, que ya estaba haciendo patente sus excesos. En 1977, se anunció la institucionalización del régimen para ese mismo año y se dictó la Ley de Amnistía en 1978. Estos esfuerzos estaban orientados a afianzar la instalación y reproducción del modelo neoliberal que tras las medidas de *shock* mostraba las primeras cifras de estabilidad macroeconómica en 1977.

Neoliberalismo

El neoliberalismo se define de mejor forma a través de su desarrollo histórico en cada uno de los países del globo. En Chile, lo importante del despliegue del neoliberalismo, en un principio producto de la adopción de medidas económicas de *shock* y el despliegue de la ideología de extremo liberalismo, es que éste no es el proyecto único y primigenio del régimen. Al principio, la operación de toma del poder y la reacción contra el gobierno de Allende era más importante que el tipo de sociedad pretendido. Fue en el momento de tomar las decisiones que salieron a la luz las ideas que existían entre los cuerpos marciales y sus sectores afines. En la Armada se venía trabajando desde hace años una propuesta económica de gobierno a cargo del marino Roberto Kelly denominado “El Ladrillo”, el cual era una crítica a la regulación mercantil, a la economía cerrada y a la presencia de la planificación estatal. En cambio proponía la disminución del aparato económico estatal y la liberación de los precios.

Los jóvenes economistas de la Universidad de Chicago que trabajaron en esta propuesta, entre ellos Sergio de Castro, fueron llamados a unirse al gobierno una vez que se comenzó a estructurar el mapa de la administración.

La gran tarea de los neoliberales fue minar las bases del estatismo, arraigado incluso en sectores militares. Sin embargo, las resistencias internas experimentadas en el régimen fueron sólo una pequeña discusión dentro de un gobierno unilateral y personalista. Lo cierto es que una vez que el proyecto neoliberal ganó la hegemonía, gracias a la adhesión personal de Pinochet a él, el gobierno militar en su totalidad seguirá la tendencia ideológica del país hacia el desdén de las actividades económicas estatales y a favor de la privatización o “modernización” de los servicios y de las actividades productivas. La idea de cambiar la mentalidad de los chilenos iba dirigida a todos ellos, incluso a los militares.¹⁰⁴

Lo importante de este proyecto es que se contrapuso a la propuesta de desarrollo levantada históricamente por la sociedad chilena hasta 1973; esto es, con una fuerte presencia estatal y con grupos sociales ascendentemente organizados y fuertes. Al decir de Moulián, lo que se da en esta lucha de sistemas es una contraposición de “dispositivos saber”; esto es, planificación estatal versus desregulación mercantil.¹⁰⁵ Es, por mucho, una batalla ideológica que

¹⁰⁴ Ver este fenómeno en el artículo de Verónica Valdivia, “Estatismo vs Neoliberalismo, un contrapunto militar”.

¹⁰⁵ Esta idea es medular de su *Chile Actual: Anatomía de un Mito*; Tomás Moulián, *op. cit.*

espera los resultados de la alteración neoliberal de la base económica para poder desplegar una retórica triunfalista que distará mucho de los deprimentes índices exhibidos en el mundo microeconómico. En esta contraposición de “dispositivos saber”, el terror es el que cumple la función esencial y superlativa, pues entrega la capacidad de aplastar a la disidencia, incluso la potencial, para así mantener a raya a los sectores de la sociedad que ya venían articulando o pretendían levantar un proyecto distinto de nación.

Es sabido que la implantación inicial de las medidas neoliberales tuvo mucho de experimentación, pues la primera tarea del régimen era elevar los índices económicos y regularizar la economía nacional, tras la crisis heredada del gobierno allendista; esto es, solucionar la crisis más que imponer un proyecto. A la larga, cuando los cuadros neoliberales tuvieron la facultad de hablar sobre las cifras, esto es, después del “milagro” de 1977, es que su “dispositivo saber” se desplegó de forma sorprendente, dándose una verdadera fiebre neoliberal en el gobierno. Esto terminará incluso por influir el discurso “democrático” que el régimen empezaba a desplegar para su recambio. El punto fundamental de este discurso democrático/neoliberal del régimen es que la democracia deja de ser entendida como un medio para conseguir fines más amplios, y es cambiada por una democracia “de consumo”, es decir, vista como un fin en sí y no como una herramienta para generar cambios. Es la democracia neoliberal de un nuevo tiempo que no permite reformas de alta política ni reorientaciones macroeconómicas de fondo, y que admite solamente administración consensuada y el recambio generacional de la clase política.

Haciendo un balance de las medidas neoliberales, se pueden observar las siguientes tendencias: a. aceleración de la privatización de todos los sectores de la economía; b. creación de un sector financiero más moderno con participación de bancos y financieras; c. apertura nacional a la economía internacional mediante una drástica disminución de los aranceles; d. apertura y fomento de la inversión extranjera; e. política de diversificación de las exportaciones; e. política industrial negativa, esto es, no proteger la industria nacional y dejarla a merced del enfrentamiento con la competencia externa.

Estas medidas, que a la larga establecieron un denominado “Estado mínimo” en economía, son impensables sin el supremo rol que las fuerzas armadas resignaron a su labor de observancia de las instituciones políticas, por una parte, la democracia neoliberal y su política de

“consumo”, convertidas en formas institucionales esenciales de la nación, se encargan de volver irreductibles las medidas económicas fundamentales. Por otra parte, la visión militar del Estado genera una administración estatal profundamente ensimismada en su defensa de grupos rebeldes, reales o potenciales, lo que construye una visión trascendental de la Seguridad Nacional, que lejos de “achicar” al Estado, lo fortalece a través del rol observante que se designa a las instituciones armadas sobre el comportamiento de la sociedad.

En el ámbito económico, y siguiendo las conclusiones de la “Historia Contemporánea de Chile” de Gabriel Salazar y Julio Pinto, la “revolución” neoliberal fue más mercantil que productiva.¹⁰⁶ Esto es, significó una reactivación del sector primario exportador y una nueva etapa de dominación de las transnacionales mercantiles y financieras. Su proyecto económico, que privilegió la potenciación de la exportación de materias primas terminó por relacionarse más con un capitalismo depredador de los recursos naturales antes que con una revolución en la producción o un proceso de innovación tecnológica. De esta forma, el nuevo orden puede ser considerado como una reedición del famoso “desarrollo hacia afuera” practicado por el país en el siglo XIX y que trajo consigo, también, un correlato político autoritario.

Al igual que en el siglo XIX, la economía al potenciar su capacidad exportadora lo hace en función del ordenamiento internacional de la economía capitalista. Esto vuelve a reeditar un modelo de dependencia, bastante sensible a las crisis externas y a las condiciones e intereses de los grandes centros financieros. Este capitalismo mercantil de nueva factura, obviamente de mayor capacidad productiva, a nivel local carece nuevamente de una fuerte rama nacional que produzca bienes de capital, lo cual perpetúa el problema de la dependencia tecnológica. Esto hace concluir que el neoliberalismo desplegado en Chile no es un “capitalismo de vida propia”, como si eso fuera posible con la universalización de la economía capitalista, sino que está ligado al rol definido por las grandes potencias para los países del tercer mundo: a saber, exportar materias primas, bajar los aranceles, importar bienes de consumo y competir sin trabas con los grandes.

Las medidas neoliberales asumidas por la clase política-militar dirigente, destinadas a levantar los índices macroeconómicos, generaron a lo largo del proceso profundas contradicciones. En primera instancia, con las privatizaciones se reestructuraron y se potenciaron nuevos grupos económicos, nacidos al amparo de empresas estatales vendidas a bajo costo. Esto

¹⁰⁶ Gabriel Salazar; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 101.

trajo consigo un nuevo proceso de concentración capitalista, que disparó las ganancias de estos sectores a costa de la desregulación laboral. De ahí la curva ascendente de la desigualdad económica exhibida por el país en las últimas décadas. Por otra parte, con la preeminencia de las máximas neoliberales, se dio pie a una reinterpretación de la Historia de Chile, en profundo detrimento de lo que fue el estatismo para el país entre la década de los treinta y 1973.

Las máximas neoliberales partían de premisas del todo extrañas para la mentalidad del Chile desarrollista, esto es: a. la apelación a un descarnado utilitarismo, con el cual el despliegue libre de los intereses y egoísmos individuales traería verdadera armonía social; y b. el concepto de “equidad social”, que es considerada como el resultado de una economía libre, sin trabas ni regulaciones. Todo esto dentro de profundas contradicciones, como la que acompañó al régimen toda su existencia, esto es, la relación de la libertad económica sin trabas con una libertad individual constantemente suspendida por los estados de excepción y su aplicación por la autoridad burocrático-militar.

2.5 La Dirección de Inteligencia Nacional (1974-1977)¹⁰⁷

Como se ha establecido, al principio coexisten varias tendencias entre los militares tras el golpe de estado, sin embargo la concentración del poder en Pinochet traerá importantes novedades para 1974. Justo después del golpe, un grupo de coroneles más afectos a una versión extrema de la guerra contrainsurgente se constituyeron para dar fuerza a un grupo de represión especializado que hará macabra historia.

En 1974 se conformó por decreto la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por el coronel Manuel Contreras. Ésta era definida como un organismo de carácter técnico y profesional cuya misión era reunir toda la información a nivel nacional, con el propósito de construir las redes de inteligencia necesarias para enfrentar las tareas de seguridad interna y externa. Sus miembros eran personal de las fuerzas armadas y de carabineros, y civiles. Los agentes estaban facultados para requerir cualquier información o antecedente a cualquier tipo de persona o institución, aparte la Junta los facultaba para practicar allanamientos y llevar a cabo detenciones a personas.

La DINA fue la encargada de llevar al extremo las tareas de contrainsurgencia; esto es, valerse de métodos sanguinarios y tortuosos para exterminar personas. Su forma de actuar estaba

¹⁰⁷ Para este apartado son de relevancia las apreciaciones del Informe Rettig.

definida por la limitación de un grupo determinado (como el MIR) y una potenciación de la capacidad represiva, aspirando al exterminio total de sus integrantes. Ideológicamente eran anticomunistas virales, de estrecha relación con terroristas internacionales de extrema derecha. De entre todas las razones que explican el actuar impune de este grupo, la que más satisface es la necesidad directa del dictador de una institución de tales características. Pinochet se informaba directamente con Manuel Contreras todas las mañanas, lo cual deja bastante clara la necesidad que poseía el dictador con su protegida policía secreta.

Tras un actuar profundamente descarnado y después de sentar las bases de lo que sería la política represiva del régimen en los primeros años, la DINA llegó a su ocaso tras transgredir los pocos límites que se le habían impuesto. Con el asesinato en Washington de Orlando Letelier y de Ronnie Moffit en 1976, el gobierno norteamericano pidió la extradición de los máximos líderes de la DINA, lo que generó la disolución del grupo, la protección y alejamiento de las tareas contrainsurgentes de sus altos mandos y la estructuración de una nueva policía de inteligencia: la Central Nacional de Inteligencia en 1977.

2.6 El discurso de la institucionalización. En el cerro de Chacarillas, 1977.

Tras las medidas de reestructuración económicas expresadas en el tratamiento de *shock* de 1975-1976, se dieron las primeras cifras alegres del régimen. Los indicadores macroeconómicos se mostraban altos: en 1977 el PIB creció un 8,3%. En 1978 y 1979 su crecimiento se mantuvo sobre el 7%; y en 1980 alcanzaría un 7,7%. Las cifras de reordenamiento económico generaron una especial legitimidad del grupo tecnócrata de los “Chicago boys”, que lograron afianzar su receta y asumir el control total de la economía.

El costo social del milagro tenía sin cuidado a los tecnócratas del régimen. Así, el primer anuncio de institucionalización dictatorial en 1977, iba más de la mano con la confianza de los economistas neoliberales que con la constatación del efecto real de las políticas de *shock*. El 9 de Julio de ese año, en conmemoración del “día de la juventud” y de la “batalla de La Concepción”, Pinochet anunció nuevas noticias políticas. Ante una “destacada” guarnición de 77 “jóvenes” civiles, se vivió uno de los momentos más característicos y ceremoniosos del régimen.

En su discurso, asume el dictador que ante el “ya perceptible”¹⁰⁸ éxito de las medidas económicas y una supuesta consecución de una vida pacífica (en 1977), el régimen entraba de lleno en el diseño de un futuro jurídico-institucional. Se anunciaba así el comienzo de la etapa “creadora”, con la modelación de un artefacto jurídico que se enraizara con “los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional”.¹⁰⁹

El deber militar se centraría en esta etapa en la creación de una “nueva democracia, que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”¹¹⁰. Todo ello se lograría en su modalidad más noble cuando el individuo se despoje de su “egolatría, ambición y egoísmo” lo cual, dentro del complicado mapa mental de los militares, significaba terminar con el régimen de partidos en tanto que estos dividían a la nación, alentados por la citada tríada de la inmoralidad.

Esta ‘nueva democracia’, que ya en 1977 comienza a minar, con escaso éxito, el sentido de la ‘democracia’ de la oposición, se anuncia como ‘autoritaria’ por pretender establecer un orden jurídico que asegure el derecho y el estricto cumplimiento de las leyes. Estará ‘protegida’ según los preceptos establecidos en la “Declaración de principios”, superando el carácter “ingenuo” del estado liberal con un nuevo ordenamiento comprometido con la prescripción del marxismo y la defensa de la seguridad nacional. Deberá ser ‘integradora’ en el sentido de establecer un “objetivo nacional” para la familia chilena, asegurando una continuidad esencial de los principios establecidos por la dictadura. Será ‘tecnificada’ según la aspiración de que el gobierno del Estado prescinda de los cuadros estrictamente políticos para dar paso a un gobierno de especialistas. Y será de ‘auténtica participación social’, en el sentido de que garantizará la autonomía de los grupos intermedios (lo que libera conceptualmente a la iniciativa privada) bajo el “principio de subsidiaridad”.

El proyecto contemplaba unas etapas que por su rápido abandono sólo expresan la intención de la dictadura militar de iniciar un proceso político complejo, de necesaria implantación “gradual”, que lo aleje de una ruptura violenta o de una regresión alentada por los políticos de la vieja escuela. Es importante señalar que se contemplaba dentro de sus etapas iniciar la década de los ochenta con un pleno funcionamiento y vigencia de todas las

¹⁰⁸ Secretaría de Gobierno, *Discurso del General Augusto Pinochet en Cerro Chacarillas con ocasión del día de la Juventud el 9 de Julio, 1977.*

¹⁰⁹ Ídem.

¹¹⁰ Ídem.

instituciones jurídicas que las Actas Constitucionales contemplaban; es decir, se apelaba a la necesidad de sistematizar el nuevo ordenamiento jurídico bajo su forma más esencial: una nueva Constitución. El ánimo esencial era “intensificar la elaboración y consagración jurídica de las nuevas formas de participación social” como una tarea fundamental de la nueva democracia que se pretendía, la cual ya había subsumido como válidas –en su afán de consagrar la libertad individual y el derecho a la propiedad privada– las medidas adoptadas por los economistas neoliberales.

El historiador Luis Corvalán Márquez ha considerado que el discurso de Chacarillas expresó el interés del régimen de obtener tiempo para que el cambio de “mentalidad” anunciado en 1974 se viera alentado por los frutos del modelo económico. Se sabe que el supuesto de la economía de ultra liberalización de mercado es la consecución de sujetos centrados en el consumo y la vida privada lo que a su vez mina la cantera de los políticos profesionales. Por tanto, la nueva institucionalidad al instalar mecanismos meticulosos para la supresión definitiva de la clase política anuncia también que su gran riesgo continúa siendo la clase política en recomposición. Así, el proceso institucionalizador no es sino un golpe constante al pasado nacional y a los opositores del régimen.

2.7 La Constitución de la dictadura

La Constitución que consagra el inicio de la década de los ochenta es emanación y aspiración casi directa del dictador, contando con el alto apoyo de Jaime Guzmán, uno de los cerebros más importantes del régimen militar. El texto de la Constitución lo venía trabajando desde fines de 1973 una Comisión de Estudios en cuya cabeza estaba Enrique Ortúzar. Después de cuatro años de trabajo, en 1977, la “Comisión Ortúzar” se disponía a entregar una nueva carta magna para revisión de la Junta. Antes de eso, en noviembre de 1977, Pinochet se acercó personalmente al lugar donde sesionaba la Comisión para dispensar un documento que definía las orientaciones que el alto mando quería ver reflejadas en la nueva Constitución.

En agosto de 1978 Pinochet comunicó al Consejo de Estado su pronta recepción del anteproyecto de Constitución, para que sea revisado y acotado con las opiniones de las altas personalidades de este órgano. Esta tarea se hizo realidad a fines de octubre de 1978. Tras varias sesiones, no exentas de debates en torno al grado de los principios constitucionales, se entregó el texto definitivo a la Junta en 1979, la cual comenzó a revisarlo tema por tema. A fines de julio de

1980, Pinochet entregó las importantísimas Disposiciones Transitorias de la nueva Constitución, un texto anexo confeccionado expresamente por la Junta.

El nuevo texto constitucional respondía esencialmente al “cambio de mentalidad” que había expresado el régimen como meta. Los cambios en el aparato productivo hacia su liberalización suponían a su vez un tipo de sociedad en sintonía. La Constitución era el correlato de la potenciación de un modelo basado en el consumo cuya imagen necesaria del ciudadano era más bien de un tipo apático, desconfiado de los partidos políticos y centrado en su hogar y sus propios logros. En tal sentido, de manera explícita, la Constitución aliena al hombre común de su legítimo derecho a participar en política. Así, lo que se había convertido en un escollo en el periodo 1925-1973 se eliminaba de raíz en la nueva Constitución: la gran política, aquella que reforma al Estado o la política económica, quedó reducida al alcance de la clase política civil, que se encuentra atenazada por su propia moderación y reducida a la administración del gobierno y del orden.

Constitución

La Carta Magna presentada en 1980, era en realidad dos textos de distinto calibre. Uno contenía las disposiciones constitucionales en sí: donde se definían las bases de la institucionalidad, lo referente a nacionalidad y ciudadanía, a los derechos y deberes constitucionales, y a las instituciones de gobierno y del Estado. Esta sobrevive actualmente en sus elementos generales.¹¹¹

La otra parte, anexa al texto, eran unas Disposiciones Transitorias que en efecto suspendían todos los derechos y deberes consagrados por el texto fundamental y definían un plan transitorio hacia un gobierno civil. Por tanto, durante la década de los ochenta, los derechos consagrados en la Constitución permanente no se observaron y en cambio se prolongó la dictadura a través de lo dispuesto por las Disposiciones Transitorias, que pronto reseñaremos. La Constitución como tal (sin disposiciones anexas) se pondría completamente en marcha recién el año 1991.

¹¹¹ La Constitución ha tenido importantes reformas durante los gobiernos democráticos, las cuales han minado el excesivo sesgo de autoritarismo que permanecía en ella. Las últimas reformas (2005) buscan: restar cierto poder a las Fuerzas Armadas, aumentar la capacidad del Congreso y perfeccionar/modificar a instituciones como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional. Pese a que en 2005 se planteó refundirla para darle actualidad (llamada por algunos como “Constitución de 2005”), como no se variaron sus principales líneas y no se convocó a una Asamblea Constituyente, sigue siendo el mismo texto de 1980 aunque reformado. Después de muchos años, recién en la campaña política de 2013, algunos candidatos del *establishment* están planteando la “Asamblea Constituyente”

En lo referido al texto fundamental, y dejando de lado muchas de sus importantes disposiciones, es fundamental tomar en cuenta que, en lo referente a:

Definiciones Políticas: a. Declara que la soberanía reside esencialmente en la nación y, por tanto, “ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio”; b. Define la proscripción de las ideas que atenten contra la integridad o seguridad nacional; c. Califica al terrorismo como en esencia contrario a los derechos humanos y define sus delitos como comunes y no políticos; d. Declara inconstitucionales todas las formas de organización que no respeten los principios de la democracia y la Constitución, las que procuren el totalitarismo y las que hagan uso de la violencia. Prohíbe también las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad estatal (art. 8).

Derechos: a. Consagra la igualdad de derechos entre las personas y su amparo por parte del Estado (derecho a la vida, de conciencia, a libertad personal, a reunirse sin armas, a la libre concurrencia), salvo para los considerados terroristas; b. Define que nadie puede ser privado de su propiedad.

Obligaciones: a. Define que los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender su soberanía y contribuir a la seguridad nacional; el servicio militar es obligatorio.

Institucionalidad: a. Estipula que el Presidente será elegido por votación directa y por mayoría absoluta de sufragios. Con segunda vuelta de ser necesario (eliminando así la posibilidad de un gobierno electo con un tercio de los votos); b. Consagra a un gran número de senadores vitalicios observantes de la institucionalidad (miembros de las Fuerzas Armadas, ex presidentes y otros ex dignatarios).

Estado de Excepción: a. Define que los derechos y garantías sólo podrán ser afectados en los siguientes casos de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública. En caso de guerra interna o externa se puede declarar el estado de sitio. b. Añade que la interposición de recursos de amparo no suspenderá dichos efectos.

Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional: a. Las define como necesarias para la defensa de la patria, como esenciales para la seguridad nacional y garantes del orden institucional; b. Consagra que el Consejo de Seguridad Nacional, conformado por las máximas autoridades civiles y militares, es el encargado de hacer presente a los poderes del Estado su opinión frente a algún hecho que atente contra las bases de la institucionalidad o comprometa la Seguridad Nacional.

Reforma Constitucional: a. Decreta que las reformas que versan sobre los capítulos fundamentales de la Constitución¹¹² necesitarán de la aprobación de los 2/3 de ambas Cámaras.

Las importantes Disposiciones Transitorias suspendían todo lo anterior y permitían en la práctica la consagración legal de los métodos terroristas asumidos por el Estado dictatorial. Estos lineamientos serán los que regirán el periodo 1980-1988. Sus disposiciones más importantes definían que:

- a. Mientras no entre en vigencia una Ley de Partidos Políticos (que recién será despachada en 1987) se prohíbe ejecutar o promover actividades de índole política.
- b. El dictador tendrá el mandato de la nación por los siguientes 8 años, durante los cuales se garantizan los preceptos de la Constitución **salvo** en la aplicación de estas facultades excepcionales del presidente de facto: i. decretar por sí mismo los estados de emergencia; y ii. designar y remover libremente a los alcaldes de todo el país.
- c. Durante el mismo periodo “presidencial” de 8 años, la Junta conservará el poder constituyente y el poder legislativo; y otras atribuciones.
- d. Si durante este periodo transitorio se “produjeran actos de violencia destinados a alterar el orden público” el presidente/dictador podrá decretar el Estado de emergencia por seis meses renovables para así tener la facultad de: a. arrestar personas en sus propias casas o en lugares de otro tipo; b. restringir el derecho de reunión y la libertad de información; c. prohibir el ingreso al territorio nacional a los que propaguen doctrinas definidas en el artículo 8; y d. relegar a las personas a su arbitrio por el territorio nacional.

Por otra parte, el plan transitorio propuesto en las Disposiciones Transitorias definía que: i. La Junta tenía la facultad y obligación de presentar al país la persona que ocupará el cargo de Presidente en el periodo presidencial 1989-1997, una vez cumplidos los ocho años del gobierno Pinochetista; ii. El plebiscito se celebraría no antes de treinta días ni después de sesenta días de la proposición del candidato hecha por la Junta; iii. Si el plebiscito es rechazado por la ciudadanía, se prorrogará por un año el gobierno del presidente y la Junta, cuya principal responsabilidad será

¹¹² I: Bases de la Institucionalidad; III: Derechos y deberes constitucionales; VII Tribunal Constitucional; X FF.AA., Orden y Seguridad Pública; XI: Consejo de Seguridad Nacional; XIV: Reforma de la Constitución.

convocar a elecciones presidenciales y de representantes de las Cámaras, poniéndose en total ejercicio la Constitución Política.

Plebiscito de aprobación

En seguida se puso en marcha la preparación del plebiscito que ratificaría la Constitución. Las normas de votación contemplaban que para sufragar bastaría con el carnet de identidad, aun vencido; que los presidentes de las mesas y los vocales serían designados por los alcaldes; y que a cada votante se le marcaría con tinta indeleble su dedo pulgar, una vez realizado el voto. Los votos en blanco se sumarían al Sí. En un punto interesante de la jornada, los alcaldes utilizaron una base de datos de civiles adictos al régimen para hacer las designaciones de los encargados de las mesas de votación, resultando situaciones extravagantes; por ejemplo, familias de las más acomodadas comunas de la capital (Las Condes y Providencia), ejecutivos y dueños de las más importantes empresas aparecían a cargo de las mesas de votación de los barrios populares.

El 11 de septiembre de 1980 se plebiscitó la Constitución. El evento electoral había sido convocado con un mes de antelación. A la oposición se le permitió un acto público en el teatro Caupolicán capitalino, para que definiera su acción ante un extraño llamado a las urnas de una dictadura que no daba ningún tipo de garantías jurídicas a la disidencia. Es más, durante el mes que transcurrió desde la convocatoria hasta la elección, Chile jamás dejó de estar bajo Estado de Emergencia. De todas formas, parte de la oposición que giraba en torno a la Democracia Cristiana, al aceptar los espacios cedidos por la dictadura –es decir, al participar de la votación y de su propaganda–, dio paso a una primera aceptación de las normas que los militares buscaba imponer.

En la medida que los distintos actores se sumen a lo propuesto por la Constitución, ésta irá consolidando su presencia y en 1988 tendrá “legitimidad” disponible y de sobra como para inaugurar un nuevo periodo de la historia del país. Entre 1980 y el plebiscito de 1988 la gran discusión estará en qué medida las oposiciones a la dictadura consideran legítimo el artefacto legal presentado por el régimen o, a fin de cuentas, en qué medida reconocen su ilegitimidad pero aún así la aceptan como las normas del juego. Finalmente la dictadura logrará que todos los

partidos políticos acaten la versión militar de la transición al gobierno civil que básicamente podía empezar con el Plebiscito de ratificación de 1988.¹¹³

2.8 Crisis bancaria (1981-1982)

El año de 1981 se darían los primeros coletazos del colapso económico más importante vivido por el régimen militar desde el establecimiento de las políticas de *shock*. En Mayo de 1981 la empresa azucarera CRAV del grupo Ross declaró la suspensión de las faenas en su planta de Viña del Mar. La caída del grupo Ross, encendió la preocupación en el gobierno que, con el afán de evitar un caos en la comunidad de negocios, informó a los banqueros norteamericanos que el derrumbe de CRAV se debía a un mal cálculo y que no afectaría en ningún caso la política económica y el sistema financiero nacional.

Sin embargo, la crisis del sistema económico se veía alentada por la caída de las exportaciones desde fines de 1980 y por el aumento de los costos internos de producción, afectados también por la fijación del precio del dólar. La presión entre estos elementos generaría a la larga la inminencia de la recesión que fue informada el 24 de julio por cadena nacional: se avecinaban “tiempos difíciles”. En agosto comenzó la quiebra de las grandes fábricas.

Las medidas de contención adoptadas ante la crisis dejaron de ser útiles en el último trimestre de 1981. El 2 de noviembre la Superintendencia de Bancos anunció la intervención de cuatro bancos y cuatro financieras que eran prácticamente insolventes. El Banco Central, además, aseguró los depósitos de los ahorrantes, asumiendo el costo. El monto de la intervención estatal fue de 300 millones de dólares; menor al precio real de la hipotética quiebra. En contra de lo esperado, la señal del ejecutivo dejó el precedente para los demás bancos de que sus instituciones, ante una eventual quiebra, serían auxiliadas por el Banco Central. Esta leve contención duró poco, pues, a fines de 1981, los grandes grupos económicos dieron la alarma al gobierno; la fuerte presión sobre la invariabilidad dólar se hacía notar desde todos lados y la crisis estaba al acecho.

En agosto de 1982 asumiría Rolf Lüders el mandato del ministerio de Hacienda y de Economía. Su tarea se vería perjudicada por nuevas circunstancias en el concierto financiero mundial. La banca internacional, a raíz de la intervención de la banca privada en México y la

¹¹³“Podía” empezar porque la intención del régimen era que el plebiscito fuera un mero acto ratificatorio; la idea era proyectar el gobierno militar hasta 1997.

cesación de sus pagos externos, puso en marcha todos sus mecanismos de defensa. Así el crédito cesó de fluir hacia los países endeudados. En Chile las reservas habían caído en mil millones de dólares y era latente una alta demanda de divisas. Lüders se encargó entonces de volver a poner en marcha el crédito suspendido. Y todo con una elevada deuda externa.

Al inicio de su gestión, Lüders encargó la confección de una lista con los principales bancos deudores. El resultado de la investigación hecha por el ministro Lüders anunciaba que las deudas alcanzaban los dos mil quinientos millones de dólares. El Banco Mundial corregiría las cifras: las pérdidas podrían calcularse en cuatro mil millones de dólares. Ante tal realidad, el ministro Lüders optó por convencer a todos los sectores de la necesidad de asumir la deuda. Esto es: que pagaran los grandes deudores, evitando la quiebra de las empresas productivas; y que el Estado interviniera las instituciones bancarias mientras durara la crisis para luego volver a la normalidad de la libre concurrencia.¹¹⁴

A comienzos de este año se inició la intervención de los Bancos: tres instituciones bancarias fueron declaradas liquidadas; cinco fueron intervenidas; y dos quedaron en observación. El plan de intervención del gobierno suponía que los préstamos externos de los bancos liquidados quedarían sin pagar; sin embargo la banca extranjera sostuvo que los créditos extendidos poseían un aval tácito del Estado. Así, el equipo económico del gobierno tuvo que modificar sus intenciones y decretar la cobertura total por parte del Estado de las pérdidas de la banca privada nacional.

Y la cosa no acababa, a mediados de 1983, seis meses después de la intervención de enero, las voces de alerta volvieron a difundirse. En julio se hizo patente que la banca acreedora extranjera estaba decidida a conseguir a toda costa el pago total de las deudas contraídas por la banca privada nacional. Ante esto, el Ministro de Economía consiguió el aval del Estado a los créditos internacionales por una cifra que alcanzaba los siete mil 700 millones de dólares. Después de lo decretado por el gobierno, el FMI dio permiso al gobierno para salirse del programa de estabilización acordado en enero. Así se repactó la deuda, dando pie a un nuevo crédito por mil 300 millones de dólares. Además, los 611 bancos acreedores internacionales abrirían sus líneas de crédito externo. Sin embargo, las condiciones eran durísimas: el Banco Central aparecía como deudor, y como aval nada menos que la República de Chile. Ambas

¹¹⁴ Ascanio Cavallo; *et. al., op. cit.*, p. 441.

“instituciones” tendrían que regirse desde ese momento por las leyes de los banqueros neoyorquinos y la totalidad de sus bienes entraban en el umbral del hipotético embargo.

Sentido del crack y paradoja

Las cifras de la crisis se expresaron en un crecimiento deficitario del PIB, que presentó un alarmante -14,1% en 1982. El mismo año el desempleo alcanzó el 23,7% según cifras de la Universidad de Chile. Ahondando en el tema de la cesantía, Álvaro Díaz, indica que para 1982, más de la mitad de la fuerza de trabajo estaba “desempleada, en empleos de emergencia o en el sector informal”.¹¹⁵ Lo cual se traduce en grandes masas de jóvenes y adultos en edad activa que, o estaban desempleados o tenían un empleo precario, lo que los concentraba a diario en los barrios poblacionales. Estos sectores, a la larga, generarían focos de resistencia cuya fuerza e irrupción marcaron la dinámica de las protestas.

Lo importante de los años de 1981 a 1983 es que estructuralmente empieza a darse por terminada la primera obra de modernización y reorientación del aparato productivo. Las medidas fundamentales llevadas a cabo con plena consciencia desde 1975 se orientaron a congeniar una drástica apertura a los mercados externos con una creciente desregulación de los mercados de trabajo, expresado en la Ley Laboral (flexibilización, tercerización, precarización del empleo). Junto con la caída del sector industrial,¹¹⁶ las empresas lograron retomar las riendas de control sobre los procesos de trabajo y comenzaron a imponer la flexibilización de la mano de obra (resultado inapelable de la eliminación del estatuto sindical). La continua baja de la presencia del sector industrial efectivamente descompuso el antiguo aparataje productivo y a su vez desmovilizó a los trabajadores industriales “modernos”, cuya fuerza de movilización se basaba precisamente en la concentración y progresivo predominio del empleo industrial.

Así es como las grandes protestas de este periodo no se basan en la movilización de trabajadores organizados sino que tienen su origen el desempleo y la informalidad laboral. Una vez solucionadas las marginales cifras del desempleo y la consiguiente re-asalarización y reducción de la pobreza extrema –producto inevitable de la expansión de la nueva estructura económica–, las protestas abandonarán poco a poco su radicalidad inicial que incluso llegó a posicionar al país en el horizonte de una posible salida insurrecta.

¹¹⁵ Vid, Álvaro Díaz, “Actores sociales y transición a la democracia” en *Proposiciones* 22, Santiago: Ediciones Sur, agosto de 1998.

¹¹⁶ Producción industrial (base 100=1978); 1980: 109,5; 1981: 109,8; 1982: 83,4.

La crisis ejemplificó la gran paradoja del sistema. Si retomamos la discusión de los proyectos de Estado; el sistema neoliberal inaugurado en 1975 y de milagrosos resultados en el trienio 1977-1980, enfrentaba una gran crisis estructural a principios de los ochenta. La protesta social de distinto grado se tomó la escena hasta 1986, con amplia posibilidad de factibilidad, generándose la adecuación de la represión del Estado a las nuevas circunstancias, tomando relevancia el actuar descarnado de la CNI. Así, en los momentos de mayor desequilibrio estructural del “anti-estatista” sistema neoliberal, el Estado, con un poder desplegado en antaño, se toma la escena y centraliza las decisiones para: a. controlar la crisis económica y proteger el sistema a través de la intervención estatal de las variables económicas (suspendiendo la máxima neoliberal); y, b. controlar y reprimir al amplio bolsón de excluidos del sistema, desempleados e informales, con la aplicación intachable de las medidas de excepción, del Estado de Sitio, la CNI y el despliegue del Ejército en las calles.

Esta parcialidad en el uso de los poderes de intervención estatal dejó en evidencia que el nuevo Estado neoliberal, en esa coyuntura determinada, reveló su función de herramienta para la ascendente acumulación de capital. A través de la consolidación y perpetuación de estos mecanismos, salvaguardó los intereses de la banca privada y a su vez eliminó de cuajo cualquier asomo de protesta de quienes sufrieron la crisis. Así, se vuelve patente el carácter de clase del nuevo Estado neoliberal, el cual, al pretender ideológicamente proscribir a quienes pregonan la lucha de clases (art. 8), no hace más que fomentarla y exacerbarla a través de su identificación con el proyecto económico de la minoría más acomodada y poderosa del país.

2.9 La CNI y el Estado Militar (1980-1990)

La tarea cumplida por la DINA en la década de los setenta, sería asumida en su totalidad por el nuevo organismo de inteligencia del régimen, la Central Nacional de Informaciones. Ésta entidad protagonizaría los hechos represivos más descarnados de los ochenta, sobre todo con la reanimación de las protestas en 1983 y con el reordenamiento y reforzamiento de los grupos políticos opositores con mayor capacidad de fuego (el MIR y luego el PC, vía FPMR). En los hechos, la CNI tenía las mismas atribuciones y características de la DINA, salvo que la nueva estructura dependía directamente del Ministerio del Interior y sumaba a sus funciones la de

“mantener la institucionalidad vigente”. Sus agentes, cabe recalcar, actuaban con absoluta impunidad, sin tener la obligación siquiera de revelar su identidad ante los tribunales.

A fines de los setenta y a principios de los ochenta, el MIR comenzaría a proponer importantes acciones de acoso extra-sistémico. Mientras se rearticulaba la orgánica de la colectividad, su parte activa llevaba a cabo una celosa ofensiva en los frentes urbanos, que incluía atentados y asaltos a bancos. La labor de la CNI se potenció con esta reactivación de la oposición armada, y desde su mando comenzó con fuerza la definición de tareas contra-insurgentes, que incluían: a. controlar y desbaratar la resistencia armada; b. atemorizar a las organizaciones sociales de izquierda y opositoras; c. servir en las más variadas tareas de contra-inteligencia, espionando y vigilando a todas las organizaciones sociales e instituciones.

La dictadura, aún en su periodo constitucional, necesitaba de una policía sin restricciones, que pudiera saltarse las disposiciones jurídicas básicas en torno a los derechos de las personas y que tuviera la capacidad de asesinar sumariamente, sin dar explicaciones. Este rasgo, sumado a varios otros aquí reseñados, es también fundamental para caracterizar a este régimen de discursos y hechos contradictorios hasta un nivel esquizofrénico. Una ejemplificación de esto es que muchos de los crímenes cometidos por la CNI tuvieron incluso una condena oficial por parte del gobierno y en algunos casos, éste hasta pretendió procurar su investigación. La constatación de estos crímenes como responsabilidad del Estado demerita necesariamente el discurso de conciliación y apertura que pretendían dejar para el consumo de las masas los militares y los civiles adictos a su gobierno.

Para la nueva época, sumada a las Disposiciones Transitorias que permitían el gobierno autoritario y dictatorial, se volvieron a constituir los Tribunales de Guerra para aquellos delitos en los que hubiesen resultado muertos autoridades de gobierno o funcionarios de las Fuerzas Armadas. Se esperaba con todo una fuerte contraofensiva armada de la oposición de izquierda, evidenciada en los primeros atentados selectivos sobre blancos de la dictadura, como el de Roger Vergara en 1980 o el de Carol Urzúa, intendente de Santiago, en 1983.

La CNI llevaría a cabo una política de exterminio más selectiva respecto a la represión anterior. Sus esfuerzos se centrarán principalmente en el MIR, el FPMR y el PC; sus víctimas fueron personas ligadas a las tareas clandestinas o vinculadas al soporte del aparato militar partidario. En muchos casos la CNI buscaba desbaratar la actividad política de la oposición, y en otros tantos se encargaba de llevar a cabo represalias o escarmientos. En las protestas, se

disparaba abiertamente a la gente manifestante con el claro fin de amedrentar a la masa más activa y replegar a la población a sus hogares.¹¹⁷

Con el espíritu de los tiempos a su favor, las brigadas de negro de la CNI, perpetraron algunos de los asesinatos más sonados de los ochenta. Entre las acciones más características está el asesinato del ex presidente Eduardo Frei, envenenado en el Hospital Militar;¹¹⁸ el de Tucapel Jiménez, sindicalista asesinado en su taxi, y del carpintero Juan Alegría inculpado por este crimen y también asesinado; el asesinato de cuatro chilenos militantes de izquierda como parte de la venganza tras el atentado al dictador; y el asesinato de doce jóvenes del FPMR en el marco de la Operación Albania, producto también del atentado al dictador.¹¹⁹

Por otra parte, otros organismos pondrían la nota alta en la década de los ochenta. La DICOMCAR, compuesta por antiguos miembros del Comando Conjunto y a cargo de Carabineros de Chile, en 1985, asesinaría a 3 profesionales comunistas tras secuestrarlos a plena luz del día. Los cuerpos degollados de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada fueron abandonados en las afueras de la capital. La disputa entre las atribuciones de las organizaciones de inteligencia, conllevó a que la CNI le entregara al juez Cánovas, a cargo de la investigación, los antecedentes que indicaban a Carabineros como los responsables de los terribles crímenes.

Durante las protestas que marcaron la escena desde 1983, la represión se generalizaría también para el grueso de la población movilizada. Durante esos años se dispararía el número de detenciones volviéndose de carácter masivas. Con el ascenso de las protestas en 1986, un año complicado para el régimen, el Ejército volvió a asumir un papel esencial en el control de la población civil, volcándose un importante número de soldados a las calles con órdenes de disolver cualquier asomo de manifestación. Ante la creciente ola de violencia callejera y política, el régimen consideraba impotente a la fuerza pública, Carabineros de Chile, y la responsabilizaba de no poder contener los focos de subversión callejera. Tras el reproche, el Ejército asumió el control de las calles. Para tales fines se conformó la Unidad Fundamental Antisubversiva; grupos militares de represión formadas por oficiales jóvenes con armamento y transporte exclusivo. El

¹¹⁷ Tomás Moulián, *Chile Actual: Anatomía de un Mito*, op. cit., cap. 2 y 3.

¹¹⁸ La reciente resolución de la causa Rol N° 7.981-B, que trata la muerte de Frei, declaró que su muerte “fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado ‘Transfer Factor’, y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas.”

¹¹⁹ Es importante señalar también, los casos de represiones en Neltume, Fuenteovejuna y Janaqueo. Según el Informe Rettig, descontando las muertes durante jornadas de protesta y violencia, los asesinatos selectivos de la dictadura serían 160 durante la década de los ochenta.

total hermetismo de esta Unidad era sellado por el estricto uso del camuflaje de guerra, que confundía a los militares con el gris ambiente del país de las protestas.¹²⁰

La UFA haría varias demostraciones de su total control callejero: en 1986 reprimieron una concentración de universitarios en la Plaza Italia, también controlaron con uso de fuerza el llamado a paro de la CONFECH, el 1° de mayo las tropas se tomaron la Alameda para impedir los actos conmemorativos anunciados por el CNT, y también controlaron con inusitado despliegue de tropas la segunda sesión de la Asamblea Parlamentaria Internacional por la Democracia en Chile.

Un punto alto de la represión se vivió en las jornadas de julio de 1986 cuando fueron quemados vivos, por una patrulla de Carabineros, dos jóvenes que participaban de las protestas: Rodrigo Rojas moriría a causa de las quemaduras y Carmen Gloria Quintana sobreviviría con graves lesiones.

Cabe destacar que las acciones y tareas de la CNI en nada distaban de lo trazado por las tareas de contra-insurgencia en 1973, su innovación consistió en hacer del terrorismo de Estado una herramienta selectiva de exterminio. La guerra soterrada contra la ideología de izquierda no amainaría con la institucionalización de la dictadura, es más, se haría sumamente necesaria para acallar y neutralizar los discursos que posicionaban la lógica transitiva militar en los límites de la ilegalidad y que pretendían una sociedad distinta, sobre la base de una nueva Constitución incluyente y participativa.

2.10 Lógicas transitivas (1983-1986)

Para analizar la transición de la dictadura a la democracia en Chile es preciso comprender las tres lógicas transitivas que se desplegaron en la discusión y acción política: primero, la lógica militar; la lógica de la oposición moderada; y por último la lógica de la oposición radical.¹²¹

Lógica transitiva militar

En el principio de la dictadura militar el tema de los plazos, que llegó a discutirse entre la alta oficialidad, fue rápidamente cooptado por las intenciones del general Pinochet y su círculo más

¹²⁰ Ascanio Cavallo; et. al., *op. cit.*, *vid.* Capítulo 46 “La UFA sale a las calles”, p. 555.

¹²¹ Salazar y Pinto hablan de las lógicas transitivas, ciertamente acá se retoma esta reflexión pero se traza el desarrollo histórico de estas lógicas centrándonos en su carácter político: a. lógica militar, b. lógica civil moderada y c. lógica radical. *Vid.* Gabriel Salazar; Julio Pinto, *Historia Contemporánea de Chile*, p. 114-116.

cercano. Como se ha señalado, el camino de la institucionalización en la dictadura está presente, aunque no de manera dominante, desde 1974; consolidándose después del discurso de Chacarillas, en el cual se plantean etapas, y se habla de metas y no de plazos.

En Chacarillas 1977 se anunció una nueva carta magna cuya preparación estaba en manos de un organismo especializado que comenzó a sesionar desde después del golpe de Estado (la Comisión Ortúzar). La Constitución era un documento de expresa inspiración pinochetista, cuya dictatorial persona supervisó y organizó la confección de la nueva legislación. En 1980, sin lugar a dudas, los militares dejaron clara su estrategia para enfrentar la nueva década. Pinochet expresamente confeccionó las Disposiciones Transitorias ya reseñadas que anunciaron dos elementos importantes de la lógica transitoria militar: el dictador gobernará durante ocho años siguientes (desde 1981) con atribuciones excepcionales, la junta mantendrá su capacidad legislativa y constituyente, la participación política estará suspendida hasta la creación de las leyes políticas, al término del mandato (1988) se celebrará un plebiscito que permitirá a la ciudadanía ratificar al gobierno o rechazarlo, y sólo en este último caso se pondrán en marcha los mecanismos para elecciones presidenciales y de representantes.

Si bien, esta lógica fue la que se desplegó con mayor efectividad, no estuvo exenta de vaivenes y de fracturas que pusieron en peligro su factibilidad. En primera instancia, su traspie más importante fue el triunfo mayoritario del No en los comicios de 1988, el cual imprimió al despliegue de la transición cierto sesgo negativo hacia la clase militar y su proyecto autoritario. Ésta se refugió en las atribuciones que le aseguraba la Constitución de 1980, logrando mellar importantes puntos de la reforma pretendida por la oposición. Con la derrota en el plebiscito, y con el triunfo de la oposición en las elecciones libres de 1989, la proyección pretendida por el régimen se agotó rápidamente y llevó al dictador a entregar casi a regañadientes el poder a la civilidad. Sin embargo, Pinochet permanecería en una posición importante durante el nuevo periodo, primero como Comandante en Jefe (desde donde declaró que podría cuidar mejor de Chile) y también como senador vitalicio, en funciones hasta 1998 cuando fue condenado internacionalmente en Londres por sus crímenes y sufrió el primer traspie de su heroica vida.

El año 1981 Pinochet reinauguró el “palacio” de La Moneda y asumió el poder desde la casa central del país. Comenzaba así el régimen a proyectar su caudal político hacia 1988. Sin embargo, el efecto de las primeras protestas logró mellar incluso el carácter “pacífico” que el

régimen quería imprimirle a su transición planteada. Ante esto, las amplias atribuciones que Pinochet se había reservado no estaban a su disposición en vano; como se ha mencionado, el régimen sí tenía memoria de la rebeldía de la sociedad chilena y generó todos sus mecanismos para atazarla y prohibirle sus derechos políticos a la par de suspender sus libertades individuales fundamentales.¹²² Para la década de los 1980 se preveía desde la dictadura una sociedad bullente y manifestante desde todos los sectores.

El efecto fundamental e inmediato de la crisis vivida por el país entre 1981 y 1983 fue un amplio bolsón de descontentos, desempleados, pobres, estudiantes, trabajadores y funcionarios que comenzaron a llevar con fuerza protestas masivas de repudio al régimen. Esto provocó un cambio en la acción de la dictadura, que a través de sus mecanismos de re-oxigenación de ideas, posicionó al entonces embajador en Argentina, Sergio Onofre Jarpa para contener la agitación política que se escapaba por todos los poros de la ciudadanía. En 1983 ya era un hecho que la suspensión política pretendida por el régimen estaba lejos de ser una realidad, aún así, el periodo político se mantenía cerrado hasta nuevo aviso.

El aporte fundamental llevado a cabo por el Ministro Jarpa fue instalar el mecanismo que a la larga terminará por captar las atenciones de la Democracia Cristiana. En 1983, cuando el Ministro comienza a llevar a cabo su tarea, las protestas arribaban y si bien las oposiciones comenzaban a mostrar diferencias, el Ministerio del Interior comenzó a dialogar con la oposición moderada para explicarles la legalidad y alejarla de las calles. En medio de un plan de reforzamiento de la postura dictatorial, Jarpa se planteó trabajar sobre las leyes políticas y de elecciones y crear un movimiento de apoyo a la dictadura. Todo esto tratando de centrar el debate de la ciudadanía en lo planteado en la Constitución de 1980 y su plan transitivo.

La DC y los sectores afines vieron con confianza la invitación a dialogar de Jarpa. Éste, en su primera reunión, se encargó de dejar claro que la oposición no podía sentarse a la mesa con su demanda de cesar a Pinochet del cargo inmediatamente. Esto tendería a generar un efecto importantísimo en la oposición moderada: al ver impotente la escasa superación del nivel del diálogo con el gobierno, comenzó a abandonar sus dos peticiones más importantes y radicales: la renuncia de Pinochet y la conformación de una Asamblea Constituyente. Por otra parte, el dictador se molestará en varias ocasiones de quitarle piso a las intenciones de su Ministro, declarando que el diálogo era un mero “juego de piernas”.

¹²² Ídem., p. 106-108.

En 1984 tras la masificación de las protestas y el ascenso de la violencia política ciudadana, el régimen terminó por desechar la opción de Jarpa, anunciando un recrudecimiento de las acciones represivas si continuaba la repetición de las protestas. El régimen cambió su dirección económica, con Modesto Collados a la cabeza, quien logró apaciguar la oposición de los gremios más acomodados. Paralelamente, Pinochet anunciaba que no se adelantaría el Congreso ni habría elecciones de ningún tipo. A fines de 1984, estaba claro en boca del dictador, que la Constitución no se modificaría y que la legalidad de los partidos se encontraba aún lejana; también hizo presente la total vigencia de las disposiciones transitorias que le daban poderes extralegales. Un año más tarde, en marzo de 1985, el ministro de justicia Hugo Rosende, refirmó que la transición dejaría de ser un “proceso político” para ser un proceso “estrictamente jurídico”.

Tras la gestación del Acuerdo Nacional en la oposición moderada, que tenía presencia incluso de la derecha republicana, el régimen fue nuevamente llamado al diálogo. Si bien el “Acuerdo” logró captar la simpatía de altos miembros del régimen, Pinochet se indignó con su propuesta, llegando al punto de recriminar verbalmente a sus pares por dejarse conquistar por los políticos. Vociferó que él sería candidato en 1988 y alcanzaría la reelección. El cardenal Fresno, principal promotor del acuerdo, intentó también comunicarle al dictador las intenciones del diálogo; ni hablar, a fines de 1985 el dictador le dijo escuetamente al hombre de Dios: “demos vuelta la hoja”.

Tras el rechazo del dictador al diálogo, la oposición nuevamente confluyó en las calles el año de 1986. La factibilidad de la ruptura se expresó en la masiva infiltración de armas al país y el fallido atentado contra la vida del dictador, ambas operaciones a cargo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para 1986 el régimen, tal como venía anunciando, apuró el estudio de las Leyes Orgánicas pendientes. También se recrudecería el control de la población a través de la vuelta del Ejército a las calles, en circunstancias de que la violencia política y callejera comenzaba a rebasar la capacidad de las tradicionales fuerzas de orden, Carabineros de Chile.

El agotamiento de la salida rupturista terminó por darle un nuevo aire a la dictadura, la sobrevivencia del dictador y la generalización de la condena a la violencia política, coincidieron también con el anunciamiento de las Leyes Políticas del régimen, fundamentales para su lógica transitiva. También comenzó a desplegarse con fuerza la apropiación por parte del régimen de

las máximas democráticas, anunciando al país que la única democracia posible era la trazada por la Constitución, la única conducente a la “democracia plena”.

En agosto de 1986 se inició la discusión de la Ley de Servicio Electoral e Inscripciones; fue despachada en Octubre de ese año. El 25 de febrero de 1987 se abrieron los registros electorales. Así, las restantes tareas del régimen versaban sobre la masificación de la discusión y aceptación de las fuerzas políticas del plebiscito de 1988. Con este plan entró en funciones el Ministro Sergio Fernández en 1987 quien propuso: a. buscar el reconocimiento total de la Constitución de 1980 por parte de todos los sectores políticos; b. prestigiar y blindar con legitimidad al Servicio Electoral y a las Leyes Políticas; c. apurar el ritmo del debate interno para tener todo el aparato político funcionando para fines de 1988; y d. imponer la única vía de transición posible, esto es, el plebiscito, el cual era esencial ganar. Se aceleró así la campaña en torno a Pinochet, como el futuro candidato del continuismo y a su vez se comenzaban a formalizar los primeros partidos políticos bajo las leyes dictatoriales.

Desplegaron así los militares su lógica, confiando en que un cuerpo electoral reducido los ayudaría a ganar las votaciones de 1988, viendo con confianza la consecución del un nuevo periodo de gobierno. Digamos que la lógica militar llegó hasta 1988, pues el plebiscito estaba pensado como una ratificación más; desde el momento en que la oposición le arrebató la posibilidad del triunfo a la dictadura, las intenciones militares comenzaron a remecerse y la presencia de la clase política civil en los aparatos de decisión se consolidó a través de la reforma de 1989 y la conformación del primer gobierno civil post-dictatorial en 1990. No por esto los militares tendrán menos presencia en el aparato político, pero evidentemente sus planes se vieron fuertemente mermados por una clase política que acató las normas de la Constitución y logró reclamar con legitimidad renovada el poder para sí.

Lógica transitiva de la oposición moderada

Esta lógica representa la opción histórica de los grupos políticos tradicionales del país; su opción es la moderación, y si bien para fines de la década de los ochenta reina esta virtud entre la oposición, no siempre fue así. Por esto es preciso resaltar a los principales defensores de la idea de moderación, expresada en la búsqueda del diálogo con el régimen y el rechazo a la violencia como táctica política opositora.

Los dos puntos fundamentales en torno a los cuales se desenvuelve la historia de la oposición moderada son: a. el rechazo a la dictadura como forma de gobierno; y b. la valoración de la democracia libre y plural como ejercicio del buen gobierno. Esta oposición, desde su configuración a partir de tan elevadas demandas, termina aceptando la propuesta transitiva del dictador ya que parece ser la única viable y aceptable por todos, incluyendo a los militares y a la derecha. El valor del trabajo de la oposición moderada fue hacer ver al país la necesidad de rechazar al dictador dentro de su legalidad, en circunstancias en que una salida rupturista se hallaba agotada. Así, si el plebiscito para el régimen era un trámite, la oposición lo transformó en un gran momento de repudio al dictador, cuya fuerza se hizo sentir en el rechazo mayoritario de los chilenos en las votaciones del 5 de octubre de 1988.

La oposición moderada tuvo su centro indudable en la Democracia Cristiana y en los grupos socialistas renovados que se iban estructurando en torno a ella. La DC había mostrado sus distintas facetas producto del Golpe de Estado de 1973, ya que, en esos momentos, mientras algunos de sus más importantes militantes criticaban la drástica decisión de las Fuerzas Armadas y la persecución que se había desatado, otros miraban con simpatía la interrupción del gobierno de Allende y esperaban una pronta restitución de la institucionalidad democrática, incluso cooperando con los militares. Otra fue la historia. Tras suspenderse los partidos políticos en 1973, y tras la total proscripción decretada en 1977 (una clara señal del régimen para la DC); la oposición democrática de centro se había vuelto también enemiga decidida del régimen, se encontraba totalmente espabilada y comenzaba a dirigir sus esfuerzos hacia la caída de la dictadura.

En un citado opúsculo de Frei sobre la situación política chilena después del golpe se mencionaba que la viabilidad de la caída de la dictadura pasaba por la generación de una alianza que no estaba dirigida hacia la izquierda tradicional, sino hacia aquellos sectores de izquierda antes radicales que ahora abrazaban las doctrinas del llamado “socialismo renovado”. La DC, que durante el periodo 1970-1973 había sido ferviente opositora de la Unidad Popular, no estaba en condiciones de asumir una alianza con el PC. Este partido había definido como primera tarea la creación de un amplio frente “antifascista” (que debe entenderse como “antidictatorial”) para terminar con la dictadura e inaugurar un nuevo periodo democrático para el país; en este sentido, su radicalización observada en la década de los ochenta (Rebelión Popular de Masas) se generaría por el agotamiento de aquella táctica.

La DC rechazaría desde el primer momento cualquier entendimiento con el PC, incluso con su “frente antifascista”. Estas primeras divergencias dentro de la gran Oposición jugarían un rol fundamental a lo largo de la definición de las alianzas y de los caminos transitivos a seguir.

En 1980 la oposición moderada participó del plebiscito impuesto por el régimen para poner en marcha su nueva Constitución. Los disidentes tuvieron permiso para realizar un acto público en el Teatro Caupolicán que tuvo como gran figura al ex presidente Eduardo Frei Montalva, uno de los políticos más potentes de la disidencia moderada. Los periódicos de la época, como *La Nación*, criticaban duramente a Frei antes de 1982, en circunstancias de que tenía un liderazgo político probado y de vieja cepa. No es de extrañar que se le haya asesinado en 1982 –como recientemente se ha sentenciado– y que su muerte haya estado acompañada por la de Tucapel Jiménez, otro importante personero de la oposición en el mundo sindical. Estos asesinatos selectivos de líderes generados por nuevos contextos, hablan de una oposición de nueva cepa, que comienza a cristalizarse hacia 1983, producto de la reactivación completa del campo social, en los sindicatos, escuelas y demás centros de población que a través de las protestas y organizaciones populares comienzan a recomponer en escena a los sujetos populares y de los sectores medios.

El 14 de marzo de 1983 importantes personeros de la oposición política moderada firmaron el “Manifiesto Democrático”.¹²³ El punto más importante definido por este Manifiesto fue el objetivo de restablecer la democracia inmediatamente a través del fin de los regímenes de emergencia y del restablecimiento de los derechos humanos. El futuro funcionamiento democrático se construirá a partir de la “convocatoria de una Asamblea Constituyente integrada por las distintas corrientes de opinión”. Así, por tanto, se definían las siguientes características de esta demanda inicial: fin al régimen de Pinochet, ilegalidad de la Constitución de 1980 y, por tanto, nueva Constitución.

Estas ideas confluirían en la calle con la postura asumida por la Confederación de Trabajadores del Cobre que tras su ampliado de mayo de 1983 hizo un llamado a una paralización nacional en repudio al régimen. La paralización fue cambiada por una jornada de protesta (“no hay ningún ambiente”) para el día 11 de mayo. Ese día hubo cierto ausentismo escolar y laboral, el comercio cerró temprano y hubo incidentes en las universidades. En la noche

¹²³ Entre ellos, Patricio Aylwin, Enrique Silva Cimma, Gabriel Valdés, Hugo Zepeda, Luis Bossay, Ramón Silva Ulloa, entre otros. Vid, *Manifiesto Democrático*, 1983.

el ruido de las cacerolas y bocinazos estremecieron algunos barrios de Santiago, mientras que en las poblaciones populares la represión se desataba. Seiscientas personas detenidas y decenas resultaron heridas.

En este punto inicial de la movilización opositora confluye lo demandado en las calles con la postura de la oposición moderada. En la calle la demanda era también la reestructuración inmediata de la democracia, lo cual pasaba por un punto fundamental: la caída inmediata del dictador. Las cúpulas políticas, que sobrevivían sobre el aparato de los partidos que se reestructuraban en la proscripción, reflejaban también el sentimiento generalizado de la población opositora para el crítico año de 1983. Como se ha mencionado en la “Historia Contemporánea de Chile”, las cúpulas políticas no compartían –ni comparten– el camino de la calle, aunque lo toleran si el dinamismo social se debate allí. Su opción era, sin dudas, la política institucional y cualquier asomo de ella bastaba para engancharla y sumarla a la institucionalidad.¹²⁴ En las circunstancias observadas, el único camino seguro –porque estaba allí– era el de la Constitución; en cambio, la calle y la protesta, sólo aseguraban incertidumbre histórica y una prolongación de la cesantía histórica de los políticos profesionales.

Como se mencionó, en julio de 1983 la oposición moderada se agrupó en torno a la Alianza Democrática. Desde un inicio, los miembros de la AD vieron las protestas como un medio para forzar a la dictadura al diálogo y –por tanto– al restablecimiento de las libertades políticas. Hacia las Fuerzas Armadas mostraban una actitud de respeto, a la vez que buscaban garantizarles constantemente un mínimo de capacidad gubernativa de recambio.

Cuando las protestas se hicieron periódicas y se optó por la repetición del repudio, las fuerzas políticas del país comenzaron a vivir una lenta reestructuración. La izquierda y la población popular tras las protestas radicales parecían sacar buenas cuentas del ascenso del acoso movilizador contra el régimen; por otra parte, la oposición moderada tenderá a confluir hacia su derecha –producto del rechazo al PC– en la búsqueda de una salida pactada. A partir de esta separación de las oposiciones, sus rumbos se harán profundamente divergentes, a ratos estrechándose por la acción de las protestas y por la intransigencia demostrada del dictador, pero mostrando siempre profundas diferencias de fondo en la táctica pero sobretudo en la estrategia política pretendida.

¹²⁴ Gabriel Salazar; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 117.

Para fines de marzo de 1984 fue convocada la primera protesta de ese año. La dictadura respondió con la censura previa de todas las publicaciones y con la declaración del toque de queda para los días de manifestación. Tras la respuesta rígida del régimen, la AD comenzó el tortuoso camino de la moderación. En abril de 1984, retiró la demanda de renuncia del dictador y de la conformación de una Asamblea Constituyente. Buscaba así tener más coincidencias con la dictadura institucionalizada que con la calle.

La tendencia ascendente de la rebeldía en la población civil y de la masificación de atentados en contra de blancos del régimen militar endureció a la dictadura que prácticamente veía cómo se materializaban sus fantasmas. A fines de 1984, un nuevo paro se había anunciado y además una nueva protesta se definía para noviembre. El paro nacional, de inusitado éxito en la capital producto de la paralización del transporte, terminó por endurecer al régimen que decretó el Estado de sitio y una rígida censura informativa a principios de noviembre de 1984.

La táctica del diálogo entraba en una profunda crisis tras la respuesta del dictador, lo cual motivó a la AD a realizar un nuevo giro en sus principios. Esto era producto de la confianza que generaba en los sectores radicales el ascenso de las protestas, sobre la base de la caída del dictador; camino que era rechazado de cuajo por los más importantes personeros de la oposición moderada. Este cambio de las posturas moderadas, tenía que ver con el retiro de la demanda de la salida de Pinochet incluso a mediano plazo, y con la definición de las preocupaciones políticas de la colectividad en torno a la conformación de fuerzas democráticas capaces de derrotar al dictador dentro de su propia legalidad. Así se superó para la AD el debate de la ilegitimidad de la Constitución, sobre la base de desconocer dicha discusión y seguir adelante. Esto suponía en los hechos aceptar la Constitución de 1980 y comulgar además con la exclusión del PC y la izquierda no sistémica.

Con las intenciones renovadas, a mediados de 1985, la Iglesia propició un nuevo capítulo del diálogo de la oposición moderada con el régimen militar. En julio, el cardenal Fresno, tras haber conversado con los más importantes personeros de la oposición moderada y de la derecha “democrática”, dio a conocer al país el “Acuerdo Nacional”. Este documento era un nuevo plan de diálogo y transición presentada al régimen militar, cuyas aristas más puntiagudas habían sido limadas durante años por la intransigencia del dictador y por la necesidad opositora de un orden democrático a cualquier costo. Aún con esto, sus ideas claves no estaban lejos de generar acidez en las entrañas del dictador: sobre la base de la Constitución de 1980, se proponía la eliminación

de los representantes designados, además de un efectivo mecanismo de reforma, la libre expresión de ideas y partidos –excepto el PC–, el fin de los Estados de Excepción, el fin del exilio y la promulgación de las inexistentes leyes políticas.

Estas demandas consensuadas en forma de documento fueron las que el cardenal Fresno le pretendió presentar al dictador en su reunión del 24 de diciembre de 1985. En ella, como ya se mencionó, el dictador le negó el tema al cardenal. Para esos momentos, en los que incluso el “Acuerdo Nacional” había conquistado ciertos corazones del régimen, Pinochet sentía absoluta repulsión a cualquier documento o idea proveniente de algún miembro de la clase política, su gran enemiga y demagoga por excelencia.

Ante esta nueva cerrazón del régimen, la oposición moderada volvió a situar sus esfuerzos en la protesta social. En 1986 se dieron las circunstancias propicias para que la Oposición en su conjunto uniera esfuerzos en contra de la dictadura. La oposición radical lanzó un llamado al sector moderado para coordinar esfuerzos y hacer del año 1986 “el decisivo”. No toda la oposición de centro vio con confianza este llamado; una vez más se temía que la escena política, con el reforzamiento de las protestas callejeras, terminara por beneficiar al PC antes que a la DC y sus sectores afines. Por otra parte, la derecha más “aperturista” veía con recelo cómo la oposición moderada miraba hacia la izquierda.

Esto motivó, para el segundo semestre de 1986, el desenvolvimiento de algo que ya estaba en el aire y en los planes del gobierno desde 1980: la aceleración del estudio de las Leyes Políticas de la dictadura. Mientras tanto en la calle las oposiciones veían con simpatía la conformación de la Asamblea de la Civilidad, una nueva coyuntura que venía a reactualizar las demandas de peso de la oposición: fin inmediato de la dictadura, nueva constitución, justicia para los chilenos reprimidos, y varios otros puntos. El régimen una vez más actuó desde la intransigencia y desde el desconocimiento de la actividad política de los connacionales, decretando el regreso del Ejército en las labores de contención social (con las UFA).

Esta intransigencia se veía abonada por el punto más alto exhibido por la táctica de sublevación nacional: la infiltración de armas desde Cuba y el atentado al dictador; en efecto, el choque entre estas dos posturas más radicales se tomaría la escena y permitiría, una vez más, que el vencedor impusiera con más soltura sus términos, toda vez que la intransigencia era lo suyo.

Tras el agotamiento de la salida rupturista, resurgieron ciertos elementos planteados en el “Acuerdo Nacional”, generándose en la oposición moderada un sentimiento de crítica a la

violencia política y su opción táctica. En un documento clave de mayo de 1986, José Joaquín Brunner, planteó renovar los esfuerzos de una oposición moderada pragmática, con miras a lograr la aceptación del régimen como interlocutor válido. En sus “Notas sobre la situación política chilena a la luz de los resultados preliminares de una encuesta”, y antes del agotamiento fáctico de la salida rupturista, planteó que existía una situación de “bloqueo político” que enfrentaba a una mayoría que aspiraba a un cambio con un régimen opuesto a todo cambio. Por otra parte señaló que existía un sentimiento generalizado de preferencia sobre las acciones políticas más institucionalizadas, en desdén de las formas radicales de protestas, lo cual armonizaba de alguna manera con la moderación institucional.

Esta moderación, percibida o anunciada, por Brunner, empalmaba necesariamente con la existencia de un único mecanismo que aseguraba institucionalidad, a saber, la Constitución Política de 1980. El rasgo moderado de esta “nueva política”, sin embargo, no solamente es lo que caracteriza a los actores que comienzan a definirse desde 1983 sino que, además, forma parte del elemento distintivo del nuevo régimen político propiciado por la dictadura. Rompiéndose así el esquema de los tres tercios, se aseguró con el nuevo escenario la aplicación de la “moderación” como receta generalizada de la política. La nueva mentalidad del chileno (“creencia en la institucionalidad con necesidad de cambio”) tendería a potenciar la representatividad de los centros (centro-izquierda; centro-derecha) y, previéndose la radicalización de los extremos, el escenario seguro de un futuro gobierno sería en torno a una coalición política con eje en su centro y de tendencia mayoritaria.

Definidas así las cosas, la oposición de centro entraba en su última etapa de posicionamiento político. Ya con las leyes políticas del régimen en 1987, el riesgo que podía representar la oposición moderada para la institucionalidad del régimen estaba superado, pues lentamente los partidos opositores de centro iniciarán su inscripción en los registros electorales, promoverán la inscripción de los chilenos en el registro de ciudadanos y centrarán sus esfuerzos en derrotar a la dictadura en su plebiscito de 1988. A la larga, todos los sectores confluirán en esta lógica y le imprimirán a un rasgo distinto a lo que el régimen consideraba un mero trámite electoral. Por eso el revestimiento lleno de mística que asume la opción del No en 1988, ya que fue la única oportunidad para evidenciar en las urnas un repudio generalizado del país a la dictadura. El acotado marco definido por la Constitución tenía por supuesto mucho de cepo: si

bien el dictador podía perder la contienda, en el peor de los casos esto significaría la aceptación por todos los actores de la Constitución de 1980. Y su irreversibilidad sería hasta nuevo aviso.

Lógica transitiva radical

En los sectores más golpeados por la dictadura se configuró una necesaria salida radical al régimen militar. Esta pasaba por recordar en todo momento y lugar la ilegitimidad de las atribuciones del dictador; su forma de ascenso al poder en 1973, la represión generalizada y exterminio de chilenos y la ilegitimidad del proyecto constitucional del régimen. La oposición radical estaba liderada en gran medida por el Partido Comunista de Chile, el cual, a principio de la década de los ochenta encontró en el MIR y otros partidos y movimientos de izquierda un gran aliado. Estos centros políticos no habían pasado por la sobrevalorada “renovación de ideas” que los sectores políticos más moderados consideraban “clave”. Su radicalidad comenzaba a quedar al descubierto en la medida en que la moderación y la renovación de las ideas se tomaban la escena.

El PC se había embarcado desde un principio en la conformación de un Frente Antifascista, reasumiendo su táctica histórica de estructuración de una amplia alianza progresista con base en mayorías sociales, que enfrentara a la dictadura por una vía no armada. Sería hasta 1977 que, al ver la poca efectividad del llamado hacia los sectores de centro, el PC comenzaría a asumir con fuerzas una actitud de ruptura abierta con el régimen militar: desechando el diálogo con éste y enfrentándose desde afuera y en contra de la institucionalidad dictatorial.

La política desplegada en Chile, para el PC, se generaba por una conjunción de ideas políticas y por la capacidad de fuego. La dictadura era, en los hechos, eso. Por tanto, el PC dio el paso de plantear su política nacional en función de una concreta correlación de fuerzas políticas y militares dadas en el país. Comenzó así a definirse y a masificarse el principio del derecho a la rebelión de las personas ante un régimen que suspendía las libertades y los derechos humanos. Por tanto, para la década de los ochenta, y ante el discurso institucionalizador y “tranquilizante” del régimen, la opción rupturista representada por el PC se volvió el correlato necesario de una dictadura que gobernaba desde su extremismo y declaraba no hacerlo. Desde la izquierda se plantearon todas las formas de lucha como viables, incluso la violencia aguda, dándose forma a la “política de rebelión de las masas”, que definió como “sublevación nacional” el levantamiento

del pueblo tras acertadas operaciones de carácter militar destinadas a hundir la moral del régimen y sus Fuerzas Armadas.¹²⁵

Los militantes de izquierda habían sido duramente golpeados por la represión del régimen. Es más, la DINA, y después la CNI, vieron en estas agrupaciones políticas verdaderos centros de difusión de la doctrina marxista que debían ser exterminados. Direcciones completas del MIR, del PC y del PS fueron el constante blanco de los organismos de represión. La violencia del Estado contra estos grupos políticos tendió evidentemente a remecerlos, desde su orgánica hasta sus planteamientos más generales. Por tanto, la definición de sus políticas en el contexto de dictadura tienen que ver, necesariamente, con el efecto que la represión causó en ellos y en la constatación efectiva de la forma de proceder de la dictadura. Distinto fue lo vivido por el MIR, el PC y el PS, que lo vivido, por ejemplo, por la Democracia Cristiana.

El remezón de las orgánicas de estos partidos afectó de fondo a sus militantes. En tal sentido, el radicalismo observado, así como también la moderación de otros sectores, no son un simple producto originado por una “línea política” definida en las direcciones centrales. Como ha mencionado Rolando Álvarez en el caso del PC, el cambio de las políticas partidarias pasa también por un cambio en la subjetividad política de los militantes, enmarcada en la dinámica interna del partido y la influencia internacional.¹²⁶ Si hemos mencionado que el régimen pretendía destruir la cultura política de los sujetos populares, debemos poner más atención en este punto. Destruir la cultura política era castigar la militancia e imponer en la mentalidad cultural del país la idea de que la política es una actividad deleznable, cooptada por sujetos engreídos y que nada tiene que ver con los “problemas de la gente”. El castigo de la militancia pasaba por el asesinato de quienes profesaban sus ideas; esto hizo que el régimen se definiera desde un principio como un mecanismo que al detectar una disidencia política de izquierda no vacilaría en usar todas sus armas, incluso las extralegales, para acallar efectivamente sus voces.

Lo que se pretende evidenciar con esto, lejos de pretender imponer cuál era la forma más legítima de ser oposición, es que la opción violentista se despliega en respuesta a un régimen que trata a su disidencia política con el asesinato político y con la total impunidad. Tal como especifica el Informe Rettig, no se puede pretender que una colectividad o un grupo tenga una

¹²⁵ Al respecto ver la obra de Luis Rojas, *De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la Historia Política y Militar del Partido Comunista de Chile y el FPMR 1973-1990*, Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2011.

¹²⁶ Rolando Álvarez, “¿La noche del exilio? Los orígenes de la Rebelión Popular en el Partido Comunista Chileno” en Verónica Valdivia; Rolando Álvarez; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 102-103.

actitud de respeto y diálogo con un régimen que desde sus inicios desechó ambas virtudes, menos aún se les podía exigir a los hombres confiar en un régimen que practicaba el asesinato selectivo, impune y fuera de todo proceso incluso hasta muy avanzada la década de los ochenta.

Hacia 1983, cuando las protestas se tomaron las calles, los actores políticos lograron adquirir una presencia ascendente en el escenario nacional, incluso en un contexto en que la actividad política estaba absolutamente proscrita y era considerada un crimen de lesa patria. En septiembre de 1983 se dio forma al Movimiento Democrático Popular, que agrupaba al PC, al MIR y al PS-Almeyda: esta opción de la izquierda demandaba el término abrupto de la dictadura y el cambio de sistema propiciado por una sublevación nacional con miras a un nuevo régimen político. Con la configuración de esta orgánica comenzaron a ser más recurrentes las acciones violentas contra el régimen: periodizándose los atentados contra blancos de la dictadura, las bombas de ruido y de otros tipos, los asaltos a centros de distribución, los apagones generalizados y otras acciones de desestabilización menor.

Con el ascenso de las protestas y de las acciones violentas de desestabilización política, la táctica desplegada por el MDP parecía confirmarse en las calles. Esto a su vez despertaba los temores no sólo del régimen, sino de todos aquellos a quienes los comunistas y sus grupos afines no les parecían personas adecuadas para gobernar. La oposición moderada, tenderá a alejarse de las protestas callejeras avaladas por el MDP. En el marco de las conversaciones iniciadas por Jarpa y la AD; el MDP condenó el diálogo con la dictadura, reafirmando la necesidad de enfrentar al régimen en la calle y tras una amplia alianza anti-dictatorial.

Si bien las diferencias entre los partidos de la AD y los del MDP eran profundas desde un principio, el régimen jugará un papel fundamental en su división al condicionar su apertura al diálogo con el rechazo por parte de la AD sobre la oposición radical. Si el plan de la dictadura para 1984 era tener una “federación de partidos acatantes a la Constitución”, su idea de la oposición era con exclusión de los marxistas y del PC, y en tal sentido, cualquier inicio del diálogo pasaba por la descalificación y exclusión de la izquierda. Acatar la Constitución era también una forma de excluir a los comunistas.

El año 1985 se vería coronado por la irrupción en escena del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista. El Frente vendría a ocupar el espacio destinado por el PC para ese grupo encargado de llevar adelante acciones selectas de hostigamiento del régimen. Su fin no era un enfrentamiento directo, entre el total de las fuerzas en disputa, contra el

régimen militar. Pretenderlo era casi un suicidio. En cambio, su capacidad de fuego estaba destinada para dar golpes selectos al régimen, que hirieran la moral y la fortaleza del cuerpo militar, para así crear condiciones necesarias de desestabilización política que generaran una sublevación nacional.

El Frente trajo consigo un despliegue inusitado de elementos subjetivos de la izquierda, que no solamente venían a llenar un vacío en la táctica política. El hecho de resistir a la dictadura con armas, en virtud del despliegue de emblemas patrióticos, tenía como fin subjetivo reposicionar explícitamente la dignidad del chileno y tratar de demostrar que el régimen, seguramente, no se las traía todas consigo. Por esto suele recalcarse la audacia de los militantes armados de la izquierda radical, que en su acción fáctica por muchos considerada innecesaria y contraproducente, dejaba una estela de factibilidad que anunciaba lo imposible: se podía enfrentar al régimen por otros medios y no solamente por los definidos por el dictador.

Mientras la oposición moderada se decepcionaba del fracaso del “Acuerdo Nacional” a fines de 1985 y sus líderes veían con renovada necesidad volver a las calles, el MDP continuaba desplegando su política de Rebelión Popular, afinando importantes detalles de las operaciones más importantes pensadas para el término de la dictadura. En 1986, el MDP nuevamente hizo un llamado a la oposición moderada, llamándola a alejarse del camino del diálogo para hacer del año 1986 el decisivo para el término de la dictadura. Esta convocatoria produjo resquemores en varios sectores: los más recalcitrantes centristas dialogantes una vez más vieron con desconfianza las intenciones del PC, también, la derecha “democrática” repudió con celo cualquier entendimiento de la AD con el MDP; en virtud de que éste último representaba al comunismo y al terrorismo descarnado.

El esfuerzo desplegado por la oposición a la dictadura durante 1986 se vería coronado por el esfuerzo de miles de chilenos organizados en la constitución de la Asamblea de la Civilidad, producto de la reactivación de los campos políticos más importantes de las organizaciones civiles. La Asamblea y su Demanda de Chile, exigirán el inmediato término de la dictadura. En torno a este elemento, se convocaron las jornadas de protestas de julio de 1986, que trajeron consigo un saldo negro. Tras la protesta y la violencia exhibida tanto por el Estado como por la población civil, se hacía más que evidente el aumento de las beligerancias políticas; posicionándose el Estado militar como el ente con mayor capacidad de fuego. El contrapunto fundamental de la política pretendida por la violencia radical del Frente y el MDP, fue la total

unidad del cuerpo militar ante el liderazgo del entonces Capitán General de los Ejércitos. Esto es, se pretendía el desmoronamiento moral de uno de los cuerpos institucionales del Estado más cohesionados y más compenetrados con la dictadura.

Esto también será un impedimento para el despliegue de la lógica rupturista, que tenía que enfrentar a un Ejército en una de sus más óptimas y confiadas etapas de su historia. El gobierno centrará todos sus esfuerzos en contrarrestar los golpes dados por la “guerrilla urbana”, dando también importantes remesones a la moral de su enemigo. Así fue como en Agosto de 1986, la CNI dio con el complejo andamiaje levantado en torno a la mayor infiltración de armas en la historia del país. En el sector costero de Carrizal, al norte del país, los agentes desbarataron la red de frentistas que habían estado recibiendo armamento de alta mar para luego llevarlo clandestinamente a centros de acopio. Hasta el día 20 de agosto, los organismos de la dictadura habían detectado tres mil 115 fusiles M-16, más de 250 lanzacohetes de distinta factura, miles de cartuchos de diversos calibres, granadas de manos y otros pertrechos de guerra.

Si bien, este golpe fue durísimo para la oposición radical, no significó un gran problema para llevar a cabo la operación más importante pensada por el PC. La llamada “Operación Siglo XX” tenía como objetivo terminar con la vida del dictador y sería ejecutada el mes de septiembre de 1987 por un selecto grupo de combatientes rodriguistas. En la emboscada el dictador Pinochet resultó ileso, resultando muertos cinco de sus escoltas y otros tantos con heridas. Tras el repliegue de los rodriguistas, el dictador denunció la arremetida del Frente y decretó el estado de sitio. A la larga, el dictador sobreviviente terminó fortalecido, sobre todo ante los militares. Un nuevo capítulo del terrorismo se estaba viviendo y el general había sobrevivido.

Esta acción de alta envergadura no permitía ningún tipo de error en su ejecución. Esta frustrada operación clínica de la Historia terminó abruptamente con la viabilidad de la salida rupturista; concentrándose las “voces del repudio nacional” en la violencia política de la oposición, en el terrorismo y en contra de la táctica del PC. Oposición moderada, Iglesia y régimen confluían en una crítica a la violencia terrorista, y a la par definían los nebulosos marcos de la moderación. Por otra parte, dentro del PC comenzó la auto-crítica a su política, sellándose definitivamente la discusión con la marginación de su brazo armado y la autonomización del Frente, que seguiría en su táctica de rebelión.

En el contexto de la Asamblea de la Civilidad y las jornadas de protesta de principios de Julio, el atentado contra la vida del dictador vino a representar un punto álgido de la polarización

de las fuerzas políticas. A su vez, el cuadro general se movió progresivamente hacia la moderación y el discurso institucional, en el sentido que había identificado José Joaquín Brunner. La dictadura a fines de 1986 comenzará a consentir una de las demandas más tibias del Acuerdo Nacional: la aceleración de las Leyes Políticas. Estas leyes estaban hechas a la medida de la dictadura militar con la contraparte que permitían a su vez blindar y proteger la actividad política de la oposición.

Así, con el agotamiento fáctico de la salida rupturista y extra-constitucional, fue más fácil para la dictadura implantar su modelo de salida pactada, conducente a la “democracia plena”, que contemplaba un plebiscito para 1988.

2.11 La salida pactada: leyes políticas de la dictadura, proyección y plebiscito.

El régimen militar desplegaba su lógica con absoluta independencia de lo que podían objetar sus opositores y demostraba cierto grado de confianza, sin embargo, el desenvolvimiento de las coyunturas podía tanto ayudarle como minar sus pretensiones. Para el segundo semestre de 1986, con la salida rupturista en retirada, el discurso y las señales aperturistas del régimen militar terminaron por convencer a la oposición de entrar en la “legalidad”. En agosto de 1986 se inició la discusión sobre la Ley del Servicio Electoral e Inscripciones, que tras su moldeamiento en los debates, fue despachada en Octubre de ese año. El 25 de Febrero de 1987 se abrieron oficialmente los nuevos registros electorales¹²⁷; la fotografía de la jornada –y del proceso– sería un Pinochet de impecable civil, inscribiéndose como el ciudadano número 1 de la nueva democracia en marcha.

A mediados de 1987, empezaron a brotar planes en torno a la actitud que la dictadura debía asumir en el año y medio que lo distanciaba de la ratificación. El plan del ministro Sergio Fernández fue finalmente la asumida por el régimen, éste proponía que todos los esfuerzos del gobierno se dirigieran a: a. buscar el reconocimiento total de la Constitución de 1980 por parte de los sectores políticos, b. prestigiar y blindar con legitimidad al Servicio Electoral y a las Leyes Políticas; c. apurar el ritmo del debate interno para tener todo el aparato político funcionando para inicios de 1988; y, d. imponer la única vía de transición concebida por la Constitución, esto es, el plebiscito, el cual tenía carácter esencial.

¹²⁷ No olvidar que el antiguo padrón electoral fue reducido a cenizas por los militares en 1973.

Esto configuraba lo que régimen consideraba su “proyección”. Esta proyección involucraba hacer todo lo posible por obtener el SÍ en la ratificación y entrar de lleno en la planeación de un nuevo gobierno pinochetista para el periodo 1989-1997. A mediados de 1987 la Ley de Partidos Políticos se terminaba de afinar, haciéndose a su vez evidente el rol y la seriedad con que el Tribunal Constitucional se tomaba sus atribuciones.

Siguiendo los intereses del Plan de Fernández, en el gobierno se aceleró la campaña en torno a la candidatura de Pinochet. Paralelamente, en la oposición de centro, comenzó a llamar la atención el anzuelo que era la Ley de Inscripción de Partidos Políticos. El primer partido en inscribirse fue el Partido Humanista, pero fue la inscripción de la Democracia Cristiana la que le dio peso al rumbo. El registro como partido suponía también la inscripción en los registros electorales del grueso de la población. Pinochet esperaba contar con un cuerpo electoral legal reducido, y por tanto, como ha mencionado Genaro Arriagada, la oposición –ante cualquier coyuntura, ya sea plebiscito o elección libre– tenía que ganar una primera e inicial contienda: instar a la población a inscribirse en los registros electorales.¹²⁸

La AD tomó la batuta del ritmo opositor y apeló a los demás sectores a sumarse a la inscripción electoral. Finalmente el PC, en franca retirada de su táctica, en octubre de 1987 decidió evitar el aislacionismo y llamó a la inscripción, no sin antes declarar que: “la inserción en el sistema fascista sólo (podía) contribuir a su prolongación. Insertarse en la institucionalidad pinochetista –añadió– equivale a meterse en un callejón sin salida”.¹²⁹

A fines de 1987, por fin la oposición de centro abandonó su pretensión de competir en elecciones libres y anunció su lucha a favor del No. Se comenzó a aceptar así la convocatoria al plebiscito ratificadorio que el régimen planteó a la nación en 1980; lentamente, el ánimo de la oposición, terminaría de volver el plebiscito ratificadorio en la peor pesadilla del dictador: un eventual repudio del pueblo.

La alianza opositora en torno al No, configurada por la DC, contemplaba dentro de sus fuerzas políticas desde el Partido Nacional por la Derecha hasta el PS Almeyda por la izquierda: los cuales darían forma a una concertación de partidos por el No. A fines de ese mes se dio a conocer el Programa Básico de un eventual gobierno opositor. Poco a poco, la campaña por el NO se ganó todas las atenciones y provocó una total inversión de las alianzas. Finalmente el

¹²⁸ El llamado “plebiscito de los pies”.

¹²⁹ Luis Corvalán, *op. cit.*, p. 428.

grueso de la izquierda se apartó del PC y abrazó la opción de la DC, y se metió a la lucha por el plebiscito.

La campaña se lanzó con fuerza a las calles, dándose una reactivación de cierta movilización social pero ahora bajo las banderas del NO a Pinochet. La oposición tejería cuidadosamente una red de control alrededor del mecanismo plebiscitario, para evitar cualquier tipo de fraude en las urnas; paralelamente, llevó a cabo una intensa campaña en los centros de masas a favor del NO. En junio de 1988, el PC volvería a tender hacia el centro, haciendo un llamado a la población y a sus militantes a votar por el NO, “hasta vencer”.

El 5 de octubre la población nacional se dirigió a las urnas para expresar su idea sobre la continuidad del régimen. Con un total de 7,236,241 votantes, todos mayores de 18 años y con obligación de votar, el NO se impuso por un poco más de 800 mil votos, obteniendo el 54,7% de las opciones, en contra de un 43% obtenido por el SÍ. Tras una bochornosa discusión en las altas esferas del poder, con un trágico Pinochet acusando traiciones, el dictador terminó por calmar sus ansias de poder y resignado terminó sentenciando que la Constitución se cumplía, dándole efecto al triunfo de la oposición en las urnas. En la madrugada del 6 de octubre, el ministro del Interior leyó la última declaración del régimen aceptando la derrota y felicitando el comportamiento de las Fuerzas Armadas.

2.12 Reformas constitucionales y elecciones libres

Lo cierto es que la dictadura militar no terminaría el 5 de octubre de 1988, sino que recién entregaría el poder al mundo civil el 11 de marzo de 1990. Es decir, todavía le quedaba al régimen por lo menos un año para afinar las tuercas de la “modernización”, prepararse para la negociación de las escuetas reformas a la Constitución, en primera instancia, y después, enfrentar las elecciones libres a realizarse en 1989. El resultado sería el mantenimiento de las grandes líneas trazadas por la Constitución de 1980, con ciertos dejes de constitucionalismo liberal clásico impreso por las cúpulas políticas moderadas de la oposición anti-dictatorial.

En noviembre de 1988, *La Nación* –diario del gobierno– editorializaba en torno a las consecuencias del plebiscito. En un ánimo que caracterizó todas las opiniones del diario, se consideraba que el plebiscito era sólo un paso más hacia la consolidación de la institucionalidad elaborada desde 1973. Señalaba que el triunfo de la oposición no significaba una alteración de los

fundamentos de la institucionalidad.¹³⁰ Justamente en esos momentos comenzaba a conversarse en los altos círculos la posibilidad de reformar la Constitución, y el periódico denunciaba el interés de la oposición por discutir el artículo 8, referente al rol de las FF.AA., a la composición del Consejo de Seguridad Nacional, al tema de los senadores designados, a las facultades presidenciales y a los mecanismos de reforma de la Constitución. Pedía medida en los cambios.

El 28 de diciembre de 1988, el ministro de Economía Hernán Büchi, haría declaraciones optimistas para el régimen: “por primera vez Chile está en la senda del crecimiento”, destacando la favorable situación de la balanza de pagos, el importante superávit comercial y la disminución de la inflación. También, los aumentos positivos del nivel de empleo, de las remuneraciones y sobre todo del PGB.¹³¹

Pinochet se aprestaba a terminar su gobierno, obteniendo los mejores réditos en las negociaciones. De tal manera, comenzó a acotar el debate. En abril de 1989 declaró que “el Ejército reaccionó cuando vio los programas de la oposición, donde salían mil cosas contra las Fuerzas Armadas”.¹³² Así, se aprestaba a imponer la Constitución con el menor número de correcciones posibles. En ese sentido Pinochet declaraba a sus opositores que “la Obra no se puede ignorar ni desmentir”.

Las negociaciones en torno a las reformas constitucionales se iniciaron con el fin de modificar algunos acápites y dejar otros pendientes para el próximo gobierno. El 30 de julio se plebiscitaron resultando efectivas las siguientes modificaciones: disminución del periodo presidencial de ocho a cuatro años, disminución de ciertas atribuciones presidenciales, modificación de la composición del Consejo de Seguridad Nacional, derogación del artículo 8 a través de un artículo que proscribía conductas ‘inapropiadas’ para el sistema y no ideas; la baja del quórum para reformar la constitución de un 3/5 en unos casos y en los más comprometidos de 2/3; entre otras.

Lo que expresaba esta primera modificación constitucional era un renovado esfuerzo consensuado de establecer un marco constitucional compartido entre las fuerzas políticas, desde la derecha, hasta la centro-izquierda, pasando por los militares y por la DC. Dando así una estabilidad y gobernabilidad al país que la dictadura no terminó por garantizar jamás. Los acuerdos versaban sobre la imposibilidad lógica de retornar al esquema de los tres tercios

¹³⁰ “Negociación y Proyectos políticos”, *La Nación*, Santiago de Chile, 04/11/1988.

¹³¹ “Por primera vez Chile...”, *La Nación*, Santiago de Chile, 28/13/1988.

¹³² “Transición Pacífica”, *La Nación*, Santiago de Chile, 27/04/1989.

políticos, generándose dos grandes bloques cuyos intereses en el proyecto económico dictatorial no distarían del respeto y del compromiso con su perpetuación. A su vez, con el bi-nominalismo político se consagró la exclusión de los comunistas y del pensamiento de corte marxista –o cualquier idea, al menos, parecida–, desdeñándose de paso las otras opciones extra-sistémicas e incluso minoritarias. Se fijó así la discusión política nacional en torno a un eje de centro, moderado y, por ende, racional.

De más está decir que el proyecto económico, la característica más importante de la dictadura militar, quedó totalmente blindado de la discusión. Viéndolo desde la distancia, las coordenadas políticas que se iban configurando giraban siempre en torno a su total vigencia, reconocimiento y –como se verá en el futuro– potenciación. Se terminaba así con una época de enfrentamientos de proyectos globales-económicos que veían a la democracia como un medio para alcanzar un fin determinado; y se iniciaba un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas en torno al proyecto económico global, sobre la base de considerar la democracia como un fin en sí mismo, y no como un medio para mejorar las condiciones de vida del grueso de la población.

El 14 de diciembre de 1989, el candidato de la Concertación Patricio Aylwin se impuso abiertamente a sus adversarios, consolidando así el tercer triunfo consecutivo de la oposición en las urnas. En marzo del siguiente año, el dictador Pinochet entregaría el mando al primer civil gobernante de la nueva democracia en una emotiva ceremonia.

El 11 de marzo de 1990, el diario *La Nación* presentó su última edición bajo gobierno militar. El rotativo informaba sobre la entrega del poder de Pinochet a Aylwin. El esfuerzo editorial hablaba de un proceso ordenado de cambio de mando, y no precisamente de la caída de una dictadura. Así, se informaba que Pinochet entregaría ante el Congreso Pleno el poder ejecutivo al nuevo mandatario, y antes pasaría a encomendarse a Dios en la capilla de la Escuela Militar donde podría ser acompañado por la ciudadanía.¹³³ Sin embargo, al día siguiente, los conceptos y las cosas en el diario del gobierno cambiarían drásticamente.

El 12 de marzo de 1991, el diario *La Nación* publicó su primer número bajo el gobierno civil de la democracia. Rápidamente se desmintió lo sostenido por los periodistas del régimen

¹³³ Fotos a todo color de la transición en la edición del 11 de Marzo. Los conceptos en “Hoy y Mañana, Chile”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/03/1990.

militar: recién “A las 13.15 [del día 11 de Marzo], Chile inició el retorno a la democracia”, no antes. En este número se daba explicación al ambiente festivo del país, a la alegría de ver concluida la dictadura. Se denunciaba la absoluta personalización del poder en Pinochet, y se reafirmaba su carácter de dictador: “un sólo hombre tuvo la mayor cuota de poder que jamás antes tuviera persona o partido alguno en Chile”. Sin embargo, una “mayoría poderosa demostró al mundo entero que no era efectivo que los chilenos prefirieran la dictadura a la democracia, la arbitrariedad a la justicia, la imposición a la participación”. Además un pequeño recordatorio: “la democracia por sí misma no resuelve ni resolverá nada. Solo posibilita que se tome en cuenta a las personas y se busquen los más amplios consensos”.¹³⁴

Comenzó así una nueva etapa del país, igualmente compleja y rica, que tras el curso de algunos años nuevamente comienza a mostrar signos de agotamiento político y de crisis, ante lo cual grandes reflexiones nos deja esa idea depositada en la prensa en marzo de 1991: mientras no se ‘resuelvan los problemas’ la democracia alcanzada no significa ni produce ninguna superación de las condiciones reales que generan la exclusión, la pobreza y la desigualdad entre los niños, hombres y mujeres.

¹³⁴ “Reencuentro con la fe en la gente”, *La Nación*, Santiago de Chile, 12/03/1990.

Capítulo 3

Las conmemoraciones oficiales reporteadas por el diario *La Nación* (1980-1990)

Un saber que depende sólo del poder y que es vagón de cola de la política, resultará siempre estrecho y limitado. No podrá avanzar las fronteras del conocimiento ni será operante para contribuir desde las ciencias sociales y humanas al diseño de políticas públicas. Por esa vía sólo se llega a un testimonio de época que casi siempre resulta extremadamente sesgado, lo que paradójicamente lo valoriza como documento histórico, pero no como construcción de conocimiento.

Bernardo Subercaseaux, “Poder Político, Saber Académico”, 2008.

En este capítulo se tratarán dos problemas: a. qué sucedió con las directrices de la prensa nacional en 1973, cuáles fueron las nuevas actitudes y limitaciones que tuvo que asumir la prensa nacional, y qué implicaciones tuvo esto en las características del espacio político; y, b. cuáles son las conmemoraciones nacionales más significativas reporteadas por el diario *La Nación*, qué conceptos se difunden tanto en noticias, como en editoriales y artículos de autor, qué implicaciones histórica asume la explicación de las fechas y qué implicaciones coyunturales presenta.

En el centro de ambos problemas, se ubica el diario *La Nación*, la fuente principal de información. El periódico informó desde una perspectiva oficial las conmemoraciones en las cuales participaron personeros de la dictadura y en las que se invirtieron recursos para que las autoridades hicieran acto de presencia en la vía pública. En las noticias que reportan estas conmemoraciones, se observan los momentos de la celebración, se hace referencia a los discursos, a los asistentes y a los elementos más significativos. La información de la conmemoración, se complementa con directrices editoriales que reflexionan sobre las fechas celebradas, además con artículos de diferentes autores que versan sobre lo mismo y relacionan las celebraciones patrias con el proyecto dictatorial. Así, se puede rastrear cuáles son los conceptos que más se manejan en la conmemoración, relacionándolo con su uso inmediato en el escenario de los hechos.

La labor del diario *La Nación* es marginal porque un diario no puede representar a la prensa en su totalidad, a su vez la prensa en su totalidad también puede ser insuficiente para captar el fenómeno de las conmemoraciones. Sin embargo, el diario *La Nación* es un caso simbólico y representativo del sector más observante del régimen militar. A diferencia de los diarios de privados, que en los ochenta se cuidaban de mostrar cierta autonomía de la mano militar, *La Nación* dependió directamente de los militares en el poder hasta marzo de 1990. Aparte de esta singularidad, llama la atención que los militares consideraran que la Empresa Periodística *La Nación* debía mantenerse en manos del Estado, aun cuando esto contravenía su política económica oficial.¹³⁵ Por eso, el periódico nos entrega sólo una versión parcial, necesaria en su individualidad, pero más ilustrativa si se confronta con la totalidad de versiones que cubren las necesidades de una patria simbólica.

El director de *La Nación* era designado directamente por personeros de la dictadura y la amplia mayoría de sus columnistas y periodistas de “análisis” eran conocidos civiles funcionarios de la dictadura militar, políticos de cierta trayectoria y también profesionales de la palabra adictos al régimen.¹³⁶ Por otra parte, sus fuentes de información eran privilegiadamente de origen gubernamental, dado que la plana de reporteros tenía canales de comunicación directa con los distintos ministerios de gobierno y con la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), que centralizaba las noticias permitidas.

Como mencionamos, este periódico contribuyó a difundir las ideas que la dictadura esgrimía para ganar la contienda en el plano simbólico de las disputas políticas e ideológicas de la sociedad. El discurso oficial de la dictadura se valía de fuertes dosis de relatos históricos y conmemorativos, que buscaban fundamentalmente darle una dimensión histórica a la dictadura militar, relacionándola con otros periodos de la historia nacional. Tras cada obra de la dictadura se encuentran dispositivos discursivos que, a través de argumentos históricos y políticos, tendían a nublar con palabras los drásticos cambios. Estos discursos se consideran justificantes de la

¹³⁵ Recordemos que empresas del Estado tuvieron continuidad en la dictadura militar, sobre todo porque muchos militares “estatistas” las habrían utilizado de bastión de sus ideales. El caso más emblemático es el de CODELCO.

¹³⁶ Entre ellos, el político Juan de Dios Carmona, el ex ministro Modesto Collados, los actuales políticos: Pablo Longueira y Juan Antonio Coloma, el abogado Guillermo Bruna Contreras, el historiador Bernardo Marquez Bretón, el escritor y político Mario Arnello Romo, el abogado Gonzalo Ibañez S. M., el periodista Manuel José Gamonal, el político Luis Cordero Barrera, el escritor Neville Blanc Renard, el escritor Juan Antonio Widow, el periodista Orlando Rivera Riffó, Jaime Bulnes Sanfuentes, el historiador Juan Carlos Stack, el político Andrés Benavente Urbina y el político de extrema derecha Manuel Fuentes Wendling.

dictadura militar, y los políticos y periodistas oficiales que los crearon y dieron difusión son absolutamente indivisibles de los actos que sacralizaron.¹³⁷

Estos elementos son rastreados en las noticias y conceptos presentes en el diario sobre las conmemoraciones oficiales. A partir de esta identificación se dará forma al “año conmemorativo” de la dictadura militar. Esta serie de fechas significativas y dignas de conmemorar, en detrimento de otras, lograron afianzarse durante el periodo dictatorial. Si bien, los militares adoptaron las fechas significativas de la tradición nacionalista del país, dejaron de lado fechas importantes para la civilidad y el mundo político combatido en 1973. Lo importante de las fechas, más que la creación de nuevas conmemoraciones, son las reorientaciones de su sentido que les da un sello particular. En los conceptos de estas fechas se ve desplegado con mayor soltura un discurso oficial de nueva cepa, acorde a los tiempos transitivos indicados en las disposiciones anexas a la constitución dictatorial de 1980.

Los autores del discurso ideológico de la dictadura militar ya habían dejado muy atrás lo ocurrido el 11 de Septiembre de 1973, y veían en este hecho histórico una gran hazaña incluso comparable con la independencia nacional o las batallas de la guerra del Pacífico. Es así como a lo largo de la década se va consolidando –tanto en las escuelas, en los diarios, en la televisión, como en los distintos canales de difusión– una serie de eventos conmemorativos y héroes de la nación que surgen y asaltan al imaginario colectivo una vez al año, creando y perpetuando un ciclo de conmemoraciones preferidas y definidas por la dictadura.

El reservorio de elementos conceptuales, la gama de personajes y de pasajes históricos, necesario para la elaboración de los elementos simbólicos de la patria se encuentra en el amplio espectro de la historiografía y en toda tradición literaria del país. Estas obras en general han construido un amplio espectro de personajes nacionales, de todas las corrientes y afecciones, muy susceptibles a ser interpretados y reinterpretados por la sociedad. Es así como personas de distintas corrientes (hombres como Joaquín Edwards Bello, Lautaro, Pedro de Valdivia, Manuel Rodríguez; mujeres como Inés de Suarez, Gabriela Mistral, Fresia, etc.) pueden ser utilizadas por el discurso oficial sin que estos entren necesariamente en conflicto. En el caso de la dictadura militar, cualquier personaje de la historia nacional tiene cabida en el espectro de sus héroes, siempre y cuando la explicación y enfoque de su vida sea la esperada y acorde con la tradición histórica que se privilegia. Particularmente, los personajes de capa y espada se vuelven los

¹³⁷ En cierto sentido, son parte necesaria de la operación política.

fundamentales y necesarios para el correcto desenvolvimiento de la historia de la república chilena.

La dictadura militar asume las típicas conmemoraciones nacionalistas, presentes en casi todos los países, de batallas o hazañas militares. Estas son reforzadas y se posicionan en el plano más importante de las celebraciones patrias. A estas fechas, se le suman nuevas conmemoraciones significativas para el régimen de facto y sus adherentes. Éstas buscan, en último caso, igualarse a las fechas que ya se conmemoraban en el país. Además de esto se realzan las fechas de conmemoraciones religiosas, algunas de fuerte arraigo popular. En ausencia se encuentran muchos “hitos” y fechas rescatadas por la izquierda y el movimiento obrero durante el siglo XX, siendo única y pobremente reseñado en el periódico oficial, el Día del Trabajo. Esto es lo que, a la larga, da lugar a tres grandes líneas de conmemoración consolidadas por la dictadura militar:

- a. La celebración de las hazañas o batallas militares, que en su repetición marcan la idea de que la nación y sus valores surgen del ejército y de sus labores. Estas conmemoraciones asumen un sello decididamente militar, subordinando a él los elementos civiles. Además suponen la continuidad entre las hazañas militares de la temprana república y las recientes acciones de las fuerzas armadas, para así incluir al golpe y la dictadura en una tradición de gobiernos militares nacionalistas.
- b. La celebración de eventos propios del régimen militar, elevados a categoría de “históricos” por efecto de la repetición discursiva; estas celebraciones también refieren sobre la idea de superioridad histórica de las instituciones armadas por sobre cualquier otra institución nacional. Dentro de este rango entran las celebraciones del 11 de Septiembre, 11 de marzo por la Constitución de 1980, la ceremonia de celebración de la Batalla de La Concepción con la condecoración de 77 jóvenes destacados, el día del Comercio en conmemoración a Diego Portales, los aniversarios de la Armada, la FACH, el Ejército y Carabineros y de cada una de sus escuelas.
- c. La celebración de conmemoraciones propias del culto religioso popular, de marcada presencia en las áreas rurales y pretexto de fiestas populares. Son todas del culto católico

y están relacionadas con la tradición huasa de la zona central del país.¹³⁸ Cuenta aquí la Fiesta de Cuasimodo en Abril, las conmemoraciones a la Virgen del Carmen, la peregrinación a Yumbel en Enero, el mes de María y la Inmaculada Concepción.

Algunos meses adquieren y potencian facetas determinadas. Marzo comienza a ser fuertemente preferido como el mes constitucional, de sobriedad republicana, celebrándose los días 11 la puesta en marcha de la Constitución de 1980 y del “nuevo periodo” de la dictadura militar. Mayo se convierte en el “mes del mar”, celebrándose en sus aguas las glorias navales y la hazaña de Arturo Prat, a su vez este mes servirá para consolidar la idea de la vocación marítima nacional, bajo la perspectiva de la Seguridad Nacional.¹³⁹ Julio conmemora la Batalla de La Concepción, heroica resistencia de 77 jóvenes durante la Guerra del Pacífico, que llegó a convertirse en la celebración militar de más importancia otorgada por el régimen, sirviendo además para conmemorar a 77 jóvenes de diversas áreas de la sociedad destacados por el dictador. Septiembre, el mes de la patria, es el último mes del año celebrado con fuerza por el régimen y en cada uno de sus días. Resaltan acá tres fechas fundamentales: el 11 de septiembre, “día de la liberación nacional”; el 18 de septiembre, día de constitución de la primera Junta de Gobierno de Chile y en el cual se celebra todo lo alcanzado en la guerra de independencia nacional; y el 19 de septiembre, día de las Glorias del Ejército, en el cual el pleno de las fuerzas militares hace acto de presencia ante la patria en la célebre Parada Militar.

Las conmemoraciones, a las que haremos referencia, poseen un estilo determinado que podríamos resumir en los siguientes elementos:

- a. Las ceremonias eran actos estrictamente formales, que comenzaban con el izamiento del pabellón patria al son del Himno Nacional, los asistentes principales (que podían variar entre estudiantes, funcionarios o soldados) se formaban en rígidas filas, frente a un altar, monolito o efigie de algún héroe generalmente ubicado en una plaza pública, donde alrededor se agrupaba gente;

¹³⁸ Precisamente, durante la dictadura se realizaron los elementos simbólicos y culturales de la zona del valle central, o zona huasa, a nivel de nación. Englobando en ellos la característica peculiar de la nación chilena, igualándolos con la identidad nacional. Ver el artículo de Isabel Jara, *Politizar el paisaje ilustrar la patria: nacionalismo, dictadura chilena y proyecto editorial* en Revista AISTHESIS, Santiago de Chile: PUC, n. 50, 2011

¹³⁹ Este elemento es también realizado por artículos y obras; en cuanto a elementos simbólicos ver a Isabel Jara, “Graficar una ‘segunda independencia’: el Régimen Militar chileno y las ilustraciones de la editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)” en *Revista Historia*, Santiago de Chile, n. 44, Enero-Junio 2011, p. 131-163.

- b. A las ceremonias asistían las principales autoridades militares y civiles del territorio quienes inauguraban lo que se conocía como un operativo cívico-militar, ampliaban la aglomeración estudiantes, funcionarios, soldados u obreros acarreados como espectadores, la música formal (himno nacional, otros himnos y marchas militares) corría a cargo de las bandas de las distintas ramas de las FF.AA. o de estudiantes, quienes ponían los sones para que las divisiones de asistentes se presentaran ante las autoridades rodeando la plaza;
- c. Las alocuciones estaban a cargo principalmente de las autoridades militares y civiles; cuando lo que se celebra era un hecho histórico se hacía una acalorada reseña a cargo de un militar, por otra parte, la más alta autoridad refería su discurso a hechos contingentes y se deshacía en loas al gobierno; ambos discursos fundamentales se complementan con saludos a cargo de algún miembro “ciudadano” de la ceremonia, ya sea un vecino, una mujer o un escolar;
- d. Finalmente, como cumpliendo un esquemático número de actividades, una presentación artística cerraba la jornada (a veces algún poema o alguna obra de teatro), generalmente era un número musical que incluía canciones folklóricas del repertorio oficialista acompañado de presentaciones del baile folklórico “nacional”, además de juegos típicos y competencias.

Este esquema de ceremonia puede adivinarse fácilmente escrito en una suerte de “minuta militar”; los tiempos y los responsables bien escritos, la coordinación y la solemnidad. La minuciosa preparación buscaba alejar cualquier asomo de improvisación, quedando claro en el papel la perfecta ejecución de la ceremonia. La conmemoración se vivía como un momento especial, de convivencia entre los ciudadanos con el régimen en la plaza pública y se desarrollaba llena de simbolismos; en ella se resaltaba la solemnidad, la jerarquía, la marcialidad, la unidad de mando y el profesionalismo que la dictadura militar buscaba mostrar a la opinión pública.

Por otra parte, así como los meses van tomando un signo distintivo con el paso de los días, los héroes aparecen en la memoria colectiva una o más de una vez al año. A través del diario *La Nación*, se percibe que el panteón de héroes generado durante el siglo XIX y reforzado en el siglo XX es respetado fielmente por los ideólogos del régimen; en este periodo lo que más varía es el

grado de heroicidad y vigencia que se le conceden a las figuras del pasado. Se reafirma constantemente la figura de Bernardo O'Higgins, que junto con Diego Portales son los más citados por los escritores que buscan desesperadamente situarlos en el mismo podio con Augusto Pinochet. El genio de Arturo Prat es emotivamente reseñado y es visto como un ejemplo de los valores –escondidos– de los chilenos, depositados en el soldado que obedece y se debe a la Patria. Las hazañas de la Independencia son fielmente conmemoradas y en ellas los aciertos e incertidumbres del Libertador. En detrimento o en pequeñas reseñas quedan otros héroes como José Miguel Carrera o Manuel Rodríguez, éste último no acapara más de tres notas personales en la década.

Las grandes figuras intelectuales y políticas del siglo XIX son conmemoradas en igual y justa medida: el olvidado Antonio Varas, el prohombre Benjamín Vicuña Mackenna, don José Joaquín de Mora; sobre todos ellos reina la figura política y comerciante de don Diego Portales. Además los genios militares de las guerras de la joven República: Manuel Baquedano, Manuel Blanco Encalada, el ex presidente Manuel Bulnes. Pocos de los políticos del siglo veinte son conmemorados en buenos términos, don Arturo Alessandri Palma impone cierto respeto y por su anticomunismo se salva de los ataques Gabriel González Videla, presidente Radical. Del pasado colonial poco se reseña, aparecen las figuras de Diego de Almagro, el descubridor, y Pedro de Valdivia, el conquistador. El genio y bravura de algunos araucanos tampoco escapa de la reseña nacional: Lautaro y Caupolicán terminan por completar la lista.

Es curioso que en un país que resalta más por sus escritores que por sus verdugos, la patria del periódico *La Nación* se haya quedado casi sin escritores. De los literatos nacionales casi ni se habla. Escasas referencias a Gabriela Mistral, la gran poetisa nacida en el norte del país, y tan solo una pequeña nota para el también Nobel Pablo Neruda, comunista y enemigo de la nación.¹⁴⁰ No aparecen ni Parra, ni Lihn, ni Teillier, ni De Rokha, ni Huidobro, por nombrar algunos. Muchos de los escritores más importantes del siglo XX no parecieran ser chilenos, no aparecen reseñados y no existen para esta patria. Lo mismo podría decirse en lo que se refiere a otros campos de las artes, como el cine, la pintura, el teatro y la música nacional; seguramente los más influenciados e impactados por las disposiciones militares.

¹⁴⁰ Los militares tenían verdadera saña con todos los libros de literatura, a excepción de los escritos por el propio dictador y sujetos afines. En la *Historia Oculta* se narran algunos episodios de la censura y quema de libros, es sabido también de las disposiciones relativas a la quema y retiro de una serie de libros prohibidos existentes en las bibliotecas nacionales y universitarias.

Es preciso señalar que las figuras nacionales “ya consagradas” son objeto, en su mayoría, de reorientaciones en su sentido histórico o se utilizan deliberadamente para justificar elementos coyunturales del régimen de facto, como es el caso de Bernardo O’Higgins y Diego Portales. Sumando estas consideraciones con las arrojadas por el año conmemorativo es posible delinear cuál es la tradición que dicen seguir los personeros del régimen militar y, por tanto, identificar qué elementos de esta tradición tienden a utilizar para justificar su propia operación política.

Específicamente, el periódico se dedicaba a defender abiertamente las políticas del régimen militar, lo que lo convierte en el más claro portavoz del discurso neoliberal de corte gubernamental.¹⁴¹ El diario *La Nación* entregaba esta información en un formato en general entendible y recalcitrantemente oficial, tan así, que a sólo a través de sus hojas sería imposible concluir que Chile vivió una dictadura militar. El periódico es manejado fundamentalmente por civiles del régimen, por eso no tiene un evidente sello militar, quienes quizá sobre la diagramación de sus periódicos hacen pesar la sobriedad y su sentido del decoro. *La Nación* buscaba un amplio público, el pueblo definido por la dictadura, desinteresado y apolítico, reflejado en los semanarios de interés focalizado (para la mujer, para el niño, para el joven) donde la impronta militar era, la mayoría de las veces, imperceptible.

El periódico intentaba ser también la opinión civilizada¹⁴² de los ciudadanos que vivían tranquilamente bajo la protección de régimen militar. Algunas periodistas, dedicadas al periodismo de moda, hacían coquetas preguntas a los militares como si en el contexto nacional no pasara nada. El periódico suponía que todos los chilenos se abocaban a la defensa del régimen de facto que –según la explicación que nos lega el diario– parece no tener ninguna fisura y resulta ser de naturaleza extremadamente popular. Además de estos elementos, todas las líneas del periódico tendieron hacia el modelo de una sociedad “libre”, cuyo neoliberalismo era patente, y que presentaba, además, la necesidad de la autoridad militar, la proscripción del marxismo y la gestación de una democracia de nuevo tipo.

¹⁴¹ Está documentada la lucha de corrientes dentro del régimen durante la implantación. En los ochenta, y sobre todo en el diario *La Nación*, se observa la libre concurrencia de los discursos pro-dictatoriales; sin generar demasiados anticuerpos entre sí. El neoliberalismo tenía completamente tomadas las pautas culturales desde esa década.

¹⁴² Sinónimo, para esa parcialidad, de apolítico, apartidista, *ciudadano*; elementos con claras resonancias actuales.

3.1 Los medios de prensa y la dictadura

En este apartado se harán breves consideraciones sobre el contexto de la prensa durante el siglo XX, relacionándolo con el estado y expectativas del medio antes del golpe de 1973, posteriormente se reseñarán los cambios generados por la dictadura militar en el plano productivo de los mensajes informativos, y las tendencias generales de la prensa nacional observadas desde 1973 en adelante.

El contexto de la prensa.

Uno de los grandes problemas de la prensa moderna del siglo XX, bajo el marco de las disposiciones políticas liberales, se refiere a la relación que existe entre el tipo de organización económica que se requiere para producir y hacer circular prensa diaria, y el acceso que los diversos grupos de la sociedad tienen al derecho de emitir dichos mensajes en condiciones de igualdad. Esta problemática fue una de las tantas batallas que se estaban combatiendo en Chile en desde los inicios del siglo XX; lo cual se expresó en un proceso lento, pero ascendente de democratización de la prensa nacional que fue interrumpido con el golpe de estado de septiembre de 1973.

Generalmente, en cualquier sistema que presente algún grado de desigualdad, o dicho enteramente, en uno que tenga un grado importante de desigualdad económica –como en los países latinoamericanos–, las disposiciones igualitarias consagradas por el derecho moderno, tienden a aplicarse diferenciadamente y además, para muchos habitantes, suelen ser risibles. En el caso de la industria periodística, la concepción liberal que consagra la libertad de expresión, se ha limitado a garantizar “la libertad de acceso de los particulares a la propiedad y operación de empresas de comunicación masivas, [que] no asegura para nada la igualdad de oportunidades y la efectiva libertad de expresión de la mayoría”¹⁴³. En ese sentido, sólo aquellos individuos que tengan el capital suficiente para costear y operar una empresa de comunicación masiva podrán ejercer con mayor y la exclusiva probabilidad su derecho a la expresión. Bajo esta decepción, se ha confundido la libertad de expresión con la libertad de las personas a acceder a todos los discursos posibles.

Es así como en el caso de la prensa actual en Chile, de 1990 al presente, y no solamente en este país, la prensa diaria de todo el territorio nacional se encuentra en poder de pocas manos,

¹⁴³ Diego Portales, *op. cit.*, p. 182.

en este caso de dos grupos económicos (duopolio); lo cual expresa el limitado ejercicio de la libertad de expresión en el país aún en el siglo XXI.¹⁴⁴ Esto se hace extensivo a la televisión y a las cadenas radiales, en donde los grupos económicos de nuevo cuño también tienden a concentrar los activos y la propiedad para acaparar así los espacios publicitarios.¹⁴⁵

A partir de 1973 se abre la posibilidad a que los privados controlen totalmente el mercado de la información. Esto es posible al consagrarse la idea de que la iniciativa privada podía y debía ser protagonista en todos los campos de la sociedad. Esta tesis invadió todos los sectores sociales generando en ellos dinámicas de control y optimización empresariales, que en el caso de la prensa, desde la década de los setenta, ha provocado la degeneración de los contenidos comunicativos de los medios de difusión (suceso visible en la mayoría de la televisión abierta de Latinoamérica) y, en un punto más específico, ha sido clave para el proceso de cambio cultural llevado a cabo por la dictadura militar en el país.

La convicción de que la iniciativa privada es más capaz y eficaz que cualquier otro medio de gestión se volvió una pieza fundamental de la concepción neoliberal que se desplegó por todos los poros de la sociedad. La preponderancia de la iniciativa privada por sobre la estatal, cuya supuesta superioridad técnica y social está avalada por la Constitución de 1980, ha creado la práctica y el hecho de que la libertad de entregar tal o cual servicio esté por sobre el derecho que tienen todas las personas a dicha prestación. En otras palabras, el derecho que tiene un sujeto a abrir una escuela para entregar determinada educación a la sociedad y vivir de ello, está por sobre el derecho que tienen las personas de recibir educación gratuita y de calidad.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ciertamente, en estos momentos, internet empieza a romper esta brecha. Evidentemente, en la actualidad los medios alternativos de comunicación desplegados en la red (como blogs, periódicos online, tumblr, foros) han ganado un importante espacio y generalmente poseen una capacidad intelectual e informativa que no envidia a la de los medios impresos. En las otras redes sociales (como twitter, o facebook) los usuarios se limitan: a compartir información procesada por los primeros medios indicados, o bien, a hacer pública alguna información que posean. Evidentemente, en estos medios, también está inserta la impronta de la desigualdad económica; en este caso, mientras no sea extensible para toda la comunidad, primero, los equipos computacionales, y segundo, el acceso a internet, tampoco se puede hablar de igualdad.

¹⁴⁵ La publicidad es acaso el sostén más importante de ingreso de un diario actual, o de cualquier medio. Por ejemplo, la ganancia mayor para un empresario de la prensa diaria reside en el acaparamiento del máximo de canales de difusión publicitaria, creándose las cadenas de periódicos.

¹⁴⁶ Este problema, es (y será) el eje principal de la crítica estudiantil en el país, los que a la larga reclaman una mayor presencia del Estado –mediante instituciones descentralizadas– en la configuración del sistema nacional de educación. Esta necesidad de que los fondos nacionales o “estatales” sean dominantes en las distintas áreas de la educación, se levanta tras la constatación real de que el rol preponderante de la iniciativa privada sólo ha perpetuado la extrema desigualdad educativa, viéndose educación para ricos, generalmente de calidad, y educación marginal para pobres. Y este es sólo uno de los problemas de la educación nacional.

Es por esto que el proyecto global de la dictadura, fiel expresión de las concepciones neoliberales, afecta y cambia los elementos en todas las esferas de la sociedad. Y de distinta manera y en distinto grado, comienza a permear la serie de frentes que durante el siglo XX estaban ‘tomados’ por las concepciones de un estatismo social. Lo curioso del proyecto es que entrega los lineamientos de la sociedad a un actor que no sabe de proyectos ni menos trabaja con pautas definidas, y tanto puede decir algo hoy, como desdecirse mañana. El mercado –con sus leyes fluctuantes, sus modas y sus palabras– se toma las planas de la sociedad, y a través del despliegue de una abrumadora capacidad publicitaria ha cambiado a las personas de a pie sus forma de alimentarse, de convivir, de relacionarse sexualmente, de ver fútbol, de salir a la calle, y otras tantas cosas que no es necesario seguir nombrando.

La prensa antes del golpe

En esta idea de que el gobierno militar es una reacción al proyecto político levantado por la sociedad entre la década de los treinta y el año de 1973, el caso de la prensa diaria se levanta como un proceso ejemplar de la tesis. Recordaremos, para estos efectos, que la novedad entramada en el proyecto global de la dictadura no es lo que públicamente se anuncia como la “modernización” de los servicios y el fin del “despilfarro” estatal, sino que se refiere a la capacidad del sistema de abrir nuevos procesos de capitalización, enclaves económicos que generan excedentes para privados en sectores de anterior paternidad estatal.¹⁴⁷

Durante el siglo XX la prensa nacional también comenzó a experimentar un proceso de democratización, sobre todo para los grupos sociales que fueron representados en los sucesivos gobiernos habidos entre 1938 y 1973. Todas las tendencias políticas institucionales tuvieron acceso al poder gubernamental durante esos años, lo cual era expresión de la convivencia –no necesariamente armoniosa– de las fuerzas políticas en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los distintos centros de representación de la sociedad. Evidentemente, el sistema político era fiel reflejo de una sociedad también diversa, en cuyos centros de sociabilidad también se vivía la confrontación de ideas y de militancias.

¹⁴⁷ Gabriel Salazar; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 101-102. Es importante ir en contra de la idea de modernización de la dictadura; se dice que ella generó “por lo menos” la modernización de la economía, con lo cual se nombra el proceso de diversificación de exportaciones e importaciones, y el desmantelamiento de la economía estatal. De todas formas, la acción *modernizadora* del mercado está bastante lejos de lograr alguna mejoría en la calidad de vida de las personas.

Al decir de Munizaga en 1977, el sistema comunicacional antes de 1973 “jugaba un papel en la representación social” operando como un receptáculo de información que sirve para “leer la temperatura social”¹⁴⁸. Ciertamente, la presencia de todas las opiniones y corrientes políticas en los periódicos nacionales durante 1938 y 1973 entrega a cualquier estudioso del pasado una diversa y necesaria gama de opiniones sobre hechos vividos por una misma comunidad nacional.

Hacia 1973, así como en los periódicos se diversificaba el acceso a la producción y circulación de opiniones, en la política también se vivía un proceso de democratización de los espacios de sociabilidad. Y así como en la política este proyecto fue desechado de golpe; en los periódicos, la diversificación social fue también duramente castigada, excluyéndose perpetuamente a importantes sectores de la nación de emitir su opinión libremente y volviendo extraña a sus principios la vocación periodística.

Todo esto bajo el dominio de dos grandes grupos que lograron el control total de los medios periodísticos bajo las disposiciones comunicacionales emanadas de la dictadura militar desde 1973. Este resultado favorable para *El Mercurio* y su cadena de diarios; y el Consorcio Periodístico (*La Tercera*), es la máxima expresión de la alianza fáctica entre la prensa nacional conservadora y los militares y civiles golpistas, la cual tuvo un rol fundamental en el proceso de desestabilización del gobierno de Salvador Allende.¹⁴⁹

El Mercurio, durante los primeros años del gobierno allendista, veía como un factor de inestabilidad en el control del periodismo nacional la “incorporación de nuevos grupos sociales a la emisión de mensajes comunicativos relevantes”.¹⁵⁰ Este surgimiento de nuevos periódicos (que diversificaban la distribución de la publicidad) estuvo siempre relacionado con el acceso de los grupos políticos al poder gubernamental: el diario *El Siglo*, de los comunistas, surgió durante el Gobierno del Frente Popular, los radicales hicieron lo propio durante el gobierno de González Videla, los ibañistas durante el gobierno de Ibáñez, y los demócratacristianos en el gobierno de Frei.

¹⁴⁸ Giselle Munizaga, *op. cit.*, p. 7.

¹⁴⁹ Diego Portales, *op. cit.*, p. 117. En la dictadura argentina, también se dan casos de alianzas fácticas entre empresas periodísticas y el Estado burocrático militar. En este caso, tres diarios se volvieron accionistas mayoritarios de la empresa Papel Prensa S.A., con la promoción de la dictadura. Con la compra, los diarios pasaron a ser socios del Estado. Esta concesión, se considera, fue cedida a cambio de cumplir un rol en las tareas de “manipulación y deformación de la información, y la autocensura que se impuso a la prensa nacional, [como] condiciones fundamentales tanto para el ocultamiento de los crímenes de la represión clandestina como de las turbias disputas interfuerzas”. *Vid.*, Jorge Saborido, Marcelo Borrelli (coord.), *Voces y Silencios. La prensa argentina y la dictadura militar 1976-1983*, Buenos Aires: Eudeba, 2011.

¹⁵⁰ Diego Portales, *op. cit.*, p. 118.

Este acceso de nuevos grupos se tradujo también en el creciente cuestionamiento que la sociedad hacía al predominio de *El Mercurio*.¹⁵¹ Sin embargo, el “decano” del periodismo nacional estuvo lejos de experimentar una situación de peligro. Con el convivir de varios modelos de prensa, también se expresaron en ellos elementos de desigualdad. El núcleo de control de *El Mercurio* y la prensa “contestataria” se diferenciaban enormemente en el nivel de acceso al financiamiento mediante publicidad y al acceso al material informativo y recreativo producido por las agencias internacionales, pero no tanto en su capacidad tecnológica.

¿Qué tan real era la amenaza para *El Mercurio*? A fines de los sesenta un estudio indicaba que el núcleo oligopólico conformado por *El Mercurio*, Sopesur y Consorcio Periodístico de Chile (del Diario *la Tercera*), alcanzaba un total de 475,000 ejemplares diarios (correspondientes al 78%), frente a 137,000 ejemplares de la prensa “contestataria” (22%).¹⁵²

Pese a su marginal presencia, la prensa “contestataria” presentaba, en una visión a largo plazo, un ascenso en su capacidad de captar publicidad, lectores y transmitir contenidos diferenciados al del núcleo oligopólico. Con el golpe de 1973, este “problema” fue rápidamente solucionado a favor del interés privado y minoritario a través de la eliminación fáctica de los competidores y, a la vez, con la intensificación del dominio industrial de capital privado.

Según el tipo de propietario, si para el periodo de 1938-1973 existían periódicos de “grupos empresariales” individuales (como *El Mercurio*, *La Tercera de la Hora*), de “grupos político-empresariales” o predominantemente “políticos” (*El Siglo*, *Tribuna*), y del “Estado” (*La Nación*), hasta la actualidad (2012) se ha vivido un proceso en que paulatinamente los periódicos de los “grupos político-empresariales” e incluso los del “Estado” han desaparecido y sólo permanecen en la cima del control los periódicos de los grupos empresariales (*El Mercurio*, *La Segunda*, *Las Ultimas Noticias*, *La Cuarta*, *La Tercera*).¹⁵³ Esto, ha generado el predominio de la impronta empresarial en los contenidos de la prensa diaria, desde su ascenso en 1973 hasta la actualidad, lo que a su vez ha afectado seriamente en la diversificación de sus contenidos, en las formas de ver las políticas informativas y ha profundizado la precarización de las pretensiones sociales de la disciplina periodística.

¹⁵¹ Recordar el lienzo colgado en la Pontificia Universidad Católica de Santiago durante el movimiento estudiantil universitario de 1967, “Chileno: El Mercurio miente”

¹⁵² Diego Portales, *op. cit.*, p. 79.

¹⁵³ A comienzos del mandato de S. Piñera el periódico *La Nación*, en su versión impresa, fue descontinuado.

Los cambios en la prensa.

En cierto sentido, hemos planteado que las ideas neoliberales, presentes en la dictadura desde 1975, permearon todos los elementos de la sociedad e impusieron los filtros de su funcionamiento mediante la lógica empresarial y privatizadora. En el caso de los medios de comunicación, esta postura de dejar al mercado la responsabilidad de pautar sus contenidos y objetivos tendió a la precarización de los mensajes, a la sobreexplotación y dependencia de la publicidad y de lo que se consideró “entretenimiento”, y a la uniformización de los contenidos en un eje benéfico para el sistema.

El primer elemento a considerar en este proceso es la transnacionalización de la industria de los mensajes de prensa, presente en el país en la primera década del siglo veinte, cuyas relaciones de dependencia son fundamentales para explicar el desenvolvimiento histórico del medio. Esto no tiene tanto que ver con que tal o cual grupo de poder extranjero tengan “tomados” los medios, sino que entraña la realidad de que la prensa nacional en sus inicios se constituye a partir de modelos extranjeros de organización, procesamiento y difusión del trabajo periodístico.

El caso emblemático de este proceso es la modernización emprendida por *El Mercurio* a principios de siglo XX. Esta “modernización” en aquellos tiempos era necesaria para todas las industrias “nacionales” que se aprestaran a realizar un trabajo –y competir con sus frutos– en el que las grandes potencias del mundo tenían ya una amplia superioridad técnica y tecnológica. *El Mercurio* fue la primera empresa en incorporar la rotativa y la organización empresarial de corte norteamericano en 1908. Con estas ventajas comparativas se dio paso a la conformación de un núcleo dominante en la prensa, cuya superioridad tecnológica, organizativa y financiera se hizo patente tempranamente.

El modo organizativo fue fundamental, y habla de cómo las empresas periodísticas enfrentaron su tarea de “informar” a la sociedad. Este modo existía en el mundo antes de que los intereses privados en Chile se dedicaran a la modernización de los medios de comunicación. Y es el modo el que define al medio. Durante el siglo XX, el periódico, como producto informativo, se construyó a partir de informaciones que entregaban las Agencias de Noticias Internacionales y que generaban las Agencias Nacionales, ilustrando las notas con fotografías que también pertenecían a Agencias Internacionales de Fotografías; además, el entretenimiento provenía y proviene generalmente de empresas distribuidoras internacionales, así como la naturaleza y carácter de los mensajes publicitarios.

Esto es fundamental, pues mientras operan relaciones de dependencia entre la prensa nacional y el desarrollo de la prensa en los grandes países capitalistas, será esta relación la más importante para definir el rol de la prensa en nuestras naciones, toda vez que la tendencia internacional, desde mediados de la década de los setenta, también ha sido dejar en manos del mercado la definición y construcción de la información y de los contenidos de entretenimiento, entre otros elementos.

Ultra entretenimiento.

El ultra entretenimiento se entiende como el giro que con el neoliberalismo han dado los medios hacia una extrema propagación de contenidos distractores por sobre aquello que, se considera, “no entretiene” (como la cultura, las discusiones políticas, los contenidos académicos, etc.). Este cambio es observable nítidamente desde la década de los setenta. Evidentemente, este esfuerzo deliberado por entretener a lectores y televidentes trae consigo una definición de entretención, generalmente ligada a la idea del ciudadano que, cansado por sus labores diarias y el peso del sistema, sólo quiere ver como bailan mujeres en medio de un programa de concursos, humor grosero y demás variedades.

Al notar que en la actualidad en la mayoría de los países domina esta idea del entretenimiento –basta con hacer un breve *zapping* entre los canales televisivos internacionales que nos ofrecen las empresas de televisión por cable o satelital– poco falta para ligar esta realidad con la idea de “funcionamiento homogéneo” de la empresa de comunicaciones a nivel mundial. Si en realidad poca resistencia ha existido ante esta patente degeneración de lo que podríamos llamar “contenidos humanos” en la comunicación, es porque el interés de los sectores que dominan los medios está totalmente unificado en torno a esta liberación de contenidos. Esta libertad paradójicamente supone el control de contenidos y el convencimiento masivo en torno a la superioridad creativa de los grandes centros capitalistas de producción de material de entretenimiento (películas, series, shows estadounidenses, por ejemplo).

Considerando que es la publicidad de los productos la que más busca darse a conocer a través de los medios de comunicación, se puede bien considerar que el entretenimiento objetivado busca captar la atención de los sujetos el mayor tiempo posible –visiblemente en el caso de la televisión– para que estos estén expuestos también a la mayor cantidad posible de

anuncios que le indican cómo vestir, qué tomar, qué comer, aún cuando no tenga dinero para conseguir la amplia gama de productos que lo hacen persona.

Suplementos

Los suplementos periodísticos son uno de los ejemplos de esta tendencia hacia la “entretención” que se dio durante la década de setenta y de los ochenta en la prensa diaria nacional. Estos entregaban una información distinta, focalizada y preferencialmente de entretenimiento, que se adjuntaba al diario como una separata que ampliaba –¿volvía difusos?– los contenidos informativos que se entregaban en las páginas del diario.

Esta innovación en el país, surgió de la mano con la labor de la Editorial Lord Cochrane, de la empresa *El Mercurio*. El primer acierto fue la creación de la “Revista del Domingo”, suplemento especial de variedades que se repartía en todo el país. Esta iniciativa tuvo gran impacto en el mundo de la prensa, adoptándola luego todos los periódicos de renombre, que crearon suplementos especializados.¹⁵⁴

El surgimiento del suplemento puede verse, idealmente, como un mayor interés de los periódicos por diversificar su oferta comunicativa para llegar a más lectores, lo que se puede traducir en una renovada disposición por hacer más apetecible su contenido para el público. Y mientras más lectores, más capacidad para atraer publicidad. Es por esto que a partir de la dictadura militar, el suplemento se volvió imprescindible para los diarios pues existió una caída generalizada en las ventas y en la disminución del tiraje a partir del golpe de 1973.¹⁵⁵ Así, los diarios entraron a competir con el mercado de las revistas (también de variedades y de definición “apolítica”), toda vez que por el rigor del nuevo régimen, la información de actualidad nacional se volvió extremadamente superflua, poco crítica y de poca proyección, por no decir, innecesaria.

En cambio, los suplementos se encargaron de entregar una serie de contenidos suspendidos en el tiempo, que sin necesidad de responder a los rigores del contexto, ahogaban los estereotipos de la sociedad en una burbuja discursiva que en nada reflejaba la realidad del país.

¹⁵⁴ Diego Portales, *op. cit.*, p. 116.

¹⁵⁵ Ídem., p. 152.

3.2 La prensa en dictadura

En este apartado se argumenta que el afianzamiento de los medios privados en el control de la prensa, fue de la mano de importantes cambios en la sociedad y en sus hábitos comunicativos. Tras este proceso se considera que se esconde la búsqueda consciente de la despoltización de la sociedad, que privilegia el entretenimiento no contingente por sobre la información veraz, crítica y política. En última instancia, las operaciones sobre la prensa terminan por definir al medio sobre la exclusión de un sector activo de la nación, procurando a la vez la desaparición o suspensión de la política como una forma de vida.

Consolidación del control de los medios privados.

Como ya habíamos indicado, una de las preocupaciones de *El Mercurio* a principios de los setenta era el ascenso creciente de grupos generalmente marginados a los medios de información y de opinión. Esta tendencia –y este miedo– gatilló que la empresa *El Mercurio* considerara necesario desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, a través de la ejecución trastornada de sus labores informativas.¹⁵⁶

El control sobre la prensa que se observa actualmente, tanto de *El Mercurio* como del Consorcio Periodístico de Chile (*La Tercera*), que estuvo en duda antes de 1973, se consolidó inmediatamente después del golpe militar. La reconfiguración del paisaje periodístico trajo consigo la eliminación de importante competencia y la tendencia a generar una nueva “estabilización” de conceptos en el mundo informativo. Esto revierte especial importancia si tomamos en consideración que en la primera mitad de la década de los años setenta, y de ahí en adelante, la publicidad obedeció a “un patrón bien definido, relativamente estable en el tiempo y muy favorable a la prensa diaria.”¹⁵⁷ En un contexto en que la televisión aún se encontraba en manos de las universidades, intervenidas; la prensa diaria captaba casi el 50% de los recursos publicitarios. Ahí estaba el negocio.

La eliminación de cinco periódicos y la caída comercial de la “Empresa Periodística La Nación” (de propiedad estatal) hizo aumentar la participación en el mercado de publicad del Consorcio Periodístico de Chile (Diario *La Tercera*) cinco veces (de 4% a 20,5%) mientras que la

¹⁵⁶ Para esta labor recibió cuantiosas sumas de dinero desde los Estados Unidos. *Vid.*, Patricia Verdugo, *Allende, como la Casa Blanca provocó su muerte*, Santiago de Chile: Catalonia, 2003; y el documental, *El diario de Agustín*, Dir. Ignacio Agüero, Santiago de Chile, 2008.

¹⁵⁷ Diego Portales, *op. cit.*, p. 137.

participación total de *El Mercurio* creció un 2,5% (alcanzando un 77,5%), todas estas cifras observadas en 1966 y en 1977-78.¹⁵⁸ Esto fue lo que consolidó al duopolio, sumado a la cada vez más patente jibarización de la prensa estatal, cuya vigencia marginal se mantuvo durante toda la dictadura militar por motivos estrictamente políticos y propagandísticos.

La consolidación del control privado se supone una consecuencia de las medidas políticas tomadas por la dictadura militar en torno a la prensa. En primera instancia se definió la exclusión permanente de determinados emisores, cuyas propiedades fueron acaparadas por el Estado. También se impuso la “censura previa” que posteriormente fue suplantada por un control sobre los mensajes ya emitidos –definiéndose a posteriori las disposiciones– y además en 1976 se decretó la necesidad de solicitar un permiso a la autoridad militar para fundar cualquier medio de comunicación.

Con estas últimas disposiciones, la dictadura militar a partir de 1977, comenzó a hacer efectivo su poder sobre los órganos de comunicación, cerrando algunos, amonestando y sancionando otros, ocupándose de posicionar la figura de la DINACOS, que a partir de entonces representaría la agencia oficial de información del gobierno. Todo esto, también, ligado profundamente a la concepción militar de la información, en cuyos círculos más extremos se consideraba la dominación y el control de la información como la batalla crucial a desatar contra la sociedad en resistencia.

Con esto, para fines de los setenta, el control privado de *El Mercurio* y COPESA se consolidó y convivió con un solo órgano de distinta denominación, la empresa periodística *La Nación*.¹⁵⁹ Sin embargo, la mayor presencia de privados en los medios no generó mayores desencuentros entre los intereses de estos periódicos (*El Mercurio*, *La Tercera*) y las prácticas de gobierno, aún más, periódicos y régimen militar no llegaron a estorbarse ni a maldecirse, estuvieron unidos en una compleja tarea de elevar la ideología neoliberal al nivel de verdad inapelable, de trastornar el imaginario cultural y de esconder a la ciudadanía la realidad de los distintos episodios de la enconada lucha que los militares y las fuerzas de seguridad emprendían contra la cultura política del país.

¹⁵⁸ Ídem, p. 138. El “Cuadro comparativo de la estructura del gasto publicitario en la prensa diaria” completo en la página 139 de la obra citada.

¹⁵⁹ Hay que considerar que la participación de *La Nación* en el gasto publicitario bajó considerablemente de 1966 (11%) a 1977—1978 (2%). *Ibidem*.

El episodio más representativo de esta relación entre la prensa y las políticas dictatoriales fue el vivido en la denominada Operación Colombo a mediados de 1975. Con ella se pretendió encubrir el asesinato de 119 chilenos, militantes del MIR, difundiendo en la prensa nacional la versión de que éstos habían muerto por pugnas internas y en enfrentamientos fuera del país. En gran medida, se buscaba convencer a la opinión pública, ante la vigorosa denuncia de la iglesia católica, de que los detenidos desaparecidos no existían, que se trataba de chilenos que habían huido del país y que no querían avisar a sus familiares de su suerte. La prensa reprodujo concienzudamente todas las noticias que referían a estos sucesos; primero se informó sobre el hallazgo de dos cadáveres calcinados en Buenos Aires, posteriormente otro cable informó sobre setenta chilenos “eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha”. En una tercera ocasión, se dio el verdadero golpe informativo, la periodista Patricia Verdugo relata el suceso:

Pero, ¿de qué se trataba? No había cómo entender lo que estaba sucediendo, salvo presentir la barbarie. Hasta que “Colombo” completó su operación pocos días después. Recuerdo que me quedé paralizada frente al quiosco del centro de Santiago, mirando el titular del diario *La Segunda*. Un titular que debiera reproducirse en grandes afiches para que toda Escuela de Periodismo lo exponga como ejemplo de la historia negra del oficio durante la dictadura. La mitad superior de la portada del vespertino, perteneciente a la cadena de *El Mercurio*, decía: “Exterminados como ratones”. El gran epígrafe agregaba: “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.¹⁶⁰

Menos información política, más entretenimiento.

El investigador Diego Portales, como muchos otros observadores de la realidad chilena, había identificado a partir del análisis de la prensa en 1977 uno de los procesos más importantes de la dictadura militar: la búsqueda de despolitización de la sociedad. Esta conclusión la desarrolló después de estudiar el estado de la prensa antes de 1973 y compararla con las líneas que iba adaptando este segmento comunicativo a causa de las disposiciones militares.

Evidentemente, los militares ya habían emitido su juicio respecto a los políticos y su labor, considerando que la “política” había destruido profundamente la “esencia” de la nación, lo que habría obligado a los connacionales a emprender una lucha estéril entre sus intereses, generando la “descomposición” de la patria.

¹⁶⁰ Patricia Verdugo, *Bucarest 187*, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2001, p. 27-31.

Esto se expresó en la idea de dejar de valorar la información política o de actualidad como fundamental, y en cambio poner en el lugar de atención al entretenimiento y a la información internacional. Esto responde ampliamente a la despolitización pretendida por la dictadura. La idea era, y esto es particularmente patente en *La Nación*, dejar de hablar de política partidaria o popular, y comenzar a hablar desde los “actos” del gobierno, la cual para ellos no era política, sino que representaba las más profundas y desinteresadas tareas de los guardianes de la patria.

El contraste entre las sociedades –estatal/neoliberal– es nuevamente revelador. Para una sociedad que hemos caracterizado como de constante y complicada búsqueda de la democratización institucional (1938-1973), la prensa se había organizado de manera plural, haciendo de las disquisiciones políticas las más importantes del material informativo. Sin embargo, después del golpe de estado, la prensa se organiza bajo el rígido esquema del duopolio, negando la competencia de grupos marginales en la producción de información. Además, la información contingente se redujo considerablemente. Esta carencia, se contrarrestó con un aumento del material informativo de carácter transnacional (cables, artículos y fotos) y con la producción local de material de entretenimiento (suplementos).¹⁶¹ Estos elementos fueron confirmados en el análisis hecho al diario *La Nación*.

Esta búsqueda deliberada, a través de la prensa, de: a. situar al chileno en el contexto internacional de lucha entre valores y antivalores; b. hacer de la confrontación política nacional – y sus relatos– una actividad indigna y degradante, y c. promover los contenidos de entretención, es la que configuró a la larga un nuevo sujeto necesario para el proceso que Chile estaba viviendo. Estos elementos, sistemáticos desde una visión posterior, estaban más determinados por la gran tarea del régimen, antes que por un plan específico para la prensa. Esta gran misión era la eliminación de cualquier rastro o consideración de los sectores marxistas –o izquierdistas– de la conciencia simbólica del país.

Las disposiciones en torno a la prensa se generan a partir de la exclusión.

Planteábamos que el ordenamiento finalmente bosquejado en el mundo de la prensa surgió a partir de la exclusión de un sector político del país, creándose paralelamente un nuevo centro de raciocinio donde se ubicaba la oficialidad castrense. Es por esto que las primeras disposiciones de

¹⁶¹ Indica Portales: “En la prensa diaria se han observado incrementos de 90% en el uso de cables internacionales y del 316% en el uso de radiofotos. A pesar de la eliminación del 50% de los órganos de circulación nacional”, Diego Portales, *op. cit.*, p. 173.

la dictadura van en contra de la difusión de esas ideas a través de órganos amparados por la legislación vigente. El Estado expropió las instalaciones materiales de estos periódicos, confiscando sus bienes y clausurando al medio. Estos sectores políticos quedaron imposibilitados por Ley a emitir sus opiniones, y aún más, se prohibió que se informara –objetivamente– de la existencia de estos sectores, y sobre todo que se hiciera mención de ellos en la realidad de sus muertes y desapariciones.

Es así como se da lo que Gabriel Salazar ha identificado como uno de los objetivos de la Constitución de 1980, esto es, el “atenazamiento” de los muchos por el castigo a los extremos.¹⁶² En otras palabras, mientras se pretende que los sectores marxistas y de la izquierda no tengan derecho a la opinión y a la información, se configura todo el mapa de lo permitido para “el resto” de la sociedad. En una sociedad nueva donde la izquierda no tiene cabida, en el plano simbólico es vista como extremista y fuera de sentido –aunque sea, incluso, “moderada” –. A su vez, los sectores de “centro” asumen cierto protagonismo en la disidencia “aceptable” por la dictadura, mientras que la derecha política y el gobierno asumen el centro inapelable, foco de razón y tino político, desde donde se califica a los demás connacionales. La derecha y su discurso técnico, buscaron ponerse en el centro de la realidad, sin considerar –a sabiendas– que sus propias convicciones eran producto también de una ideología política.

Con la exclusión de la izquierda y de los sectores marxistas, se podría pensar que sólo estos sectores se verían afectados, lo cual no “molestaría a los demás”. Sin embargo, la falta de rigurosidad de los militares y su tendencia a improvisar en temas relativos a la cultura nacional, encasillaba a muchos en la definición de izquierda, persiguiendo y censurándose múltiples expresiones que no eran necesariamente militantes. Por último, cabe considerar, que con la exclusión de un sector de la nacionalidad del imaginario social, la única perjudicada es precisamente la colectividad nacional, a la cual se priva de la enorme riqueza creativa que emerge, precisamente, de la latente diversidad social presente a lo largo de la nación.

La exclusión de los sujetos definidos se instala también como una exclusión en el plano general del ejercicio de los derechos. Finalmente, cuando el régimen “relaja” sus posturas y comienza a permitir –bajo estricta supervisión– la circulación de revistas y periódicos de velado

¹⁶² Gabriel Salazar; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 106. “La lógica de ‘seguridad’ –que traspasa la Constitución de punta a cabo– trabaja el problema de la ‘mayoría discola’ mediante una operación reductiva simple: la reduce a su forma opositora más extrema y minoritaria: los grupos armados. Así, sus sensores de civilidad se apiñan en la boca de eventuales fusiles rebeldes. De memoria, dirige sus ráfagas sobre ellos, sin mucha consideración por la disidencia civil que trafique detrás de todo eso.”

carácter izquierdista; comienza a confiar en que los mecanismos propios de la exclusión neoliberal siguieran generando la barrera necesaria para que dichos sectores no puedan acceder a los medios masivos de información.¹⁶³ Triste realidad confirmada cuando, una vez concluida la dictadura militar, aquellas revistas de izquierda y los periódicos extra-duopolio perdieron su sentido –oponerse y derrocar a la dictadura– y, por ende, el financiamiento extranjero; generándose la tan esperada estabilización de contenidos informativos de la mano del control privado.

La desaparición de la política es el trastorno de una forma de vida.

La dictadura cambió la forma de ser de todo un país. Motivada por la tesis de que la política era una actividad que dividía a la sociedad, la “nueva” política, en tiempos de dictadura, se definió bajo una sola línea: la que definía el Capitán General y su círculo de allegados.¹⁶⁴ En la identificación de este cambio vemos una tendencia negativa para la sociedad, pues es indudable que durante la gestación de la política en el periodo 1938-1973 fluyó más y de mejor forma la pluralidad económica, cultural y social, por sobre los momentos en que la actividad estaba simplemente prohibida. La política había permitido que la opinión de distintos sectores de la sociedad fuera haciendo eco en las resonancias ideológicas de la comunidad, disputándose de igual a igual los espacios simbólicos y políticos.

Sin embargo, el puro hecho de prohibir la actividad política no paralizó la necesidad que tienen los seres humanos de resolver sus problemas bajo esta forma. La dictadura, en tal sentido, jamás pudo erradicar la política del país, pues en cada rincón, incluso en las ciudades más recónditas, las personas mantuvieron vigentes sus formas políticas de relación social. Cuando más abiertamente se prohibía la actividad, más ágil fue la organización en amplios sectores opositores y de la ciudadanía.

Aun con esto, la prohibición fáctica de la política, que derivó en castigos y disposiciones igualmente reales, dejó en el país un enorme vacío en la actividad cotidiana de la sociedad. Sin embargo, esta carencia fue rápidamente solucionada por la nueva realidad que construía el régimen. Fenómenos como el acentuado consumismo, la gustosa actividad de la discriminación

¹⁶³ Además, el régimen ya contaba con la práctica de la autocensura periodística, que no es sino expresión del *shock* que produjo la normalización de los conceptos políticos e ideológicos (en otras palabras, la interiorización mental de lo que está permitido decir y lo que no).

¹⁶⁴ Extraña insistencia en que los militares no hacen política. Incluso destruir la política es hacer política.

visual y social, y el afán por diferenciarse de los demás a partir de los bienes; son el tipo de elementos que sustituyeron a la política entre los hombres.

Como concluye Munizaga, y como es observable, al ser erradicados los modelos políticos de sociabilidad, se instalaron en su lugar los modelos del mercado. “Nuevos signos y significados”: el modelo del auto, la elegancia del vestir, la televisora más grande, son los que tienen los individuos a la mano para dar sentido a la realidad y así comportarse cotidianamente. Si se pensaba en Chile antes de 1973 que una vida dedicada a la política acaso nos acercaría a la igualdad y a la libertad (forma de vida como medio); se comienza a difundir con la dictadura militar que la vida dedicada al consumo nos permite gozar inmediatamente de nuestro exiguo sueldo (forma de vida como fin), considerando que el máximo de felicidad se consigue con el consumo permanente de productos de diversa categoría y caducidad.

3.3 El periódico *La Nación*

Dentro de este contexto, cabe hablar brevemente sobre el periódico que se analizará. Se pondrá especial énfasis en las características formales del diario durante la década de los años ochenta, las cuales harán eco a los planteamientos preliminares de este capítulo.

Para el gobierno militar, el diario *La Nación*, era un medio más entre la red de órganos que controlaba directamente. Sumado al periódico hay que considerar la red de Televisión Nacional, y la única cadena radial del país encabezada por radio Nacional y radio Colo Colo. El periódico nacional también circulaba en todas las regiones del país. Esto es paradójico, precisamente para un gobierno y su parcialidad que veía con malos ojos la injerencia del Estado en la vida cotidiana.

El diario *La Nación* fue fundado en 1917 por un grupo de ciudadanos encabezados por Eliodoro Yáñez. Estos coincidían con la Alianza Liberal que llevó al poder a Arturo Alessandri en 1920, dedicándose el periódico a ser órgano de dicha colectividad. Por diez años fue el vocero de la Alianza Liberal, hasta que en 1927 lo compró el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Desde ese momento se convirtió en el órgano oficial de los sucesivos gobiernos que pasaron por La Moneda.

Dado que *La Nación* en 1973 era el órgano del gobierno de Salvador Allende, la empresa fue cesada y sus trabajadores fueron despedidos. A partir de ese año, circuló bajo el nombre de *El Cronista*, y luego, como *La Patria*, manteniéndose su carácter estatal. En junio de 1980, la

empresa volvió a adoptar el nombre de *La Nación* para su periódico, más acorde con su definición de “órgano oficial del gobierno”, pues para los partidarios de la dictadura se inauguraba en ese año el periodo “constitucional” del dictador, consolidándose el trastorno de muchos de los conceptos y visiones propias del republicanismo (palabras como presidente, ciudadanía, pueblo, gobierno).

Esta refundación del diario en 1980 fue una forma de acompañar al gobierno en su nueva tarea –pautada por la Constitución de 1980–, por lo cual sus intereses son más próximos a las razones de esta década que a las esgrimidas durante la represión inicial. Y una de estas nuevas razones era normalizar la mentalidad de los chilenos dentro del funcionamiento legal de la dictadura a través del posicionamiento de sus políticas en la categoría de verdades inapelables, hijas del sentido común.

Caracterización formal del diario La Nación.

Los elementos formales fueron identificados durante la revisión de los periódicos de *La Nación* comprendidos entre marzo de 1980 y marzo de 1990. Las características que fueron reconocidas se encuentran confirmadas en un pequeño folleto publicado por *La Nación* el 15 de julio de 1988, en el cual se da cuenta del funcionamiento del periódico.¹⁶⁵

La portada mantiene una diagramación igual a la clásica del periódico, esto es, un titular grande, acompañado de fotografías, y diversos titulares subordinados. Generalmente las caras eran “serias y noticiosas”, como menciona el folleto, si por esto entendemos el escaso uso de palabras vulgares y la preponderancia de noticias consideradas relevantes (usando como rango de jerarquía la serie Mundo-Latinoamérica-Chile). Sin embargo, cabe acotar que muchas veces el fútbol ocupó la portada –los lunes eran sagrados para el vital deporte–, y que durante un lapso importante de la década de los ochenta, la portada sí es tomada por palabras soeces o informaciones poco serias, producto de un cambio en la Dirección y en una creciente necesidad de distraer la atención del público.

La redacción o editorial de un diario siempre ha dejado bastante clara la postura de las principales cabezas del matutino. Cabe señalar que, durante la década de los ochenta, se da una especie de continuidad y repetición de sus posicionamientos básicos. Hay que considerar que la

¹⁶⁵ Ver, “Breve Historia de *La Nación*”, *La Nación*, Santiago de Chile, 15/07/1988. De aquí todas las citas, a no ser que se especifique lo contrario.

opinión abierta del diario se escondía bajo una gruesa capa de formalismos y lugares comunes, que en primera instancia nos hacen ver a todos los miembros del diario como altísimos representantes de la racionalidad política y de la convivencia armoniosa. Sin embargo, hay que analizar con sumo cuidado las opiniones que entregan; por ejemplo, antes de la muerte del ex presidente Eduardo Frei, la redacción de *La Nación* tenía como principal enemigo al que se definía como el Karensky chileno; pero una vez anunciada la muerte del ex mandatario, la misma redacción se deshacía en loas al político. Esto es un ejemplo de cómo el diario experimentó opuestas afecciones por la misma figura pública.

Los temas tratados por la redacción van desde “cualquier aspecto relevante del quehacer nacional e internacional, con preferencia para los asuntos políticos, económicos, religiosos y culturales, desde la perspectiva del Gobierno”¹⁶⁶. Bajo esta definición, *La Nación*, se considera la voz del gobierno. Así, funcionarios y simpatizantes construyen a partir de sus páginas un discurso oficial que contiene lo que se considera sobre la política nacional, la política económica, la cultura nacional, etc.

Otra característica de *La Nación* es la creencia de su cuerpo editorial y reporteril de estar ampliando y consolidando los horizontes del periodismo clásico: informativo y veraz. “En nuestro diario los reporteros ya están en la calle, en el lugar donde nació este hecho, tras todos los antecedentes que luego traspasarán a las carillas...”¹⁶⁷. Esto es particularmente evidente en la pretensión del diario de recoger la mejor tradición periodística de *La Nación*, elevando a los nuevos directores como herederos indudables de la probidad de don Eliodoro Yáñez.¹⁶⁸ Muchos colaboradores del diario se enorgullecen también de la crónica de Joaquín Edwards Bello, que alguna vez dignificó al periódico, intentando emular los dotes y convicciones periodísticas del insigne escritor.

La sección de crónicas noticiosas informa sobre todos los acontecimientos que suceden en el gobierno o son producto de su labor. Si bien se pretende asumir que se cubren las noticias “laborales” o “educacionales”, estas se limitan a lo que los respectivos Ministerios y Secretarías informan sobre su quehacer. La noticia diaria se amplía considerablemente con la sección

¹⁶⁶ “Breve Historia de La Nación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 15/07/1988, p. 3

¹⁶⁷ “Breve Historia de La Nación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 15/07/1988, p. 4

¹⁶⁸ Cabe mencionar que el hijo de don Eliodoro Yáñez, quien sí podría ser considerado “heredero” de la tradición periodística de su padre, estuvo al frente de la revista opositora *Cauce* durante la década de los ochenta, ampliando efectivamente el periodismo informativo y veraz. Vid., Eduardo Segovia, *La historia secreta de <<Cauce>>. Gloria, pasión y muerte de una revista de oposición*, Santiago de Chile: Pehuén, 1990.

internacional, que ocupa tres o más páginas del diario, de las primeras. Durante los ochenta, esta sección era completamente diseñada a partir de los cables y notas de la Associated Press y United Press Internacional (EE.UU.), Reuter (GB), Agencia Española de Noticias, Agencia Noticiosa Italiana y de la Agencia Alemana de Noticias (RFA). En lo referente al fotoperiodismo, el diario es profundamente dependiente de la agencia Reuter que “envía alrededor de 60 fotos diarias, a través de satélite.”¹⁶⁹

Por otra parte, y como ya se había adelantado, los suplementos o “publicaciones extras” son una parte fundamental del diario, encargados de satisfacer las necesidades de “información y entretenimiento” de grupos objetivos. Estos extras van desde revistas de juventud (una dedicada a la juventud pop: música, artistas, cultura pop; y otra a la juventud del régimen: métodos de estudio, depuración ideológica), revistas de la mujer (moda, cocina, temas varios), revistas de fútbol (la célebre Triunfo) y otras variedades.

La sección policíaca, informa sobre los diversos hechos delictivos suscitados en el país, sin embargo, no es la línea del diario hacer demasiada resonancia sobre las noticias de “sangre” o amarillistas. Por el contrario sí se le da especial importancia al actuar del “terrorismo” –el nuevo enemigo– cuya “secuela de muerte y destrucción hacia la persona, la propiedad pública y privada”¹⁷⁰ se presentaba como un flagelo enorme para la ciudadanía. Detrás de esto, la idea es crear en la sociedad consciencia del terrorismo como un fenómeno nuevo, internacional y descarnado para así repudiarlo y apoyar a la dictadura en sus medidas a favor del endurecimiento de las medidas de seguridad.¹⁷¹

Por último, cabe señalar que las fuentes de información son las que definen las características de esta empresa periodística. Estas fuentes son el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, los Bancos y otras entidades, la superintendencia de Bancos y Seguros y los gremios del sector; también el Ministerio de Economía, La Fiscalía Nacional Económica, DIRINCO, entre otros, para la noticia económica. Otros Ministerios son Agricultura, Minería y de Planificación, que se consideran fuentes permanentes de información.¹⁷²

¹⁶⁹ “Breve Historia de *La Nación*”, *La Nación*, Santiago de Chile, 15/07/1988, p. 9.

¹⁷⁰ Ídem., p. 13

¹⁷¹ Otras secciones importantes del diario son, “Deportes”, “Hípica”, “Noticia económica” (datos financieros, informaciones) y “Mundo del Espectáculo”. En éste último es más notoria la presencia de la nueva impronta del sistema, a través de la difusión de los contenidos culturales *dominantes* en las artes, la música, el cine, la radio, la televisión y los artistas.

¹⁷² En 1987 un columnista se enorgullecía de las noticias “dateadas” que presentaba el diario.

También se toma en cuenta la información emanada de las máximas cúpulas empresariales del país: la Confederación de la Producción y del Comercio, la Asociación de Bancos; la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Agricultura, La Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Chilena de la Construcción. De más está resaltar el carácter patronal de estas asociaciones.

La preferencia de estas fuentes, por sobre otras, nos habla bastante del carácter del diario. Lo cual no es ninguna novedad, toda vez que el 14 de enero de 1990 la plana editorial consignaba:

En los últimos diecisiete años, manteniendo un estilo ponderado y objetivo, *La Nación* ha asumido precisamente la difusión de la obra de reconstrucción emprendida por el Gobierno del Presidente Pinochet, teniendo plena conciencia de que al hacerlo estaba contribuyendo a la creación de un Chile genuinamente democrático.¹⁷³

Es decir, *La Nación* era totalmente consciente de que contribuía a la formación de una nueva sociedad, de impronta militar, autoritaria y excluyente. Esta “difusión de la obra de reconstrucción” responde a la necesidad que tenía la dictadura de contar con un aparato de comunicación totalmente fiel y manejable. Esta tribuna fue fundamental para dar el giro simbólico necesario. Esta característica se ve reflejada en el tratamiento de las conmemoraciones nacionales, dado que a la simple noticia reporteril de la celebración, se incorporan conceptos y tesis de alto contenido histórico que son desplegados por *La Nación* en las editoriales y artículos de opinión.

3.4 El Año conmemorativo militar

Las conmemoraciones son propias de los estados nación. Siguiendo los planteamientos de Benedict Anderson, la nación y todos los elementos que la constituyen son parte de una comunidad imaginada, que existe en la mente de las personas que viven en un territorio administrativo definido.¹⁷⁴ De aquí que se plantee que los elementos de la nación son históricamente permeables y no poseen características esenciales y, por tanto, éstas no están depositadas en las Fuerzas Armadas.

¹⁷³ “La Nación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 14/01/1990.

¹⁷⁴ Benedict Anderson, *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México: FCE, 1993.

Lo que sí es observable es un proceso histórico de construcción de la nacionalidad, en la cual todos los actores sociales tienen algún grado de participación, por el puro hecho de ser parte de la comunidad imaginaria. En el siglo veinte se observa que algunos grupos de la sociedad disputaban y hacían dialogar sus sentidos de nación con la idea nacionalista dominante. Esto, fuera de indicarnos que alguno tenía verdad, nos deja una idea de que la nación es un proyecto en construcción, y que la línea dominante de sus particularidades dependerá del esfuerzo que los grupos políticos y de poder hagan sobre la uniformidad de los discursos en los medios comunicativos y en los escenarios de la “cultura”, para lo cual requieren del poder.

El régimen militar prohibió practicar o difundir otras formas de nación, y solamente fue tolerante con los sujetos que se adaptaron en su esquema de sociedad. La verdad del régimen, se consideraba, era única e inapelable, y para ellos no era un ideal producido por las pasiones; era lo que Chile se estaba susurrando. Por tanto esta verdad, una nueva gama de sentencias para definir al país, se desplegó por los canales de difusión hasta instalarse en el lugar privilegiado del sentido común; de ahí hacia abajo, nunca hacia el lado, se fueron diferenciando los chilenos.

La idea de nación desplegada por los militares tenía características fundamentales, que aún hoy están presentes en la sociedad chilena, lo cual nos permite identificar cuál de aquellas costumbres y modos actuales corresponden al periodo dictatorial de nuestra historia. También surge la pregunta, ¿de dónde viene todo ese repertorio de ceremonias cívicas, que los estudiantes secundarios deben practicar durante toda su educación obligatoria? Y más, ¿de dónde vienen esos días de celebraciones marciales, en donde el desfile, los sones militares y la ofrenda floral se toman las plazas con nombres de héroes? Es bastante ilustrativo que actualmente gran parte del pueblo chileno gusta ver a los soldados desfilar, sobre todo en las multitudinarias versiones anuales de la Parada Militar.

Cada gobierno tiene la oportunidad de dar viraje a los simbolismos diarios, para ir penetrando en la mentalidad de la ciudadanía una determinada tradición política e histórica. Esto se genera por el puro hecho de que el poder del gobierno estatal en los asuntos mínimos de la vida diaria es muy amplio. En ese sentido, el gobierno puede celebrar con gala de recursos las fechas que su gobierno considere acorde con determinado ideario político, también puede cambiar las imágenes y mensajes que están en las monedas y los billetes, puede dar un enfoque al canto del himno nacional, tiene el derecho a orientar los modelos y contenidos educativos,

también goza del derecho de bautismo a calles, parques, villas, ciudades y escuelas.¹⁷⁵ Para no ahondar, en un país que haya experimentado gobiernos de diversas corrientes, basta con ver el sucesivo nombre que le han puesto a sus escuelas para adivinar la tradición histórica que han seguido los grupos en el poder.

Cambiar el enfoque simbólico fue una particular preocupación del régimen militar. Éste se encargó de mudar de la mente de las personas hasta los más mínimos simbolismos que la democracia derrocada había derramado al caer. Los ejemplos, como los ya mencionados, son muchos y muy variados. Cabe destacar como otro caso ejemplar el hecho de que, a principios de la década de los ochenta, *La Nación* publicaba una nota refiriéndose al nuevo y mejorado hábito de los chilenos para comer. Se informaba que estos habían dejado atrás la exigua “colación” allendista¹⁷⁶, que los tenía mal nutridos, y ahora podían comer los más variados platillos sin que el apuro esté en el bolsillo. Y esto parecía ser decisión de los chilenos. Por supuesto que el régimen militar se había encargado de prohibir las “colaciones” en los restaurantes, cuya palabra también estuvo destinada a desaparecer del repertorio ciudadano.

Más allá de esto, en el ámbito de las representaciones históricas, el giro fue amplio y decisivo. Esto es lo que se verá en la siguiente caracterización del año conmemorativo militar, en la cual se narrarán los sucesos anuales más importantes para la dictadura militar, según la visión periodística del periódico *La Nación*. Cada una de estas fechas, posee un simbolismo determinado y nos habla de algún pasaje ideológico de los militares. Con este ejercicio, se irá delineando la idea que militares y civiles pinochetistas/neoliberales tenían de la nación chilena, cuál pensaban que era su componente fundamental, cómo veían a los chilenos, qué esperaban de ellos y cuál debía ser su ritmo de conmemoraciones cívicas, cuándo debían ir a la plaza a rendir culto a los héroes y cuándo quedarse en casa.

¹⁷⁵ Todos estos derechos los ejerció el Gobierno Militar. En el tema de las monedas y billetes, se sacaron de circulación y se discontinuaron los de la época de Allende, que también tuvo los suyos, y se hicieron nuevos diseños. Respecto al Himno Nacional, se comenzó a cantar la estrofa que se refiere a los “Valientes Soldados”, que generalmente no se cantaba (ni se canta). En la Educación y su simbólica el tema de los cambios es amplísimo y evidente.

¹⁷⁶ La colación fue una comida que se instauró en el gobierno de Allende en todos los restaurantes, éstos debían ofrecer un menú a precio popular aparte de la carta regular. Hasta la actualidad, en algunos restaurantes, se lee en sus pizarras que ofrece “colación”. En México su similar en la cocina popular sería la “comida corrida”.

En los casos en que exista algún contrapunto con el régimen democrático anterior a la dictadura, será debidamente señalado, con el afán de asentar algunas diferencias que existen entre estas dos etapas de la historia reciente del país.

3.4.1 Enero

20 de enero. Batalla de Yungay y Día de “el roto chileno”.

Motivo. Se celebra la batalla de Yungay, el triunfo del Ejército Unido Restaurador al mando del general chileno Manuel Bulnes por sobre la Confederación Perú-Boliviana bajo el mando del general boliviano Andrés de Santa Cruz en 1839. La expedición del general Bulnes fue el segundo intento por restaurar el norte del Perú y frustrar los planes de Santa Cruz de imponer la Confederación. El Ejército Unido Restaurador, compuesto por chilenos y peruanos, había abandonado la plaza de Lima a principios de noviembre de 1838, reuniendo recursos y reponiendo sus posiciones, en espera del avance de las tropas de Santa Cruz. El “protector” boliviano ocupó el pueblo de Yungay, entorpeciendo el abastecimiento de las tropas restauradoras, obligándolas así a presentar batalla. Tras arduos combates, los confederados terminaron por resistir en sus trincheras de donde fueron dispersados por la carga final de los restauradores. Los chilenos habrían participado con un poco más de 4 mil soldados. Con la batalla se dio fin a la Confederación de Santa Cruz, y se restauraron los gobiernos de Perú y Bolivia. Con la victoria de Yungay se decretó la creación del barrio del mismo nombre, ubicado en Santiago Centro, y el levantamiento de un Arco de triunfo en memoria del ejército vencedor. A diferencia de los efectos que esta batalla tuvo en los restauradores peruanos, para los chilenos se configuró como un hito en la fundación de la nacionalidad, por el arrojo mostrado por sus soldados vencedores.

Conceptos. De este suceso histórico viene el nombre de “roto chileno”, término que está ya bastante difundido en el habla típica nacional, ya que diariamente el chileno se refiere con esos términos a cualquier persona del pueblo, además suele ser expresión de camaradería (“ése es mi rotito”), o un término despectivo para referirse a alguien que no respeta las normas del decoro. El roto chileno es la imagen típica del hombre de pueblo nacional, dicharachero, deslenguado, aguerrido y compañero suelen ser sus virtudes. Por sus hazañas en la batalla de Yungay se

recuerda al roto con especial reconocimiento y hasta posee un monumento al anonimato. Al ser esta denominación de antiguo cuño en la historiografía y la literatura, sólo cuenta resaltar los cambios en el enfoque conmemorativo que hace la dictadura.¹⁷⁷

En el diario *La Nación* se considera que el roto chileno es propiamente el pueblo nacional. En un artículo presente en *La Nación* el 20 de enero de 1981, el autor refería:

[Los rotos chilenos] eran sinónimo de gente dedicada a los trabajos duros, arriesgados. La expresión implicaba que era difícil encontrar a alguien que lo hiciera como ellos sabían hacerlo. Los pueblos tienen días patrios. Fiestas para adorar a los santos, para conmemorar una fiesta guerrera. No tienen un día para rendir homenaje a su hombre típico. Chile lo tiene.¹⁷⁸

Con orgullo los redactores se referían al particular hombre nacional, distinto a los demás, con un sentimiento de evidente superioridad, una nostalgia o fuerte sentido de pertenencia. El roto es visto como un individuo suprapersonal que engloba en sí todas las tareas que ha realizado el pueblo chileno: estuvo en el Desastre de Rancagua, formó las filas del Ejército Libertador de San Martín y O'Higgins, abrió la mina de Chuquicamata, trabajó el salitre de la Pampa, sacó cobre de El Teniente, se embarcó a California tras el oro, peleó la Guerra del Pacífico, levantó las extintas líneas Férreas, abrió el "Chiflón del Diablo" en Lota, en fin. Todas estas tareas, las cuales tienen en común enormes niveles de dificultad, hablan del hondo valor y heroicidad del pueblo chileno. Las guerras y las minas definen al hombre nacional.

Este punto de vista tiene mucho que ver con la idea de que el chileno ha forjado su identidad a partir de los desafíos que le ha impuesto la naturaleza y la forma de vida que se genera a partir de ella.¹⁷⁹ Ciertamente, la parcial efectividad de esta tesis está presente en muchas de las respuestas sobre la particular identidad nacional, y no sólo en Chile. Se dice parcial, porque la "identidad del chileno" es una ficción que engloba, efectivamente, muchas

¹⁷⁷ Oreste Plath, en su incansable labor, se encargó de reflexionar sobre el roto chileno en su libro "Autorretrato de Chile", Santiago de Chile, Zig-Zag, 1957; esta "Épopeya del 'roto' chileno", busca fundamentar la especificidad del hombre popular nacional, destacando muchos tipos de roto (marino, milico, pampino, minero, carrillano, cargador y bandido). De esto concluye que no hay un "roto arquetípico", sino un puro pueblo forjado en la mezcla de razas y en el rigor de la geografía, aunque ciertamente particular, dicharachero, belicoso, desprevenido y alcoholizado.

¹⁷⁸ "¡Rotos Chilenos!", *La Nación*, Santiago de Chile, 20/01/1981.

¹⁷⁹ "Es fácil entender que Valdivia y sus hombres, tras haber marchado desde el Perú hacia el sur atravesando un desierto interminable, se hayan solazado en el verde paisaje chileno. Sin embargo, los colonizadores tuvieron que pagar un alto precio para disfrutar de ese panorama: el aislamiento del resto del mundo, especialmente durante los dos primeros siglos y medio, periodo en que se asentaron las profundas bases de la cultura y el carácter nacional de Chile moderno. En efecto, la clave para comprender las características específicas de Chile se encuentra precisamente su prolongado aislamiento." Simon Collier, William Sater, op. cit., p. 17, 3-367

particularidades que la naturaleza ha ayudado a generar, pero no se remite sólo a ellas, sobre todo por el carácter cambiante de la identidad. Lo cual no indica, de ninguna manera, que la naturaleza haya definido al “hombre promedio” del país que llamamos Chile, si es que existe tal.

Sin embargo, el chileno para *La Nación*, posee un “perfil característico que lo identifica y lo distingue de los pueblos de idéntica raigambre hispánica”¹⁸⁰. ¿De dónde proviene la diferencia? Pues de la “fusión indígena”, pero no cualquier indígena, sino la “noble raza araucana, líder entre sus iguales”¹⁸¹. Se argumenta que de ahí proviene la bravura del chileno, que lleva en sus sangres a los indómitos araucanos –cuya “nobleza” es, por cierto, anacrónica–.

El pueblo leal, el roto, ha tenido su bautismo de chilenidad en las batallas de la joven república, y con ellas ha forjado su genio y figura. Es, por tanto, un pueblo militarizado, dispuesto a tomar las armas para defender la especificidad de la patria. Por eso, este pueblo se muestra como proclive a la dictadura militar, ya que su espíritu incólume se presenta como genuinamente chileno, en cuyo ánimo no prevalecerá:

[...] el influjo pernicioso de teorías extranjerizantes, ni la predica descorazonante y derrotista de quienes buscar corromper y domeñar su innato sentido de lealtad y de amor a la patria.¹⁸²

Esto intenta fijar la idea de que el pueblo chileno ha sido moldeado por su experiencia bélica. Entonces, la fuente de nacionalidad es, precisamente, el pueblo en armas, la infantería y sus conductores. Un emocionado y civil alcalde Carlos Bombal declaraba en las ceremonias de Enero de 1983: “los chilenos tenemos un profundo sentido de la vida militar, y apreciamos cada gesta de nuestra historia como el resultado o síntesis expresiva del pueblo disciplinado militarmente”.¹⁸³

Es importante señalar que el personaje llamado “Verdejo”, ejemplo de “roto” y popular personaje representativo, aparece en las tiras cómicas de *La Nación* con un nuevo aire. Efectivamente, el deslenguado compañero se volvió absolutamente pinochetista, poniendo al servicio de la dictadura su chupalla y sus pobres enseres. Este ejercicio de trastorno del sentido de un personaje es ilustrativo de la necesidad dictatorial de crearse un pueblo. Un bajo Chile que en sus palabras campesinas agradeciera de alguna forma la labor de Pinochet y su Junta.

¹⁸⁰ “Día del ‘Roto Chileno’”, *La Nación*, Santiago de Chile, 20/01/1983.

¹⁸¹ “Día del Roto Chileno”, *La Nación*, Santiago de Chile, 20/01/1983

¹⁸² “El Roto Chileno”, *La Nación*, Santiago de Chile, 20/01/1986

¹⁸³ “Emotivas ceremonias frente al monumento del roto chileno”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/01/1983

Momentos de la conmemoración. Durante la década la ceremonia principal era celebrada en la denominada Plaza *Yungay*, que antes del bautismo ejercido por la dictadura en 1983 se llamaba plaza de *El Roto Chileno*. En 1981 se celebraron los actos oficiales por la mañana y por la tarde se realizaron jornadas de juegos típicos, a cargo de la municipalidad de Santiago.

Las jornadas de la mañana comenzaban con el izamiento del pabellón patrio al son de la banda del Ejército. Generalmente estaban presididas por el Intendente –Militar– de Santiago, a la sazón Jefe de la Guarnición de Santiago. Un orador hacía una alocución patriótica de los hechos, mostrándose emocionado al evocar una de las “más sangrientas batallas de la historia americana.”¹⁸⁴

Posteriormente el Intendente hacía un discurso oficial, manejando los conceptos ya reseñados en torno al pueblo chileno y al efecto del ámbito geográfico. Un tercer momento de discurso podía ser ocupado por organizaciones civiles: al principio había presencia de la Unión Vecinal del Sector y posteriormente comienzan a tomar los micrófonos los miembros de la Liga Pro Patria así como integrantes de grupos de investigación histórica (como el Círculo Portaliano, el Instituto O’Higiniano)

Toda la ceremonia concluía con la entrega de ofrendas florales al monumento, a cargo de las distintas organizaciones y entidades que se hicieron partícipes de la conmemoración: resaltan las entregadas por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, además de instituciones como Liga Pro Patria, Instituto O’Higiniano, Círculo de Suboficiales en Retiro, Círculo Portaliano, Sociedad de Historia y Geografía, entre otros. Las ofrendas eran posteriormente bendecidas por un capellán militar, cerrando el ciclo de la conmemoración.

Finalmente se ofrecía un “esquinazo” a cargo de grupos folklóricos que interpretaban el “Himno de Yungay”, “Adiós al Séptimo de Línea”, entre otros temas afines. Generalmente, al principio de la década, la música estaba a cargo del grupo “Los Herreranos”, alternándose a lo largo de la década con conjuntos igual de desconocidos como el grupo Lautaro Manquilef, el Conjunto de Huasos de la Liga Pro-Patria, el Grupo Huentelauquén, y el conjunto Tierra Chilena, entre otros. Se tocaban esencialmente cuecas, baile que fue elevado por el gobierno a la categoría de “danza nacional”.

¹⁸⁴ “Solemne homenaje al roto chileno”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/01/1981.

La cueca se volvió un estilo musical aglutinante para el amplio espectro del país. Esta música campesina, relacionada principalmente con la cultura huasa de la zona centro del país, era la de mayor afección en la cultura dictatorial, dada la cercanía que sus cuadros tenían con dicha zona. Como en todas las manifestaciones de la cultura, la cueca también posee características diferenciadas, tanto si es de uso popular como de uso patronal. La cueca rescatada por los militares refiere a las realidades patronales más que a la crítica dicharachera y popular que se observa en las denominadas “cuecas choras”¹⁸⁵.

En las tardes del 20 de enero, la Municipalidad de Santiago con su enérgico alcalde Carlos Bombal a la cabeza, organizaba actividades de diversión. Juegos populares como el palo encebado, tirar la cuerda, las carreras en saco, el equilibrio con huevo y otras pruebas de destreza que rápidamente se tomarán el repertorio obligado de los juegos de la infancia.

Esta conmemoración, es claramente un buen ejemplo de lo que se conocía como operativo cívico-militar. En él, los hombres de armas y la civilidad, convivían en una jornada de recuerdo que tenía sus tiempos y sus responsabilidades. La ceremonia era presidida siempre por una alta figura militar, que era el representante del dictador en el acto; sin embargo, de a poco a lo largo de la década va tomando protagonismo la autoridad civil, que entabla un diálogo con la autoridad militar de respeto y sumisión, como anticipando sin querer los libretos de una transición particular.

3.4.2 Febrero

12 de febrero. *Batalla de Chacabuco.*

Motivo. La batalla de Chacabuco resultó un triunfo decisivo para el Ejército de los Andes por sobre las fuerzas realistas asentadas en la capitanía general de Chile. Con ella se dio fin al esfuerzo de la metrópoli por “reconquistar” el territorio, inaugurándose la Patria Nueva, sin embargo, aún faltaban varias batallas para consolidar la independencia definitiva. El Ejército independentista era comandado por el general José de San Martín, quien tenía bajo su mando a los generales Bernardo O’Higgins y Miguel Estanislao Soler, cada uno a cargo de una división. La batalla tuvo lugar en la hacienda de Chacabuco, cercana a Santiago.

¹⁸⁵ La cueca chora es la versión popular de la música típica. Forjada por cantautores anónimos de cueca, fue primeramente registrada por el destacado folklorista Roberto Parra Sandoval.

Conceptos. Como en todas las fechas relativas a hazañas del Ejército y la Armada –las que se toman cada año durante la década– es destacada la probidad, el arrojo y la valentía de los soldados “chilenos”. Hay que entender, de todas formas, que el Ejército Libertador de los Andes era un cuerpo compuesto por soldados del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata y, además, por soldados “nacionales”. El mérito de la batalla, como de todas las batallas, es del Estado Mayor en cuya cabeza estaba el general “argentino” José de San Martín.

El orgullo por el resultado del combate fue expresado a los días del desenvolvimiento de ésta. Conocidas son las palabras del general San Martín respecto a la preparación de las tropas, el exitoso paso por la Cordillera de Los Andes y el importante triunfo conseguido en Chacabuco, logrando la dispersión del Ejército Realista. Esto es resaltado por el periódico *La Nación*, loando la capacidad logística del Ejército y su “organización perfecta.”¹⁸⁶

Si bien, a cualquier chileno contemporáneo le irritaría dar demasiados créditos al efectivo Ejército del general San Martín, los redactores de *La Nación* se cuidan de dejar en buen sitio al general argentino y de situarlo al lado de O’Higgins, sin considerar demasiado, en este caso, los títulos que los diferenciaban. A O’Higgins se le reconoce su “ímpetu que lo dominaba con buen huaso chillanejo”¹⁸⁷, desplegado en un momento determinado de la batalla en el cual debía optar por actuar por su cuenta o respetar las instrucciones de San Martín. Considerando esto, a comienzos de la década de los 80, esta fecha era para el Gobierno un momento propicio para estrechar lazos con su símil argentino, centrándose esta unidad en la camaradería entre los hombres de armas de ambos ejércitos.¹⁸⁸

Además de resaltarse los elementos básicos del arrojo de la tropa, en esta conmemoración se hace mención a la Virgen María, asegurando el ingrediente católico en los albores de la patria. Es recordada la escena en que O’Higgins y San Martín se arrodillan en la Iglesia de la Hacienda de Chacabuco para agradecer a la purísima por mediar en la batalla. En este punto, la Iglesia, la Virgen y la capilla de oración se sitúan en un importante lugar de la patria, sirviendo como punto de partida además para la gestación de la nacionalidad, en unión con los soldados y los valores nacionales en ellos dispuestos.

¹⁸⁶ “Chacabuco”, *La Nación*, Santiago de Chile, 07/02/1983.

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ Dichas relaciones pasaron por momentos bastante difíciles durante la dictadura militar. Ciertamente los militares en el poder, en varios países, generaron las amenazas que buscaban combatir.

Como en otras conmemoraciones, aunque en menor grado, la batalla de Chacabuco representa una hazaña en la que se gestan los “valores consolidados de la unidad interna de los chilenos”, aunque ésta se viera opacada por la convivencia de “chilenos y argentinos” en el Ejército Libertador. Esta batalla es un argumento más para la idea de la dictadura de que la nacionalidad se galvanizó y consolidó en las hazañas militares del Ejército y de la Armada, todas estas comprendidas en el siglo XIX. Esta idea indica que la unidad de la nación es posible solamente cuando el militar afronta la tarea de salvar o defender a la patria, y precisamente de aquí es de donde vienen muchas explicaciones en torno a la pertinencia y justificación del golpe de estado de 1973.

Momentos.¹⁸⁹ Para celebrar este evento se realizaba una ceremonia militar frente al monumento “A la victoria de Chacabuco” ubicado en el camino hacia Los Andes, en la comuna de Colina. La ceremonia en este espacio comenzaba con el izamiento de los pabellones patrios chileno y argentino, y la entonación de los himnos nacionales. Posteriormente, después de los discursos, se entregaban las ofrendas florales, destacándose la de los departamentos de armas y las del Instituto O’Higiniano y su par, Instituto Sanmartiniano.

En 1985 se celebró una ceremonia en la Hacienda de Chacabuco, en la histórica explanada de la Batalla. Luego de los discursos, las ofrendas florales y los himnos, los historiadores de ambos países se reunieron a conversar sobre los hechos. Recordando además, la importancia de la Iglesia.¹⁹⁰

Implicaciones históricas. Según disposiciones del Director Supremo, el 5 de febrero de 1821 fue dictada el acta para conmemorar el Aniversario de la Declaración de la Independencia ocurrida en 1818.¹⁹¹ Desde aquellos días se determinó que el 11, 12 y 13 de Febrero se vivirían jornadas de celebración pública, ordenándose el cierre de las Oficinas del Estado y la medida obligatoria para los hombres de llevar algún emblema alusivo a la independencia, usándose en los sombreros una escarapela tricolor. En 1837, el Ministro Diego Portales, redujo estas celebraciones al día 12 de Febrero. La conmemoración se basaba en cañonazos y repique de

¹⁸⁹ “Conmemoran 164° aniversario de la Batalla de Chacabuco”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/02/1981.

¹⁹⁰ “Iglesia Histórica”, *La Nación*, Santiago de Chile, 18/02/1985

¹⁹¹ A su vez, la declaración de independencia se “juró” el 12 de febrero para conmemorar un año del aniversario de la Batalla de Chacabuco.

campanas en pueblos; además del izamiento generalizado de la bandera nacional y la iluminación de la calle por la noche.

Esto señala que en la temprana República, la batalla de Chacabuco y, además, la jura del Acta de Independencia, servían de fechas de anclaje para celebrar el inicio de la vida independiente. Posteriormente, en el gobierno de Manuel Bulnes, se decretará que la independencia se celebre el 18 de septiembre, día de constitución de la primera junta de gobierno. Esto es también un ejemplo de la historicidad de las conmemoraciones.

3.4.3 Marzo

11 de marzo. Aniversario de la Constitución.

Motivo. Por expresa designación dictatorial, el 11 de Marzo de 1981 sería el día de puesta en marcha de la Constitución de 1980 y además se celebraría la ceremonia de ascenso de Pinochet a su primer periodo “presidencial”, válido hasta 1989. Los 11 de marzo siguientes fueron un día importante para la dictadura, en el cual se practicaba la observancia de la Constitución y el “presidente” le contaba sus planes al país.

Conceptos. Esta fecha es propia del régimen militar, no posee ninguna relación con una conmemoración anterior. Así como, por ejemplo, en el Chile de Allende se decretó el 11 de julio como el Día de la Dignidad Nacional, producto de la Nacionalización del Cobre; el Chile de Pinochet, marcó como uno de sus hitos el día de la puesta en marcha de la Constitución dictatorial. Y como buen hito, se intentó que presentara un punto de ruptura entre un antes y un después que, de cierta manera, existió. Manuel Fuentes Wendling, consideró en aquél entonces que en el 11 de Marzo de 1981:

Termina un periodo de 7 años de esfuerzo y trabajo, cuyos frutos son muy tangibles, y comienza una nueva etapa cuya característica principal será la total modernización de las estructuras constitucionales.¹⁹²

Este enfoque triunfalista de la dictadura, rasgo permanente hasta en los años más duros de la protesta ciudadana, deja entrever la completa confianza que se tiene con el documento

¹⁹² “Juventud y realidad actual”, *La Nación*, Santiago de Chile, 05/02/1981.

constitucional y con la suerte que correrá. Visto desde la distancia, la Constitución Dictatorial tiene el infame prestigio de haber experimentado a lo largo de la década dos sentimientos en la clase política: primero un profundo y abierto desprecio; y posteriormente una tácita y resignada aceptación. De más está volver a resaltar que el proyecto dictatorial y todos los dispositivos necesarios para “cambiar la mentalidad de los chilenos” están expresamente delineados en la Constitución Política del régimen.

Desde la puesta en marcha de la Constitución, las autoridades dictatoriales comienzan a declarar que el propio documento traerá consigo el camino a la verdadera o nueva democracia, lo cual es fácilmente identificable en las fuentes.¹⁹³ La democracia neoliberal, que hemos relacionada con la democracia conceptuada por el régimen, es el proyecto que la dictadura lega a la posteridad; esto aún si consideramos que los elementos propiamente liberales de la legislación no entrarían en rigor sino hasta después del término del periodo “presidencial” de Pinochet, quien gozó durante todo el periodo de un poder excluyente para decretar estados de emergencia y ordenar la detención arbitraria de ciudadanos.

Implicaciones históricas. La Constitución se presenta como un nuevo marco en el cual Chile alcanzaría el desarrollo. Además, se afirma que la Carta Magna garantiza los derechos políticos de los ciudadanos y por ende construye una “nueva democracia”. Estos elementos, no dejan más que evocar una operación explícita sobre la explicación del pasado.

La puesta en marcha de cualquier Constitución, efectivamente, señala un marco nuevo con el cual un país rige su actividad política y económica. Por tanto, las “grandes” Constituciones en Chile están definidas por su capacidad de permanecer incólumes en el tiempo y de presentar un marco político acorde a las convicciones de los ciudadanos, ambas virtudes acaso ilusiones de la Historia. Dentro de estas constituciones entra la de Diego Portales (1830), la cual es considerada una alta obra de ingeniería política.

La relación que busca la dictadura entre su Constitución y la Constitución Portaliana es más que explícita, sobre todo considerando que cierta historiografía explica que la Constitución de 1830 viene a terminar con décadas de anarquía y de desorganización política; inaugurando a

¹⁹³ “Constitución y bien común”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/03/1981; “Defender nuestra democracia”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/03/1984; “Unidad de la democracia”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/03/1986; “El sentido de la democracia”, *La Nación*, Santiago de Chile, 01/03/87; “La nueva política”, *La Nación*, Santiago de Chile, 31/05/1987.

su vez un periodo de florecimiento y engrandecimiento nacional que le dio a Chile la posibilidad de diferenciarse de sus pares. La Constitución de 1980 también pretende mostrarse así, como la solución a un problema “político” –el gobierno de la UP– que había intentado “negar la experiencia histórica del país”, a través de la proliferación de una cultura que fomentaban la “politiquería”, el terrorismo y los afanes totalitarios.¹⁹⁴

Se concebía que la Constitución era un nuevo camino para Chile, y su fecha de puesta en marcha debía ser reconocida por los futuros jóvenes del país. Pretendió también el Régimen, que la Constitución fuera llamada “Constitución de la Libertad” por traer en sus páginas los caminos de una pretendida democracia mesurada, estable y realista.¹⁹⁵ Hoy por hoy, a pocos les gusta recordar que los orígenes de la democracia actual en Chile están en este documento, en el cual una camarilla de militares y civiles definió lo que consideraban qué era la política y cómo ésta debía practicarse en el país.

Implicaciones de la coyuntura. El primer ejercicio que busca la dictadura al “normalizarse” y “civilizarse”¹⁹⁶ es entregar una nueva versión de su poder, mucho más enfocada en cambiar los formalismos que las formas. Con estos motivos, el dictador traslada su residencia simbólica al Palacio de la Moneda en 1981, remodelado y listo para un nuevo periodo.¹⁹⁷ Este magno hito, sumado a otras nimiedades como el apareamiento de un Pinochet de civil, o un Pinochet más activo, más presidente, (que como buen “presidente” de Chile, hasta de mapuche se disfrazó), indican un alto esfuerzo de la dictadura por ganarse la aceptación pública a la manera de las grandes hazañas de la historia nacional.¹⁹⁸

Evidentemente, estos esfuerzos sólo fueron fructíferos en la parcialidad que aplaudía y aceptaba al General, puesto que para la opinión mayoritaria el “gobierno” de Pinochet jamás dejó de ser una dictadura. Esto lo demuestran los niveles generalizados y ascendentes de repudio al régimen, que en los años de 1982-1986 llegó a sus niveles más altos, además de la constante necesidad de derrocar a la dictadura, aunque sea en un plebiscito ratificatorio (1989).

¹⁹⁴ “Es un imperativo educar a la juventud actual acerca de un periodo de nuestra historia que marcó la decadencia y crisis de un sistema político que ya expiró.” Sobre la Democracia 1938-1973; “Juventud y realidad actual”, *La Nación*, Santiago de Chile, 05/02/1981.

¹⁹⁵ “Valor y mística”, *La Nación*, Santiago de Chile, 04/03/1983.

¹⁹⁶ Una forma de “civilizarse” es comenzar a llamar a Pinochet bajo la signature de “Presidente de la República” o “Presidente”, lo cual es un enorme esfuerzo por civilizarlo.

¹⁹⁷ “Fecha Trascendental”, *La Nación*, Santiago de Chile, 04/03/1981.

¹⁹⁸ El nuevo periodo “entronca con los gobiernos que conquistaron la Independencia nacional y organizaron la República en una férrea unión de soldados y civiles.”, *Ibidem*.

Por otro lado, toda la parafernalia generada en torno al inicio de la Constitución buscaba borrar cualquier duda acerca del plebiscito de 1980, alta y constantemente cuestionado. Éste, con la puesta en marcha de la Constitución, dejó de ser un problema por resolver, lo que permitió que el discurso político de la dictadura comenzara a operar sobre la base de la aceptación total y unilateral de la Constitución. Recordemos que el régimen de Pinochet jamás aceptó negociar sobre la base del desconocimiento de la Constitución, tal como lo pretendían los círculos moderados de la oposición. En otras palabras, el hito histórico “plebiscito de 1980” –con todos los resquemores que generó– quedó atrás de la discusión política toda vez que se “actualizó” en el hito “constitución de 1980”, el cual era el único fin y objetivo del plan político del régimen militar.

3.4.4. Mayo

21 de mayo. *Combate Naval de Iquique.*

Motivo. Este día se conmemora la inmolación del capitán Prat y sus marinos en el combate naval librado entre parte de la armada chilena y las fuerzas navales peruanas en las aguas de Iquique el año de 1879. La Esmeralda y la Covadonga (ambos de madera, resguardando las aguas de Iquique¹⁹⁹) estaban a cargo del bloqueo del puerto, mientras el grueso de la escuadra chilena partía al Callao (Perú) a destruir los acorazados peruanos. Sin embargo, mientras la escuadra chilena se dirigía al principal puerto de Lima, los buques peruanos ya habían zarpado rumbo a Iquique a romper el bloqueo. El Almirante Grau, a cargo del Huáscar, logró hundir el buque Esmeralda, cuyo capitán y su tripulación saltaron a la proa enemiga resultando muertos en el acto. Así, Grau consolidó su posición sobre Iquique y pudo asegurar parcialmente el control peruano sobre el Pacífico al menos por unos meses (hasta Octubre).

La inmolación de Prat, y la interpretación patriótica de ésta, dan al nacionalismo oficial desde fines del siglo XIX un momento perfecto para conmemorar el arrojo de los hombres de armas, la decisión de sucumbir, de ser necesario, por Chile y su profundo sentido del patriotismo. Es por esto que se conmemora una batalla perdida de la Guerra, ya que está inserta en los inicios de un conflicto del cual Chile salió triunfante. El arrojo de Prat, difundida es la tesis, llevó a

¹⁹⁹ En ese entonces Iquique era un puerto peruano desde donde exportaban el salitre.

muchos chilenos a ofrecerse como combatientes en el norte, lo cual lo vuelve vital para el desenvolvimiento del conflicto y el definitivo triunfo chileno.²⁰⁰

Conceptos. Al decir del historiador Juan Carlos Stack, en las páginas de *La Nación*, “la epopeya de Prat, su trágico sacrificio, transformó a Chile porque su actitud galvanizó a la nación”²⁰¹. En ambos sentidos del verbo galvanizar²⁰² se denota el sentido del sacrificio de Prat. Galvanizar como metáfora metalúrgica, bañando con su ejemplo el sentimiento patrio para evitar su oxidación; o galvanizar en el sentido de “reactivar cualquier actividad o sentimiento humanos”, de esto Prat es un ejemplo, y ante él los chilenos suelen encender su deber patriótico.

Es un hombre normal –un capitán– que asciende al panteón de los héroes nacionales y que contribuye a definir la patria estando sobre ella. Como se sentenció en una editorial de *La Nación* en 1981: “el alma nacional está penetrada de una admiración y respeto sinceros hacia la figura de los héroes, acompañada de la certeza íntima de la nobleza de su sacrificio.”²⁰³ El héroe es, entonces, una “inspiración permanente” cuya observancia por parte de la ciudadanía es fundamental para el sostenimiento de los principios patrios.

El héroe individualizado, como en Prat, se transforma en el símbolo visible de la nación y en un modelo de acción ciudadano. Los héroes chilenos son todos hombres de armas, y a excepción de los de la guerra de independencia, todos son canteranos del Ejército o la Armada Nacional. Son, por tanto, los chilenos. De ahí también la pretensión de ser los reservorios de la esencia nacional. Siguiendo con esta idea, vale destacar la siguiente afirmación de Stack: “[Prat y los suyos] sabemos son el símbolo del espíritu indomable de los chilenos, que ante la adversidad se agigantan y que dan todo por una causa justa y libertaria.”²⁰⁴ Esta es la definición de los hombres de armas y se refleja en todas las conmemoraciones de batallas y hazañas militares.

Prat, en su momento, representó una serie de principios que movilizarían a Chile. Y así, todos los principios nacionales han sido levantados por el arrojo y el sacrificio de los soldados y marinos. Fuera de ello, a juicio de la dictadura, sólo hay politiquería y partidismo. Entonces, para

²⁰⁰ Es curioso que en el heroísmo contemporáneo identificado por Simon Schama en su obra *Ciudadanos...*, utilice como ejemplo paradigmático a un marino francés llamado De Couëdic. Tanto el francés como el chileno representaron para sus naciones símbolos de fortaleza patriótica en momentos particularmente trágicos. En su muerte, a De Couëdic, también se le despidió como un ciudadano benévolo, amigo generoso y buen amo para sus servidores. *Vid.*, Simon Schama, *op. cit.*, p. 56-58.

²⁰¹ “El legado de Prat”, *La Nación*, Santiago de Chile, 27/05/1981.

²⁰² Real Academia Española, Diccionario en Línea, <http://lema.rae.es/drae/?val=galvanizar>, 2012.

²⁰³ “La gloria de Iquique”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/05/1981.

²⁰⁴ “El 21 de Mayo”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/05/1986.

la idea militar, sólo las instituciones armadas representan a la nación y por tanto el gobierno de estas instituciones es el mejor que se puede dar Chile, así, se sostiene que “la chilenidad se sustenta sobre una espiritualidad honda que inspira a las instituciones armadas” y por tanto son las únicas responsables de mantener el “equilibrio de la existencia” nacional.

Estos conceptos buscan igualar a las fuerzas armadas del pasado con las de la época dictatorial, en un claro esfuerzo por construir una continuidad histórica en la identidad de los cuerpos bélicos. Es imposible saber cuál habría sido la postura de Prat²⁰⁵ si hubiese estado vivo al ser ordenada la tortura contra chilenos en el nuevo buque Esmeralda de la Armada en 1973. Con esta inverosímil situación se quiere plantear que no necesariamente las decisiones e inspiraciones de los cuerpos bélicos a lo largo de su historia han sido uniformes, y que su historia institucional es flexible como cualquier otra historia. Pero esto parece no importarles a los ideólogos del régimen al sentenciar con orgullo:

En el mar se decidieron los dos grandes conflictos bélicos de la República y fue en las costas bañadas por nuestro mar donde la Marina de Guerra, en unión del resto de las Fuerzas Armadas y de Orden, y del pueblo chileno, afianzó nuevamente nuestra segunda independencia, un 11 de septiembre de 1973.²⁰⁶

Esto reafirma la tesis que ante la “adversidad” resalta el ánimo verdadero de los chilenos, por tanto, el gobierno allendista²⁰⁷ definido como crisis, resquebrajamiento y desintegración ameritaba una acción decisiva de las Fuerzas Armadas que recogiera su mejor tradición en la lucha contra los peligros.²⁰⁸ Con esta idea dejaban, gratuitamente, de considerarse a sí mismos una amenaza.

El concepto más importante de Mayo es, sin embargo, el despliegue del enfoque geopolítico de la dictadura militar. Para la doctrina que los militares exportaron desde sus academias hacia el mundo civil, las naciones estaban en constante peligro, pues de suyo es una fragilidad estructural, y esta fragilidad, se argumenta, es producto de las desviaciones de los civiles, a cuyo resguardo deben estar las instituciones militares. Esta diferencia queda bastante

²⁰⁵ Considerando todo su brebaje de abogado que tanto se cita.

²⁰⁶ “La Armada Nacional”, *La Nación*, Santiago de Chile, 04/05/1983.

²⁰⁷ Preso de “corrientes transnacionales ideológicas que estiman superadas las lealtades y deberes ante la identidad nacional y que se reducen a predicar un género nuevo de identidad ‘partidista’.” En, “Glorias Navales”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/05/1986.

²⁰⁸ “El efecto de comparación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/03/1981; Augusto Pinochet, “Repaso a la agresión comunista en Chile”, separata en *La Nación*, Santiago de Chile, 28/01/1986; “Realidad de la UP”, *La Nación*, Santiago de Chile 09/06/1988.

clara con una distinción que hizo el intendente militar Carlos Carvallo en 1989 al señalar que “todos los chilenos aman a su país, pero los militares, por sobre todo, amamos la patria”. Fuera de las discusiones semánticas, lo que intentó dejar claro el entonces brigadier general es que los militares tienen una conexión más clara con la nación, lo cual se ha venido ejemplificando en esta tesis.

Volviendo al tema geopolítico, el Almirante Merino se preocupó enfáticamente de encumbrar a Chile como una “potencia” que supiera aprovechar sus recursos marítimos. Para tales efectos, instauró en 1974 el “Mes del Mar” durante el cual se programó la celebración de diversos actos “académicos, artísticos y militares” que versaran sobre el extenso litoral de Chile. Muchos escolares de esa década y las siguientes recordarán la llegada del Mes del Mar a las aulas de clases, cuando los peces y crustáceos, los buques y el “abordaje de Prat” se tomaban los temas de la clase de arte e historia.

El Mes del Mar se inauguraba con una extensa conferencia que ofrecía el Almirante Merino a la comunidad nacional. En un contexto (principios de los años ochenta) en que la crisis y la inestabilidad política no eran sorpresa ni para la dictadura, se aseguraba que en el mar se encontraban los cimientos para “la recuperación nacional”. El Almirante el 2 de mayo de 1983 enlistaba las ventajas de Chile por sobre sus vecinos: “extenso litoral, posesiones insulares de mar adentro: superficie marítima de enormes dimensiones, con subsuelo de alimentos, minerales y fuentes energéticas.”²⁰⁹ Sin embargo, era patente para el Almirante, durante toda la época, que en Chile no había “conciencia marítima”, que ni sus gobiernos ni sus ciudadanos tenían la resolución anímica para asumir con responsabilidad el legado que la cruenta y victoriosa definición de las fronteras había dejado.²¹⁰

Para la Armada y sus congéneres terrestres, el Mes del Mar, es decir, la afirmación de la conciencia marítima de Chile, era una “obligación nacional”, y con ella se cumpliría la tarea que Chile debe ejercer en su “destino como gran nación”. Es inevitable pensar que en estos discursos, como se verá más adelante, hay una reedición en nacional –guardando todas las proporciones– de un pensamiento geopolítico propiamente europeo. Las ahora “grandes naciones” europeas, también se impusieron como tarea geopolítica alcanzar el estatus de “gran nación”, en un

²⁰⁹ “Mes del mar”, *La Nación*, Santiago de Chile, 02/05/1983.

²¹⁰ *Ibidem*.

contexto que los llevó inevitablemente a dos grandes guerras “mundiales” en pocos años (1914, 1938). El Chile de los militares también debía imponerse estas tareas.

En esta perspectiva geopolítica, el recuerdo de la inmolación de Prat no es azaroso, el capitán es un engranaje fundamental de la definición del destino nacional. Recordemos que la guerra del Pacífico amplió considerablemente el litoral norte del país, y entonces, es precisamente por esa voluntad de guerra nacional que se “ganó” por sobre los “enemigos” un territorio cuya devolución significaría un insulto para los soldados y marinos que se entregaron por la causa.²¹¹ Son estos marinos mártires quienes, en primera instancia, definen los intereses marítimos de Chile, en una suerte de continuidad histórica de labores: su lucha abrió el camino para del destino del país. Esto es ilustrativo en la editorial del 21 de mayo de 1981 en la que se afirma que la condición “riberaña” de Chile, “ventana al mar Pacífico”, es “una derivación concreta de la inmolación de Prat y sus camaradas”.²¹²

Momentos. El 21 de Mayo es, hasta el día de hoy, un momento en el cual los marinos y demás corporaciones afines marchan en honor a las glorias navales. En el Chile actual es también un momento en que el Presidente de turno entrega su cuenta anual de gobierno y plantea –en teoría– nuevas metas para el país. Es una fecha cívica, en la cual se unen el recuerdo de la inmolación y triunfo en las campañas del Pacífico por sobre los “enemigos” y las tareas propias del gobierno, en su labor de señalar a la ciudadanía el rumbo de las políticas públicas y privadas.

En mayo de 1982 se afirmaba: “la ciudadanía entera, de Arica a la Antártica, acude a las calles y plazas, y respalda con su aliento y su presencia el paso de los soldados que rinden tributo a quienes prefirieron morir antes que rendirse.”²¹³ Ese mismo día se anunciaba que seis mil alumnos de cincuenta establecimientos educativos de Santiago, Maipú y San Miguel se harían parte del homenaje organizado por la Municipalidad de Santiago en conjunto con la Secretaría de Educación a las Glorias Navales en la Plaza Capitán Prat.

²¹¹ De aquí vienen muchos de los argumentos en torno a la imposibilidad de “renunciar a la soberanía” chilena del litoral norte a favor de Bolivia. En esta discusión se enfrentan no solamente dos voluntades “nacionales” sino también dos enfoques completamente distintos de ver la política.

²¹² “La gloria de Iquique”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/05/1981.

²¹³ Se suele decir en el habla coloquial cuando nos referimos a todo el país: “de Arica a Magallanes” o “de Arica a Punta Arenas”, en esta ocasión se señala “de Arica a la Antártica”, consagrando la tarea geopolítica de “unión” entre el continente terrestre y el continente antártico. Cabe señalar que en el territorio antártico chileno no hay ni plazas ni calles. “21 de mayo”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/05/1982.

En esa ocasión, los escolares fueron instruidos para hacer uso de la palabra. Una alumna del Liceo A-7 expresó la gratitud de los colegiales con los espíritus visionarios de O'Higgins y Zenteno (organizadores de la primera escuadra nacional) y evocó la figura de Prat como un “insigne ejemplo” para todos los niños.²¹⁴ Posteriormente, en la Plaza Prat, se depositaron ofrendas florales a los héroes, en los que participaron la Secretaría de la Juventud, Cuerpo de Bomberos y Liga Pro Patria.

Los desfiles patrios se toman la escena de Mayo y en todas las provincias los ediles civiles, amigos profundos de la autoridad militar, encabezaban las celebraciones. En una ocasión, en la acomodada comuna de Providencia, el alcalde Hernán Chadwick supervisó las representaciones conmemorativas sobre el combate en distintos colegios de la comuna. El acto oficial de la comuna se realizó en el “Club de Providencia” al que concurrieron autoridades de la Armada, civiles y militares, además de representantes de la “juventud y el voluntariado”²¹⁵. En otras comunas, como Quinta Normal y la Reina, los actos celebratorios comenzaban en la mañana frente a alguna plaza o busto conmemorativo, presidiendo la ceremonia el jefe edil y alguna autoridad de rango de la Armada (un capitán de fragata o de navío).

En otras ocasiones la celebración oficial y principal se trasladaba al monolito que testimonia el conflicto naval, donde miembros de la Armada, autoridades de “gobierno” y estudiantes colocaban ofrendas a los mártires en un acto saludado por el tronar de 21 cañonazos disparados por “una pieza de artillería del siglo pasado”²¹⁶.

Implicaciones históricas. Como habíamos señalado, el control del mar en la doctrina geopolítica es un concepto de antiguo cuño, cuya más genial ejemplificación está en las ideas debatidas a fines del siglo XIX que a su vez constituyen la antesala conceptual de lo disputado en la Primera Guerra Mundial. Uno de estos discursos ideológicos fue el postulado por el marino estadounidense Alfred Mahan quien destacó la idea de que si Estados Unidos quería controlar efectivamente su región debía ejercer una soberanía activa sobre el mar. Escribió el capitán Mahan en una tribuna periodística a fines del siglo XIX:

²¹⁴ Hay que señalar que en la época, como los colegios e instituciones educacionales estaban directamente intervenidas por la dictadura, los niños que podían hablar (los “niños oficiales”) contaban también con la completa condescendencia del régimen. Lo mismo pasa en los Centros de Alumnos de Universidades y Colegios de la época, completamente elegidos por el dedo dictatorial.

²¹⁵ “Seis mil estudiantes rindieron hoy homenaje a los héroes”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/05/1982.

²¹⁶ “Mes del mar”, *La Nación*, Santiago de Chile, 10/05/1987.

Partamos de la verdad fundamental, justificada por la historia, de que el control de los mares, especialmente a lo largo de las grandes rutas definidas por interés nacional o por comercio nacional, constituye el más importante entre los elementos meramente materiales en el poderío y prosperidad de las naciones.²¹⁷

El pensamiento de Mahan intentaba responder a los mandatos de la Doctrina Monroe, profundizando el rol de los Estados Unidos como guardián de la macro-región americana. El interés nacional, según esta visión, necesariamente visualiza un radio de acción e influencia que sobrepasa las fronteras nacionales. Y este radio debe ser copado por la soberanía sobre el mar. Esto empalma derechamente con la idea de que los países de condición insular deben utilizar el mar para salir de su aislamiento, lo cual genera un proceso de dependencia de la nación con la fuerza naval.

Los militares y los marinos chilenos, inevitablemente hacían eco de estas ideas, pues éstas también constituyen los reservorios conceptuales fundamentales de las academias militares y navales de Europa, cuyos elementos y cuadros fueron llevados a Chile para organizar y “modernizar” la decimonónica y latina fuerza militar del país.²¹⁸ Entonces, sucede el fenómeno de que un país como Chile (con sus actuales 16.5 millones de personas y sus, para 1982, 11 millones) pretenda asumir el control excluyente del mar, aun ciñéndose a los límites del derecho marítimo pero presentando en su retórica discursiva la necesidad de posicionar al país como una “potencia naviera”, que vea a los otros países desde una perspectiva marítima y a partir de la consecución de la soberanía sobre el mar.²¹⁹ Con estas ideas excluyentes, difícilmente se puede concebir desde aquí alguna perspectiva integracionista para las naciones latinoamericanas pues, como afirmó durante el mes de junio de 1982 el coronel Samuel Rojas: “cualquier nación, esté donde esté, está *condenada a tener vecinos*, que, desde el punto de vista militar son adversarios potenciales.”²²⁰

²¹⁷ Alfred Thayer Mahan, *El interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo: presente y futuro*, trad. Amparo Amézquita, Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Sede San Andrés, 2000, p. 57.

²¹⁸ Genaro Arriagada, “El Ejército Chileno, la ‘prusianización’ y la primera oleada anti-socialista (1900-1931)” en *El Pensamiento Chileno en el Siglo XX*, México: IPGH-FCE, 1999.

²¹⁹ El mapa de Chile continental ubica al país en un eje horizontal-sur, enfrentado a los países orientales ubicados en el norte del mapa, separados por una amplia capa de mar. Ver en Isabel Jara, “Graficar una segunda independencia...”, *op. cit.*

²²⁰ Sin énfasis en el original. “La infantería resguarda siempre nuestros objetivos nacionales”, *La Nación*, Santiago de Chile, 07/06/1982.

Implicaciones de la coyuntura. La dictadura militar utilizó indistintamente las hazañas navales y militares, entre ellas el 21 de Mayo, para afirmar su idea de que en Chile se vivían momentos trascendentes (en una trascendencia positiva) en los cuales el país se abocaba a “buscar” una nueva institucionalidad. En iguales términos, Prat y los suyos, también eran utilizados para evocar un momento en el cual la patria debía buscar su unidad y encontrar el camino del “porvenir venturoso” de los chilenos.²²¹ Así, volvemos a la idea de que es posible igualar el arrojado presentado en la Guerra del Pacífico (en un contexto de “labor nacional”) y la tarea llevada a cabo por la dictadura. En ambas situaciones, se vive en un delicado “contexto internacional” en donde los potenciales enemigos (entonces, todos los países del orbe, unos más unos menos) quieren destruir al país.

Por esto se argumenta que en momentos críticos para la nación, el chileno debe sacar adelante su personalidad militar, para asumir esos tiempos críticos con “absoluta entrega y cumplimiento del deber” en aras del principio superior que se conoce como “chilenidad”.²²² Por tanto, se declara que el chileno no debe estar para odiosidades partidistas, ni siquiera para elevar su voz en torno a lo que considere un futuro distinto para el país. No, el chileno debe ser obediente y entender que los únicos capacitados y desinteresados para cumplir las tareas nacionales son los militares. Desde este punto de vista, la dictadura descalifica a los protestantes de 1982-1986, considerándolos agentes pagados por ídolos extranjeros, y por tanto, elementos enfermos de la patria, inconformistas “de siempre” y aventureros, de ninguna manera un pueblo nacional manifestante.

Mientras en el país el conflicto para la mayoría de la población era cómo derrocar a la dictadura, ésta se escondía en fechas que eran patrimonio del nacionalismo oficial. Desde el cómodo lugar del “chileno oficial” la dictadura descalificaba a todos los chilenos que no estuvieran en sus actos, con sus discursos y con sus ideas, y dejaba en las calles a los “no-chilenos” que no alcanzaban a comprender –o no veían en dónde estaba– la trascendencia y modernidad de las políticas defendidas por la dictadura militar.

²²¹ Prat y los suyos indican, en última instancia, el destino marítimo que tiene Chile como nación.

²²² Esto entronca absolutamente con la idea de pueblo de Pinochet definida por Verónica Valdivia en su artículo ya citado “¡Estamos en Guerra señores!”. Un pueblo que derroca a Allende, pero que después de eso, se entrega con dedicación y sometimiento al camino trazado por la dictadura.

3.4.5 Junio

07 de junio. Toma del Morro de Arica/Día de la Infantería

Motivos. La toma del morro de Arica es una de las acciones bélicas más significativas de la campaña por tierra comandada por el general Manuel Baquedano en el entonces sur del Perú, el año 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico. Después de la consecución del control sobre el Pacífico (con la captura de Grau en 1879), la marina había “despejado el área para que el Ejército comenzara la invasión de las provincias del sur del Perú. La primera expedición la comandó el general Erasmo Escala, secundado por dos políticos civiles. Estos y sus tropas, tras desembarcar en Pisagua, lograron asegurar el control sobre la provincia de Tarapacá luego de dos batallas, en las que fueron vencidas las fuerzas bolivianas y, además, se consiguió que Perú abandonara la zona.²²³ Producto de esto, Chile pudo ocupar permanentemente Iquique y las tierras del interior ricas en salitre.

Tras la renuncia del general Escala, se encargó al general Manuel Baquedano conducir la tercera campaña rumbo al norte. Su primera misión fue conquistar la provincia de Tacna. Tras desembarcar en Ilo, el Ejército chileno capturó Moquegua y emprendió rumbo a Tacna. Baquedano capturó ésta ciudad, pagando un duro precio de soldados muertos y heridos. Pese a las bajas, el general emprendió con sus tropas la conquista de Arica, capturando en esta campaña el Morro fortificado de esta ciudad en un asalto rápido y heroico: “la toma duró 35 minutos y alrededor de 120 chilenos murieron en el ataque”²²⁴.

Con la captura de Arica, el Ejército chileno consolidó su control sobre las provincias del Sur del Perú, pasando a controlar Tacna, Arica, Tarapacá e Iquique. A partir de este dominio, el Ejército chileno estuvo en condiciones de preparar el asalto a Lima, campaña que comenzó a desarrollarse en enero de 1881.

Conceptos. La Guerra del Pacífico fue el primer conflicto bélico de importancia que enfrentó la joven república chilena. Y por tanto está profundamente enraizada en la construcción de la nacionalidad a finales del siglo XIX. Si bien, en el momento de la guerra, la muerte de las tropas chilenas y por tanto “el uso” de los jóvenes en un conflicto tan alejado del centro del país, no era

²²³ En la segunda batalla las fuerzas peruanas repelieron e infringieron bajas al ejército chileno, pero aun así se retiraron de Tarapacá, dejándola a disposición de los chilenos.

²²⁴ Simon Collier, William Sater, op. cit., p. 125.

popular en la opinión pública²²⁵; el Ejército chileno no abandonó su campaña, preocupándose de abandonar la capital del Perú con un tratado favorable a Chile bajo el brazo. Esto, a la larga, hizo que se resaltaran los efectos positivos de los conflictos de la Guerra pues definitivamente habían consolidado al país y le habían anexoado una importante zona económica a la república (Chile vivirá desde ese momento del salitre y del cobre reservado en ese lugar).

Por tanto, el triunfo de los chilenos, es visto como el ejemplo del arrojo de la nacionalidad, de lo que ya se ha venido hablando. En este caso, los laureados son los soldados que emprendieron las campañas terrestres que finalmente dieron a los chilenos el control de la capital peruana y la capitulación de las fuerzas peruanas y bolivianas. Una vez más, en las batallas de este conflicto, se considera que se gestó la nacionalidad.

En esta fecha particular, se infiltraba en el recuerdo de la ciudadanía el valor de la Infantería. Y por eso, en conmemoración de la toma del Morro (como acción ejemplar de la efectividad de las tropas), se celebra el Día de la Infantería, en el cual se vierten discursos relativos a la especificidad del espíritu nacional, a los defensores de los valores inmortales de un país independiente y demás ideas.

Uno de los conceptos que se maneja en este día es la relación establecida entre ciudadanía y el ejército. Sobre ella se aplica la fórmula de que la infantería proviene de la ciudadanía, y, por tanto, la infantería es también pueblo. En este sentido, las aspiraciones de los infantes son también las aspiraciones del pueblo chileno. En ello se basan las loas a la infantería presentadas por el diario *La Nación*. Esta idea también recoge elementos de la tradición militar occidental, al considerarse bajo la inspiración revolucionaria francesa la idea del pueblo en armas y del soldado ciudadano. Todo ciudadano es también un infante; pero los que sí son infantes son los verdaderos ciudadanos de la nación.

Sin embargo, pese a este discurso incluyente, en la tesis es perceptible un proceso de conformación excluyente del ejército respecto de la ciudadanía. Se argumenta que los hombres de armas poseen un espíritu distinto, y, además, poseen una colección de glorias a las que apelar, lo que definitivamente los cohesiona y les da identidad. El 7 de Junio de 1981 se decía que el ejército chileno “está al mismo nivel que los mundiales en cuanto a técnicas” pero, ojo, “en voluntad somos superiores porque somos vencedores y nuestra historia lo demuestra”²²⁶. La

²²⁵ Ídem., p. 127.

²²⁶ “La infantería resguarda siempre nuestros objetivos nacionales”, *La Nación*, Santiago de Chile, 07/06/1981.

superioridad es siempre resaltada, tanto sobre los enemigos, como sobre los civiles connacionales. Vale indicar que este orgullo del vencedor de batallas crecería aún más con los resultados de la “guerra” que estaba librando el gobierno militar contra los problemas de Chile.²²⁷

Por tanto se sostiene que el soldado es Chile. La infantería simboliza “la conquista misma de un territorio porque es él [el soldado] quien, al colocar su pie en territorio enemigo, lleva consigo la Patria, la idiosincrasia y la bravura del pueblo chileno”.²²⁸ Para Juan Carlos Stack, desde su punto de vista, en la Guerra de Pacífico se dan todos los elementos constitutivos de la nación. Este historiador narra que la infantería cosechó honores sin par, sumado a las glorias navales ya reseñadas, y a la gloria que comenzó a tributar el Ejército chileno. Tanto el heroísmo que “una nave francesa, el ‘Husar’, (...) recorrió los mares para relatar la epopeya heroica de esa brava infantería del Ejército de Chile, ‘siempre vencedor, jamás vencido’.”²²⁹

En este sentido, la conquista del Morro, es también la conquista de un pueblo por liberarse de una conjura: “los chilenos siempre hemos estado frente a un gran obstáculo, vigente a través de los tiempos, llámese fuerzas telúricas, fenómenos atmosféricos, *corrupción de determinados sectores políticos*, guerras intestinas e internacionales”²³⁰. Estos problemas, sin embargo, el pueblo –el roto, la infantería– los “ha podido superar como trepando el invencible cerro y en menos del tiempo imaginable”, imponiendo su carácter y la especificidad de la patria.²³¹

Momentos. El año 1980 se celebró el primer centenario del asalto al Morro de Arica, en la jornada también conocida como “Día de la Infantería”. El Ejército se encargó ese año de organizar múltiples “operativos” en las comunas de la Región Metropolitana, con el objeto de realzar el sentido de la gesta. En los regimientos se llevaron a cabo ceremonias discretas y también otro tipo de conmemoraciones: se organizaron, por ejemplo, concursos de patrullas militares.

²²⁷ Recordemos que la gestión política y de Estado se ve, desde la perspectiva militar, como una Guerra. Distinto es cuando un civil dice “estamos en guerra contra el hambre” a cuando un militar dice “estamos en guerra contra el subdesarrollo”, estos últimos, efectivamente lo ven como una guerra. *Vid.*, Verónica Valdivia, “¡Estamos en Guerra, Señores!”, *op. cit.*

²²⁸ “La infantería; símbolo del pueblo chileno y sólida base del ejército”, *La Nación*, Santiago de Chile, 07/06/1983.

²²⁹ “Semblanzas del Morro”, *La Nación*, Santiago de Chile, 07/06/1984.

²³⁰ “Heroísmo e historia”, *La Nación*, Santiago de Chile, 03/06/1985.

²³¹ Sin énfasis en el texto original. *Ibidem.*

En Arica, mientras tanto, se celebró un acto en el cual fue encendida la “Llama Eterna” en el Morro.²³² Nuevamente, la llama de fuego se tomaba los simbolismos del régimen. Seguido se realizaría una romería en homenaje a los veteranos del 79. La nutrida agenda en Arica también incluía un concurso de patrullas militares, además de un concurso literario entre los escolares con el obligado tema “El Regimiento Rancagua y su vinculación con Arica”²³³. La ceremonia de alto calibre sería el día sábado, a través de un acto cívico-militar a los pies del Morro, que culminaría con una “ceremonia alegórica” en la cima que “mostrará fundamentalmente la gestación de la nacionalidad, la infantería y el pasado, presente y futuro de Arica.” Un espectáculo pirotécnico remataría el festejo.

El año de 1987, el capitán general encabezó un acto cívico en la Plaza de Armas de San Bernardo, donde se conmemoró el centenario de la Escuela de Infantería. En este día de celebración, el dictador recordó “los valores libertarios inspiradores de la gesta del 11 de septiembre de 1973” (como se verá, aquí hay un indudable uso de formulas expresivas propias de la Independencia) de la cual tuvieron rol preponderante las fuerzas de la infantería nacional. Este tipo de actos privados, esencialmente dirigido al ensalzamiento de las tropas, eran fundamentales para consolidar la unidad de cuerpo del Ejército, cuya variable a lo largo de la década fue fundamental para considerar alguna factibilidad de la caída de la dictadura.

3.4.6 Julio

9 y 10 de julio. *Día de la Bandera/Día de la Juventud*

Motivo. El día 9 y 10 de Julio, en doble jornada, se conmemora la resistencia de 77 soldados chilenos en la localidad de La Concepción, en el departamento de Junín, Perú. Es la batalla de La Concepción acaecida en 1882. El Ejército chileno tras capturar Lima tuvo que enfrentar el complejo desafío de salir del Perú con un tratado de paz que beneficiara ampliamente a los vencedores. Chile exigió Tarapacá, Arica y Tacna (ciudades al sur del Perú), considerando dejar al territorio del litoral boliviano a la deriva.²³⁴

El Ejército chileno de ocupación encarceló al presidente peruano y preparó un destacamento que sería enviado a los interiores con órdenes de dar caza a las fugitivas fuerzas

²³² “Centenario en el Morro de Arica”, *La Nación*, 03/06/1980.

²³³ *Ibidem*.

²³⁴ Simon Collier; William Sater, *Historia de Chile 1808-1994*, Madrid: Cambridge University Press, 1998, p. 127

peruanas. Esta expedición enviada en 1882 fracasó en su misión de controlar la zona, y tras meses de errar en el altiplano, fue ordenada su retirada hacia la costa. Los 77 chilenos, cumpliendo este mandato, se refugiaron en el pueblo de La Concepción, para descansar y continuar el rumbo. Ahí fueron atacados y cercados por las fuerzas peruanas, que aniquilaron a todos los soldados chilenos.

Las historias de la resistencia chilena versan sobre el incondicional espíritu de batalla y entrega de los soldados chilenos en este episodio. Cuentan las historias que jamás quisieron entregarse, pese a los ofrecimientos, y que prefirieron morir disparando antes que rendirse. La disposición de los soldados chilenos se realza además por el hecho de que todos eran jóvenes, lo cual permitía aplicar la idea de que la juventud ya estaba fraguada en los conceptos de amor y obediencia a la patria.

Pese a lo cruel de la tragedia (77 soldados muertos en una jornada), se recuerda con orgullo en esta fecha la entrega de los soldados. Esto, pese a que en la época las noticias del suceso hicieron cuestionar a la opinión pública el motivo para que los jóvenes chilenos murieran en el altiplano peruano, bajo qué pretextos y razones. Además, en efectos prácticos, la caza que pretendieron dar a los fugitivos peruanos fue infructuosa. Sin embargo, cabe más en el recuerdo la historia de que los chilenos prefirieron morir antes de entregarse y cuyo arrojo, enfrentando a un enemigo de fuerza muy superior, lo cual resultó ejemplar incluso para los adversarios.

Por estos motivos, se celebra el día 9 de Julio el Día de la Bandera. Día para conmemorar la idea (como dice el periódico, “la razón sublime”) de que “ante todo se debe cumplir el deber y jamás aceptar rendiciones ofrecidas por el adversario”.²³⁵ Para tales efectos, el día 9 los soldados hacen el juramento a la bandera, instaurado el día 10 de julio de 1974 por decreto supremo. Para los militares, desde ese día, la bandera de la estrella solitaria es el simbolismo del sentimiento patrio;²³⁶ idea que ha logrado calarse muy bien sobre todo por su inagotable fertilidad nacionalista.

El día 10, se celebra el Día de la Juventud, también instaurado por el régimen militar, donde se conmemora el ejemplo de los 77 soldados. Como todos eran jóvenes, la conmemoración sirvió a la dictadura para dar satisfacción a su necesidad de unirse simbólicamente con cierta juventud nacional. Para el discurso militar, recordemos, el “pueblo” es fundamental.

²³⁵ “Finalización de una guerra”, *La Nación*, Santiago de Chile, 10/07/1984.

²³⁶ “En tal estandarte está figurada la patria, es decir, nuestra nación con todo lo material, inmaterial y espiritual y con todo el pasado y el presente de una vez”. “Juramento”, *La Nación*, Santiago de Chile, 08/07/1985.

Entonces, el día 10 servía de anclaje para proyectar y consolidar la juventud del régimen, que bajo el aura del sentimiento militar, hacía vigilia el día 9 en el cerro Chacarillas para presentarse limpios el día 10 a recibir la conmemoración entregada por el dictador.

Conceptos. El concepto fundamental de esta conmemoración es la “juventud”. Los jóvenes, que en aquella época rondaban los treinta años, eran los elegidos para simbolizar el “recambio” generacional y corporativo (del militar al civil) que necesitaba la dictadura. Estos jóvenes, en gran medida, fueron bastante observantes del “legado” del régimen. Juan Antonio Coloma, abogado y político de la UDI, fue uno de los 77 del año 1980, y nació en 1956. Eliseo Salazar ex piloto de fórmula “1” nacional es de 1954. El economista de la revolución silenciosa y actual político de la UDI, Joaquín Lavín es de 1953. El actual ministro de Hacienda, economista, Felipe Larraín es de 1958. El escritor, que ganó todos sus premios entre 1973 y 1990, Pablo Cassi, de 1951. El Ingeniero agrónomo, Patricio Melero, político de la UDI, de 1956. Pablo Longueira, ingeniero civil y político de la UDI de 1958. En fin, todos los demás jóvenes elegidos en 1980 son de la generación nacida en la década de los 50.²³⁷

Acompañando a estos brillantes civiles, estaban también muchos deportistas, hombres y mujeres de cultura (cantantes, músicos, escritores), dirigentes gremiales, estudiantiles y comunales (definidos por el régimen), además de militares, trabajadores y profesionales en general. Con ellos se completaba la flamante lista de los 77 jóvenes que serían reconocidos por el régimen militar por su intachable conducta en los diferentes frentes en que se desarrollaban y, además, por representar la labia del nuevo Chile. En estos jóvenes está, entonces, lo que la dictadura quería del país y sus habitantes, pues los nuevos valores depositados en estos paladines de la civilidad darían al país la orientación necesaria e imprescindible para seguir por la única senda posible del destino nacional.

Los jóvenes del régimen, los más cercanos y protegidos, formaban parte de la Secretaría de la Juventud y de los centros alumnos de las Universidades Intervenidas (FEUC, FECECH, centros de alumnos), además de organizaciones políticas como el Frente Juvenil²³⁸. La Secretaría de la Juventud era uno de los bastiones más importantes del régimen en su llegada a las calles y plazas del país. Los jóvenes ponían la cara “bonita” y limpia del nuevo país, traduciendo el

²³⁷ Ver la lista completa en “Los 77 de Chacarillas”, *La Nación*, Santiago de Chile, 09/07/1980.

²³⁸ En él estaba Juan Antonio Coloma como coordinador, Jorge Claude como secretario general y Andrés Chadwick como secretario ejecutivo.

discurso autoritario a todos los rincones. La Secretaría se coordinaba con representantes de la dictadura para asegurar el éxito de la conmemoración de los 77 condecorados.²³⁹ Es decir, en esta oportunidad, los jóvenes hablaban.

No todos los jóvenes. Sólo los jóvenes oficialistas. Sin embargo, para el régimen la juventud debía ser excluyente y no podía haber posibilidad de diversidad. Las inquietudes de esta juventud y su visión, por tanto, eran la visión oficial. En un arrebato de expresión un joven declaraba que: “la Providencia había querido plantear a los jóvenes de hoy un no menos pequeño desafío que consiste en buscar y afianzar las bases de una sociedad libre que requiere y exige la práctica de la justicia, la honradez, la generosidad y la grandeza de espíritu.”²⁴⁰

Estos jóvenes, por ser más nuevos, y no ser estrictamente militares, se sienten más libres de expresar el trasfondo del proyecto dictatorial, que es la perorata liberal que se exprime de todas sus declaraciones y escritos. En estas conmemoraciones los conceptos parecían ser manejados por puras y nobles castas de individuos que comprendían en lo profundo la razón de ser de una sociedad libre. Así, se crea literariamente la disposición de esta juventud, comprometida con una lógica militar de obediencia y sacrificio:

Esta distinción nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos en alcanzar ese ideal de sociedad y es por ello, señor Presidente, que queremos que Ud. sepa que la juventud chilena está dispuesta a entregar lo mejor de sí, sin miramientos al *sacrificio* que haya que desplegar para lograr el objetivo.²⁴¹

Así, se desarrollaba en un círculo de la sociedad, una juventud que estrechaba fuertes lazos con la autoridad militar y que, como comentábamos en el contexto, comenzaba a copar los espacios de representación, viviéndose así los primeros elementos de la particular transición. Si bien, los militares en algún caso tendrían que volver a los cuarteles (más que nada, porque ése es su sitio), los jóvenes oficialistas no tenían que retirarse a ningún lado, sino que debían abocarse a empezar a componer las redes políticas del país (aún cuando esto no sea una intención clara del dictador), para ello usan la Secretaría de la Juventud, el Frente Juvenil y los Centros de Alumnos, trampolines fundamentales para que los políticos de derecha hicieran carrera en un marco político restringido. Es ilustrador ver la lista de nombres que componen estas asociaciones e ir

²³⁹ “Conmemoran la batalla de La Concepción”, *La Nación*, Santiago de Chile, 09/07/1980.

²⁴⁰ “Condecoración ‘héroes de La Concepción’ para 77 jóvenes”, *La Nación*, Santiago de Chile, 18/17/1982.

²⁴¹ *Ibidem*. Sin énfasis en el original.

reconociendo uno a uno qué fue de ellos. Estos jóvenes nacen con la posibilidad de desmarcarse de la dictadura, lo que rápidamente los mueve a convivir y conversar con la oposición moderada tan temprano cómo fue posible, justo a mediados de la década de los años ochenta.²⁴²

Tampoco es novedad que ellos sean los herederos de la sociedad instaurada por la dictadura y por tanto que sean los más acuciosos defensores de la inmovilidad de la Constitución de 1980. El dictador les dijo en una de las conmemoraciones, casi sellando esta alianza:

En todo momento el Gobierno ha destacado la importancia que para el país tiene la juventud y ha reiterado que muchos de los *sacrificios* y exigencias del presente tienen por objeto entregar a los jóvenes una Patria más libre, más unida y más progresista.²⁴³

Otro concepto fundamental de la fecha, como de todas las fechas militares, es la reafirmación de la identidad nacional, reiterándose la idea de que la Patria proviene de las hazañas del Ejército y la Armada.²⁴⁴ Se argumenta que las hazañas militares deben ser consideradas por todos los ciudadanos como momentos sagrados de la gestación de la nacionalidad. Ante un momento conmemorativo militar no se aceptan bromas ni la indiferencia; esto significaría un insulto a los símbolos patrios, lo cual en los casos más graves es penado con el máximo rigor de la ley.²⁴⁵

Una variante importante sobre esta idea es expresada en conjunto con la conmemoración de esta fecha. Juan Carlos Stack, recordando la hazaña de los 77, asegura que el patriotismo “es una virtud que no consiste en elogiar y defender indistintamente todo cuanto de bueno o malo pueda existir en nuestro hábitat o territorio”, es decir, no todo lo que es generado en los límites de la patria es propiamente cultura nacional. La idea del patriotismo militar es “procurar corregir lo negativo que hay” en la nación, “contribuyendo con nuestros esfuerzos y la propia vida (...) a fundar sobre sólidas bases la organización política y social más estable y segura”.²⁴⁶

Así, se considera que el comunismo es una doctrina exógena al país, rusa, moscovita y de humanoides, como diría el Almirante Merino. Por tanto, era deber del país expulsarla de él, porque no había nacido en sus límites, y era extraña para el chileno. De ahí las metáforas

²⁴² Luego, no es novedad que algunos políticos de derecha, todos o casi todos de Renovación Nacional declararan que votaron por el “No” en 1988.

²⁴³ “Condecoración patriótica”, *La Nación*, Santiago de Chile, 09/07/1983. Sin énfasis en el original.

²⁴⁴ No se ha mencionado ni a la Fuerza Aérea ni a Carabineros, pues ninguno cuenta con gran hazaña. Salvo, quizá, la FACH, por haber hecho el primer viaje nacional rumbo a la Antártica.

²⁴⁵ En Chile se multa a los ciudadanos que no pongan la bandera nacional afuera de sus hogares los días de celebración patria.

²⁴⁶ “La Bandera”, *La Nación*, Santiago de Chile, 01/07/1985.

médicas: el comunismo como cáncer que hay que extirpar del cuerpo social. Por eso el dictador exclamó en la conmemoración de 1981:

[...] el Gobierno está decidido a reafirmar la identidad de Chile, pidiendo a la juventud que *tenga confianza en las fuerzas creadoras del chileno* y que rechace aquellas consignas que convierten al Estado en un ente opresor, que invade las vidas de los hombres y los transforma en una masa pasiva y esclavizada.²⁴⁷

Estas consideraciones acerca de la patria (que está conformada por unos conceptos y no otros) están por sobre lo que la investigación histórica ha definido como el surgimiento del Partido Comunista Chileno y de los otros partidos marxistas, en un afán intelectual de explicar cómo las ideas de Marx (o lo que se entendía de ellas) llegaron al país, y cómo los chilenos se apropiaron de ellas y levantaron versiones nacionales –erradas o viables– de genuina particularidad. Basta con repasar con seriedad la obra y pensamiento de Luis Emilio Recabarren para confirmar lo dicho, y encontrar vestigios de los sentimientos nacionales en la conformación de los partidos de izquierda en Chile.

Momentos. El momento fundamental de las conmemoraciones de la Batalla de La Concepción comenzaba en las diferentes unidades del Ejército el día 9, con el Juramento a la Bandera realizado por los soldados. El 9 de Julio de 1982 dicha ceremonia se celebró en el “Altar de la Patria”, para ese día se trasladaron los corazones de los oficiales héroes de 1882²⁴⁸, y ante ellos los soldados juraron por la nación y la ciudadanía los homenajeó.

En el Cerro Chacarillas la ceremonia empezaba a las 19 horas con una misa en memoria a los Héroes, posteriormente los 77 jóvenes elegidos hacían una vigilia en el cerro –emulando la noche que tuvieron que pasar los 77 soldados–, para presentarse el día 10 a la ceremonia con el Dictador, quien en el edificio Diego Portales y ante tres mil jóvenes, los condecoraría. Estos jóvenes eran designados por la Secretaría de la Juventud.

Otras conmemoraciones se vivían por la mañana en las plazas de las ciudades. En Santiago, en la Plaza de los Héroes de la Concepción, la ceremonia fue presidida por los

²⁴⁷ Sin énfasis en el texto original. “El gobierno está decidido a reafirmar identidad de Chile”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/07/1981.

²⁴⁸ A los cuatro oficiales que murieron en el conflicto, se les extirparon los corazones para enviárselos a sus superiores. Estos fueron almacenados en un “monumento de mármol con pequeñas gradas coronado por una esbelta pirámide de cuatro caras” y se encuentran en la Catedral Metropolitana. “Jura a la Bandera; homenaje de la patria a héroes de La Concepción”, *La Nación*, Santiago de Chile, 05/07/1982.

Ministros de Educación y Secretaría de Gobierno, contando con la presencia de “dirigentes juveniles”²⁴⁹. En esa misma plaza, el año 1982, el alcalde Carlos Bombal inauguró un busto de Ignacio Carrera Pinto. Este gesto se repitió en las principales ciudades del país; la imagen del soldado Carrera, que también aparece desde esta época en los billetes de mil pesos, servía para “que la juventud tenga un ejemplo de los valores morales de nuestro pueblo, que desgraciadamente se han olvidado en este tiempo con un materialismo desmesurado”, explicó un acongojado brigadier general Valdés Puga.

Los estudiantes secundarios, menores y obligados eran nuevamente el caballito de batalla de las conmemoraciones. En 1982 “un total de ocho mil estudiantes de la enseñanza básica y media de la Región Metropolitana, participaron hoy en un desfile de homenaje al Centenario de La Concepción, frente al monumento a los héroes.”

En las comunas de Santiago, como en La Granja, también se aprovechaba para condecorar al personal municipal de la comuna y a los escolares destacados. Las costumbres militares se traspasaban también a las escuelas: en Quilicura en la Escuela 334 “Luis Cruz Martínez” los estudiantes pertenecientes a la “brigada de tránsito” del colegio hicieron el juramento a la bandera ante la paciencia de sus compañeros. En Renca se aprovechó de inaugurar dos “multicanchas completas” y de cambiar el nombre de algunas calles, utilizando el nombre de los mártires. También hubo bautizo de escuelas: el Liceo A-85 de Pudahuel pasó a llamarse “Héroes de La Concepción”.²⁵⁰

En una particular ceremonia vivida en Talcahuano, VIII Región, las más altas autoridades conmemorativas se dieron cita en el gimnasio La Tortuga del puerto. *La Nación* informó que más de 120 mil estudiantes de la VIII Región “juraron servir y defender la patria ante cualquier circunstancia que así lo requiera”²⁵¹. El juramento fue tomado por el dictador Pinochet y por el Secretario Nacional de la Juventud, Luis Cordero. En medio de la emoción, cinco cadetes de la Escuela Militar “ingresaron al recinto portando en un marco una bandera de la época del Combate de La Concepción”. Con esto se vivía una nueva jornada de unidad entre juventud y

²⁴⁹ “Conmemoran la batalla de La Concepción”, *La Nación*, Santiago de Chile, 08/07/1980.

²⁵⁰ “Emotivo homenaje a los héroes del combate de La Concepción”, *La Nación*, Santiago de Chile, 08/07/1982.

²⁵¹ Esto, aun cuando la capacidad del Coliseo Monumental La Tortuga es de 10 mil personas. El desfase de cifras pudo ser un error de tipeo. Cabe destacar que “La Tortuga” fue construido en el largo lapso comprendido entre los años 1957 y 1980. “Solemne juramento de lealtad a la patria hizo la juventud”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/07/1982.

gobierno. Para *La Nación* la fiesta era total: “fuera del Estadio otro millar de personas aplaudía y conjuntos folklóricos entonaban cuecas y bailaban la danza tradicional.”²⁵²

3.4.7 Septiembre

Septiembre es el mes más importante para los chilenos, pues es la treintena de días en que se le rinde homenaje a la patria al calor de la conmemoración de la Independencia nacional. Es por esto que durante este mes el jolgorio patriotero y generalizado se toma el país, se escuchan y cantan las canciones típicas, y se engalanan algunos espacios de la ciudad con guirnaldas de blanco, azul y rojo. Otro elemento importante del mes de septiembre, es que trae consigo todos los buenos efectos de la primavera: cielos azules despejados, brisa rebelde y sol cálido. La mejora sustancial del clima hacen de este mes el especial para elevar volantines²⁵³, pues el viento y el cielo despejado favorece enormemente a las grandes “comisiones”²⁵⁴ que se liberan en todo el país. Esto a la larga ha generado en este mes un aura especial para los chilenos, y hasta el más desconectado de los chilenos se ve afectado. Ya que hasta los más funestos gozan del verdadero esfuerzo gastronómico que se realiza en los hogares: asados, empanadas, anticuchos, pajaritos dulces, todo acompañado con altas dosis de chicha, vino tinto, y demás tragos.

Septiembre es, para casi todos los chilenos, el mes nacional. Y en esto hacemos hincapié, pues tanto la tradición de izquierda como la de derecha, levantan en este mes sus argumentos en torno a la chilenidad. Como un escueto ejemplo, Ángel Parra en 1971 le cantaba al mes patrio: “Septiembre, mes que recuerdo / sol volantín y bandera / septiembre, camino nuevo / septiembre es la primavera.”²⁵⁵ Este septiembre optimista, sin embargo, dejaría de ser una realidad para un sector importante del país de 1973. Pero siguió siendo septiembre.

Y siendo el mismo septiembre patriotero, la dictadura intentó montarse sobre él gracias al impecable trinomio conmemorativo que se generó en este corto ciclo. El 11 de Septiembre, la “liberación” tardía; el 18 de Septiembre, la liberación temprana; y el 19 de septiembre, el día de las Glorias del Ejército. Como si fuera un acertijo, la dictadura militar supuso que las tres fechas escondían un sentido trascendental. Dos liberaciones y un actor. Y en función de esta relación

²⁵² *Ibidem.*

²⁵³ Papalotes.

²⁵⁴ Enfrentamiento de volantines en el cielo.

²⁵⁵ Ángel Parra, “Sol, Volantín y Bandera” del LP *Canciones de Patria Nueva*, Santiago de Chile, DICAP, 1971.

simbiótica entre estas fechas, se les comenzó a relacionar conceptualmente, para amalgamarlas, confundirlas y volverlas complementarias. Es por esto que, durante los ochenta, cuando se habla de independencia nacional en 1810, se presenta al lado de la “independencia” de 1973, y cuando se habla de liberación se habla de la gloria y el profesionalismo del Ejército, y viceversa.

Sin embargo, esta operación alquímica de las fechas no resultó como esperaba la parcialidad militar. Esto lo mencionamos porque septiembre, al ser el mes más importante, es también el más disputado, por presentar una fecha nueva que se volvió definitivamente un punto de referencia para comprender al Chile actual.²⁵⁶ No hay otra fecha, de las rescatadas por el régimen, que generara en las calles y en la mentalidad de las personas tanto desencuentro y clara incompreensión mutua. Esto es porque corresponde a ese tipo de fechas que dividen a la ciudadanía y a la nación, a tal punto, que algunas definiciones personales en torno a la política pasan por tener una postura e idea al respecto.²⁵⁷ El 11 de Septiembre, el día más importante del Chile de las últimas décadas, es en sí un tema, y sus repercusiones son amplísimas, tanto que cada año pasa algo nuevo en las calles y se repiensa su sentido. Se intentará, a continuación, hacer un bosquejo de lo que se hablaba y de cómo se conmemoraba durante los años ochentas estas fechas.

11 de septiembre. *Día de la Liberación Nacional.*

Motivo. Como ya se ha visto, este día fue el día del Golpe de Estado. Significó el cambio de un gobierno democrático y el ordenamiento constitucional que lo amparaba, por una dictadura de facto que gobernó durante los siguientes 17 años. Es la fecha simbólica del régimen, y éste la utilizó para reafirmar su política, señalar rumbos y emitir destellos de su percepción patriótica. En 1980, utilizó el día 11 de Septiembre para votar la Constitución. También el 11, pero de Marzo, se instauró dicho texto. Es, por tanto, una fecha insistente en el discurso del régimen.

En 1981 se declaró feriado el 11 de septiembre, interpretándose por la dictadura y su parcialidad como un llamado a recordar el 11 positiva y periódicamente. Se ordenó a partir de ese año que se izara el pabellón patrio en las escuelas y dependencias públicas de la Región

²⁵⁶ Como un ejemplo de esto, el historiador Corvalán identificaría al gobierno de Allende como el “Tiempo Eje”.

²⁵⁷ Esto es claro en la presentación que hace Jelin de las fechas recientes en las dictaduras militares latinoamericanas. Vid. “Introducción” en Elizabeth Jelin; et. al., *Las Conmemoraciones. las disputadas en las fechas “in-felices”*, Madrid: Siglo XXI, 2002.

metropolitana.²⁵⁸ El 11 oficial estaba instaurado y se celebraría durante la década con todos los esfuerzos administrativos. Como historia aparte, desde temprano, ese mismo 11 sería disputado en las calles por la oposición a la dictadura, volviéndose también una fecha de combate y rebeldía.

Conceptos. Concordando mayoritariamente con lo propuesto por Azun Candina sobre esta fecha en particular, vale resaltar y ejemplificar los conceptos identificados en el 11 de septiembre oficial.

a. 11 de septiembre como afirmación de una tradición y restauración de la chilenidad.

Bastante claro al respecto fue el Almirante Merino en una entrevista especial con motivo del 11 de septiembre. El marino explicó a los periodistas que el 11:

[...] no fue otra cosa [más] que la confirmación de la historia, libertad y tradición de Chile. Porque si los chilenos hubieran sido un pueblo de esclavos, ese día 11 habrían defendido lo que el señor Allende pretendía imponer en este país: el marxismo materialista, esclavizante, sin Dios ni ley.²⁵⁹

El 11 de septiembre es visto también como una fecha remota, en la cual se vivió una crisis visible que se pudo solucionar gracias a la actitud militar. Se argumenta que una guerra interna asoló al país, y de ella habían salido triunfantes las instituciones armadas. Este conflicto, para los ochenta, ya había pasado para la dictadura, y ahora se enfocaba la guerra en contra los problemas de gobierno, contra el pasado y los molestos terroristas. Cumpliendo este afán, el régimen recurría impunemente al reservorio histórico de las tradiciones militares para justificar el 11 como una jornada de defensa nacional liderada por el ejército.

Oficialmente, el 11 debía ser entendido como un día de recuperación de la “identidad histórico cultural” en un contexto en que ella, “por la fuerza de aciagos acontecimientos, pareciera haberse perdido definitivamente.” En esos momentos de amenaza y de turbulencia las FF.AA se impusieron el rol de “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada.” En pocas palabras, el objetivo con esta fecha es englobarla en el saco de fechas

²⁵⁸ Azun Candina, “El día interminable. Memoria e instalación del 11 de septiembre de 1973 en Chile (1974-1999), en Elizabeth Jelin, *op. cit.*, p. 23.

²⁵⁹ Almirante Merino en “El 11 de Septiembre retornó la libertad histórica de Chile”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/09/1982.

bélicas de importancia, para así revestirla de importancia y ubicarla en un plano glorioso del pasado.

b. 11 de septiembre como día de trabajo y abnegación patriota.

El día 11 de Septiembre, de la “Liberación Nacional”, era un día en donde los actos, es decir, los hechos del gobierno, se veían en las calles, y los miembros del voluntariado y de las oficinas menores de la administración estatal sudaban la gota gorda en los operativos cívico-militares centrados en la Región Metropolitana. El día era también reflexivo, para mirar dentro de Chile; para embellecerlo con arboles pintados de blanco; para visitar a los abuelos y a los jóvenes huérfanos o delincuentes; y también, confrontar la realidad.

En La Reina, comuna capitalina, se celebraron el año 1981 visitas a hogares de ancianos, centros abiertos y jardines infantiles. La esposa del alcalde encabezó las comitivas apoyada por múltiples “organismos de apoyo”: Secretaría de la Mujer, Club de Leones, CEMA Chile, entre otros. El amplio contingente del voluntariado pro dictatorial vivía el 11 en focalizados operativos que involucraban entrega de servicios básicos: corte de pelo, medicina general, atención dental y charlas.²⁶⁰ Como ejemplifica Verónica Valdivia, el adoctrinamiento nunca estaba de más en estos operativos.²⁶¹

Tal como los soldados, de acuerdo a la retórica militar, se esforzaron el día 11 de 1973 para devolver a la patria su integridad, las comunas se desvivían los 11 a través de la ejecución de los operativos cívico-militares. Se entregaban a la ciudadanía áreas verdes, ayudas focalizadas, a veces simples gestos: un piso vinílico inaugurado en una escuela de la comuna de Providencia en 1981.²⁶² En los establecimientos públicos se vivía particularmente el 11, en algunas escuelas se desplegaban los operativos entregándose servicios de pediatría, control de pediculosis, peluquería y charlas educativas dirigidas a los jóvenes estudiantes.

c. Desfase entre dos sociedades. Crítica a la UP.

El almirante Merino, en la entrevista ya citada, planteaba que antes de 1973 el país era un verdadero desastre y con su habitual ánimo a exagerar, explicaba:

²⁶⁰ “Culminan actos celebratorios de la Liberación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 10/09/1981.

²⁶¹ Valdivia Verónica, ¡Estamos en Guerra, Señores!, *op. cit.*

²⁶² “La base comunal prepara aniversario de la Liberación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 26/08/1981.

En el aspecto social estaba todo desajustado, nadie respetaba nada. La gente se mataba en las calles por cualquier cosa, los marxistas andaban armados, con cadenas. No había educación porque los colegios estaban cerrados, ni transporte porque se había paralizado. No había más que un tremendo desorden. Una inseguridad de vida propia de los países comunistas.²⁶³

Para la parcialidad militar, y ciertamente para un amplio sector de la sociedad, el orden se volvió un motivo fundamental, y si bien en “algunas cosas” se falló durante la dictadura, se suele decir que por lo menos hubo orden. El desorden “upeliento” es evocado como esas filas interminables, como esos crímenes impunes, los guerrilleros indultados y la casa de Allende franqueada por cocodrilos, llena de dólares y de botellas de wisky.

Una fotografía es ilustrativa de esta idea. En un artículo en el cual se explica la total pertinencia del Golpe de Estado, a dos páginas, se inserta en el medio un contraste entre fotografías. A la izquierda, jóvenes y niños aparentemente chilenos están reunidos con 4 banderas que no se logran apreciar, aunque una parece cubana; a la derecha, una bandera chilena flameando está encuadrada, clara y nítida, con un cielo azul de fondo. Como en todas las fotografías, el pie (o su texto oficial) es fundamental: “Banderas soviéticas, cubanas y del MIR eran las que durante el trienio de la UP (1970-1973), como prelude de la conspiración marxista para convertir a Chile en un satélite de Moscú.” Esta insolencia era contrapesada con la impecable bandera nacional: “Hoy, empero, ondeó en todo el territorio solamente el pabellón que nos legaron los patriotas que gestaron la chilenidad.”²⁶⁴

d. Apoyo al régimen.

Quizá se exageraba y se intentaba dejar para la posteridad y para el público una cifra grande para evidenciar el apoyo a la dictadura. Lo evidente es que para todas las conmemoraciones del régimen había gente disponible y hasta entusiasta. Ya que el gobierno informaba a la opinión pública directamente a través de *La Nación*, sus propios actos los proyectaba según su confianza. En La Cisterna, se anunció para el año de 1981 un “carnaval” en el que “participarán 4 mil personas”; la hora, algo tarde para el regocijo, sería de 19 a 24 horas. La jornada recreativa involucrará carros alegóricos, conjuntos musicales y las tradicionales elecciones de reinas, el baile popular remataría la fiesta.²⁶⁵

²⁶³ “El 11 de Septiembre retornó la libertad histórica de Chile”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/09/1982.

²⁶⁴ “El verdadero significado del 11 de septiembre”, *La Nación*, Santiago de Chile, 11/09/1983.

²⁶⁵ “Culminan actos celebratorios de la Liberación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 10/09/1981.

Estas cuatro mil personas, se sumaban a otras tantas que la dictadura proyectaba como presentes en sus actos de apoyo. La movilización de personas para llenar estos actos es bastante conocida para la época. Los trabajadores del PEM y del POHJ eran utilizados y acarreados para hacer multitud, además de que se congregaban genuinos seguidores del régimen. Para cierto círculo cercano al dictador era fundamental proyectar el apoyo de la gente en las calles, y ciertamente hacer noticia de eso. Una de las notas altas de estas jornadas de apoyo fue la muerte de un trabajador del POHJ en plena capital cuando estos se resistían a ser acarreados a un acto dictatorial frente a La Moneda.²⁶⁶

Momentos. El 11, como buen pretendido aniversario de liberación republicano, se consideraba un día solemne para entregarse a la reflexión. El general Pinochet era el principal laureado en este día, por ser la mente viva del golpe. En un año caracterizado por la sobriedad, 1982, se matizó el grado de celebración: la tradicional recepción ofrecida por el Dictador quedó suspendida. Sin embargo, se entregaron las condecoraciones de rigor a ciudadanos destacados y el dictador recibió, como todos los años, el saludo con motivos de la liberación de parte de autoridades y otros poderes. Todas las empresas con activos en el país, como las de automóviles, confiterías, alimentos o mineras, hacían un injerto en *La Nación* para saludar al primer infante de la patria.

El día 11 se inauguraba con salvas de honor desde el cerro Santa Lucía desde las 8 am. A las 9 se celebraban las misas y el Te Deum se tomaba los centros militares y dos horas más tarde Pinochet daba lectura a su tradicional mensaje. En esta época el dictador se refería a las labores de gobierno comprendidas en el año recién pasado; era pues, la cuenta anual. Paralelo a esta celebración oficial, que rodeaba al dictador, el esfuerzo de los seguidores del régimen se volcaba a las comunas. Para el año de 1982 se anunciaba que los operativos cívico-militares beneficiarían a más de 160 mil personas de escasos recursos.²⁶⁷ Estas labores comenzaban desde agosto y el régimen las utilizaba para darse buena fama, como si fuera un periodo de elecciones.

Los operativos cívico-militares se organizaban a través de las Municipalidades e incluían trabajo en poblaciones de extrema pobreza, como ya indicamos, se entregaban servicios médicos

²⁶⁶ Ascanio Cavallo; *et. al., op. cit.*, p. 470.

²⁶⁷ “Sobriedad y solemnidad en actos de celebración”, *La Nación*, Santiago de Chile, 10/09/1982.

y trabajos de reparación. Se regalaban “fonolitas”, frazadas e implementos. A los niños más pobres se les entregaba un par de zapatos, un par de pantalones y una *polera* de manga larga.²⁶⁸

Los empresarios ponían de su parte para celebrar el 11 de septiembre. En Quilicura, por ejemplo, los propietarios de los taxis colectivos ofrecieron sus máquinas (por cuarta vez consecutiva) para trasladar a niños de Centros Abiertos a un campamento de la FACH a pasar un día al aire libre. 300 niños partieron al campo ese 11 tras presenciar el izamiento del pabellón nacional.²⁶⁹

También se inauguraban plazas y áreas verdes. En Las Condes se habilitó una zona del Cerro Navidad para hacer un parque. La plaza se consagró con un monumento a Kemal Ataturk, ofrecido por la embajada de Turquía, seguramente en honor a otro militar modernizante.

En 1982 se presentó una magna obra de teatro frente a La Moneda. El motivo era celebrar el 11 de Septiembre y a la vez evocar el sacrificio de los 77 soldados de 1882. Dos mil alumnos estuvieron presentes en la Plaza de la Constitución en el marco del noveno aniversario de la Liberación Nacional. El profesor Juan Umaña montó una obra de su autoría titulada “El héroe y la paloma”, cuyo motivo hacía referencia a un diálogo entre una paloma de paz y un soldado y a la relación intrínseca entre ellos. Los 300 niños de ocho años representaron obligadas palomas frente al público militar y colegial, terminando la jornada con “himnos de paz, rondas de niños y con los himnos de las diferentes ramas de la Defensa Nacional.”²⁷⁰

18 de septiembre. *Fiestas Patrias.*

Motivo. Todo surge por la invasión de España por Napoleón y la prisión de Fernando VII. Esto generó en los virreinos americanos un vacío de poder que fue copado por los centros representativos que ya existían en las colonias. El gobernador de la Capitanía General de Chile, García Carrasco, actuó desmedidamente cortando de raíz cualquier intento de auto-gobierno de la colonia. Producto del destierro de tres criollos por motivos de conspiración, la Audiencia reemplazó al gobernador García nombrándose al criollo acaudalado y conde de la conquista don Mateo de Toro Zambrano. Se llamó así a Cabildo Abierto para analizar la crisis de la corona. La asamblea fue realizada en el Consulado el día 18 de septiembre de 1810 y asistieron 400 ciudadanos importantes. Producto de la asamblea se eligió una Junta de Gobierno que debía

²⁶⁸ “En distintas comunas empezaron operativos del 11”, *La Nación*, Santiago de Chile, 25/08/1981.

²⁶⁹ “Culminan actos celebratorios de la Liberación”, *La Nación*, Santiago de Chile, 10/09/1981.

²⁷⁰ *La Nación*, Santiago de Chile, 09/09/1982.

defender y preservar el territorio de Chile para Fernando VII y anunciaba la conformación de un Congreso en Santiago. La Junta era una clara muestra de autonomía y presentaba signos de tomar una postura independentista radical. Posteriormente, el Congreso resultaría un fracaso y vendría sobre él, el gobierno de facto de José Miguel Carrera en los últimos meses de 1811. Estos episodios no marcarían sino el inicio de un largo proceso de guerra independentista que se consolidaría recién en el año de 1818 con el triunfo en Maipú del Ejército Libertador.

Conceptos. Para *La Nación*, septiembre es el mismo mes emotivo de todos los chilenos. Las “hermosas banderas chilenas” ondean sus sagrados pliegues por las brisas de septiembre. El jolgorio hace “brotar una fulguración grandiosa en el alma nacional mientras la estación de las flores y del amor se apresta a efectuar su romántica aparición.”²⁷¹ Este paisaje tranquilo de la patria, se une a la actitud festiva de los chilenos que “sin distinciones odiosas de ninguna especie” (clara referencia a los políticos) se divertían en sitios para hacer asados o celebrar días de parque. Esta idea de septiembre, sin embargo, viene de mucho antes. También el ambiente de ramadas y de fiesta popular. Particularmente a *La Nación* le gusta resaltar en esta década a ese pueblo que come empanadas, toma indistintamente chicha o vino y que se impresiona con el paso marcial de los soldados, henchido el pecho de respeto.²⁷² Por eso, en esta fecha, fonda, ramada, volantín, cueca y militares van de la mano. La fiesta nacional no podía estar exenta de rendir honores a sus instituciones armadas.

Los soldados, que ya habían avisado con su presencia en la conmemoración del 11, en el 18 se insinúan por representar para el régimen el símbolo de la independencia, y por estar en vísperas del día de las Glorias del Ejército. Para muchos articulistas no importa cuando se fundó el Ejército o qué fue lo que pasó en la época, simplemente le atribuyen la independencia –o la conformación de la Primera Junta– al Ejército Chileno, al mismo de Pinochet.²⁷³ Más aún el argumento lo esgrimen en una fecha en que se celebra la elección de una Junta ciudadana según los mecanismos representativos de la época. Sin considerar esto, la pura similitud de la palabra

²⁷¹ “Aniversario patrio”, *La Nación*, Santiago de Chile, 17/09/1980.

²⁷² “La alegría popular”, *La Nación*, Santiago de Chile, 20/09/1980; “18!!!”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/09/1981.

²⁷³ “La independencia nacional”, *La Nación*, Santiago de Chile, 18/09/1982; “Cumpleaños de la patria”, *La Nación*, Santiago de Chile, 18/09/1985; “La patria en septiembre”, *La Nación*, Santiago de Chile, 07/09/1986; “Septiembre: dos actas, dos juntas de gobierno”, *La Nación*, Santiago de Chile, 18/09/1986; “Fiestas Patrias y Plebiscito”, *La Nación*, Santiago de Chile, 18/09/1989.

hace que los escritores de *La Nación* no puedan evitar igualar a la Junta de 1810 con la de 1973, como si pudieran tener algo de parecido.²⁷⁴

Esto expresa la idea de que la dictadura buscaba justificarse por ser obra realizada por el mismo Ejército que peleó la Independencia. El paralelo artificial es evidente: “el 11 de septiembre, cuando las últimas defensas parecían ceder ante la opresión de un régimen totalitario sometido al imperialismo soviético, se produjo el vuelco que asombró al mundo y permitió a Chile liberarse de las cadenas y rescatar su destino.”²⁷⁵ Ambas fechas, aunque se considere en el 18 todo el proceso, están ligadas con la “límpida trayectoria” de las FF.AA. Nuevamente se repiten las ideas de que el ser chileno se expresa cuando necesita “romper con una rutina anquilosante o con una concepción del todo ajena a la identidad nacional, como fue el marxismo.” Así, Independencia y 11 de Septiembre se igualan, y ambas comparten el orgullo de ser obra de los militares. De los verdaderos patriotas que con “temple y energía” superaron las “resistencias de sectores timoratos, incapaces de sobreponerse a su propia mediocridad y mezquindades (...) desconfiados de la capacidad del pueblo chileno de escoger y construir su propio destino.”²⁷⁶

Momentos. El momento más importante para esta conmemoración es la fiesta de la gente, que tiene la libertad de organizar libremente sus actividades preferidas para celebrar a la patria. Se vive con más frecuencia durante este día las competencias de volantines, los típicos juegos como el trompo, el palo encebado, la carrera en saco, etc., y el disfrute de comida y bebidas típicas. Además en todas las ciudades se organizan “ramadas” que son improvisados centros de esparcimiento de madera con techo de paja en donde se vende comida típica, tragos y se baila música chilena –a veces– y las últimas modas. En este caso, el diario *La Nación* se preocupa de felicitar a los chilenos que se desviven en las celebraciones por mostrar de esa forma su fervor patriota y, en algún caso, su orgullo por el gobierno nacional.

Por otra parte, la celebración oficial contempla un tradicional Te Deum ofrecido por la plana mayor de la Iglesia Católica, que celebra la unión y respeto entre el mundo civil y

²⁷⁴ “Ciento sesenta y tres años después, el martes 18 de septiembre de 1973, se publica en el Diario Oficial de la República el acta de Constitución de la *Junta* de Gobierno que asumió el mando supremo de la nación el 11 de septiembre del mismo año para el resguardo y defensa de la integridad física y moral...”, en “Septiembre: dos actas, dos juntas de gobierno, 18/09/1986.

²⁷⁵ “Este 18”, *La Nación*, Santiago de Chile, 20/09/1980.

²⁷⁶ *Ibidem*.

ecuménico desde tiempos de la independencia. El Te Deum iniciaba por la mañana, con la llegada del dictador. En 1981, nuevos tiempos, el general Pinochet se trasladó desde el Palacio de La Moneda hasta la Catedral Metropolitana en un automóvil descubierto. *La Nación* reportó ese día claras muestras de afecto de parte de un “numeroso público que se apostó a lo largo del recorrido...”. El mensaje oficial de la Iglesia se cuidaba de no ser extremadamente duro con el dictador en un día como el 18 de septiembre, de todas formas, dado lo extraño de las situaciones en aquella época, el discurso ecuménico podía entenderse de más de una forma.

En todas las instituciones militares, los destacamentos religiosos hacían oraciones a la patria en comunión con los soldados. En 1989, tardío año, el capellán de Iquique les indicaba a los soldados que era un año especial para meditar con “altura de miras”. En ese año resultaba “imperativo demostrar que somos dignos de la Independencia que los Padres de la Patria lograron y que las Fuerzas Armadas consolidaron”, todo esto por la prontitud del plebiscito del 5 de octubre de 1989. La madurez del chileno, se argumentaba, debía renovar ese “compromiso con Chile” que representó la Independencia y la Dictadura. El capellán indicaba a los civiles que: “tengan el corazón bien puesto, depongan egoísmos, mezquindades, revanchismo y ansias de poder”²⁷⁷; tal como si el régimen que finalmente desecharía el pueblo chileno hubiese sido alguna vez la antítesis de esos defectos.

19 de septiembre. *Día de las Glorias del Ejército.*

Motivo. La Parada Militar fue instaurada por el presidente Barros Luco en 1915, y fue destinada para el día 19 de Septiembre, con el nombre de “Día de las Glorias del Ejército”. La Parada militar se comenzó a practicar desde que a fines del siglo XIX el presidente Federico Errázuriz contrató altos generales e instructores alemanes para que reglamentaran y dieran forma al Ejército Nacional. En sí, una Parada es una observación de las tropas.

La celebración le venía como anillo al dedo al régimen, pues servía para mostrar ante el público la marcialidad, la unidad de cuerpo y la organización de las tropas. Desde 1915, casi sin interrupciones, los estudiados movimientos se despliegan todos los años en el Parque O’Higgins, siendo el Presidente –o el dictador– quien desde el palco observa el paso de las tropas y, además, recibe honroso un cacho de chicha como medida estrictamente tradicional. Todos los años la celebración mantiene estos momentos particulares. En 1984 la Parada presentó a 10.000

²⁷⁷ “En 1810 nos hicieron libres y en 1973 se consolidó el proceso”, *La Nación*, Santiago de Chile, 19/09/1989.

efectivos totalmente equipados y coordinados que hicieron resonar sus botas sobre la explanada del Parque O'Higgins.²⁷⁸

Conceptos. Nada más propicio para el nacionalismo oficial que una fecha que celebre a su ejército nacional. Con la tradición ya asentada, *La Nación* se encargaba de imprimirle pequeños enfoques a la forma de ver al ejército. Nuevamente se aventura a definir la vida chilena como el producto de una compenetración histórica entre pueblo y Ejército, una “identidad de ideales y solidaridad”.²⁷⁹ Quien separe ambos elementos, se acusa, incurre en un delito histórico, y está lejos de comprender el “alma de Chile”. Así, se argumentaba que el gobierno de Allende habría fallado por desconocer el vínculo indivisible que une al pueblo y al ejército.

Esto se refuerza con la idea de que el pueblo asiste orgulloso a presenciar la Parada Militar, quedando prácticamente deslumbrado y henchido de sentimiento patrio. Para la década de los ochenta, sin embargo, no se trataba simplemente de celebrar las glorias del pasado, sino que se debía “meditar en la inmensa obra realizada por el Ejército en la paz para construir, afianzar y proyectar la presencia de Chile como una gran nación.”²⁸⁰ Para esta tradición, Chile se anuncia al mundo con el triunfo de sus Ejércitos. Para Neruda, completamente en otro plano, Chile recién comenzó a sonar en el mundo con el triunfo del socialista demócrata en 1970.²⁸¹

Con motivo de esta conmemoración, Pinochet se encargó de verter conceptos que había extraído de su estudio de la historia nacional. Recordemos que el general fue profesor de geopolítica en la Academia Militar y proyectó un par de obras al respecto. El profesor general indicaba que “la Historia de Chile es prácticamente la del ejército, y cuando se estudia se comprende que es una fuente permanente de enseñanza. (...) siempre se ha mantenido su espíritu, su disciplina y su afán de servir a esta tierra”²⁸². Las glorias militares se confunden con las escasas glorias nacionales –o unas son las otras– y el único motivo de orgullo para la pequeña nación, debiera a ser sus batallas ganadas, mismas que le señalan su destino. Así, se sentencia que la configuración de Chile como nación “responde en muchos aspectos al vigor del ejército,

²⁷⁸ “Soldados de Chile”, *La Nación*, Santiago de Chile, 21/09/1984.

²⁷⁹ “En el día del Ejército”, *La Nación*, Santiago de Chile, 19/09/1980.

²⁸⁰ *Ibidem*.

²⁸¹ “Al mismo tiempo, el nombre de Chile se había engrandecido en forma extraordinaria. Nos habíamos transformado en un país que existía. Antes pasábamos desapercibidos entre la multitud del subdesarrollo. Ahora por primera vez teníamos fisonomía propia y no había nadie en el mundo que se atreviera a desconocer la magnitud de nuestra lucha en la construcción de un destino nacional.” Neruda, Pablo, *op. cit.*, p. 465.

²⁸² “Ejército y pueblo chileno indisolublemente ligados”, *La Nación*, Santiago de Chile, 20/09/1980.

tal cual lo prueban la guerra con los mapuches, la de Independencia o las posteriores de consolidación.” Para rematar: “un estado sin Ejército equivale, en el campo internacional, a la conducta de un niño desvalido que necesita tutores.”²⁸³ Queda bastante claro quiénes somos los niños desvalidos.

La mayor joya discursiva estaría en el intento de volver familiares los gobiernos protagonizados por militares en el pasado con el gobierno militar de Pinochet, para así anclarse en la tradición y justificar el régimen de facto como producto de una necesidad que ya ha estado presente en la historia. Se menciona que “ninguno de los gobernantes militares, pudiendo tener el poder total, tuvo características de dictador. Por el contrario, todos ellos se pusieron bajo el imperio de la ley”. Si es que quedó alguna duda: “todos ellos se preocuparon primordialmente por dar al país una carta fundamental que rigiera sus destinos y fueron los primeros en obedecerla”.²⁸⁴ Con esto, Pinochet cabe sueltamente en esa clasificación de soldados estadistas, y se intenta crear así una naturalidad histórica jamás creída a una dictadura que gobernó por 17 años en el país, concentrando el máximo poder, sin oposición permitida, rompiendo el triste record del régimen de facto más sangriento y de mayor duración en la historia de la nación.

²⁸³ “Día del Ejército”, *La Nación*, Santiago de Chile, 19/09/1986.

²⁸⁴ “Ejército identificado con el destino de la patria”, *La Nación*, Santiago de Chile, 19/09/1983.

Conclusiones

En la década de los ochenta, los elementos de la política dictatorial se escondieron tras un discurso nacionalista que pretendió incluir a la dictadura militar en la tradición de gobiernos nacionales levantados en momentos críticos de la historia del país. El discurso histórico de la dictadura se proyectó con fuerza por toda la nación, tal como su proyecto económico, buscando dar una necesaria aureola de legitimidad a una dictadura que por diecisiete años debió convivir con el incómodo fantasma de su adulterado origen. Particularmente en esta década el discurso oficial del régimen se construyó sobre convicciones políticas un tanto distintas a las del comienzo de la dictadura, pues en esta ocasión intentó erigirse como un gobierno “constitucional” y, por tanto, buscó re-entroncar su acción en el destino “mítico” de la caprichosa línea de los acontecimientos nacionales.

Como vimos en esta tesis este discurso tergiversó elementos de la historia nacional, y además pretendió enraizarse en una tradición histórica-militar nacionalista que reunía en la experiencia de un puro cuerpo las glorias de las guerras de independencia y las de fines del siglo XIX. La tercera gesta histórica, por tanto, sería la levantada bajo la comandancia de Pinochet. Esta triada histórica de acciones patrióticas sería la razón de sobra para ubicar a las Fuerzas Armadas en la base de la nación.

Lo más relevante de este relato oficial es que se fundamentó en la completa dominación de los canales de difusión: en las universidades, colegios y liceos, escuelas armadas y medios de comunicación masivos. Esta dominación fáctica fue su componente necesario e irremplazable. El diario *La Nación* es un ejemplo más de los soportes en que estas ideas se distribuían, pues además la dictadura dominaba la pequeña prensa local, la prensa de los gremios, la prensa estudiantil, influía sobre el resto de la prensa nacional independiente de derecha (*El Mercurio, La Segunda, La Tercera, Las Últimas Noticias*), las casas editoriales, los libros de texto para estudiantes, los boletines de los “círculos de estudios históricos”, la mayoría de las radiodifusoras, y las señales de televisión, etc.

Considerando esto y procurando entregar ideas concluyentes, pasaremos a reseñar las principales contradicciones del régimen militar que fueron reconocidas por esta investigación a través de la reflexión sobre el ciclo conmemorativo, y además afirmaremos el carácter que la dictadura intentaba poner en escena ante parte de la ciudadanía y, en última instancia, ante la

Historia. Esto forma parte del contenido de este particular uso de la historia desplegado en Chile por la dictadura militar.

La “defensa y unidad del pueblo chileno” contra la idea excluyente de la patria.

El concepto discursivo “defensa y unidad del pueblo chileno”, desplegado por la dictadura militar en su periódico oficial, presenta una contradicción con el trato excluyente y criminal del Estado dirigido a un importante segmento de los chilenos. La condena que pesó sobre los comunistas, miristas, socialistas y cristianos se hizo extensiva a toda la ciudadanía representativa de la izquierda incluso a la que, al menos, encajaba con ese modelo cultural, definido erróneamente por la mente militar y la derecha política. Esto afectó a miles de familias, mandó a miles de chilenos al exilio y a la larga obligó al país a definirse bajo una idea de patria en la cual lo comunista (o lo de izquierda) estaba excluido por su incapacidad de responder a intereses nacionales.

Bajo nuestra consideración, los comunistas y la izquierda en general, y más ampliamente el número de víctimas de la dictadura militar, poseían el legítimo derecho de ser considerados miembros de la patria, pues trabajaron por un proyecto que sí se configuró como una respuesta nacional a los problemas de Chile, y que tiene una larga y documentada historiografía.

La “defensa de la integridad de la nación” contra el transnacionalismo económico.

La integridad de la nación, expresada en la efectiva soberanía, se defendió discursivamente a ultranza por la dictadura militar. El gesto de la nacionalización del cobre durante el gobierno de Allende logró cierta continuidad durante el periodo dictatorial, no tanto por una decisión unánime del régimen sino porque el cobre se transformó en una trinchera de los militares de conciencia económica estatista.²⁸⁵ Fuera de este “oasis”, los militares en el poder fueron rápidamente conquistados por los ideales neoliberales, que a la larga iban permeando los modelos culturales que los propios hombres de armas poseían producto de su formación bajo la “mentalidad desarrollista”.

Algún militar a mediados de la década de los ochenta, citado en esta tesis, se quejaba del aire consumista y “mercantil” que estaba acechando a la nación, que alejaba a los jóvenes de los valores patrióticos y nacionales. Si bien lo decía con enojo y cierta nostalgia, es sintomático que

²⁸⁵ Esto está finamente reseñado en el artículo de Verónica Valdivia, ya citado, “Estatismo versus Neoliberalismo, un contrapunto militar”.

lo expresara desde una situación completa de poder, como si ciertas cosas no se hubieran logrado del todo. Ciertamente no había que ser demasiado lúcido para darse cuenta de los amplios e incontrolables efectos culturales/globalizantes producidos por la aplicación del neoliberalismo, doctrina que muchos sí consideraban y consideran ampliamente exógena al país.

El diario *La Nación* también refleja este problema. Los modelos culturales extranjeros comenzaron a dominar, visiblemente desde los ochenta, un importante número de notas y suplementos, imponiéndose como modelo. Así, si en la industria de las comunicaciones y del entretenimiento la influencia económica y cultural extranjera era abiertamente visible, en otros rubros del mundo económico esta nueva dependencia no tardó en volverse sólida.

Si bien, durante la dictadura la inversión extranjera no alcanzó los niveles óptimos observados durante los noventa (los que sí fueron generados por el carácter del nuevo régimen democrático), fue con la Constitución de 1980 que se consignó el rol de la iniciativa privada como fundamento de la actividad económica de la nación, aún si esta iniciativa es extranjera. Esta disposición constitucional, tiró por la borda los intentos discursivos de mostrar un gobierno militar preocupado por el efectivo desarrollo económico nacional y por la defensa de las riquezas patrias de las “garras” de cualquier imperialismo.

El “huaserío, el roto y la cueca” contra el transnacionalismo cultural.

La misma situación recién descrita afectó la idea del “huaso, el roto y la cueca” construida por el régimen militar. Como si la bestia económica se volviera sobre los parámetros culturales de su creador, la cultura folklórica oficial se veía tan atacada por la oposición de izquierda (con sus propias y sólidas redes folklóricas) como por las influencias del transnacionalismo cultural. Aunque ciertamente no sólo en Chile, durante los ochenta se distribuyeron con inédita masividad los modelos identitarios de la cultura pop global, que incluso hicieron ver extraños a los obligados huasos de los eventos militares.

La dictadura militar se preocupó esencialmente de posicionar al huaso y a la cueca, propia de la zona central, como símbolo y sinónimo de la chilenidad. Podían haber variables regionales, pero en todo Chile la cueca debía ser el baile oficial, el más bello y representativo del país. Esto se potenció con el decreto que definió a la cueca como el “baile nacional”. Además de esto, en todas las celebraciones de alto júbilo dictatorial, los pies de cueca eran una parte fundamental, a veces acompañando o cerrando el evento conmemorativo.

La contradicción se hace evidente cuando el régimen militar pretende que Chile se reencuentre con sus raíces folklóricas, anunciando un modelo de folklore oficial construido sobre la prohibición e incluso el exterminio de un importante segmento del folklore nacional.²⁸⁶ Todo esto dentro de un proceso económico en el que la industria de las comunicaciones y del entretenimiento entraba en una lógica totalmente mercantil y globalizada de entender las relaciones comerciales y culturales.

El “estadista planificador” contra el neoliberalismo.

Por otra parte, la necesidad de entronar a Pinochet en la tradición del “Estadista planificador”, para lo cual se intervino en la Historia, entra en contradicción con el neoliberalismo, que precisamente prescinde de un planificador, de un conjunto de normas o de una dirección demasiado notoria. Por eso el estadista planificador, que se pretendió Pinochet, se alojó más bien en argumentos discursivos y en actuados actos públicos, más que en las políticas de un gobierno basado en la planeación. Más que este tipo de estadista, fue un gobernante autoritario, represor y de reacciones. Ciertamente el rol “centralista” del gobierno militar estuvo presente (en algunos planes de trabajo o de “ayuda” social, aunque sobre todo en centralizar el mando) pero esta capacidad fue absolutamente marginal en comparación con la alta política económica que se desarrolló en el país. Es más notoria su táctica propagandística de levantar la idea de un “gobierno de hechos”, que una necesidad de hacer política desde la planificación. Esto en un contexto en que el Estado tiende a desmarcarse de las responsabilidades históricas que cargaba hasta entonces.

El rol estadista de Pinochet se ve más claro en su preocupación personal sobre la redacción de la Constitución de 1980, que precisamente quita al Ejecutivo, o al poder político, la posibilidad de ejercer un fuerte rol planificador, más cercano al antiguo Estado desarrollista; y a cambio lega a la fluidez del mercado los parámetros del desarrollo social que anteriormente intentaba operar el Estado.

El “respeto de tradiciones cívicas” contra el desecho de las tradiciones cívicas.

En otro acto de contradicción evidente, el anunciado respeto de las tradiciones cívicas se levantó sobre el completo desprecio de estas tradiciones. El abolengo republicano que se intentó revivir

²⁸⁶ Sesgadamente nos referimos al folklore musical y a las vestimentas.

durante la década de los ochenta debió convivir con un incómodo ritualismo, jerárquico y uniformado, propio de una dictadura militar. Por eso se considera contradictorio que un gobierno de facto, que accedió al poder a través del desprecio de las formas políticas definidas en la constitución vigente, procurando el bombardeo del histórico Palacio de Gobierno, signo del republicanismo, aún con el Presidente en su interior; considere republicano su actuar, y además considere que su Constitución es emanación directa de las aspiraciones de un pueblo libre.

Es contradictorio bombardear el Palacio de Gobierno, rodearlo de tanques y atacarlo, para 8 años después reinaugarlo, en una suerte de refundación de la República, presentándose además la desproporcionada acción de nombrar al mundialmente conocido dictador militar “Presidente de la República”, siendo que había precisamente traicionado esa figura y, por ende, desechado su importancia. En otro ámbito de las tradiciones cívicas, al conseguir el poder, la dictadura militar, prometió una austeridad nunca vista, recurso discursivo que no deja de impactar al relacionarlo con las cuentas secretas que el dictador poseía en el extranjero bajo otros nombres, comprobándose sus afiliaciones y afecciones ilícitas.

La “retórica liberal” contra la violación de los derechos humanos fundamentales.

La retórica liberal, propia de la defensa del neoliberalismo en Chile, afecta profundamente la integridad del discurso dictatorial al relacionarla con los hechos terroristas ejecutados por el Estado durante este periodo. No cabe en la sana comprensión la convivencia de un discurso sobre la libertad del hombre con una política deliberada de exterminio y suspensión de los derechos ciudadanos. Ciertamente este problema no es propio de la dictadura militar chilena, sino que es una trama recurrente de los gobiernos occidentales modernos. El filósofo Isaiah Berlin consideraba que la misma defensa de la libertad traía consigo las más crudas políticas en contra de la libertad humana. En el libro “La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana” relata claramente el fino paso que separa la defensa a ultranza de la libertad con el diseño de políticas represivas que a la larga terminan por coartarla y desmembrarla. Es la clásica fórmula de Rousseau de *sacrificar* la libertad personal por la soberanía de la comunidad.²⁸⁷

Ciertamente, la dictadura militar sacrificó la libertad de miles de personas en beneficio de lo que consideraban erróneamente como el “bien común”. En esta explicación impuesta por la

²⁸⁷ “Rousseau” en Isaiah Berlin, *La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana*, México: FCE, 2004. El volumen reúne seis conferencias que Berlin dio en un programa de radio de la BBC en 1952.

dictadura militar, sin embargo, lo que prima es el posicionamiento en el podio de las verdades de las consideraciones subjetivas que este parcial grupo político operó sobre los conceptos como libertad, democracia, pluralismo, etc. Luego, y desde el poder total, la dictadura militar tuvo la auto-conferida posibilidad de hablar en nombre de los más altisonantes términos políticos mientras escondía cínicamente lo que hacía, literalmente, con sus brazos y manos.

El “Ejército de Chile” contra el Ejército a favor de una sociedad de clases.

Otra contradicción refiere a la utilización del concepto “Ejército de Chile” para justificar un proyecto económico que terminó beneficiando a una clase privilegiada del país, lo cual es sumamente evidente a la luz de los últimos índices de desigualdad y de concentración de la riqueza presentados en Chile. Si el ejército, las Fuerzas Armadas, pretendieron levantar una gesta a favor de todas las clases sociales, esto es, a favor de Chile, en realidad lo que hicieron fue reconfigurar una sociedad profundamente dividida en clases sociales, marginalizando a los más pobres y empoderando a los más ricos. Si se pretendió luchar contra un gobierno de izquierda que reconocía, y quizá hasta fomentaba la lucha de clases, lo que en realidad se logró fue la profundización de las contradicciones entre las clases socioeconómicas, dándose revividos casos de violencia marginal, delincuencia e ilegalidad, además de significativos niveles de organización lateral y descontento ciudadanos ininterrumpidos a lo largo de los años.

Es conflictivo que el ejército de Chile se vea relacionado con un proyecto económico que estuvo y está lejos de unir a los connacionales, considerando que las máximas de este proyecto fundacional abonan y perpetúan las diferencias de clase y, por ende, las profundas desigualdades económico/culturales entre los chilenos. Para ejemplificar esta profundización vale pensar, por ejemplo, en las infinitas disparidades presentes actualmente entre un chileno marginal y un chileno acomodado. Bajo lo que se consideraba un proyecto “liberal”, esto es para liberar a las personas, se pretendió que eso bastaba para justificar el uso de las armas y del ejército nacional; ahora cabe reflexionar sobre la base de que este “liberalismo” sirvió sólo para algunos, quienes a la larga han concentrado la riqueza del país en sus pocas manos.

*

Este tipo de nacionalismo militar, cuya mejor y única expresión son sus alocuciones verbales, caló en el chileno un entendimiento dictatorial del orden, de la soberanía nacional, del honor militar, de nuestros vecinos, de los héroes y de nuestra supuesta especificidad como país. Esto no quiere decir que todos los chilenos comparten esta visión, sino que esa visión era la pretendida por la dictadura, para lo que ciertamente invirtió enormes recursos y esfuerzos logrando que muchos adscribieran consciente o inconscientemente a ella. En la actualidad esta influencia se refleja en cómo “el país” (o la prensa y el gobierno) enfrenta el conflicto de soberanía marítima y costera con Bolivia, la situación limítrofe con el Perú y el “conflicto mapuche” en el sur del país (son problemas extensos, pero nos referimos al año 2012); en estos tres casos resaltan voces apelando a la defensa de la soberanía y a la necesidad de orden y disciplina. Recientemente, producto de las sonadas manifestaciones estudiantiles de 2011, un edil capitalino, electo democráticamente, manifestó que se necesitaba mano militar para mantener el orden y el respeto a la propiedad, y no, por ejemplo, políticas públicas eficientes.

Esta importante influencia que dejó el discurso nacionalista de la dictadura militar, debe valorarse a partir de la comprensión de su origen asentado sobre el desprecio y la desvalorización de una visión legítima de patria, que fue combatida desde 1973 y a la que se intentó hacer desaparecer con base en una política deliberada de exterminio y silenciamiento político. Este rasgo excluyente del periodo de los militares se vio casualmente reforzado por la imposición de un proyecto económico que también traía en sus concepciones una idea parcial de patria, o incluso, una idea trastornada de patria.²⁸⁸ El alcance cultural del nuevo proyecto, esto es el neoliberalismo global, llegaría a niveles que ni siquiera los militares sospechaban.

Ante las características definidas por esta tesis consideramos que para el mejor entendimiento de las sociedades deberían afinarse proyectos de patria o de mundo incluyentes. Esta pretensión liviana, sin embargo, no deja de ser sólo eso ya que de cualquier manera el Estado, necesariamente, diseña una patria oficial. Este diseño y construcción es una característica intrínseca de su naturaleza histórica. El recientemente fallecido historiador británico Eric Hobsbawm consideró que incluso la actividad académica de la Historia ha contribuido

²⁸⁸ Salazar y Pinto hablan de un Estado post-nacional, lacayo de la globalización, un “meccano” de uso instrumental. El nuevo Estado habría superado el carácter de clase en el sentido de que las clases ya no podrían disputarse efectivamente su control. Ver la *Historia Contemporánea de Chile*, Gabriel Salazar; Julio Pinto, *op. cit.*, p. 104.

enormemente a la conformación de los relatos y héroes de las patrias oficiales, y sabido es que todos ellos se basan en no pocas tergiversaciones o simplificaciones de la Historia.²⁸⁹

En esta tesis vimos, sin embargo, que los alcances de este diseño pueden variar, en primera instancia producto de las características y esfuerzos de la política nacional (quien gobierna, entre quienes y en qué condiciones gobierna), además por el nivel de vigencia o potencia de la cultura patriota/nacionalista extra-sistémica, y, por la capacidad o disposición de las masas de absorber el material visual y auditivo de estas formas de nación. Estos distintos procesos generarían a la larga la división entre las visiones de patria.

Desde el momento mismo en que leemos algún pasaje de la historia de Chile salta la idea de los dos países internos, como mínimo (en este caso, según parámetros socioeconómicos, también en términos culturales). Ya en el primer aniversario de la Independencia, Luis Emilio Recabarren, habló de los dos Chiles, con lo cual no entronaba sino una pretensión de ver a estos dos países vueltos uno.²⁹⁰ Para el líder obrero, desde la independencia hasta 1910 dos Chiles paralelos debatían y avanzaban a ritmos dispares. Mientras la “burguesía” celebraba el centenario de su Estado, el Chile de los trabajadores no tenía nada que celebrar, salvo 100 años de explotación redoblada especialmente vista en la pampa salitrera. Esta historia dual no ha dejado de ser tal.

En 1970 también se observan dos Chiles, y detrás de ellos proyectos políticos que a la larga apelan a una identidad ciudadana que se intenta generalizar y que dice poseer hondas raíces históricas. En 1973, un Chile, el combativo y combatido, tuvo que volverse clandestino, comenzó a cuidarse las espaldas y recibió instrucciones desde el otro Chile de que debía plegarse a esta nueva patria o morir en el error. Y esta lógica dual del país, reconocida *a priori* y fomentada por la dictadura, construiría a la larga la idea del desencuentro que hay en la sociedad chilena, por eso actualmente se apela a recurrentes llamados a la unidad, a la reconciliación y a la concordia.

²⁸⁹“Por supuesto, nada estaba más lejos de su pensamiento positivista, seguro de sí mismo, que servir a su nación de alguna forma que no fuese mediante la búsqueda de la verdad. Y, con todo, los no académicos que necesitan y utilizan lo que producen los historiadores, y que son su mercado mayor y políticamente decisivo, no se ven afectados por la marcada distinción entre los ‘procedimientos estrictamente científicos’ y las ‘construcciones retóricas’ que tan central era para los fundadores de la *Revue*. Su criterio sobre lo que es ‘historia buena’ es ‘la historia buena para nosotros’: ‘nuestro país’, ‘nuestra causa’ o sencillamente ‘nuestra satisfacción emocional’. Les guste o no les guste, los historiadores profesionales producimos la materia prima para que los no profesionales la usen bien o mal.” Eric Hobsbawm, “La historia de la identidad no es suficiente” en *Sobre la Historia*, Barcelona: Crítica, 1998.

²⁹⁰ Recordemos que el ideario político de Recabarren contemplaba una patria incluyente, que atrajera a los burgueses a las formas “proletarias” de la economía.

Estos Chiles distintos, con sus formas particulares de ver la historia, actúan en el presente con un reservorio de herramientas conceptuales que se usan para llevar adelante una o más luchas políticas. Es particularmente visible la afinidad que la ciudadanía siente de vez en cuando por estos proyectos del pasado, creándose redes de comunicación y aprendizaje político a través de los tiempos históricos.

Esta escisión a la que hacemos referencia es fundamental para nuestra sociedad, tan así como las dos Francias en el momento de la Revolución de 1879 o las dos Españas después de la Guerra Civil de 1936, que también generaron una división profunda entre compatriotas. Los dos países internos, en un aspecto, se empiezan a diferenciar por su visión de ver la Historia y por la postura ética/política que adoptan ante los acontecimientos nacionales. A la larga, los ciudadanos de ambos países internos viven bajo una rúbrica difícil de resolver para las sociedades actuales: vencedores y vencidos. Consciente e inconscientemente los individuos se definen o son definidos según estos conceptos irreconciliables, bajo los efectos de los hechos recientes de la historia. La paradoja continúa cuando el efectivamente vencedor levanta su discurso desde su podio triunfal, mirando hacia abajo a los vencidos; mientras tanto, los derrotados hacen de su posible victoria el único vehículo de sobrevivencia. Esta última situación se vivió durante los 17 años de dictadura.

La división nacional difícilmente puede solucionarse a partir del estudio y la explicación histórica de los hechos que nos dividen, precisamente porque ante tales hechos pesan más las consideraciones subjetivas de las personas, su idea de la Historia y una suerte de calificación obligatoria que debe hacer el individuo de su historia reciente, en términos positivos o negativos. Además, los pensamientos del individuo, aún sin capacidad crítica, son más importantes. Sin embargo, no hemos visto desde el Estado una pretensión distinta a continuar alimentando dichas consideraciones, tanto a partir de la difusión deliberada de una idea parcial de la Historia (durante los 17 años de dictadura) como de la despreocupación ante la necesidad de una explicación incluyente, que parta desde el reparo moral e histórico a las víctimas, y que sobretodo busque convencer a la nación.

Es evidente que sobre las políticas contemporáneas continúa operando un discurso sobre la Historia, y que, por tanto, la interpretación del pasado reciente se vuelve más controversial cuando se busca levantar con fuerza, desde la población nacional, un nuevo discurso efectivo de

futuro.²⁹¹ No se ha dado aún el salto necesario, el que nos ayudaría a superar ese discurso histórico propio de la década de los noventa que busca no ofender a nadie, e incluso hacer algunas concesiones argumentativas a los militares y su acción, desdeñando a los que optaron por luchar abiertamente contra la dictadura, y a cambio ensalzando a los políticos moderados y jefes del raciocinio. La visión oficial de la nueva democracia busca aliar a vencedores y vencidos sobre la suposición de que unos siempre serán unos y no los otros.

Para una nueva visión, es preciso reflexionar sobre si es posible generar una explicación en la que vencidos y vencedores confluyan, ¿o necesariamente para esto requerimos de una nueva mentalidad, una nueva identidad y una nueva operación sobre nuestra Historia?

Las interrogantes finales que nos quedan, luego de despejar un área de nuestra actual identidad, versan sobre si es que hay un discurso unitario de la nueva forma de ser chileno. Si es que esta creación caló hondo en la ciudadanía, o si ésta simplemente la miró con crítica y no quiso incorporarla del todo. Además, qué efecto pudieron tener 17 años ininterrumpidos de gobierno dictatorial sobre las conciencias nacionales, cuánta profundidad conceptual generó esta arbitraria situación en la mentalidad de los chilenos, qué tanto se utilizan actualmente los “filtros militares” para que los chilenos se vean a sí mismos como pueblos. Y cuánto ha calado el individualismo, el consumismo, la desconfianza y la lógica empresarial; y qué tanto hemos escuchado voces de desprecio sobre las ciencias humanas, sobre nuestra literatura y sobre el estudio crítico de nuestra historia.

²⁹¹ Este quizá lo vemos con más nitidez en las ideas de los estudiantes secundarios y universitarios movilizados. En este caso, no se puede negar que son chilenos.

Fuente Primaria

- Diario *La Nación*, ejemplares de marzo de 1980 a marzo de 1990, consultados íntegramente en la Biblioteca Nacional de Chile.

Bibliografía

- Aguilar, Alonso, et. al., *El gobierno de Allende y la lucha por el socialismo en Chile*, México: UNAM-IIE, 1976 (Cuadernos del Seminario de Teoría del Desarrollo).
- Anderson, Benedict, *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México: FCE, 1993.
- Arriagada, Genaro, *Por la Razón o la Fuerza. Chile bajo Pinochet*, Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 1998.
- Aylwin, Mariana, et. al., *Chile en el siglo XX*, 6ª ed., Santiago de Chile: Planeta, 1996.
- Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Oscar Sepúlveda, *La Historia Oculta del Régimen Militar*, Santiago de Chile: UQBAR editores, 2008. Aparecido en primera edición en 1990.
- Collier, Simon; Sater, William, *Historia de Chile 1808-1994*, Madrid: Cambridge University Press, 1998.
- Corvalán Marquéz, Luis, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago de Chile: Sudamericana, 2001.
- Corvalán, Luis, *Lo internacional en la línea del PC*, Santiago de Chile: Austral, 1973.
- Devés, Eduardo, et. al., *El pensamiento Chileno en el siglo XX*, México: IPGH-FCE, 1999.
- Dussel, Enrique, *Filosofía de la Liberación*, México: FCE, 2011.
- Jelin, Elizabeth, *Las Conmemoraciones: las disputas en las fechas "in-felices"*, Madrid: Siglo XXI, 2002.
- Gaspar Tapia, Gabriel, *La transición en América Latina: los casos de Chile y El Salvador*, México: UAM, 1991.
- Grez, Sergio; Salazar, Gabriel, et. al., *Manifiesto de los Historiadores*, Santiago de Chile: LOM, 1999
- Maira, Luis, *Las Dictaduras en América Latina*, Santiago de Chile: Ediciones CESOC, 1986.

- Marx, Karl; F. Engels, *Ideología Alemana*, trad. Ernesto S. Mazar, Buenos Aires: NEED, 1999.
- Mejido, Manuel, *Esto pasó en Chile*, 3ª ed., México: EXTEMPORÁNEOS, 1986.
- Modak, Frida (coord.), *Salvador Allende: pensamiento y acción*, Buenos Aires: Lumen, 2008.
- Moulián, Tomás, *Chile Actual: Anatomía de un Mito*, Santiago de Chile: LOM, 1997
- -----, *Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende 1938-1973*, Santiago de Chile: LOM-ARCIS, 2006.
- Munizaga, Giselle, *El Discurso Público de Pinochet, un análisis semiológico*, Buenos Aires: CLACSO, 1983.
- Neruda, Pablo, *Confieso que he vivido*, México: Planeta, 1989.
- Pinto, Aníbal, *Tres ensayos sobre Chile y América Latina*, Buenos Aires: Solar, 1971.
- Pinto, Julio, et. al., *Cien años de propuestas y combates. La historiografía chilena del siglo XX*, México: UAM, 2006.
- Portales C., Diego, *Poder Económico y Libertad de Expresión. La industria de la comunicación chilena en la democracia y el autoritarismo*, México: ILET-Nueva Imagen, 1981.
- Rodríguez Elizondo, José, *Introducción al Fascismo Chileno*, México: Ayuso, 1976.
- Rojas, Luis, *De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la Historia Política y Militar del Partido Comunista de Chile y el FPMR 1973-1990*, Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2011.
- Saborido, Jorge; Marcelo Borreli (coord.), *Voces y Silencios. La prensa argentina y la dictadura militar, /1976-1983)*, Buenos Aires, Eudeba, 2011.
- Salazar, Gabriel; Julio Pinto, et. al., *Historia Contemporánea de Chile*, vol. 1, Santiago de Chile: LOM, 1999
- Schama, Simon, *Ciudadanos. Crónica de la Revolución Francesa*, trad. Aníbal Leal, Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 1990.
- Secretaría General de Gobierno, *Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile*, 2ª ed., Santiago de Chile: Lord Cochrane, s/f. [1973]
- Segovia, Eduardo, *La historia secreta de <<Cauce>>. Gloria, pasión y muerte de una revista de oposición*, Santiago de Chile: Pehuén, 1990.

- Valdivia, Verónica, et. al., *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet 1973-1981*, Santiago de Chile: LOM, 2006.
- -----, *Su revolución contra nuestra revolución. La pugna marxista-gremialista en los ochenta*, v. II, Santiago de Chile: LOM, 2008.
- Verdugo, Patricia, *Bucarest 187*, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2001.
- Verdugo, Patricia, *Los zarpazos del Puma*, 22ª Ed., Santiago de Chile: CESOC, 2001.
- Patricia Verdugo, *Allende, como la Casa Blanca provocó su muerte*, Santiago de Chile: Catalonia, 2003.

Artículos

- Álvaro Díaz, “Actores sociales y transición a la democracia” en *Proposiciones 22*, Santiago: Ediciones Sur, agosto de 1998.
- Borrelli, Marcelo, “¿Víctimas, héroes o cómplices? Memorias en disputa sobre el rol de la prensa durante la última dictadura militar” en *Revista AVATARES de la comunicación y cultura*, Buenos Aires, n. 1, Agosto de 2010.
- Jara, Isabel, “Graficar una segunda independencia: el Régimen Militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)” en *Revista Historia*, Santiago de Chile, enero-junio 2011, p. 131-163, n. 44.
- -----, “Politizar el paisaje, ilustrar la patria: nacionalismo, dictadura chilena y proyecto editorial” en *Revista AISTHESIS*, Santiago de Chile: PUC, 2011, n. 50.
- José Miguel Varas, “La verdadera historia del rescate del último discurso de Salvador Allende” en *Actualidad y Entrevistas*, www.ciperchile.cl, CIPER CHILE, 2008.
- Valdés, Mario; Benedetti, Laura y Monsálvez Danny, “Notas respecto a la investigación histórica reciente en América del Sur: El caso de Chile” en *Revista Historia Actual On-Line*, Concepción: Universidad de Concepción, Chile, Núm. 8, Otoño 2005.
- Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, “¡Estamos en Guerra Señores!” en revista *Historia*, Santiago de Chile: USACH, enero-junio 2010, n. 43.
- -----, “Estatismo y Neoliberalismo en Chile: Un contrapunto militar” en revista *Historia (Santiago)*, Santiago de Chile: USACH, 2001, n. 34.

Filmografía

- Agüero, Ignacio, *El diario de Agustín*, Santiago de Chile, 2008.
- Guzmán, Patricio, *La batalla de Chile*, Santiago de Chile-Cuba, 1972-1979.
- Littín, Miguel, *Acta General de Chile*, Chile-Cuba, 1986.
- Moreno, Sebastián, *La ciudad de los fotógrafos*, Santiago de Chile, 2006.
- Parot, Carmen, *Estadio Nacional*, Santiago de Chile, 2001.